

**Universidad de la Habana**



**LA RECEPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL  
IUSREPUBLICANISMO ROMANO EN EL DISEÑO  
POLÍTICO-JURÍDICO DE LA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA EN LA REPÚBLICA DE CUBA**

**Joanna González Quevedo (Autor); Julio Antonio  
Fernández Estrada (Director)**

González Quevedo, Joanna (Autor)

La recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el diseño político-jurídico de la participación ciudadana en la República de Cuba / Joanna González Quevedo (Autor); Julio Antonio Fernández Estrada (Director). – La Habana : Editorial Universitaria, 2015. -- ISBN 959-16-2693-6.

1. González Quevedo, Joanna (Autor)
2. Fernández Estrada, Julio Antonio (Director)
3. Universidad de la Habana
4. Ciencias Jurídicas

Digitalización: Editorial Universitaria, torri@mes.edu.cu

(c) Todos los derechos reservados: Universidad de la Habana, 2015.

Editorial Universitaria

Calle 23 entre F y G, No. 564.

El Vedado, Ciudad de La Habana, CP 10400,  
Cuba





**FACULTAD DE DERECHO**  
**UNIVERSIDAD DE LA HABANA**  
**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS BÁSICOS**

**TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE DOCTORA EN  
CIENCIAS JURÍDICAS**

**“La recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el  
diseño político-jurídico de la participación ciudadana en la  
República de Cuba”**

**AUTORA: MsC. Joanna González Quevedo**

**TUTOR: Dr. Julio Antonio Fernández Estrada**

**La Habana**

**2014**

## AGRADECIMIENTOS

El acto de agradecer resulta una tarea harto difícil, máxime por que es el momento en que se agolpan todas las emociones y quisieras que no escapara nadie a quien decirle “Gracias” por haber contribuido a esta obra. Por ello trataré de agradecer en breve síntesis, pero que no por breve deje de ser profunda y contundente:

Agradezco a la vida por darme la racionalidad y la oportunidad para escoger la profesión más bella del mundo,

Si doy gracias a la vida tengo que darle gracias a mis seres queridos por hacerme existir y contribuir a que yo sea la persona que hoy soy,

Si doy gracias a mis seres queridos he de agradecer a mi amor, mi cómplice, mi brillante jurista que en esta aventura se ha convertido en todo un republicano junto a mí, gracias bebé,

Agradezco a Fernández Bulté por enseñarme el camino, por abrirme sus puertas: siempre con la mayor humildad y sencillez de este mundo. Por incentivar en mí el amor por el Derecho Romano desde el primer año de la carrera,

Si agradezco al eterno Julio, he de agradecer a mi tutor, o mejor a Juli, por ser la viva estampa de su padre y por no fallarle; pero además por ser él “un romanista excelente”, mi bastón profesional, el que me hace sentir segura, a pesar de no estar en el Departamento; el que me da la paz de saberme acompañada en mi vocación y mi amor por el Derecho Romano,

Si agradezco a Julio y Julito he de agradecer a todos mis profes de la carrera por formarme en la esencia y en la forma, incluso a los profes que ya no están; pero especialmente a mis profes del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos, pequeña tropa capaz de convertir en realidad los sueños,

A mis alumnos por ser la razón de toda mi entrega. Especialmente a mis alumnos ayudantes: por su fidelidad, y por seguirme siempre en cada idea, en cada proyecto, en cada utopía,

A todos mis amigos, pero muy en especial a Anna y Daima, eternas e incondicionales, a pesar de la distancia,

A Lorena y Tony: por las ideas, por la empatía, por la amistad eterna. “Gracias,ché”,

A Rinaldi y todos los profesores de la cátedra de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias porteños por acogerme como una más entre ustedes,

A La Madrid y todos los entrañables de la Embajada de Cuba en Argentina, y por transitividad a las siempre incondicionales Gretter y Vivi. Gracias a todos, de corazón,

A todos los romanistas del mundo. En especial a Catalano, Lobrano, Rinaldi-una vez más profe-, Antonio Fernández de Buján, Armando Torrent y Javier Hernanz,

A la memoria de Mercedes Gayosso. A José Luis por tenerme presente,

A todos aquellos que día a día se preocupan por mi superación profesional y que me han acompañado desde los inicios de esta aventura.

## DEDICATORIA

Al defensor de la justicia,  
Al romanista, al eterno profesor,  
Al republicano, al humanista,  
A Julio Fernández Bulté.

A mis seres amados.  
A todos los romanistas.  
A los republicanos.  
A la Democracia.

***“Injértese en nuestras Repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras Repúblicas. Y c alle e l pedante v encido; que n o h ay patria en q ue pueda te ner e l h ombre más orgullo qu e e n n uestras d olorosas Repúblicas Americanas”***

**José Martí.**

## SÍNTESIS

El pensamiento jurídico moderno, al adentrarse en las ideas del Iluminado Derecho Público, no puede trascender a la interpretación *jurispublicística*, ya sea en clave liberal o en clave democrática, de la recepción de las instituciones, ideas y legislaciones que la determinan y expresan. Dentro de estas concepciones hay que destacar aquellas que sostienen, desde el romanismo, que entre los principios de una república democrática perfectible, está la participación ciudadana en la formación de la voluntad estatal. Esta investigación se centró, entonces, en la argumentación de una adecuada construcción teórica de la recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en Cuba, para contribuir al perfeccionamiento jurídico de la participación política. Se asistía a un insuficiente abordaje científico que fundamentara la recepción del Derecho Público Romano. Esto trajo como consecuencia un desconocimiento de las auténticas raíces cubanas y, por tanto, de los orígenes y los principios romanistas que ha recepcionado el republicanismo cubano en materia de participación política. Si se tiene en cuenta que uno de los retos fundamentales a enfrentar en los próximos años será la actualización del texto constitucional, en dicho proceso deberán considerarse los principios del iusrepublicanismo romano, provenientes de lo más avanzado y universal de la teoría democrática y que están en las bases de la historia constitucional patria. Es por ello que no resulta disonante fundamentar, desde los inicios y los principios romanistas que ha recibido el actual diseño de la participación política del ciudadano, las principales líneas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional en Cuba.

## ÍNDICE

	Pág.
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I: LOS PRINCIPIOS DEL IUSREPUBLICANISMO ROMANO. SU RECEPCIÓN EN EL REPUBLICANISMO MODERNO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL CIUDADANO.....</b>	<b>11</b>
I.1 Preliminares acerca de las posiciones teóricas que definen el fenómeno de la recepción del iusrepublicanismo romano. Nuestra postura al respecto.....	11
I.2 <i>Respublica</i> romana y participación ciudadana. Su impronta para el diseño funcional del modelo clásico del Derecho Público Romano.....	16
I.3 Principales aportes del Derecho Público republicano Romano, en sede de participación política del ciudadano, para la unidad de principios del republicanismo democrático.....	25
I.3.1 La participación política del ciudadano en la creación legislativa y en los comicios electorales.....	30
I.3.2 La participación política del ciudadano en la organización municipal romano-latina....	42
I.3.3 Principios informantes del republicanismo democrático romano.....	46
I.4 La recepción de principios del iusrepublicanismo romano en los albores del pensamiento y el constitucionalismo moderno: republicanismo democrático versus republicanismo liberal.....	52
<b>CONCLUSIONES PARCIALES.....</b>	<b>69</b>
<b>CAPÍTULO II: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL CIUDADANO COMO ESENCIA DE LA RECEPCIÓN DEL IUSREPUBLICANISMO ROMANO EN CUBA, DENTRO DEL CONTEXTO LATINOAMERICANO. PROYECCIÓN EN POS DE SU PERFECCIONAMIENTO.....</b>	<b>70</b>
II.1 La recepción de principios del Derecho Público Republicano Romano en el constitucionalismo latinoamericano. Especial referencia a la participación ciudadana como epicentro de las bases del iusrepublicanismo romano.....	70
II.2 Los orígenes del republicanismo en el pensamiento democrático y en el constitucionalismo cubano anterior a la Constitución de 1976.....	81
II.3 La recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el actual diseño de la participación política del ciudadano en la República de Cuba. La participación ciudadana como base epistémica fundamental.....	102
II.4 Principales líneas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico en la actual República de Cuba.....	117



<b>CONCLUSIONES PARCIALES.....</b>	<b>135</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>136</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>139</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	
<b>ANEXOS.....</b>	

## INTRODUCCIÓN

## INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, el Derecho constituye parte esencial de la realidad política, económica y cultural de una sociedad. Por ello, ningún estudio científico que ponga sus miras en el pasado o el presente, puede preterir el carácter esencial del fenómeno jurídico para la realidad a la cual se aplica. Los estudios políticos y jurídicos no pueden quedarse en los límites de un mero análisis jurídico normativo de las vigentes realidades de poder. Lo preciso es buscar en los procesos históricos que le dieron origen, las más disímiles respuestas a las problemáticas actuales. Si bien conceptos tales como república, democracia y participación política del ciudadano han de responder a las necesidades que nos plantean las coyunturas de la actual praxis política en el siglo XXI, hemos de remontarnos al ayer para resolver, desde el presente, las deudas que la historia ha tardado en solucionar.

Al volver la mirada hacia los modelos participativos clásicos griego y romano, se debe reparar en que el elemento vital de estos es su concepción de la participación ciudadana en el ejercicio del poder, para lo cual crearon numerosas instituciones de Derecho Público. La *respublica*<sup>1</sup> romana aportó un formato institucional y funcional, capaz de demostrar que democracia y república no son términos unidos por un signo de igualdad. La *respublica* romana constituyó, *per se*, una superación política de la democracia griega, pues la estructura de esta última quedó limitada a la *polis*, mientras que Roma conoció la institución del municipio, como réplica hacia lo local de la institucionalidad republicana.

Desde el punto de vista institucional, la constitución republicana romana se asentó en tres instituciones básicas: Asambleas populares, Magistraturas y Senado. Desde el punto de vista funcional, la participación ciudadana en todas las estructuras de poder de la *Respublica*, se erige como principio cardinal del iusrepublicanismo romano.

Siguiendo esta lógica de principios informadores, tal cual se acotó, uno de los más grandes aportes del iusrepublicanismo romano se halla en las instituciones de ejercicio positivo y

---

<sup>1</sup>República es la traducción al castellano de la palabra *respublica*. Aún cuando una palabra es traducción de la otra se ha preferido su redacción en latín para dejar sentado, desde la fase introductoria de la investigación, que el referente investigativo es el iusrepublicanismo, como Derecho regulador de la *Respublica*, o sea, de la organización política de la *civitas* (ciudad) romana, así como de los municipios latinos bajo la dominación político-jurídica de Roma en su fase republicana. Por ello es necesario dejar aclarado que la parte del Derecho Público Republicano Romano que se estudia, corresponde a las instituciones políticas constitucionales de la *Respublica* romana, y no al origen de institutos administrativos y penales que también eran Derecho Público en Roma.

negativo del principio de la soberanía popular: en las asambleas de ciudadanos, en la elección-revocación de los magistrados, en la rendición de cuentas, en la *provocatio ad populum* (o apelación popular), en la facultad tribunicia de *intercessio* (o veto), en la resistencia y en la *abrogatio* (o abrogación) de la ley.

Pero sin lugar a dudas, su cardinal aportación se localiza en la réplica de estas instituciones a nivel municipal, más allá de la *civitas* (ciudad) romana. Es en esta dimensión funcional del modelo republicano romano en la cual se centra el estudio de la presente investigación: “La recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el diseño político-jurídico de la participación ciudadana en la República de Cuba”. Estudio que adquiere científicamente relevancia para el Derecho Romano, la Teoría General del Estado, la Historia General del Estado y el Derecho y el Derecho Constitucional.

La esencia del presente estudio se encuentra en la fundamentación de los aportes del republicanismo romano para la recepción del Derecho Público Republicano Romano en América Latina, fundamentalmente en Cuba. Como dirían los romanos “de cada cosa, el principio es la parte esencial<sup>2</sup>”. Por tal razón, este trabajo es una muestra de la oportunidad y la preocupación científica de encontrar, en los orígenes del modelo *iuspublicístico* romano, las bases de una temática esencial para la contemporaneidad, como lo es la participación ciudadana. Como pauta el libro 1 del Digesto Justiniano, la investigación se abocó al estudio de la historia vital del sistema romanista y no al análisis del sistema romanista disuelto en la historia como mera referencia antigua.

Los estudios críticos actuales de la ciencia romanística en América Latina y especialmente en Cuba, deben sus resultados a la contribución de la interpretación marxista del Derecho Romano, más allá de la interpretación en clave liberal que se impuso desde el siglo XVIII en el pensamiento iusfilosófico europeo y que relegó la importancia del *iuspublicismo* romano.

De tal forma, es posible hablar hoy de una ciencia romanística propiamente marxista como de una historiografía jurídica marxista. El aporte esencial de MARX y ENGELS a las ciencias sociales-que fue la interpretación económica de la Historia-, trascendió a los estudios jurídicos. Y esta perspectiva histórica abrió el camino que permitiría tanto a MARX como a

---

<sup>2</sup>Cfr. D. 1. 2. 1. GARCÍA DEL CORRAL, Idelfonso, *Cuerpo del Derecho Civil Romano*, primera parte Instituta-Digesto, Ediciones. Antiguas y Modernas, Barcelona, 1889, p. 5.

LENIN, apoyarse en una interpretación teórico-práctica del Derecho Romano para enriquecer sus formulaciones filosóficas.

La interpretación democrática marxista propiamente dicha, asumió como principio la unidad de poder, prestando una atención preferente al *populus* y su soberanía como principio base del republicanismo romano<sup>3</sup>. La influencia de los presupuestos doctrinales de interpretación marxista del Derecho Romano aparece en el siglo XX en la obra de notables romanistas foráneos como FRANCESCO DE MARTINO, GUARINO, BARTOSEK, NOVITSKY y KOVALIOV y en el ámbito patrio en los estudios realizados por FERNÁNDEZ BULTÉ y FERNÁNDEZ ESTRADA<sup>4</sup>.

A casi doscientos años de la independencia latinoamericana, no escapa la importancia de que América se proclamó en mayoría republicana, y todo ello obligó a la radicalización del pensamiento en torno a la libertad en sentido supremo. Las figuras más importantes del democratismo revolucionario en América Latina fueron SIMÓN BOLÍVAR y JOSÉ MARTÍ.

En el caso particular del proceso independentista de Cuba, en el siglo decimonónico, el mismo estuvo asociado a una forma conocida como “La república en Armas”, la cual implicaba no solo una modernización desde el punto de vista de la forma de gobierno, sino también una

---

<sup>3</sup>Vid, entre otros, LENIN, Vladimir Ilich, *Discurso de resumen de la discusión del Informe presentado por el Consejo de Comisarios del Pueblo al III Congreso de los Soviets de toda Rusia*, en LENIN, V. I., *La democracia socialista soviética*, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, s/f; MARX, Carlos, *La guerra civil en Francia*, en MARX, C. y F. ENGELS, *Obras escogidas en tres tomos*, Tomo 2, Editorial Progreso, Moscú, 1973. De igual modo MARX, Carlos y Federico ENGELS, *Manifiesto del Partido Comunista*, en MARX, C. y F. ENGELS, *Obras escogidas en tres tomos*, Tomo 1, Editorial Progreso, Moscú, 1973.

<sup>4</sup>Vid, entre otros, DE MARTINO, F, *Historia de la constitución romana*, Editorial Nápoles, 1972; GUARINO, *Storia del Diritto Romano*. 3ra edición, 1963; BARTOSEK, *La periodizzazione del Diritto Romano*, en Synteleia, Arangio Ruiz, 1974; NOVITSKY, *Derecho Civil Romano*, Moscú. 1973; KOVALIOV, *Historia de Roma*, Editora Revolucionaria, La Habana, 1971. Entre los estudios, sobre el *iuspublicismo* romano, realizados por juristas cubanos desde una postura marxista, podemos encontrar: FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Separata de Derecho Público Romano*, Editorial Félix Varela, La Habana, 1999; FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, “El tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo *iuspublicístico*”, *Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas*, La Habana, 2005; FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, “Reflexiones en torno al enriquecimiento constitucional cubano con elementos del tribunado Romano”, artículo publicado en las *Memorias del XV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*; FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, “La proyección del modelo *iuspublicístico* latino en la contemporaneidad”, ponencia publicada en las *Memorias del XIII Congreso latinoamericano de Derecho Romano*, La Habana 2002, editadas por Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México; FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, “Los principios del Derecho Público Romano para la formación del ciudadano”, en la *Revista Jurídica, número 10 de 2004, del MINJUS de Cuba*; FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, “El Derecho Público romano contra la hegemonía neoliberal”, en *Memorias del Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, de la UBA, Argentina, 2004; FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, *De Roma a América Latina: El tribuno del pueblo frente a la crisis de la República*. Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispet, A.C, Aguas Calientes, San Luis Potosí, 2014. Existe además una Tesis doctoral, que aunque no tiene como objeto de su investigación el Derecho Público Romano, sí constituye un estudio romanístico en función crítica, Vid. MARTÍNEZ QUINTANA, Léster Amaury, “El derecho civil romano en Cuba durante los siglos XVIII y XIX antes de la promulgación del Código Civil de 1889”, *Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Universidad de Oriente, julio de 2007.

profundización en el sentido de las demandas sociales de una época. El cierre de este ideal republicano en el siglo XIX cubano, hallaría su esencia en la figura cimera de JOSÉ MARTÍ, que toma lo anterior con una dimensión más amplia de una “república con todos y para el bien de todos”<sup>5</sup> en tiempos en que ya asomaban los intereses del imperialismo norteamericano.

La recepción del iusrepublicanismo romano en Latinoamérica se fundamenta hoy, por tanto, en la unidad del sistema romanista a partir de las aportaciones de los principios del modelo romano, que estuvieron presentes con gran fuerza en algunos proyectos, y más limitadamente, en algunas realizaciones constitucionales durante las luchas por la independencia en América. Y aunque estuvieron preteridos durante más de un siglo, renacen a partir del establecimiento de la República de Cuba, en 1976<sup>6</sup>.

Empero, resulta interesante y a la vez paradójico, que la única tesis doctoral sobre recepción del Derecho Público Romano, registrada en el área de estudios de Recepción del Derecho Romano en América del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, provenga de un trabajo de un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de California, Estados Unidos (LARSEN, J, *Reception of the representative Roman government*, University of California Press, 1966).

El tema de la recepción del iusrepublicanismo romano, particularmente en Cuba<sup>7</sup>, no obstante su aludida trascendencia, adolece de una escasa abordaje científico. Asistimos así a una insuficiente construcción teórica que fundamente la recepción del iusrepublicanismo romano en Cuba. Esto ha traído como consecuencia un desconocimiento de las auténticas raíces patrias

---

<sup>5</sup>MARTÍ, José, “Con todos y para el bien de todos”, publicado en VITIER, Cinto, (selección), *Cuadernos Martianos III*, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1996, p. 144.

<sup>6</sup>No obstante la influencia romanista en la formación de los primeros Estados Nacionales en América Latina, el formato institucional de las nacientes Repúblicas Latinoamericanas del siglo XIX fue mayoritariamente aristocrática y representativa de los pequeños grupos protoburgueses entronizados en el poder. El modelo de la democracia representativa irradió al constitucionalismo del siglo XX latinoamericano. Salvo en los modelos políticos de Uruguay (1934) y Cuba (1940, 1959 y 1976) que reconocieron instituciones republicanas de participación popular directa, en el resto del constitucionalismo latinoamericano fue inusitado el reconocimiento de dichos mecanismos. A partir de 1992, el sistema de Poder Popular en Cuba experimentó innovaciones respecto a 1976: el voto directo para la integración de todas las asambleas, la nominación directa de candidatos por los electores en el nivel local, la nominación indirecta en los niveles medio y superior del sistema, donde los candidatos son propuestos por representantes de organizaciones sociales y de masas, y mantuvo la presencia de elementos y atipificados en 1976: la elección para un mandato, la rendición de cuentas y la posibilidad de revocación.

<sup>7</sup>En materia de recepción del Derecho Público Romano en el diseño político-jurídico cubano, específicamente, no existen estudios doctorales, aún cuando contamos con valiosos trabajos sobre el *iuspublicismo* romano entre los que figuran los ya mencionados, *supra*, en nota al pie número 4.

y, por tanto, de los orígenes y los principios romanistas que ha recibido el republicanismo cubano en materia de participación política.

Si se valora que uno de los retos fundamentales a enfrentar en los próximos años será la actualización del texto constitucional cubano, constituye una necesidad que en dicho proceso se indague en sus genuinas bases republicanas y democráticas, cuyos antecedentes se remontan al Derecho Público Romano. Esos principios que se han tomado, deberán constituir las principales líneas para guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional.

En consecuencia, una de las principales motivaciones académicas de esta tesis, en sede jurídica, subyace en la necesidad de un análisis integral del carácter republicano del diseño político-jurídico cubano actual de la participación del ciudadano, desde los principios aportados por el iusrepublicanismo romano, en pos de contribuir al perfeccionamiento de la democracia en Cuba. De ahí la novedad científica de su tratamiento.

Las actuales investigaciones jurídicas en Cuba<sup>8</sup> que tributen a la participación de los ciudadanos como esencia de la democracia socialista, deben tener como referentes los principios sobre los cuales se erige el sistema democrático autóctono e impedir interpretaciones del mismo desde el prisma de las categorías científicas liberales desconocedoras de la democracia como cualidad intrínseca al republicanismo genuino.

En esta coyuntura, el discurso estatal revolucionario cubano otorga, dentro de su concepción sobre la democracia, el valor epistémico fundamental a la participación, sobre todo a partir del Informe del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Considera a la representación como un valor secundario: allí donde no alcanza la participación entra en juego el recurso

---

<sup>8</sup>Desde las ciencias sociales en Cuba, varias de las últimas investigaciones sobre el tema de la participación en general, cuentan con más de una década de realizados: (DILLA GONZÁLEZ y VINCENTELLI, *Participación popular y desarrollo en los municipios cubanos*, La Habana, Centro de Estudios sobre América, 1993); (GARCÍA BRIGOS, “Democracia, Estado y autogobierno social: Los Consejos Populares en Cuba”, en *Ágora. Revista de Ciencias sociales*, No. IIII, 1998); (VILLABELLA ARMENGOL, “El municipio cubano actual. Su modelo estatal”, *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Universidad de Camagüey, 1998) (PRIETO VALDÉS y PÉREZ HERNÁNDEZ, *Temas de Derecho Constitucional*, La Habana, Félix Varela, 2000); (DEL RÍO HERNÁNDEZ, “La participación popular en el proceso de toma de decisiones públicas en el ámbito local comunitario en Cuba. Su régimen jurídico”, *Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias Jurídicas*, Santa Clara, Universidad Central de las Villas, 2002); (VALDÉZ PAZ, Juan, “Notas sobre la participación política en Cuba”, en PÉREZ GARCÍA, Arnaldo J. (compilador), *Participación social en Cuba*, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), Ciudad de La Habana, 2004); (GUANCHE ZALDÍVAR, *Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992*. Premio de I Concurso “Estado y formas de participación y representación en América Latina y el Caribe contemporáneos” del Programa de Becas CLACSO-ASDI 2009).

«inevitable» —ergo: «no deseable en sí mismo»— de la representación<sup>9</sup>. De tal forma, todo estudio que se centre en los mecanismos de participación en el constitucionalismo cubano actual, goza de actualidad temática<sup>10</sup>.

La república resulta aquí el régimen que ha de permitir no solo el ideal liberal: a un ciudadano un voto, sino el hecho socialista: a un ciudadano la condición de posibilidad de una política<sup>11</sup>. Al decir del profesor FERNÁNDEZ BULTÉ<sup>12</sup>, la gran reivindicación de la revolución socialista fue la participación ciudadana y la soberanía popular, lo cual no contradecía ni negaba el Derecho Romano, sino que confirmaba firmemente esos valores éticos que la revolución estaba levantando.

Motivados por lo anteriormente expuesto, el problema de investigación se define del modo siguiente: La insuficiente construcción teórica que fundamenta la recepción del iusrepublicanismo romano en Cuba, acarrea deficiencias en la concepción ordenadora de la participación política del ciudadano en el diseño político-jurídico nacional.

En correspondencia con el problema científico, la hipótesis que se formula es: Una adecuada construcción teórica que fundamenta la recepción de los principios del iusrepublicanismo romano, ha de constituir la base democrática sobre la cual se asiente la República de Cuba y servir en el perfeccionamiento del diseño político-jurídico nacional.

El objetivo de esta investigación no estuvo encaminado a proponer la aplicación actual de instituciones romanas descontextualizadas en el diseño político-jurídico cubano. El objetivo es: Argumentar cómo una adecuada construcción teórica de la recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en Cuba, puede contribuir al perfeccionamiento jurídico de la participación política del ciudadano, como esencia del diseño político-jurídico nacional.

---

<sup>9</sup>GUANCHE ZALDÍVAR, Julio César, *ob.cit.*, p. 13.

<sup>10</sup>El presidente cubano de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz en el año 2009, hizo un llamamiento al fortalecimiento de la institucionalidad política y al papel de la Constitución en todo el proceso de cambios que vive el país (CASTRO RUZ, Raúl. «Es preciso caminar hacia el futuro, con paso firme y seguro, porque sencillamente no tenemos de recho a equivocarnos.» *Granma*, diciembre de 2009). Véase además, Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (Resolución del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba de fecha 18 de abril del 2011). De lo anterior se deriva entre otros: Resolución sobre el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular el Sistema Electoral y la División Política Administrativa de fecha 18 de abril de 2011 y Objetivos de Trabajo del Partido Comunista de Cuba aprobados por la Primera Conferencia Nacional, La Habana, 29 de enero de 2012.

<sup>11</sup>GUANCHE ZALDÍVAR, Julio César, *ob.cit.*, p.4.

<sup>12</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Veinte años del código civil cubano ¿romanista o socialista?* Nuestro código, América Latina y el Caribe. Estratto da Roma e America. Diritto Romano Comune 24/2007 Muchi Editore, p.98.



Los objetivos específicos que guiaron la realización de la presente investigación son:

1. Sistematizar las posiciones teóricas que definen el fenómeno de la recepción del iusrepublicanismo romano en Latinoamérica.
2. Identificar los principios del iusrepublicanismo romano, a partir del estudio del diseño funcional de la *Respublica*, para sistematizar teóricamente los aportes del republicanismo romano a la participación ciudadana en el ejercicio del poder.
3. Determinar históricamente las formas de recepción del iusrepublicanismo romano, a partir del análisis de sus expresiones paradigmáticas en los albores del constitucionalismo moderno, con especial referencia a los orígenes del pensamiento democrático en Cuba y al constitucionalismo cubano anterior a la Constitución de 1976.
4. Valorar la recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el actual diseño de la participación política del ciudadano en la República de Cuba.
5. Fundamentar, desde los orígenes y los principios romanistas que ha recepcionado el actual diseño de la participación política del ciudadano, las principales líneas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional.

Para la ejecución del presente estudio se utilizaron los métodos de investigación siguientes:

- Teórico-jurídico: Este método es necesario en aras de ofrecer un marco teórico-conceptual apropiado. Asimismo se brindan delimitaciones conceptuales sobre recepción, participación política, república y democracia. Además, se precisan términos tales como asambleas de ciudadanos, elección-revocación de las magistraturas romanas, rendición de cuentas, *provocatio ad populum*, facultad tribunicia de *intercessio*, derecho de resistencia, consulta popular, *plebiscitum*, *aprobatio* y *abrogatio* de la ley, entre otros. Por último, se analizan los principios aportados por el republicanismo romano-latino para la recepción del Derecho Público Romano en el actual diseño político-jurídico de la participación ciudadana en la República de Cuba.
- Método Histórico-Jurídico: Resulta útil y esencial para la consecución de la presente investigación en pos del análisis del diseño funcional de la *Respublica* romana y su impronta para la unidad de principios del sistema romanista en sede de Derecho Público. Asimismo, se torna imprescindible para el estudio de las razones de su pervivencia del Derecho Público Romano, tras la caída del Imperio Romano Occidental y su recepción por el constitucionalismo europeo de los siglos XVIII y XIX. Y en el latinoamericano, con especial referencia a los

orígenes del pensamiento democrático cubano y al constitucionalismo mambí del siglo XIX.

- Método de comparación jurídica: Permitió realizar un análisis íntegro comparativo de las posiciones doctrinales y legislativas que se sostienen en torno al estudio y recepción de las instituciones del Derecho Público Romano. El corte temporal del estudio tuvo un carácter transversal. El estudio de la recepción de un modelo clásico y antiguo como el romano, tiene que hacerse desde esta perspectiva de análisis. El objeto del empleo del método fueron los principios del iusrepublicanismo romano y su recepción. Los elementos tenidos en cuenta se centraron en: ¿cómo se expresan los principios, ¿cuáles devienen condicionantes históricas y sociales de la recepción y cómo se manifiestan las instituciones de participación? Respecto a la información obtenida, es válido citar que la investigación demandó el estudio de las condicionantes históricas y sociales de normativas y proyectos constitucionales que acogieron principios e instituciones del republicanismo romano en los orígenes del constitucionalismo francés y latinoamericano. Dicho análisis arrojó semejanzas en cuanto a la recepción de determinados principios e instituciones del Derecho Público Romano; pero a su vez, marcó tendencias de cambio, máxime porque en el contexto latinoamericano existió una permanente actitud de reivindicación de la especificidad americana. Fue necesario además comparar el constitucionalismo cubano, desde sus albores, en relación con el constitucionalismo latinoamericano hasta la Constitución cubana de 1976. Lo anterior reveló semejanzas en cuanto a que nuevas luchas por la liberación nacional estuvieron asociadas a una forma republicana al igual que en el resto del continente. No obstante, el constitucionalismo en Cuba marcó una tendencia de cambio que superó al resto de América Latina en sede de recepción de los principios del Derecho Público Republicano Romano.

- Método jurídico: El contenido que nos brinda este método resulta factible a la hora de establecer el sentido, alcance, principios y fines de los diferentes proyectos y normativas constitucionales que, desde el campo del Derecho Constitucional, han evidenciado la recepción de los principios informantes de las instituciones del Derecho Público Romano.

- Análisis de documentos: Permitió el análisis de documentos jurídicos que van desde el *Corpus Iuris Civilis* y otras fuentes clásicas del Derecho Romano, hasta proyectos constitucionales y constituciones de Europa, Latinoamérica y Cuba, en los cuales se evidencia la recepción de instituciones de participación legadas por el Derecho Público Romano. Entre los mismos cabe mencionar la Constitución francesa de 1793; los proyectos constitucionales

de Francisco de Miranda de 1790, 1798, 1801 y 1808; el Discurso de Angostura; la Constitución de Bolivia (1826); cuerpos políticos jurídicos de la Cuba decimonónica como el proyecto de constitución para la Isla, presentado por Félix Varela a las Cortes españolas, constituciones cubanas-con algunas actas de sus debates-, e instrumentos que evidencian la concepción de República de José Martí.

Los resultados obtenidos con la presente investigación son de índole teórica y práctica. Teóricos, por abordar las bases teóricas de la participación política como esencia del iusrepublicanismo romano con trascendencia a la actualidad. Prácticos, porque las herramientas que aporta pueden ser útiles en el proceso de actualización constitucional en Cuba.

Con esta tesis se logró una sistematización de las posiciones teóricas que definen el fenómeno de la recepción del iusrepublicanismo romano en Latinoamérica. Se realizó además una sistematización histórica de los principios informantes del iusrepublicanismo democrático romano, como pauta orientadora para determinar la influencia del sistema romanista en sede de Derecho Público, en un diseño político-jurídico determinado. De igual manera, se obtuvo una sistemática de las leyes que rigieron el Derecho Público Republicano Romano. Asimismo se aportó un análisis histórico de las expresiones paradigmáticas de la recepción del iusrepublicanismo romano en los albores del constitucionalismo moderno, con especial referencia a los orígenes del pensamiento democrático en Cuba y al constitucionalismo cubano anterior a la Constitución de 1976. Se hizo un abordaje teórico integral de la recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el diseño político-jurídico cubano actual de la participación del ciudadano en el ejercicio del poder. Finalmente se realizó una fundamentación de las principales líneas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional.

La tesis se estructuró en dos capítulos.

En el CAPÍTULO I se identificaron las principales posiciones teóricas que se sostienen en torno al estudio y recepción de las instituciones del iusrepublicanismo romano. Se analizó, desde un plano histórico y teórico-doctrinal, los orígenes de la participación política del ciudadano en el diseño del modelo clásico de Derecho Público Romano. En consecuencia, se sistematizaron los aportes del *iuspublicismo* romano para la unidad de principios del republicanismo democrático. Asimismo se abordaron las expresiones paradigmáticas de la

recepción de principios del iusrepublicanismo romano en los albores del pensamiento y el constitucionalismo moderno de los siglos XVIII y XIX.

Mientras, en el CAP ÍTULO II, se expusieron los caracteres de la recepción del iusrepublicanismo romano en América Latina. Asimismo se realizó un análisis acerca de los orígenes del republicanismo en el pensamiento democrático y en el constitucionalismo cubano anterior a la Constitución de 1976. Se estudió el fenómeno de la recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el diseño institucional de la participación política del ciudadano, en la República de Cuba. Finalmente se fundamentó, desde los orígenes y los principios romanistas que ha recepcionado el actual diseño de la participación política del ciudadano, las principales líneas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional.

**CAPÍTULO I. LOS PRINCIPIOS DEL IUSREPUBLICANISMO ROMANO. SU RECEPCIÓN EN EL REPUBLICANISMO MODERNO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL CIUDADANO.**

## **CAPÍTULO I: LOS PRINCIPIOS DEL IUSREPUBLICANISMO ROMANO. SU RECEPCIÓN EN EL IUSREPUBLICANISMO MODERNO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL CIUDADANO.**

### **I.1 Preliminares acerca de las posiciones teóricas que definen el fenómeno de la recepción del iusrepublicanismo romano. Nuestra postura al respecto.**

Existe coincidencia con el maestro italiano Pierángelo CATALANO<sup>13</sup> en que la importancia de la trascendencia del iusrepublicanismo romano ha sido destacada, durante la segunda mitad del siglo XX, por filósofos como GYÓRGY LUKÁCS y HANNAH ARENDT. Pero los juristas no habían prestado la atención necesaria a este fenómeno desde el siglo dieciocho y hasta la década del setenta del pasado siglo<sup>14</sup>.

En el ámbito científico, es a partir de este momento en que comienza a extenderse la acción de los profesores de Derecho Romano de América Latina, dirigida con énfasis hacia la enseñanza (siguiendo una tradición y una exigencia de las universidades latinoamericanas) en el campo de la investigación del Derecho Público Romano y dentro del mismo a su fase republicana.

Dicha tendencia ha conducido no solo a encuentros de estudios anuales y latinoamericano, si no también a nuevas formas organizativas para la documentación del Derecho Romano y, sobre todo, a reforzar el estudio romanista en función crítica actual<sup>15</sup>.

En julio de 1976, justo a cinco meses de la aprobación popular de la Constitución de la República de Cuba, se reunió el primer Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, en la ciudad de Santa María de Buenos Aires. O lo que es lo mismo a decir: esa fue la primera reunión de romanistas definida formalmente en base a la individualidad histórica del ámbito

---

<sup>13</sup>Cfr. CATALANO, Pierángelo, *Constitución y constitucionalismo hoy*, Fundación Manuel García Pelayo, Caracas, 2000, pp. 2-4.

<sup>14</sup>Es a partir de la década del setenta del siglo XX que ha comenzado extenderse con rigor científico el campo de la investigación jurídica del Derecho Público romano y dentro del mismo la trascendencia histórica de su fase republicana a lo cual coadyuvó la creación, en 1972, del Grupo di Ricerca sulla diffusione del Diritto Romano y los Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano que se han venido celebrando cada dos años, de 1976 a la fecha. Sin embargo, es a la Filosofía a quien cabe el mérito de haber convertido el iusrepublicanismo en un programa ideológico contemporáneo, recuperado en la literatura académica a partir de los años 60, y dentro de ella a dos encumbrados autores como son Philip PETTIT y Antoni DOMÉNECH cuyas obras cumbres más recientes son respectivamente: *Republicanism. A Theory of Freedom and Government*, de (1997), y *El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista*, (2004).

<sup>15</sup>“La proyección en el futuro de la actualidad el Derecho Romano presupone que éste sea considerado bajo dos aspectos: Como base de un derecho común latinoamericano y como instrumento de educación del jurista latinoamericano..., una mentalidad de éstos últimos, esencialmente libre frente a todo dato que no nazca como exigencia lógica del objeto de su ciencia”. Vid. CATALANO, Pierángelo, *Derecho Romano y América Latina*, Grupo di Ricerca sulla diffusione del Diritto Romano, Sassari, 2002, pp. 41 y 42.

científico latinoamericano y por consiguiente de las características estructurales y funcionales de los estudios de Derecho Romano en América Latina.

En la conclusión del primer Congreso fue aprobada una moción, en la cual los romanistas latinoamericanos celebraban los 1500 años de tradición jurídica romana occidental, reafirmando su permanente vitalidad y vocación universalista. Todo, con un espíritu polémico frente a manifestaciones culturales que en aquel mismo año querían recordar el 476 como fecha de la “caída” o del “fin” de la organización política romana.

Se recordaba así la continuidad entre el antiguo Derecho Romano y los derechos de las nuevas repúblicas americanas, sostenida con fuerza programática por Andrés Bello: “(...) herederos de la legislación del pueblo rey, tenemos que purgarla de las manchas que contrajo bajo el influjo maléfico de las frustraciones constitucionales; tenemos que despejar las incoherencias que deslustran una obra a la que han contribuido tantos siglos, tantos intereses alternativamente dominantes, tantas inspiraciones contradictorias. Tenemos que acomodarla, que restituirla a las instituciones que nos fueron legadas y que han sido ocultadas<sup>16</sup>”. El republicanismo cubano fue objeto de debate central en dicho Congreso. La Constitución de la República de Cuba consagraba por primera vez en el ámbito latinoamericano una República democrática de evidentes fundamentos romanistas<sup>17</sup>. Mientras el modelo cubano daba lecciones al resto del continente, la mayoría de los textos constitucionales decimonónicos y del siglo XX en América Latina consagraban una estricta democracia representativa al extremo de disponer que el pueblo no gobernaría ni deliberaría, sino fuese por medio de sus representantes<sup>18</sup>.

A partir de la década del ochenta del siglo XX, el constitucionalismo latinoamericano asistió a una transformación de sus instituciones políticas y jurídicas tras la caída de las dictaduras militares, como fenómeno político dominante de la década<sup>19</sup>. Comenzaban así a rescatarse

---

<sup>16</sup>BELLO, Andrés, *Discurso pronunciado en la instalación de la Universidad de Chile* el 17 de septiembre de 1843.

<sup>17</sup>*Vid infra*, pp. 102-135.

<sup>18</sup>Baste sólo citar las constituciones políticas de Bolivia de 1826 a 1995, o las constituciones quiteñas desde 1812 y hasta la de 1978 con su posterior reforma en 1996; asimismo la guatemalteca de 1877 y la chilena de 1833 entre otras muchas. *cfr. Constituciones Hispanoamericanas*, Biblioteca Virtual Cervantes disponible en [www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/mayo de 2010](http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/mayo de 2010).

<sup>19</sup>Dentro de los textos constitucionales que a partir de la década del 80 consagraron mecanismos de participación directa encontramos: Constitución de Ecuador de 1978; Constitución de Chile de 1980; Constitución de El Salvador de 1983; Constitución de Guatemala de 1985; Constitución de Nicaragua de 1987; Constitución de Brasil de 1988; Constitución de Colombia de 1991; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, Constitución de Ecuador 2008 y Constitución de Bolivia 2009. *Cfr. Constituciones Hispanoamericanas*, Biblioteca Virtual Cervantes disponible en [www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/mayo de 2010](http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/mayo de 2010).

principios republicanos y democráticos en el diseño de la participación política en determinados países de la región.

Ha sido este el basamento legal, la coyuntura histórica y política que condujo a los estudiosos del romanismo a sentar pautas y presupuestos respecto al evidente fenómeno de la recepción del Derecho Público Republicano Romano en América Latina. Entre dichos estudiosos se han destacado Pierángelo CATALANO y Giovanni LOBRANO, en Italia; Armando TORRENT y Antonio FERNÁNDEZ DE BUJÁN, en España. Por Latinoamérica merecen mención especial los cubanos FERNÁNDEZ BULTÉ y FERNÁNDEZ ESTRADA, el peruano Marcial RUBIO CORREA y Norberto RINALDI, de Argentina<sup>20</sup>.

Muchos han sido los términos empleados desde el Derecho Privado, para calificar el fenómeno que es la recepción<sup>21</sup>. Sin embargo, en sede de Derecho Público, los romanistas *iuspublicistas*

---

<sup>20</sup>Entre otros trabajos, pueden verse, CATALANO, Pierángelo, *Constitución y constitucionalismo hoy, o b.cit*, FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Separata de Derecho Público Romano*, ob.cit; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, Editorial Civitas, decimocuarta edición, 2011; FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, *De Roma a América Latina: El tribuno del pueblo frente a la crisis de la República*, ob.cit; LOBRANO, Giovanni, “Republica e municipi”, en *Costituzionalismo Latino II*, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1996; RINALDI, Norberto, *Lecciones ampliadas de Derecho Romano*, 1ra Edición, Buenos Aires, 2007; RUBIO CORREA, Marcial, “La participación del pueblo en la elaboración constitucional dentro de los países latinoamericanos de Sudamérica”, en *Costituzionalismo Latino II*, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1996; TORRENT, Armando, *Derecho Público Romano y sistema de fuentes*, Edisofer S.L., Zaragoza, 2002;

<sup>21</sup>Cuestión y a puntada por PIERANGELO CATALANO, “Los historiadores del Derecho y los comparatistas elaboran, de diferentes maneras, conceptos, que responden al mismo fenómeno de la recepción: “difusión”, “penetración”, “transfusión”, para comprender y describir los fenómenos de relaciones entre los diferentes ordenamientos y sistemas jurídicos, sobre todo para cuestionar la recepción del Derecho privado en América Latina desde el siglo dieciséis y hasta antes de la promulgación del Código Civil de 1889”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Tomo LXXXV de la segunda época, n. 3, Madrid 1982. p. 166. Apunta MARTÍNEZ QUINTANA que tradicionalmente se ha considerado que en el siglo XVI se produce la recepción del Derecho Privado Romano en América, y que más tarde en el XIX ocurre una nueva recepción, esta vez, en los Códigos Civiles de las nacientes naciones del área. Sin embargo, este criterio no es estrictamente correcto. Para él, el término “recepción” no es apropiado para describir el proceso de acogida del Derecho Romano en Cuba durante los siglos XVIII y XIX, al no existir una tradición jurídica anterior contrastable con el derecho que se recibe como si ocurrió en Europa, por lo que debe emplearse el término “difusión”. O sea que lo que acaeció en Cuba, hasta el año 1889, fue un proceso de difusión, de divulgación del Derecho Romano que tuvo como vía fundamental la académica, y a que existía una prohibición de aplicación del Derecho Romano como derecho vigente en nuestros tribunales. Esto ocurre en Cuba, a diferencia de las altas culturas de los mayas, aztecas, e incas, donde por su nivel de desarrollo, se van a confrontar los derechos indígenas con la legislación castellana, (vehículo de transmisión de los preceptos romano-canónicos) en un proceso interactivo y asimilador, consciente, depurador, inteligente, que puede ser calificado de recepción, mas no de difusión. Cfr. MARTÍNEZ QUINTANA, ob.cit, p.122 y ss. Pero lo que sí debe quedar claro es que a partir de la entrada en vigor, en Cuba y el resto de Latinoamérica, del Código Civil Español, lo que acontece es un proceso de recepción de instituciones del Derecho Privado Romano. Sobre lo anterior asientan, hoy, los estudiosos del Iusprivatismo romano. Acerca de las diversas denominaciones que se han empleado para calificar el fenómeno de la recepción del Derecho Privado puede verse además, DE LOS MOZOS, J.L., “Codificaciones Latinoamericanas, tradición jurídica y principios generales del derecho”, en *Roma e America* 1 (1996); DÍAZ BIALET, A, “El espíritu de la legislación en la concepción del derecho en Dalmacio Vélez Sarsfield”, en *Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto latinoamericano*, a



concuerdan en que lo que se ha producido en Latinoamérica es la Recepción de principios e instituciones del republicanismo romano. Postura teórica que parte de presupuestos.

En primer lugar, consideran que la recepción del iusrepublicanismo romano, como fenómeno histórico jurídico, es parte de un proceso gradual y complejo de asimilación y/o apropiación de principios, categorías o instituciones, a la realidad local latinoamericana.

En segundo lugar, como proceso gradual, ha constado de etapas. En tal sentido consideran que dicho proceso tuvo sus orígenes en las discusiones políticas suscitadas durante la formación de las primeras naciones latinoamericanas. En ellas se hizo patente la vuelta a ROUSSEAU y a otros grandes pensadores franceses, el estudio de las fuentes del Derecho Romano y de los referentes republicanos de la primera república francesa y de la constitución jacobina de 1793. Sin embargo, estiman que aunque sus antecedentes se remontan al siglo XIX latinoamericano, cobra realmente auge a partir del año 1976 con el diseño constitucional cubano y hasta la actualidad continúa siendo un proceso vivo, en tanto que los modelos políticos latinoamericanos sigan apostando por perfeccionar las vías democráticas de intervención ciudadana.

Si bien existe consenso en torno a que el vocablo recepción es el adecuado para calificar la acogida del iusrepublicanismo romano en América Latina, no lo hay en cuanto al contenido de la recepción, dígame de manera más exacta respecto a qué es lo que se recepciona, ¿qué principios?, ¿qué instituciones?

Romanistas como TORRENT y RINALDI, consideran que sólo se ha asimilado del republicanismo romano determinados principios del diseño estructural de la República, dígame el carácter electivo, responsable y temporal de las magistraturas. Más no consideran que los principios e instituciones que informaban la participación política del ciudadano deban ser contenidos de la recepción. Esta postura responde a la idea de que el *populus* era *per se* excluyente, y por consiguiente, la votación en los comicios centuriados, sin dudas el más

---

*cura di* S. SCHIPANI, Editorial CEDAM, Padova 1991; GUZMÁN BRITO, A., *La codificación civil en Iberoamérica*, Santiago de Chile, 2000; LEVAGGI, A., “La recepción del sistema jurídico castellano por los sistemas indígenas en Hispanoamérica”, en *Boletín de la Academia Puertorriqueña de la historia*, vol. XIII, No. 43, San Juan de Puerto Rico 1992; MURILLO RUBIERA, F., “Codificación y Sistema Jurídico Iberoamericano”, en *Fuentes ideológicas y normativas de la codificación latinoamericana*, coord. ABELARDO LEVAGGI, Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires 1992; SCHIPANI S., “Il Código Civile spagnolo come ponte fra sistema latinoamericano e codici europei”, en *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 1999.

importante durante la República, se realizaba por bloques o clases que detentaban una cierta cantidad de centurias sobre la base de un censo pecuniario, quedando fuera del ejercicio del poder aquellas clases que no poseían poder económico.

*Contrario sensu*, romanistas como CATALANO, LOBRANO, FERNÁNDEZ BULTÉ, FERNÁNDEZ ESTRADA Y RUBIO CORREA, estiman que no obstante la limitada titularidad de sujetos políticos con derecho de participación en el ejercicio del poder y la necesaria condición de ciudadano para intervenir en la toma de decisiones, Roma y su Derecho establecieron procedimientos objetivos y efectivos de intervención ciudadana de *homo politicus*<sup>22</sup> en los espacios decisivos. En palabras de FERNÁNDEZ BULTÉ<sup>23</sup> (...) en Roma se articuló un modelo de organización política genuinamente democrático (...) Por el contrario, la burguesía liberal ni fijó ya más esos límites, ni ha alcanzado un mecanismo participativo de poder de la ni vel y pureza del que tuvieron los antiguos<sup>24</sup>.

Es de esa dimensión funcional y objetiva, de la cual los estudios de los autores mencionados toman lo más positivo del modelo *iurpublicístico* romano y desechan aquellos elementos que hacían excluyente el ejercicio de los derechos políticos, propio de una formación esclavista como la romana.

---

<sup>22</sup>Con el feudalismo se produce el eclipse en Occidente del ideal del ciudadano activo, cuya existencia misma se afirma en y a través de la acción política. La mayor expresión del *homo politicus* fue aportada por los modelos clásicos griego y romano. Cfr. HELD, David, *Modelos de democracia*, Alianza editorial, Madrid, 1991, p.30.

<sup>23</sup>Vid. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Separata de Derecho Público Romano*, Editorial Félix Varela, La Habana, 1999, p.17. En Roma no pertenecían al *populus* ni esclavos, ni dediticios, ni extranjeros y por ende carecían de los derechos políticos ciudadanos como el *ius honorum* (derecho a acceder a las magistraturas) y del *ius suffragii* (derecho a elegir y revocar magistrados y a votar las leyes).

<sup>24</sup>Para Giovanni LOBRANO la llamada “vacuidad conceptual” que mina al par “democracia representativa” surge a partir de la calificación de democrático que hiciera Alexis de Tocqueville respecto al gobierno representativo norteamericano. Así acotaba Tocqueville: “Nuestros antepasados se sentían siempre inclinados a hacer un uso impropio de la idea de que los derechos privados deben ser respetados; nosotros, por otra parte, tendemos de forma natural a exagerar la idea de que el interés de un individuo debe ceder siempre ante el interés de los muchos”, cfr. TOCQUEVILLE: *La democracia en América*. Vol. II, libro IV, capítulo 7. Si bien durante los siglos XVII y XVIII el liberalismo y la representación como eje central de su modelo político no tuvieron nada que ver con un orden político democrático ni siquiera en sus aspectos más formales, desde este punto de inflexión la democracia y la representación se funden en un par dialéctico. “Del consciente y general rechazo de la democracia se pasa luego a un consenso general frente a ella (el uso de la palabra democracia implica ahora automáticamente un juicio aprobatorio de la sociedad o institución que describe), a precio, sin embargo, de una desvalorización tan radical del concepto, que hace vano cualquier intento de análisis, de tal manera que la más reciente *iurpublicística* sobre el tema aparece a menudo condicionada por esta vacuidad conceptual”. Vid. LOBRANO, Giovanni, *Modelo Romano y constitucionalismo modernos*, (Anotaciones en torno al debate *iurpublicístico* contemporáneo, con especial referencia a la tesis de Juan Bautista Alberdi y Vittorio Emanuele Orlando), Editorial Universidad Externado de Colombia, 1990, p.49.

Se basan para ello en la dimensión objetiva del mecanismo funcional de la *Respublica* tomando en consideración los principios que aportó, a saber<sup>25</sup>:

1. Existencia de instituciones de participación ciudadana, como garantía jurídica para el ejercicio efectivo del *ius suffragii*. (derecho a elegir y revocar magistrados y a votar las leyes).
2. Existencia de instituciones cuya aceptación no está mediada por valoraciones de los órganos estatales o existe una mínima valoración, *verbigratia*: discusión pública y consulta para la aprobación-abrogación de las leyes y nominación-elección-rendición de cuentas-revocación de los mandatarios.
3. La participación es decisiva con efectos vinculantes en sus resultados (*ad referendum*).
4. El procedimiento de realización de las instituciones proviene “desde abajo” o sea cuando es la propia ciudadanía es quien promueve el proceso participativo, o cuando activándola un magistrado o mandatario la decisión del pueblo de aceptarla o no es vinculante.

Esta es la línea de pensamiento a la que se afilia la tesis y la cual será profundizada en epígrafes posteriores.

## **I.2 *Respublica* romana y participación ciudadana. Su impronta para el diseño funcional del modelo clásico de Derecho Público Romano.**

Un ejercicio obligado de lealtad a la historia política y jurídica de Roma, y dentro de ella al *Corpus Iuris Civilis*, su principal fuente de conocimiento, advierte que el vocablo *respublica* tiene un carácter polisémico<sup>26</sup>. Con apego irrestricto al origen de la voz latina *res publica*, se concuerda con DI PIETRO<sup>27</sup> en que aparentemente estas palabras no exigen un esfuerzo de introducción. Si bien desde un punto de vista formal esto puede ser cierto, notables dificultades encierran la exactitud de una traducción de una locución latina precisa y verdadera, porque en el *traducere*, resulta tarea harto difícil traerse a la modernidad, es decir,

---

<sup>25</sup>La sistematización de los principios es propia y se ahondará más adelante véase *infra* pp. 43-50. Además, *vid.* GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, “El republicanismo democrático romano. Su impronta para el diseño estructural del modelo clásico de Derecho Público Romano”, en *Revista de Derechos Humanos y estudios sociales (REDHES)*, año IV, No.7, enero-junio de 2012, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México y Universidad de Sevilla, España, p. 66.

<sup>26</sup>GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, “El republicanismo democrático romano. Su impronta para el diseño estructural del modelo clásico de Derecho Público Romano”, en *Revista de Derechos Humanos y estudios sociales (REDHES)*, año IV, *ob.cit.*, p. 67.

<sup>27</sup>*Cfr.* DI PIETRO, Alfredo, “*Respublicae*”, en *Profundización en Derecho Romano. Cuestiones actuales*. Colectivo de autores, Ediciones Alveroni, Argentina, 1998, p. 111.

trasladar al siglo XXI el étimo de los vocablos romanos. Máxime porque se corre el peligro de la mera literalidad y por ello, en el caso de marras, que la *respublica* sea identificada literalmente con las cosas públicas o con el Estado Nación moderno.

*Res* es una de las voces más empleadas por el espíritu latino, pero es algo más que los simples “objetos exteriores” al hombre. El ciudadano romano utiliza esta palabra por doquier, de ahí la multivocidad que se le imprime a dicha locución. Así, nos hablan de la *res rusticae*, para referirse a las cosas del campo, pero no limitada a los arados, azadas y demás herramientas que emplea el agricultor, sino englobando todos los asuntos que hacen a la labor agrícola. Los asuntos de los soldados se refieren como *res militares* o *res castrenses*, pensando no solo en las espadas, lanzas y escudos, sino en todos los asuntos que hacen el arte militar.

Si hablan de lo que atañe a los barcos y los asuntos de la navegación, nos dicen que se están refiriendo a la *res nauticae*. Y si nos cuentan los hechos históricos, emplean el vocablo *res gestae*. ¿Qué es lo que tienen en común esos entes exteriores a los cuales los romanos denominan en general *res*? Pues bien, *res* no son solo los entes corporales exteriores a los que se llama cosas<sup>28</sup>, sino también son los asuntos, los problemas, las cuestiones, que de algún modo interesan a los hombres. De ahí que su sello distintivo se tiene en la expresión “lo que concierne y pertenece a los hombres<sup>29</sup>”.

Hasta aquí se ha pensado lo que significaba el vocablo *res*. Pero el centro de la investigación es la *respublica*, el adjetivo calificador *publica* deriva de *populus*. Para el jurisconsulto GAYO<sup>30</sup> la *res publica* es “*extra patrimonium nostrum*” (no pueden apropiarse de ellas los particulares), porque al ser *publicae* son del *populus*, ¿pero qué es el *populus*? Para CICERÓN “por *populus* hay que entender, no toda reunión de hombres congregados de cualquier modo, sino un grupo numeroso de hombres asociados los unos con los otros por adhesión a un mismo *ius* y a una comunidad de intereses. La cosa pública (*respublica*) es asunto del pueblo (*populi res*); y el pueblo no es cada grupo de hombres, asociados de cualquier manera, sino un amplio

---

<sup>28</sup>En este sentido las vías, los puentes, el foro, el circo, las fuentes, los ríos, las riberas, todas ellas eran *rei publicae*. No eran del estado sino que eran del *populus*, es a él a quien quedan afectadas. Pero se vuelve a recalcar: *res* no son solo los entes corporales exteriores a los que se denominan cosas, sino también son los asuntos públicos.

<sup>29</sup>El jurisconsulto ULPIANO así lo define en el libro cincuenta del Digesto: “Los bienes de una ciudad se llaman públicos, pues propiamente son públicos tan sólo los que pertenecen al pueblo romano” *Ulpianus Libro X. Ad Edictum.-Bona civitatis abusive "publica" dicta sunt, sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt. Cfr. D. 50, 16, 15. VALIÑO, Emilio, Instituciones de Derecho Privado Romano*, Editorial de la Universidad de Valencia, España, 1977, p. 91.

<sup>30</sup>GAYO, 2.1; I.2.1 pr, citado por DI PIETRO en, *ob. cit.*, p. 117.

conjunto de hombres unidos por un acuerdo común acerca de la ley y los derechos y por el deseo de participar de mutuas ventajas. La República Romana se destacaba por el concernimiento de todos los ciudadanos que componen el *populus* en lo que les preocupa y por ello era discutido públicamente<sup>31</sup>. Por tanto, el *populus* no es un *obiectus* (objeto exterior al hombre) sino los ciudadanos mismos como *subiectus* (sujetos políticos).

Pero si el *populus* es la comunidad organizada, lo que produce la comunidad de intereses es la república como organización política de los ciudadanos. Tal cual establece CICERÓN casi en el límite de una tautología “*est igitur, inquit africanus, respublica, res populi*” (la *res publica* es pues dice ESCIPIÓN EL AFRICANO la *res* del *populus*)<sup>32</sup>.

La *Respublica* se convierte, por tanto, en una dicción empleada para denominar aquello que le pertenece al *populus* romano en general, y así lo plantea FERNÁNDEZ BULTÉ al referir:

[...] Por eso es preciso recordar que el adjetivo *publicus* deriva de *populicus*, es decir, de *populus*. Entonces queda claro el significado de *publicus*, se asocia a la pertenencia al *populus*, a una entidad sociopolítica organizada como tal en la *civitas*. Y la cosa pública (la *res publicae*) es la cosa del *populus*<sup>33</sup>.

Es así, que en Roma el vocablo *publicus* se asocia con la palabra *populus*, es decir; la sociedad organizada en *civitas*. Entonces cosa pública es la cosa del pueblo<sup>34</sup>.

También hay autores, que emplearon la palabra *respublica* para referirse a la época en que Roma era gobernada como una República. Para RINALDI<sup>35</sup>, el Iusrepublicanismo o Derecho Público Republicano Romano se refiere a lo que hoy llamaríamos la “organización política” que se dieron los romanos. Así se emplea el término en otros segmentos del Digesto y cuando se le adjudica a Ulpiano esta terminante definición “*Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat*”<sup>36</sup>, o sea “el que se refiere al estado de la cosa romana”, o quizás más propiamente el Derecho de la república, es decir de la organización política que se dieron los romanos, lo que modernamente llamaríamos su constitución. Empero el Derecho Público

---

<sup>31</sup>Cfr. CICERÓN, De República, en NAVARRO Y CALVO, Francisco, (Traductor), *Obras completas de Marco Tulio Cicerón*, T.VI, Editorial. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1983, p. 139.

<sup>32</sup>*Idem*.

<sup>33</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Separata de Derecho Público Romano*, ob.cit., p. 8.

<sup>34</sup>Cfr. COSTA, Emilio, *Historia del Derecho Romano Público y Privado*, Trad. Manuel Roventos y Noguer, 1ra edición., Madrid, Reus, 1930, p.1.

<sup>35</sup>RINALDI, Norberto Darío, “La resurrección del Derecho Público Romano”, en *Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, La Habana 2002, editadas por Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México, pp. 229 y 230.

<sup>36</sup>D, I,1, 1, 2, citado por RINALDI en, ob. cit., p. 229.

Romano sufrió cambios fundamentales a través del tiempo, ya que comenzó en sus orígenes siendo una mera federación de gens para ser consecutivamente una monarquía, república e imperio y, aún dentro de cada una de esas etapas, podrían distinguirse diferencias sustanciales como por ejemplo las que hubo entre el Principado y el Dominado. Por lo que a los fines de la realización del presente estudio se entiende por “Instituciones del Iusrepublicanismo Romano” a las que rigieron en la etapa republicana puesto que cuando adviene el imperio el sistema es remplazado por otro que nada tiene de Republicano<sup>37</sup>.

Para FERNÁNDEZ DE BUJÁN<sup>38</sup>, el *Ius Publicum* fue en sus orígenes el contenido de las *leges publicae*, así de nominadas por que eran aprobadas por el *populus*, en votación directa en la república romana. Por eso, su contenido se consideraba inderogable por voluntad de los particulares, calificados de manera individualizada, y obligatorio para todo el *populus* romano<sup>39</sup>. Durante la República se entiende por Derecho Público el emanado de los órganos

---

<sup>37</sup>El sistema republicano romano, según la doctrina dominante, cesa cuando en el año 27 a.n.e Octavio declara, precisamente, la reinstauración de la república y asume a continuación la jefatura del ejército por diez años (luego será para siempre), así como el control de las principales provincias, recibiendo el título de Augusto y finalmente a partir del año 23 ostentando la *potestas* tribunicia también por diez años y luego la *potestas* perpetua. En realidad el sistema republicano había entrado en crisis mucho antes. La mayoría de los autores coinciden en señalar como elementos determinantes de esa crisis las consecuencias económicas de la paulatina pero constante extensión del territorio de la ciudad estado Roma y la pérdida de poder de la clase media integrada por los agricultores-soldados en beneficio de la nobleza que se apoderaba de las tierras del *ager publicus*. En la Roma del apogeo republicano (con la plena integración patricio-plebeya a partir del año 367 a. n.e), los comicios se celebraban regularmente y se constituían en fuente originaria del poder ya que elegían a los magistrados y estos luego de finalizada su gestión ingresaban al senado conforme a lo dispuesto por la *Lex Ovinia*. El pueblo a través de los comicios era el que facultaba a algunos ciudadanos para iniciar la carrera política e inclusive para acceder al senado. Esos comicios se realizaban siempre en el centro correspondiente a cada *polis* y se requería para ello la presencia física del sufragante. Los resultados de los comicios en el siglo II y I a.n.e no expresaban la voluntad política de todos los romanos diseminados por toda Italia sino solamente de los que residían en las cercanías de Roma que en esos tiempos tenían ya intereses y necesidades muy distintas a las del entero *populus*. El sistema constitucional republicano que resultó altamente eficaz para una ciudad estado relativamente pequeña devino obsoleto cuando Roma creció no por la mera razón de tratarse de un territorio muy grande sino porque los órganos de poder dejaron de interpretar la voluntad del *populus* para empezar a expresar los intereses de la clase más pudiente que residía obviamente en Roma y sus cercanías. Para mayor información, *vid.* ARANGIO-RUIZ, Vicente, *Historia del Derecho Romano*, 4ta edición, Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros, pp. 222 y ss.; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, *ob.cit.*, pp. 173 y ss.; LAPIEZA ELLI, Angel Enrique, *Historia del Derecho Romano*, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1975, pp. 112 y ss así como RINALDI, Norberto Darío, *Lecciones Ampliadas de Derecho Romano*, *ob.cit.*, pp. 61 y ss.

<sup>38</sup>FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, *ob. cit.*, p.33.

<sup>39</sup>D.1.1.1.2 (Ulpiano): “Dos son las posiciones en este estudio: lo público y lo privado. Es derecho público el que corresponde al estado de la cosa pública, privado el que respecta a la utilidad de los particulares, pues hay asuntos de utilidad pública y otros de utilidad privada...” Sobre la base del anterior pasaje del Digesto Justiniano resulta interesante el análisis realizado por Fernández de Buján respecto a la dicotomía entre Derecho Público y Derecho Privado en Roma. Al respecto acota que ya a finales de la República comienzan a utilizarse las expresiones *ius publicum* e *ius privatum*, y hay textos de Cicerón que así lo atestiguan, si bien los términos de la contraposición, tal y como han llegado hasta nosotros, se encuentran en un fragmento del Digesto atribuido a Ulpiano, que es recogido de forma más breve en las instituciones de Justiniano, 1.1.4. Lo primero que hay que resaltar es que

de la *civitas* a través de la participación directa del *populus*, por lo que se incluirían en esta categoría todas las normas provenientes de las *leges* comiciales, de la ley de las XII tablas, de los plebiscitos y de los edictos de los magistrados. Es en ese sentido que se habla en algunos pasajes del Digesto (D, 2, 14, 38; D, 26, 7, 5, 7; D, 35, 2, 1; D, 39, 2, 18, 1). El *Ius Publicum* designa, en fin, al conjunto de *leges publicae populi romani*, *verbigracia*, todo el Derecho creado mediante la intervención inmediata del *populus*. Es por eso que gran parte de lo que hoy se considera Derecho Privado, en Roma era totalmente Público, como creado por el pueblo<sup>40</sup>. (Véase Anexos número 1, 2 y 3)

---

derecho público y privado no son dos campos antitéticos, sino, como resalta Ulpiano, dos posiciones, dos puntos de vista para el estudio del Derecho (*huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum*), y las diferentes acepciones o sentidos con que son utilizadas en las fuentes ambas expresiones, tienen un lazo de unión que los relaciona entre sí. Hasta cuatro matices diferenciales se pueden encontrar en las fuentes en relación con estas expresiones, a) en relación con el origen, b) en relación con el contenido, c) en relación con el interés y d) en relación con la derogabilidad de las normas. En atención al origen de producción de las normas, son de *ius publicum* las disposiciones contenidas en las *leges publicae*, los senadoconsultos, los edictos de los pretores y las constituciones imperiales. Corresponderían al derecho privado las costumbres, las interpretaciones de los juristas y los pactos y negocios que los particulares en uso de su autonomía individual, se procuran para regular sus intereses. En atención al contenido, son de derecho público las normas relativas a la organización y gestión de la ciudad (*res publicae* para Cicerón, *statum rei romanae* para Ulpiano), gestión de los tributos, relaciones con otras comunidades, delitos públicos y proceso penal. Son de derecho privado la normativa reguladora de las relaciones patrimoniales y familiares de los individuos, los delitos privados y el proceso civil (en la etapa de juez privado que dicta sentencia). Hay que añadir que determinadas normas que regulan relaciones entre particulares son consideradas de derecho público en atención al interés social o general ínsito en las mismas que no las hace susceptibles de ser derogadas por los particulares; por ejemplo las partes no pueden excluir y exigirse recíprocamente en sus relaciones contractuales la responsabilidad por dolo, la imposibilidad de eximir al tutor de prestar fianza o rendir cuenta, la imposibilidad de eximir de responsabilidad a los empresarios de transporte marítimo, la imposibilidad de no pactar la no responsabilidad por delitos privados (D.2.14.27.4), la imposibilidad de pactar que no se ejercite el interdicto en caso de violencia en cuanto tiene lugar la razón pública (D.2.14.27.4). En atención al interés o utilidad son de derecho público aquellas disposiciones en las que prima el interés público, general o social, y de derecho privado aquellas en las que se protege el interés de los particulares, por lo que la *utilitas* (utilidad) que es fundamento de derecho se da tanto en uno como en otro tipo de normas jurídicas. En atención a la derogabilidad de las normas las de derecho público son imperativas, de *ius cogens*, por lo que no pueden ser derogadas ni excluidas por las partes mientras que las de derecho privado son dispositivas por lo que pueden ser incumplidas o no tenidas en cuenta por las partes. Al respecto, véase, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Privado Romano*, Editorial Civitas, 4ta edición, 2011, pp.39 y 40.

<sup>40</sup>Tal era la importancia del Derecho Público que hasta mediados de la República de ochocientas leyes *rogatae*, sólo veintiséis pertenecían al Derecho Privado y de las cerca de un millar de leyes públicas aprobadas durante toda la República, de las que tenemos noticia, apenas unas treinta contienen normas de Derecho Privado. La mayoría de las restantes normas creadas por el *populus* regulan el funcionamiento de la comunidad política, el orden constitucional, el culto religioso oficial, los procedimientos penales, el uso de las vías públicas, es decir materias que pueden encuadrarse dentro del denominado *ius publicum*. Entre las leyes públicas reguladoras de materias de Derecho Privado cabe destacar, entre otras, las siguientes: *Lex Silia de legis actione* (regula la reclamación judicial de una cantidad de dinero cierta; introdujo un modo especial de accionar *legis actio per conditionem*, tendía a simplificar las precedentes *actiones sacramento* y *per iudicis arbitrive postulationem*. Cuando la demanda era de créditos líquidos en metálico, permitía a las partes que se presentasen en juicio que se refirieran al hecho, y sin más, comparecieran de nuevo a los treinta días ante el magistrado para el nombramiento del juez); *Lex Calpurnia de legis actione* (regula la reclamación judicial de una cosa cierta, extendiendo el sistema introducido por la ley Silia a todas las acciones personales *ex certa re*); *Lex Aebutia* (introduce el cambio

Desde la doctrina jurídica patria romanistas tales como FERNÁNDEZ CAMUS, DIHIGO, CARRERAS CUEVAS y FERNÁNDEZ BULTÉ<sup>41</sup> dejan claro que el Derecho Civil de los romanos, sus instituciones jurídicas, no pueden conocerse exactamente, si no se estudian previamente sus organismos políticos, sus relaciones sociales, las fuentes productoras del Derecho y, en general, todo acontecimiento que directa o indirectamente hubiese tenido influencia en su formación.

Entonces, en el Derecho Romano aparece la diferenciación de dos esferas jurídicas, formando no una rigurosa dicotomía, sino más bien abarcando las normas jurídicas a modo de dos círculos secantes en los que pueden multiplicarse los traslapes. Una esfera, la del *ius publicum*, se refiere a la *respublica*, es decir, a los asuntos del pueblo romano. El adjetivo *publicus* parece ser una apócope del *populicus*, es decir, lo relativo al *populus* o la nueva unidad política. Esta esfera abarca la suma de derechos e intereses del pueblo romano, *populus romanus*, comprendido como un todo.

El *ius publicum* era el Derecho emanado de los órganos estatales, que se supone sean los órganos de expresión de la voluntad del pueblo romano, y estaba destinado a tutelar todo lo que afectara el interés supremo del estado romano (*status rei publicae romanae*) y a regular todas las relaciones que se refirieran al estado como tal. Se expresaba en el aforismo «*salus*

---

del procedimiento de las acciones de la ley al procedimiento formulario); *Lex Poetelia Papiria* (suprime la responsabilidad personal por deudas); *Lex Aquilia de Damno* (es, probablemente, del año 467, reguló la responsabilidad por daños culpables extracontractualmente a cosas ajenas, estaba dividida en tres capítulos, de los cuales se tienen conocimientos bastante preciso por las fuentes jurídicas); *Lex Scribonia* (prohíbe la usucapión de las servidumbres); *Lex Atinia* (prohíbe la usucapión de las cosas robadas).

Puntos culminantes en la historia de Roma señalan además, en cuanto al Derecho Público, las leyes *Valeria*, las *Sacrae*, la *Valeria Horacia*, la *Licinia Sextia*. Entre las que han llegado hasta nosotros, son además importantes: la *Lex Atilia repetundarum*, notable por las muchas noticias que contiene acerca de la historia del derecho y del procedimiento criminal romano; la *Lex agraria* del 643; la *Lex coloniae geratinae Iuliae*; la *Lex Salpensana* y la *Lex Maclitana*; estas últimas son de gran importancia para el conocimiento del Derecho municipal. Vid. CAMACHO EVANGELISTA, Fermín, *Introducción Histórica al Estudio del Derecho Romano*, Editorial de la Universidad de Granada, España, 1950, p. 183; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *ob.cit.* pp. 154, citado por, GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, *La recepción de los principios del Derecho Público de la Respublica romana en el republicanismo latinoamericano*, Ponencia presentada en el Evento Científico Internacional. Simposio LX Aniversario, Pinar del Río, Cuba, octubre, 2012, p.5

<sup>41</sup>FERNÁNDEZ CAMUS, Emilio, *Estudios de Derecho Privado Romano*, Tomo I, La Habana, 1925, Imprenta y Papelería Bouza, C.A.; DIHIGO, Ernesto, *Derecho Romano*, primer curso, segunda parte, Copias de Clases, Universidad de la Habana, 1954; CARRERAS CUEVAS, Delio, *Traducción de Fundamentos del Derecho Civil Romano*, de Novitsky, I. B. (1ra Parte), La Habana, 1980; FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Separata de Derecho Público Romano*, *ob.cit.* Recordemos que FERNÁNDEZ CAMUS, es el primero en publicar una obra docente cubana *Curso de Derecho Romano* en seis tomos, terminados en 1941. Esta obra constituye el primer libro de Derecho Romano escrito en Cuba por un autor cubano y para empleo en la docencia universitaria. En ella se reflejan las teorías más actualizadas de la ciencia romanística. En 1948, DIHIGO publicó su propio texto a reunir sus conferencias en un solo cuerpo. Además reitera el carácter precedente del estudio del Derecho Romano al resto de las asignaturas curriculares y, en particular, del Derecho Civil.



*populi suprema lex esto*» (el bienestar del pueblo debe ser la suprema ley). Por los altos bienes que defendía, sus normas eran impuestas por el *imperium* o suprema potestad de mando, un poder originario y soberano al que ningún ciudadano puede sustraerse. Entre los atributos del *imperium* figuran los siguientes: la suprema dirección del gobierno del Estado; el mando militar; el *ius edicendi* o derecho de dirigirse al pueblo y dictar ordenanzas; la *iurisdictio*, o facultad de administrar justicia civil o criminal; el *ius agendi cum patribus* y el *ius agendi cum populo*, o derecho de convocar y presidir, respectivamente, al Senado y a los comicios; la *coercitio*, o poder disciplinario; el *ius auspiciorum*, o facultad de consultar la voluntad de los dioses con precedencia a la celebración de ciertos actos.

El *ius privatum* toma su nombre de *privus*, es decir, el particular. PAULO DIÁCONO explicaba así el sentido de esta palabra: “los antiguos llamaban *privos* y *privas* a los individuos singulares. Por lo que se llaman *privata* los asuntos concernientes a cada particular; de lo que se siguen los nombres de *privilegium* y *privatus*<sup>42</sup>”.

Si se analiza el Derecho Público Republicano Romano desde un punto de vista estructural, se advierte que la constitución republicana se asienta en tres pilares básicos: Senado, Asambleas populares y Magistraturas. Es conocida la admiración del filósofo de la historia griega de la época, POLIBIO, que después de estudiar el funcionamiento de las instituciones políticas republicanas, en el libro VI de su Historia Universal, contaba que no cabe su encuadramiento

---

<sup>42</sup>Para mayor información acerca de la distinción entre Derecho Público y Privado Romano, Vid. ALBERTARIO, *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano*, Milano, 1935; BARTOSEK, *Metodo tradizionale e materialismo storico nella metodologia del diritto romano*, Firenze, 1966; BIONDI, *Diritto romano e marxismo*, en Jus, 4, 1953; BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Roma, 1934; CALISSE, Carlos, *Studi di Storia e Diritto*, volumen secondo. Giuffrè Editore, Milano, 1892; DANA MONTAÑO, Salvador, *Principios de Derecho Público*, volumen 1, Editores la Unión Casa Morales, Santa Fe, 1920; DE FRANCISCI, Pietro, *Síntesis Histórica del Derecho Romano*, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid; DE MARTINO, Francesco, *Storia della Costituzione*, vol. I, seconda edizione, Napoli, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1972; D'ORS, Álvaro, *Elementos de Derecho Privado Romano*, Ediciones Universidad de Navarra S.A. Editor. Gómez, S.L. Larrabide, 21, Pamplona, 1973; FERNÁNDEZ DE LEÓN, Gonzalo, *Diccionario de Derecho Romano*, Buenos Aires, SEA, 1962; FERENCZY, *From the patrician state to the patrician-plebeian state*, Ámsterdam. Budapest, 1976; FLORIS MARGADANT, Guillermo, *Introducción a la Historia Universal del Derecho*, México, Facultad de Derecho, Universidad Veracruzana, 1974, t. I; GAUDEMET, Jean, *Droit public romain*, Montchrestien, París, 2000; GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1981; IGLESIAS CUBRIA, “Materialismo histórico y Derecho Romano”, en *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 2, 1952; IHERING, Rudolf, *El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo*, t. I, trad. por Enrique Príncipe y Satorres, Editorial Comares, Granada, 1998; KRUGER, Paul, *Historia, Fuentes y Literatura del Derecho Romano*, Editora Nacional, México 1967; ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, (re ed. Torino, 1963); PETIT, Eugène; *Tratado Elemental de Derecho Romano*, Editorial. Saturnino Calleja S. A., Madrid, 1876; RICOBONNO, *Profilo storico del diritto privato romano*, Palermo, 1976; SERAFINI, Felipe, *Tratado Elemental de Derecho Romano*, Editorial. Saturnino Calleja S. A., Madrid, 1876; SCHULZ, Fritz, *Principios del Derecho Romano*, trad. Manuel Abellán Velasco, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1924, VON MAYR, R., *Historia del Derecho Romano*, trad. de Rocas, Editorial Labor, Madrid, 1926; WILLEMS, P., *Le Droit Public Romain*, Charles Petters Editeur, París, 1880.

en ninguna de las categorías aristotélicas de monarquía, aristocracia y democracia: “Si nos fijamos en el poder de los cónsules parece que estamos ante una monarquía, si en el Senado ante una aristocracia, pero si nos detenemos a examinar el poder de la mayoría estamos ante una auténtica democracia. Tal era el equilibrio y los contrapoderes que a juicio de POLIBIO caracterizaban a la constitución republicana<sup>43</sup>. No obstante, para la conformación *iuspublicística* de la *respublica*, debió acaecer un proceso histórico de apogeo y maduración de las estructuras socio-políticas aludidas.

Es bien conocido que en el año 509 a.n.e se produjo la crisis de la monarquía, que dio paso a una nueva forma de gobierno: la República *-respublica-*, la cual duró aproximadamente cinco siglos (hasta el año 27 a.n.e). La crisis fue obra del patriciado económicamente poderoso, que organizó como requería la lógica, el nuevo gobierno a su albedrío y en su provecho, descentralizando el poder en tres órganos cualitativa y cuantitativamente diferentes: el senado, las magistraturas y los comicios.

Más, como todo proceso histórico, la *Respublica* presentó diferentes etapas en su desarrollo. Estas discurren desde un período oligárquico, en el cual el patriciado aristocrático detentaba el poder con exclusión de la plebe, negándole los derechos de participación en el ámbito público y restringiéndole los derechos privados<sup>44</sup>, hasta su fase democrática, resultado de las conquistas republicanas del plebeyado romano<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Cfr. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, ob.cit, p. 114.

<sup>44</sup> Los plebeyos en un inicio estaban excluidos de todos los derechos exclusivos de los *cives*, ciudadanos romanos. Recordemos que para los romanos “Es derecho civil, como derecho propio que es de la misma ciudad, el que dimana de las leyes, los plebiscitos, los senadoconsultos, los decretos de los príncipes y la autoridad de los prudentes...”. El contenido del derecho de ciudadanía romano incluía una serie de facultades tanto de Derecho Público como de Derecho Privado:

PÚBLICOS:

IUS SUFRAGII o el derecho a votar en el comicio.

IUS HONORUM o el derecho a desempeñar cargos públicos como ser magistrado.

IUS MILITAE o el derecho a ejercer funciones en la milicia.

IUS OCUPANDI AGRUM PUBLICUM o el derecho a ocupar tierras conquistadas por Roma.

PRIVADOS:

IUS COMMERCII, o el derecho de ejercer actos entre vivos o de derecho comercial.

IUS CONUBII, o el derecho de contraer matrimonio *iustas nuptiae*.

IUS ACTIONIS, o el derecho de presentarse ante la justicia

LA TESTAMENTI FACTIO ACTIVA Y PASIVA, como la idoneidad para otorgar y para ser instituido en testamento.

LA TRIA NOMINA o derecho de detentar el nombre que consistía en el *nomen*, o nombre propio, *cognomen* o nombre familiar y el *agnomen* o nombre de la gens a la que pertenecía. (D.1, 1,7) y (D.1, 5,17), cfr. VALIÑO, Emilio, ob.cit, p.3.

<sup>45</sup> Existen diversas teorías que tratan de establecer el origen de los plebeyos. Algunos sostienen que se trataba de poblaciones extranjeras anexadas a la Roma primitiva. En cambio, otros afirman tratarse de clientes que

En tal sentido apunta GONZÁLEZ GARCÍA<sup>46</sup> que fueron los tempranos conflictos sociales entre patricios y plebeyos, y la sucesiva modificación y ampliación como resultado de ellos de la participación y del tipo de régimen político, los que otorgaron a la ciudadanía en el plano jurídico formal, un instrumental de articulación del poder, como recurso político que balanceaba los intereses particulares, beneficios y/o privilegios privados o públicos.

Es por ello que autores como LOBRANO, FERNÁNDEZ BULTÉ, FERNÁNDEZ ESTRADA,

---

recuperaron, por diversas causas, la independencia del tutelaje de los patrones. Otra explicación identifica a una masa humana carente de tierras de cultivo y dedicada, en su mayor parte, a trabajos menores, como el comercio y la artesanía. Sea cual fuera la teoría que se adopte, lo cierto es que, en un principio, los plebeyos eran desposeídos, por tanto sin acceso a los cargos públicos, sobre los cuales pesaban serias limitaciones al reconocimiento y ejercicio de sus derechos; excluidos de la ciudad, no gozaban del *ius civitatis*, es decir, de la condición de ciudadanos y se hallaban liberados del servicio militar y de los impuestos. Paralelamente a la expansión romana, al crecimiento de la ciudad, a las conquistas y al mayor apogeo del comercio, hubo un realineamiento económico: muchos plebeyos se enriquecieron y algunos patricios empobrecieron, de ahí que Servio Tulio reagrupó a las personas según su riqueza y en clases, lo que permitió que la inmensa mayoría de plebeyos se mantuviese en las clases inferiores, sin posibilidad de ser considerados en la distribución que se hacía de las tierras conquistadas. Además, se les negaba la igualdad social y tampoco el tratamiento jurídico e igualitario. Estos hechos motivarán la "lucha de los órdenes", que fue una contienda cruenta y secular. No obstante que se promulgaran ciertas leyes que beneficiaban a los plebeyos, sobre éstos se irguió el yugo de las deudas y los intereses leoninos a los que estaban sometidos por los patricios ricos, quienes gozaban del derecho de reducir a la deuda morosa en esclavitud. Este álgido problema estaba en discusión cuando se produjo la amenaza de invasión de los volscos, contienda en la que los plebeyos se resistieron a participar. El cónsul Servilio asumió el compromiso de resolver el problema terminada la guerra, promesa que se incumplió totalmente. Los plebeyos se retiraron en masa al monte Aventino (*Mons Sacer*). Los efectos de la secesión no se hicieron esperar, puesto que las tierras se mantuvieron sin cultivar y las amenazas de los enemigos de Roma continuaron. Alarmados, los patricios enviaron una comisión al Aventino, presidida por Menenio Agripa, quien con el compromiso de abolir las deudas, liberar a los plebeyos caídos en esclavitud por las deudas y crear el tribuno, logró el retorno de la plebe. Era el año 494 a.n.e. Las reuniones de la plebe (*concilia plebis*) y la creación de la magistratura plebeya, al mando del *tribunus plebis*, a quien se le invistió de la calidad de inviolable (*sacro- sanctus*), fueron conquistas importantes, pero no suficientes. Si bien los plebeyos podían reunirse, tomar decisiones en sus asambleas y contar con un defensor de sus intereses, en cambio, no lograron el reconocimiento de otros derechos. En el año 461 a.n.e., Terentio Arsa propuso la redacción de una ley común, que se denominó Ley de las XII Tabas. Las paulatinas conquistas que se iban obteniendo por parte de la plebe en ningún caso estaban libres de fuertes oposiciones y lamentables enfrentamientos. Los plebeyos adoptaron, en reiteradas oportunidades, como método de lucha, las huelgas integrales. El segundo momento histórico de la República es denominado democrático y coincide con el apogeo de las *civitates*; la plebe conquistó sus derechos y se produjo la expansión territorial romana. En efecto, el año 445 a.n.e., la *lex Canuleia* derogó la prohibición, contenida en la Ley de las XII Tabas, de matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. La Cuestura se alcanzó el 421 a.n.e.; en el 367 a.n.e. el Consulado; el 351 a.n.e. la Censura. En el 342 a.n.e. se dictó la *lex Genucia*, la cual prohibía los préstamos usurarios, considerados como de lites públicos. La Pretura fue alcanzada el año 337 a.n.e. La *Lex Poetelia Papiria* suprimió definitivamente la prisión por deudas el año 326 a.n.e.; y el año 304 a.n.e. se publicaron las fórmulas de la ley, es decir que pudieron ser conocidas e invocadas por los plebeyos, poniendo así fin al rigorismo procedimental, de exclusivo conocimiento de los patricios. El año 287 a.n.e. se dictó la Ley Hortensia, en la que se determinaba que las decisiones tomadas por los plebeyos en sus plebiscitos eran obligatorias también para los patricios. Sobre los orígenes y conquistas del plebeyado romano pueden verse entre otros, FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Historia de las Ideas Políticas y Jurídicas*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1978, pp. 24 y ss., así como JORDÁN QUIROGA, Augusto, *Roma: Derecho e Historia*, ODEC, Bolivia, 1998, pp. 43 y ss.,

<sup>46</sup>GONZÁLEZ GARCÍA, René Fidel, "Ciudadanía, República y Revolución", *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2010, p. 13.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN, RINALDI y TORRENT<sup>47</sup> sostienen que para que pueda considerarse que exista lo que los romanos llamaron *respublica*, no basta la caída de la monarquía, sino que tendrán que producirse las siguientes transformaciones: la integración en un plano de igualdad jurídica, social, y política de los patricios y los plebeyos; la constitución del *populus* como órgano activo de la civitas en su expresión comicial; que se regularice el ejercicio del *imperium* del *rex* en el tradicional régimen de dos cónsules y con recíproco derecho de veto (*intercessio*). El periodo que va del 509 a.n.e al 367 a.n.e está dominado por las vicisitudes del antagonismo entre patricios y plebeyos. Abolida la monarquía por la rebelión del patriciado, las poderosas familias patricias se hacen con las riendas del estado hasta el año 367 a.n.e. A partir de entonces, se admite por primera vez que un plebeyo pueda llegar al consulado, de modo que con justicia se le ha llamado a este periodo “estado con base gentilicia”, estado patricio o quiritario, y será recién en el siglo III a.n.e cuando la forma política republicana se encuentre en su mayor apogeo.

### **I.3 Principales aportes del Derecho Público Republicano Romano, en sede de participación política del ciudadano, para la unidad de principios del republicanismo democrático.**

Desde la fase introductoria de esta investigación, se aclaró que no se encaminaba a proponer la aplicabilidad mimética de principios e instituciones de participación romanas en un contexto de relaciones políticas, económicas y sociales distantes de aquella formación esclavista. La esencia del presente estudio se encuentra en la fundamentación de los aportes del iusrepublicanismo romano para la recepción del Derecho Público Republicano Romano, fundamentalmente en Cuba.

Empero, con referencia a la Roma republicana, los estudios se han limitado a explicar el funcionamiento del gobierno, y en general a la esbozada estructura explicitada por Polibio hace ya veintidós siglos de la clasificación gubernativa tripartita de la República en Senado, Magistraturas y Comicios. Aun los más renombrados romanistas del siglo XIX, como MOMMSEN—por solo citar un ejemplo—, no se apartaron de la posición que hizo del sistema

---

<sup>47</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Separata de Derecho Público Romano*, ob.cit, p. 25; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, ob.cit, p. 114; FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio “El tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo *iuspublicístico*”, ob.cit, p. 20; LOBRANO, Giovanni, ob.cit, p.53 y RINALDI, Norberto Darío, *Lecciones Ampliadas de Derecho Romano*, ob.cit, p.58; TORRENT, Armando, *Derecho Público Romano y sistema de fuentes*, ob.cit, p. 89.

supuestamente tripartito de poder de la *Respublica* romana<sup>48</sup>. El tema de los principios informantes del iusrepublicanismo romano exhibe a todas luces un escaso tratamiento, amén de la existencia de valiosos ensayos que se aproximan a la temática<sup>49</sup>.

Si esta tesis se aboca a explorar cuáles serán los principios informantes de las instituciones participativas del Derecho Público Republicano que tendrán trascendencia en los sistemas constitucionales de este nuevo siglo, conviene identificar, a partir del estudio de la dimensión funcional del mecanismo republicano, cuáles son dichos institutos participativos y los principios fundamentales de la participación política del ciudadano en la *Respublica* romana en pos de sistematizar los aportes del republicanismo romano a la participación política del ciudadano.

Para ello se asiente con ORTOLAN<sup>50</sup> en que la primera máxima que se ha de proclamar, es que el Derecho Romano se ha de estudiar conservándolo en todo y por todo exclusivamente su aspecto, su lenguaje, su genio. El pensamiento de lo que se estudia debe abstraerse de los tiempos actuales para vivir en la época en que él vivió, a fin de bajar después a través de la serie de los siglos, hasta la generación del Derecho actual.

Cada época tiene su sello. Cuando se ponen las ideas modernas al lado de las antiguas, se previene contra las falsas asimilaciones y se permite resaltar el carácter distintivo de cada sociedad. Nada de esos textos, axiomas o adagios, nada de esas definiciones o locuciones, que como por tradición se vienen atribuyendo al Derecho Romano y que nada tienen que ver con él. En una sola frase: no se le puede atribuir nada que no sea efectivamente suyo. Tomar los principios monumentales de su Derecho debe ser y es el fin esencial de la presente investigación.

Evidentemente el Modelo de Derecho Público Romano, articuló en su devenir histórico un conjunto de mecanismos rígidos a garantizar la participación del *populus* en la toma de decisiones como derecho exclusivo de los *cives* (ciudadanos) romanos. Como máxima de la realidad política, la *potestas* (voluntad política de l *populus*), poder indiviso, indelegable e

---

<sup>48</sup>Cfr. RINALDI, Norberto Dario, “La resurrección del Derecho Público Romano”, en, *ob.cit.*, p. 230.

<sup>49</sup>*Vid Supra*, nota al pie número 4, así como las obras siguientes: BERTI, E., *De Republica di Cicerone e il pensiero politico classico*, Padova, 1963; DE SANTIS, G., *La Guerra Sociale*, Firenze, 1976; GELZER, M. *The roman nobility*, trad. inglesa por Robin Seager, Oxford, 1969; MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, Italia, 1974; MUNZER, F. *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart, 1920; NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, París, 1976; SYME, R., *The Roman Revolution*, Oxford, 1939.

<sup>50</sup>ORTOLAN, M., *La clave del Derecho Romano o síntesis del Derecho Romano*, Establecimiento tipográfico a cargo de J. Moyano. Sevilla, 1845, pp.3-5.

intransferible de todos los ciudadanos que conformaban la *civitas*, era ejercido de forma directa mediante la participación activa en los comicios o en los concilios de la plebe donde se decidía, con carácter vinculante, tanto la creación de las leyes como la elección y la revocación de los magistrados romanos. Es precisamente el ejercicio de la *potestas* lo que le atribuye la cualidad de democrático al republicanismo romano.

Si se desea analizar la importancia de comprender estos institutos como una forma primaria de ejercicio de la soberanía popular por parte del *populus romanus*, resulta necesario destacar que según KOVALIOV<sup>51</sup>, la idea de la superioridad del pueblo no era ajena al contexto ideológico del estado romano, al igual que la supremacía e inviolabilidad de la *potestas* del *populus* era un principio elemental y respetado.

Hecha esta aclaración, se puede afirmar que en virtud de la superioridad de la voluntad del pueblo, éste se armó de dos nuevas instituciones participativas para ejercitar su *potestas* (entendida esta como su voluntad soberana), aunque de forma diferente: en vez de expresar su voluntad de forma positiva en los mecanismos de aprobación-abrogación de las leyes o en la elección-revocación de los magistrados, ahora también la emite de manera negativa mediante el veto de proyectos de leyes, de cisiones y actos público-estatales por parte del tribuno (*intercessio*), y a través de la negación y la desobediencia ante lo vigente en materia legal pero totalmente ajeno a su *potestas* e intereses (derecho de resistencia). Para no incurrir en un error histórico, se debe señalar que estas nuevas formas de ejercitar la *potestas* fueron concebidas y estrenadas por la plebe, debido a que como clase social nacida totalmente desheredada de derechos ciudadanos, encontró en estos institutos la vía por la cual hacer valer sus intereses en el aparato estatal romano. Aun así, cuando el plebeyado logró el control de buena parte de las magistraturas, nunca renunció a la efectividad de sus institutos propios.

Así, se puede entrever que el *populus romanus*, en su fase de plena integración de la plebe y los patricios, ejercitaba su *potestas* por dos vías. La primera se podría denominar positiva, pues por tradición se encontraba en manos del patriciado y constituía el cauce a través del cual los intereses de este grupo social llegaban al poder. La segunda, sería una vía que podría calificarse como negativa, ya que era el instrumento de lucha política en manos del plebeyado. Aun así, incluso el patriciado, clase social que desde los inicios de la república se arrogó el ejercicio positivo de la *potestas*, por medio de la posesión excluyente del *ius honorum* y el *ius*

---

<sup>51</sup>KOVALIOV, S.I., *Historia de Roma, ob.cit*, p.355.

*suffragi*, no desdeñó ni subvaloró el inmenso poder que encerraba el tribuno. Esta es la razón por la cual se puede comprobar que históricamente, como miembros del patriciado y más específicamente de la nobleza senatorial, se sometían al proceso de la *transitio ad plebem* para poder controlar la poderosa institución del tribuno de la plebe. Además, incluso como sobornaban o trataban de ganarse los favores de los *tribunis plebis*. Por esta razón, se defiende que no existen motivos para seguir manteniendo una radical separación entre ejercicio positivo y negativo de la *potestas*, basado en que aunque era ejercitada de manera bien opuesta por los mencionados grupos sociales, sería más consecuente considerar (como la teoría política y la historia republicana lo demuestran) que el *populus romanus* era uno solo, un todo, y que en virtud de su superioridad, ejercitaba su *potestas* de manera positiva y negativa<sup>52</sup>.

Un elemento vital para la comprensión de la República es, por ende, el papel de la ciudadanía en la actividad estatal. Tal era la importancia de la soberanía del pueblo reunida en comicios, que para poder acceder al Senado y a las magistraturas se hacía necesario la constitución del *populus* o censo de ciudadanos, tanto en la ciudad de Roma como en los municipios.

En relación con estos últimos, ha de recordarse que el procedimiento que la ciudad de Roma tenía para la creación legislativa y la formación del mandato político, se fue extendiendo con la expansión territorial a los pueblos conquistados, proporcionando así una integración jurídica en toda la República.

Al momento de describir las atribuciones reservadas al pueblo, POLIBIO sostiene que “...el pueblo y sólo el pueblo, es el árbitro que concede honores o infringe castigos, el único puntal de dinastías y constituciones y, en una palabra, de toda la vida humana(...) Con frecuencia el pueblo juzga las multas que se deben imponer para resarcirse de los daños sufridos, lo cual ocurre principalmente cuando la multa es importante y los reos han detentado altos cargos; el pueblo es el único que puede condenar a muerte. En tales ocasiones rige entre ellos una ley consuetudinaria muy digna de elogio y de recuerdo: cuando alguien es juzgado y condenado a muerte, la costumbre le permite exiliarse a la vista de todo el mundo e irse a un destierro

---

<sup>52</sup>Pietro Bonfante distingue en la soberanía el lado positivo y el lado negativo, afirmando que el lado negativo se desarrolla con lógica natural en el poder negativo de los tribunos, del cual la *intercessio* y la resistencia es instrumento y expresión. Este aspecto negativo de la soberanía (o soberanía negativa de los ciudadanos como también se denomina) se materializa o se concreta su ejercicio a partir del poder negativo, categoría que sin duda, teniendo en cuenta lo planteado por Bonfante, se relaciona con las ya analizadas formas negativas de ejercicio de la *potestas* por parte del *populus*, y en específico por parte del plebeyado. CATALANO, Pierángelo, “Un concepto olvidado: Poder negativo”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Tomo LXXX de la segunda época num.3, España, 1980, p.238.

voluntario, a condición de que las tribus que emiten el veredicto, una se abstenga y no vote (...) Además, el pueblo es quien confiere las magistraturas a aquellos que las merecen: es la más hermosa recompensa de la virtud de un estado. El pueblo es soberano cuando se trata de votar las leyes; su máxima atribución es deliberar sobre la paz y la guerra, y también sobre las alianzas, tratados de paz y pactos; es el pueblo quien lo ratifica todo, o lo contrario<sup>53</sup>”.

Estos comicios, según ROUSSEAU, son la fuente total de decisiones políticas y legales en Roma, pues, “ninguna ley era sancionada, ni electo ningún magistrado, sino en los comicios; y como no había ciudadanos que no estuviesen inscriptos en una curia, en una centuria o en una tribu, síguese de ello que ningún ciudadano estaba excluido del sufragio, y que el pueblo romano era de hecho y de derecho verdaderamente soberano<sup>54</sup>”. Por lo tanto, la soberanía popular de la cual los magistrados sólo tomaban y ostentaban el *imperium* por un tiempo determinado, se veía además conservada por la mirada vigilante y el poder negativo del Tribuno<sup>55</sup>.

Resumiendo, la participación de los ciudadanos en la *respublica*, en aquello que concernía al *populus* se estructuraba en los comicios<sup>56</sup>, lo que será el objeto de reflexión en el análisis que sigue.

---

<sup>53</sup>POLIBIO, *Historias*, libro VI, 14, 3 - 11., citado por el profesor de la Universidad de Buenos Aires, LO COCO, Javier “De los comicios romanos a la soberanía popular”, ponencia presentada en el XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, 2006, p. 2.

<sup>54</sup>ROUSSEAU, Jean-Jacques, *El contrato social*, Editorial Tecnos (Grupo Anaya SA), Madrid 2002, p. 17. Ver Libro IV, pp. 103 y ss.

<sup>55</sup>FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, “El tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo *iuspublicístico*”, *ob.cit.*, p. 24

<sup>56</sup>En palabras de Pietro DE FRANCISCI, los comicios «son en la civitas el órgano a través del cual los ciudadanos participan directamente en la vida del Estado» (*Síntesis Histórica del Derecho Romano*, *ob.cit.*, p.131).



### **I.3.1 La participación política del ciudadano en la creación legislativa y en los comicios electorales.**

*“El Derecho comienza en la ley, siendo ésta la fuerza de la naturaleza, el espíritu y la razón del sabio, la regla de lo justo y de lo injusto”.*

*Cicerón (de legibus, I, 12, 33; II, 4, 8)*

#### Los comicios legislativos

La *lex* (ley) era la norma establecida por acuerdo de las diversas asambleas legislativas de Roma. El romano la concibió emanando de la voluntad directa del pueblo mismo. Así apostrofa GAYO en su Instituta “La ley es lo que el pueblo ordena y establece<sup>57</sup>”, y en ese sentido se le oponía el plebiscito que era lo establecido por la plebe, término menos amplio que no incluía a los patricios. Dando un concepto más filosófico, PAPINIANO apuntaba: “la ley es precepto común, decreto de varones y prudentes, freno y castigo de los delitos que se cometen por voluntad o ignorancia, y voluntad común de la república<sup>58</sup>”.

Percibieron los romanos con claridad el carácter general que habían de tener las leyes y que debían dictarse para los casos normales y corrientes: “las leyes-dijo POMPONIO- conviene que se establezcan sobre cosas que frecuentemente suceden y no sobre las inopinadas, ni las leyes ni las constituciones del Senado se pueden escribir de un modo que comprendan todos los casos que alguna vez puedan suceder<sup>59</sup>”. De ahí la necesidad de la labor interpretativa para conocer el verdadero espíritu de la ley y resolver conforme a él, los casos no previstos expresamente. En qué debe consistir la verdadera interpretación de la ley, nos lo dice CELSO con palabras que deben tener presentes quienes se consagran al Derecho: “Los juristas han de saber las leyes y saberlas no es conocer sus palabras sino penetrar su sentido y su mente<sup>60</sup>”. Las leyes pueden también ser interpretadas por otras posteriores y desde entonces se reconoció que la ley posterior deroga a la anterior.

---

<sup>57</sup> GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro, *Curso histórico exegético del Derecho Romano*, t.I, Librería de Sánchez, Madrid, 1869, p.6. Vid además, GAYO (D, 1, 3,7).

<sup>58</sup> Para mayor información vid, GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, “La participación popular en el proceso de formación de la ley. Fundamentos históricos del iusromanismo” en *El Derecho como saber cultural. Homenaje al Dr. Delio Carreras Cuevas*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2011, p 58. Vid, además, (D, 1,3).

<sup>59</sup> Cfr. POMPONIO, (D,1,2,2)

<sup>60</sup> *Idem.*

*Latu sensu*, la palabra *lex* designaba en Roma actos jurídicos con características diversas. Así se llamaba *lex* a las cláusulas insertas por los particulares en los contratos: *lex contractus*. También se llama *lex* a los estatutos de las corporaciones *lex collegii*. Pero de manera más precisa, se asiente con COUDER, ROTONDI y MACKENSIE<sup>61</sup> que con la palabra *lex* se designan las normas emanadas de los órganos públicos con capacidad para formular reglas obligatorias de carácter general. Éstas son las *leges publicae*.

En la época clásica, los juristas y los autores literarios insisten sobre la importancia que tiene la ley para la ciudad. Los autores presentan la ley como una especie de acto que une a los ciudadanos y garantiza el orden de la ciudad<sup>62</sup>.

Una definición de ley es la de PAPINIANO (D, 1,3) que la presenta como la *communis res publicae sponsio*, queriendo decir con ello que la ley nacía de la propuesta de un magistrado aceptada por los ciudadanos con un voto, tal como ocurría con la *sponsio* en el Derecho de obligaciones. Pero esta definición es tardía y está profundamente inspirada en la filosofía griega.

Más idónea parece la definición del jurista CÁPITO de la que nos da noticia AULO GELIO (N.A., X, 20, 2, 3) y dice que “*lex est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu*”, definición en la que se advierte que la ley traduce una voluntad, idea frecuentemente expuesta por los juristas que hablan de *voluntas legis*<sup>63</sup>.

*Contrario sensu* a la *opinio iuris* de determinados autores romanistas, quienes sentenciaban que las leyes fueron escasas en Roma y que los romanos eran un pueblo de juristas más no de legisladores<sup>64</sup>. La historiografía ha demostrado la existencia de cerca de ochocientas leyes *rogatae* de la época republicana. De ellas, sólo veintiséis pertenecían al Derecho privado<sup>65</sup>.

Hablando con rigor, sólo eran leyes las decisiones votadas por los comicios. Pero a ellas se asimilaban los *plebiscita*. Se da también el nombre de *lex* a ciertas disposiciones tomadas por los magistrados en virtud de poderes en ellos delegados por el pueblo, ora para organizar una

---

<sup>61</sup>LORD MACKENSIE, *Estudios de Derecho Romano*, Francisco Góngora Editor, Madrid, 1878, p115; ROTONDI, Giovanni, *Leges publicae populari romani*, Universidad de Zaragoza, 1962, p. 5; RUBÉN DE COUDER, M., *Compendio de lecciones escritas de Derecho Romano*, trad. D. Álvaro Lope Orriols, 2da edición, Madrid, 1894, pp. 27 y 36.

<sup>62</sup>CICERÓN, *Pro Cluentio* 53,146, y de *Legibus*, I, 12, 33; II, 4, 8, *ob.cit*, p. 140

<sup>63</sup>En éste sentido, ( GAYO, I, 3; MODESTINO, D.I, 3, 7)

<sup>64</sup>Cfr. SHULZ, *IL principi del Diritto romano*, Editorial. Leonardo. Casa Editrice Sansoni. Firenze, 1949. pp. 5-10.

<sup>65</sup>*Vid supra*, nota al pie número 40.

provincia, ora para conceder la ciudadanía. El ejemplo más célebre de esta delegación legislativa es la delegación hecha a los decenviros para la elaboración del Código Decenviral. Durante la República, Roma ofrece el detalle curioso de la coexistencia de Asambleas legislativas diferentes. Excepto los comicios curiados, cuya función quedó reducida a ciertos actos de Derecho privado, los demás tenían la facultad legislativa por igual, sin que hubiera un criterio constitucional que delimitara sus actividades. Las leyes podían ser propuestas a cualquiera de las asambleas y como dice GIRARD<sup>66</sup>, el uso indiferente que se hacía de los comicios centuriados, de los tributos y de la plebe, es prueba de que en todos ellos predominaba el mismo elemento.

Los comicios curiados no aumentaron sus facultades sino que continuaron interviniendo en ciertos actos solemnes como testamentos, adopciones y *manumissio* solemnes. Los comicios centuriados contribuyeron a su decadencia llegándose al extremo que en sus reuniones el pueblo estaba representado simbólicamente por treinta personas, una por cada curia.

La actividad legislativa de los comicios centuriados, conocidos también como comiciado máximo, creció en este período. Llega un momento en que sus atribuciones eran conocer de ciertas materias importantes tales como la declaración de guerra, la aceptación de la paz, la concertación de tratados y la investidura de ciertos magistrados. Experimentaron una reforma grande que DIONISIO DE HALICARNASO<sup>67</sup> califica de democrática. Tuvo lugar en el transcurso del siglo III a.n.e y ha sido atribuida por unos a FABIO BUTEO censor en 241 a.n.e y por otros a Flaminio censor en 220 a.n.e. Las 35 tribus que ya tenía Roma en esa fecha fueron armonizadas con las centurias de modo que cada tribu dio dos centurias una de *iuniores* y otra de *seniores* para cada una de las cinco clases en que se dividían los ciudadanos o sea 350 centurias más 18 de caballeros y 5 de obreros y músicos que hacen un total de 373. De ese modo se eliminó la preponderancia de la primera clase.

Los comicios por tribu, que nacieron de la costumbre de los magistrados de convocar al pueblo no por curias sino por tribus a semejanza de lo que hacían los *tribuna plebis* con los plebeyos, coexistieron con los comicios centuriados recibiendo a veces el nombre de *comitia leviora* por oposición a los otros que eran el comiciado máximo. Aunque su importancia

---

<sup>66</sup>GIRARD, L' *Histoire des XII Tables*, en N.R.H, París, 1902 p. 33

<sup>67</sup>MOMMSEN, Teodoro, *Historia de Roma*, t.IX, F. Góngora y Compañía, Madrid, 1877, pp. 22-24.

aumentó su protagonismo fundamental, radicó en la elección de los magistrados menores y el conocimiento de ciertos litigios.

La creación del tribunalado de la plebe potenció el surgimiento de la ya afortunada novísima institución de participación: el “*veto o intercessio*”. Con él se podían paralizar las órdenes, acuerdos o resoluciones de todos los funcionarios y organismos. Para que estuvieran amparados debidamente, se les declaró inviolables de modo que cualquier persona que los atacase podía morir impunemente. Su número aumentó después a cuatro y más tarde a diez. Su papel fue importantísimo. Mandatarios y voceros de la plebe pidieron para ella mejoras económicas y políticas. Y fueron sus jefes y guías en la lucha contra el patriciado.

Para ponerse en contacto con sus mandatarios, establecieron la costumbre de reunirlos por tribus. Y en esas reuniones llamadas *concilia plebis*, se tomaban acuerdos de nominados *plebiscitos* (de *plebs* plebe y *scitum* mandato) obligatorios para los plebeyos ya que alcanzaron fuerza de ley.

En un principio, los plebiscitos eran obligatorios únicamente para los plebeyos. Mas en esta etapa alcanzaron carácter de ley para todos. En este sentido se citan tres leyes: la ley Valeria Horacia del año 449 a.n.e; la segunda ley *Pubilia Philonis* del año 339 a.n.e; la tercera del año 287 a.n.e, Ley Hortensia.

La primera da fuerza de ley a los plebiscitos, sometiendo a la *auctoritas patrum* (aprobación) de los senadores<sup>68</sup>. La segunda dispuso que esa *auctoritas* se diera antes de la aprobación en los concilios, en tanto la tercera suprimió el requisito de la *auctoritas*.

Entre las leyes de este período, podemos mencionar junto a las de Derecho Público ya citadas, la *lex canuleia* plebiscito del año 445 a.n.e, que autorizaba el matrimonio entre patricios y plebeyos; la *lex poeetelia papiria* del 386 a.n.e, la cual suaviza la posición de los deudores; la

---

<sup>68</sup>La función inicial del senado, en la creación normativa, fue meramente consultiva. El rey no quedaba obligado por sus acuerdos, aunque éstos debieron pesar mucho por ser la opinión de los jefes de los núcleos gentilicios que integraban la ciudad. Al caer la monarquía la importancia de los senadores aumentó considerablemente, pues los cónsules funcionarios temporales y responsables trataron cada vez más de actuar de acuerdo con el Senado para estar respaldados por él. Además el carácter permanente de ese cuerpo en medio de las magistraturas temporales le daba un peso y una continuidad que llegaron a hacerlo el órgano más importante del Estado. De las funciones senatoriales la que más interesa es la de impartir su aprobación a los acuerdos de los comicios o asambleas populares la cual se denominaba *auctoritas patrum* (autoridad de los padres) la cual tuvo una gran importancia en el curso de las luchas políticas de Roma. Durante la república aunque no tenía funciones legislativas intervenía en la de los comicios de un modo directo al tener que impartir la *auctoritas patrum* a las leyes comiciales. Para mayor información, véase, CARRERAS CUEVAS, Delio J., *Manual de Historia General del Estado y el Derecho*. Colectivo de Autores. Tomo I parte Primera, Editorial Félix Varela, 2da edición, La Habana, 2002, p.189

*lex aquilia* de daño del año 290 a.n.e; *lex cincia* del año 204 a.n.e sobre donaciones y la *lex atilia* y la *lex laetoria* de principios del siglo II sobre el status jurídico de los impúberes y los menores de 25 años.

En cuanto al proceso de formación de la ley, la norma habitual es que fuese votada por los comicios *lege rogatae*: la iniciativa pertenecía al magistrado que proponía la ley. Para HEINECCIO<sup>69</sup> los romanos en tiempos de la república libre llamaban ley a la que el pueblo romano constituía a ruego de un magistrado superior. Estos magistrados superiores que debían hacer la ley con el pueblo, eran además los dictadores, cónsules, los tribunos militares con autoridad consular, los censores y pretores.

Por esto se conocen la ley Emilia de censura dada por un dictador, la ley Elia *Sencia* por cónsules, la *Pinaria* de *Ambitu* dada por un tribuno militar con poder consular, la *Cecilia de ffonibus* de censores, la *Aurelia* judicial por un pretor. Estos magistrados pues si era necesaria alguna ley, debían primero escribir al menos sus bases en la casa, lo que hacían auxiliados de varones sabios y amigos, con los cuales solían consultar si la ley era conveniente a la república, y conforme a las costumbres de los antepasados. Por lo que casi siempre se añadían las siguientes fórmulas: “Si algún derecho no debió proponerse al afectar al pueblo, respecto de él nada se entiende propuesto por esta ley<sup>70</sup>”.

Una vez escrita la ley, se daba parte al senado, sin cuya autoridad, en un principio como se tuvo oportunidad de ver, se tenía por ilícito trabajar con el pueblo en su elaboración. Mas como el senado algunas veces no permitía con facilidad las juntas populares, se dispuso por la ley *Menia* “que pidiendo el rogador de los comicios justamente su celebración, los senadores antes de entrar a votar prestasen su autoridad a lo que hubiese de mandar el pueblo<sup>71</sup>”. Después de esto seguía la promulgación de la ley. Esta se manifestaba al público, para que cualquiera pudiese leerla, examinarla y consultar consigo mismo si debía darse o desecharse. El período de la promulgación era veintisiete días, espacio de tres ferias, para que la gente del campo que venía a la ciudad cada 9 días pudiese leer y considerar la nueva ley. Observados todos estos requisitos, se decía que un magistrado había rogado legalmente al pueblo y que el pueblo se había legalmente informado.

---

<sup>69</sup>HEINECCIO, Gotlieb, *Tratado de las antigüedades romanas*, Imprenta de la viuda de Sota, Madrid, 1845, p. 51.

<sup>70</sup>*Ídem*, p. 52.

<sup>71</sup>*Ídem*, p. 52.

La ley misma se hacía en los comicios, antiguamente por curias, y después por centurias y tribus. Luego de que el pueblo se había reunido en el campo de Marte o en el comicio junto a la tribuna, un heraldo leía primeramente la ley. Entonces, quien debía hacer la rogación exhortaba a recibirla, y no faltaban quienes la disuadiesen, lo que podían hacer tanto los tribunos de la plebe como los miembros del *populus*.

El proyecto de ley se distribuía en tablas por los repartidores (*diribitores*) ante los cuales estaban presentes 900 guardas con el fin de evitar todo fraude en la distribución. A saber, había levantados 183 puentes en el campo de Marte, tantos cuantos eran las centurias. Estos no eran más que unos estrechos pasajes dispuestos en el momento con tablados sobre el suelo, por los cuales debían pasar uno a uno los que hubiesen de votar. A la entrada de los puentes, estos recibían dos tablillas de las cuales echaban una en la cestilla cuando salían. Emitidos los votos según este orden, se hacía el escrutinio. Si la mayor parte de las opiniones aprobaban la ley, se decía establecida (*scita*) o promulgada (*perlata*). Si por el contrario el número mayor la rechazaba, se decía *antiquata*. La ley promulgada se confirmaba primeramente por juramento y después grabada en bronce se depositaba en el erario.

No obstante lo planteado con respecto a la participación de los ciudadanos romanos durante el proceso de formación de la ley, éste también contaba con iniciativa para poder abrogar una ley. En principio, una ley podía ser abrogada todos los días. La abrogación podía resultar de que una ley no se usara o por la creación de una nueva. En el supuesto de que la abrogación fuera por el surgimiento de una nueva ley, esta podía ser total o parcial. Asimismo podía ser tácita porque la nueva ley contenía disposiciones contrarias a la ley antigua o porque sus contenidos fuesen incompatibles.

En Roma, la ley que abrogaba una ley anterior no tenía efectos retroactivos. Ejemplo de ello, es como en tiempos de Cicerón, se utilizaba en la práctica que las leyes nuevas tuvieran una cláusula que expresara la irretroactividad de la ley.

Muestra de lo planteado es la abrogación de la Ley *Furia Caninia*. Esta ley había circunscrito a determinados límites la facultad de dar libertad por testamento a los esclavos estableciendo las cantidades de manumisiones testamentarias que podían establecerse, lo cual denotaba que no era lícito dar libertad a mayor número de establecido, ya que la Ley *Furia Caninia* consideraba nulas las manumisiones hechas en su fraude. Si se manumitían mayor número de

esclavos que los permitidos, solo los primeros nombrados en el testamento hasta el número permitido conseguían la libertad.

Como consecuencia de la aplicación de esta ley, el *populus* romano consideró que debía abrogarla al considerarla opuesta a la libertad y en cierta manera odiosa: porque era bastante inhumano que después de facultar a los vivos para dar libertad a sus esclavos, si no existía algún otro impedimento, quitar el mismo derecho a los que morían<sup>72</sup>.

A partir del 139 a.n.e una *Lex gabinia* introdujo el voto escrito para los comicios electorales; en el 131 a.n.e la *Lex papiria* lo introdujo para los legislativos, y en el 107 a.n.e *Lex caelia* para los juicios de *perduellio*. Anteriormente en el 137 u na *Lex casia* lo autorizó para los comicios judiciales excepto que se tratara del juicio de *perduellio*<sup>73</sup>.

Para FERNÁNDEZ CAMUS<sup>74</sup>, en relación con el procedimiento oficial se promulgó la ley *Caecilia Didia* en 698 a.n.e., que prohibió las leyes *saturae*, que eran aquellas que contenían a la vez disposiciones favorables y contrarias al pueblo. Estos proyectos de leyes dolosos se sometían a la consideración del pueblo, que solo podía aceptarlos o rechazarlos en conjunto. Después de la citada reforma los proyectos de leyes debían ser correctos y uniformes. También se promulgó la ley *Licinia lunia* (62 a. n.e.) que dispuso que una copia del proyecto de ley debía depositarse en el *Aerarium*.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto se puede resumir como bases del procedimiento romano de formación de la ley, las siguientes:

1. El proyecto de ley (*rogatio*) era presentado a la asamblea correspondiente (*legem ferre*), lo que sólo podían hacer los magistrados superiores (cónsules, dictadores, pretores investidos del *ius agendi cum populo* (derecho de actuar con el pueblo).
2. El proyecto era dado a conocer por el magistrado proponente al pueblo (*promulgatio*) exponiéndolo en tablas de madera o bronce en lugar público: asimismo debía fijar la fecha de la votación en los comicios a los cuales hubiere sido presentada la ley, debiendo transcurrir no menos de veinticuatro días desde la promulgación. Este plazo que al principio fue mera costumbre se hizo después obligatorio con la *lex cicilia didia* de 98 a.n.e.

---

<sup>72</sup>MOMMSEN, Teodoro, *Historia de Roma*, ob.cit, p.58 aludiendo a la Constitución del Emperador Justiniano, título. III, libro VII del Código.

<sup>73</sup>TORRENT, Armando, *Derecho Público Romano y Sistema de Fuentes*, ob.cit, p.200

<sup>74</sup>Vid. FERNÁNDEZ CAMUS, Emilio Andrés; *Historia y Fuentes del Derecho Romano*, ob. cit., p.114.

3. En ese período solía el pueblo realizar reuniones (*contiones*) para discutir el proyecto oyendo las opiniones favorables o *suasiones* y las contrarias *disuasiones*. Todo ciudadano tenía derecho a usar la palabra para consentir o disentir. Cualquier magistrado de categoría igual o superior al proponente o cualquiera de los *tribuna plebis* podía paralizar la ley con su *intercessio*, la cual debía interponerse desde la *promulgatio* hasta el momento final de la votación. El proyecto no podía ser modificado por el magistrado y para garantizar esto la Ley *licinia Iunia* 62 a.n.e ordenó el depósito de una copia en el erario.

4. Llegada la fecha señalada se reunía la asamblea (*comitium*) y comprobado por el augur que los auspicios eran favorables (*obnuntiatio*) y una vez que el presidente consideraba bastante discutido el asunto, preguntaba al pueblo (*Rogatio*) si aprobaba el proyecto y se procedía a la votación por curias, centurias o tribus, según los comicios que fueren. Desde la ley papiria de 131 a.n.e el voto fue secreto. La asamblea aprobaba el proyecto o lo rechazaba en su totalidad. La votación se hacía cada ciudadano emitía un voto al principio a viva voz y después por medio de tablillas escritas. Las fórmulas de votación eran “*uti rogas*” como pides para los votos favorables y “*antiquo rogas*” para los contrarios.

5. El magistrado anunciaba el resultado de la votación (*renuntiatio*) y si había sido favorable el proyecto lo hacía de nuevo y convertido ya en una ley entraba en vigor inmediatamente salvo que él mismo dispusiera otra cosa. Cuando la ley era importante se le publicaba por medio de tablas fijadas en lugares públicos. Además un ejemplar se depositaba en el templo de Saturno que era el archivo oficial de Roma<sup>75</sup>.

### Los comicios electorales

En las fuentes históricas del Derecho Romano se encuentran definiciones acabadas acerca de la intervención del *populus* en los comicios legislativos; sin embargo, no ocurre lo mismo con los comicios electorales. No se hallan exposiciones profundas sobre el procedimiento de elección y revocación de los magistrados republicanos. En cambio, un estudio detallado de la doctrina romanística y del *Corpus Iuris Civilis* puede coadyuvar a la sistematización de las bases de este proceso.

---

<sup>75</sup>Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Siete Milenios de Estado y Derecho*. Tomo I, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2008, p.p.373 y 374. Sobre el procedimiento legislativo ver además: OYUELOS, Ricardo, *Digesto, principios, doctrina y jurisprudencia*, Tomo I, Curso del Derecho español, Madrid, 1920; PERTILE, Antonio, *Storia del Diritto italiano*, Unione Tipografico-Editrice, Roma, 1896; SCIALOJA, Vittorio, *Istituto di Diritto Romano*, Anno 15, Roma, 1903; VAINBERG, S. *La Faillite D'Après le Droit Romain*, L'Imprimerie nationale, París, 1900; WINDSCHEID, Bernardo, *Diritto delle Pandette*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1896.



Siendo los romanos siempre ajenos a las abstracciones<sup>76</sup> no se encuentran exposiciones sobre la forma de elegirse a los magistrados republicanos. Sin embargo, su sentido práctico y fuerte apego a las tradiciones ciudadanas, les permitió ir adaptando las viejas instituciones a las nuevas necesidades, a fin de ajustar la forma de gobierno a las cambiantes exigencias del bien común de la *respublica*<sup>77</sup>.

Afirma PIERÁNGELO CATALANO<sup>78</sup> que en la elección del *interrex* durante la Monarquía, podemos encontrar los orígenes de la elección de los magistrados romanos. Siendo el *rex* vitalicio, a su muerte los auspicios regresaban a los *patres* en un período de nominado interregno, en el que las funciones del *rex* eran desempeñadas por un senador “*interrex*” cada cinco días. El *interregnum* duraba hasta que un *interrex*, que no podía ser el primero, nominaba a un nuevo *rex*<sup>79</sup>.

Para CAPOGROSSI el candidato electo se presentaba frente al pueblo reunido en un espacio sagrado (*templum*) para que el augur, en una ceremonia rica de simbolismo requiriese el consenso de los dioses al nombramiento del nuevo *rex* para la *civitas*<sup>80</sup>. La presencia del pueblo reunido solemnemente constituía el comicio curiado, a quien pertenecía el dictado de la *lex curiata de imperio*, que habría sido un acto por el que el pueblo reconocía al magistrado supremo y se obligaba a su obediencia<sup>81</sup>.

Este agrupamiento popular, en tribus y curias, correspondería el orden del primitivo ejército ciudadano. Según la tradición cada curia suministraba cien infantes (*pedites*) y diez caballeros (*celeres* y más tarde *equites*), de modo que el primitivo ejército romano había estado integrado por tres mil infantes y trescientos caballeros<sup>82</sup>. Precisamente, el hecho de que el pueblo en armas reunido por sus unidades de origen, reconociera la autoridad del *rex* representaba la confirmación de su nombramiento por el *interrex*.

TORRENT apunta atinadamente que durante la república los magistrados eran elegidos por los comicios centuriados y tribados; sin embargo, no es razonable pensar que esta forma de

---

<sup>76</sup>Cfr. SCHULZ F., *Principles of Roman Law*, Oxford, 1936, pp. 40 ss.

<sup>77</sup>LO COCO, Julio Javier, “La elección de los gobernantes en Roma”, ponencia presentada en el *XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, ob.cit, pp. 13 y 14.

<sup>78</sup>Cfr. CATALANO, Pierángelo, *Contributi allo studio del diritto augurale*, Torino, 1960, p.488.

<sup>79</sup>Vid. LIVIO, 1,17, ob.cit, p. 70.

<sup>80</sup>Cfr. CAPOGROSSI, L., *Lineamenti di Storia del Diritto Romano*, Giuffré, Milano, 1989, 21.

<sup>81</sup>Cfr. TORRENT, A., *Derecho Público Romano y Fuentes*, ob.cit, p. 82.

<sup>82</sup>Los tres mil hombres de las legiones se encontraban bajo las órdenes de tres oficiales llamados *tribuni militum*. Cfr. ARANGIO RUIZ V., *Historia del Derecho Romano*, Reus, Madrid, 1994, p. 25..

elección tuvo que haberse impuesto inmediatamente tras la caída de la monarquía, sino que tuvo que haber sido fruto de una lenta evolución<sup>83</sup>.

La tradición refiere la existencia de auxiliares del *rex*. En especial en la organización del ejército, se habla de *magíster populi*, donde *populi* indica esencialmente la organización bélica de los ciudadanos, y *magíster equitum* a cargo de la caballería<sup>84</sup>. Entre estos ayudantes habrían surgido los sucesores de los reyes. Así el joven TARQUINO habría sido un notable militar al servicio de ANCO MARCIO y SERVIO TULIO al servicio de TARQUINO. En estos funcionarios el *rex* delegaba el mando militar, función esencial de su *imperium* y con ello el *ius agendi cum populo* en tanto capacidad de reunir al pueblo en armas<sup>85</sup>.

Los primeros magistrados republicanos habrían tenido origen en los *magíster populi* y *equitum*. De hecho, de aquí deriva el nombre de “magistrados”<sup>86</sup>. De este modo, al inicio de la república habría un *magíster populi* y un *magíster equitum*, que cuando marchaban al frente del ejército, dejaban al *praefectus urbis* al frente de los *seniores* que permanecían en la ciudad. La tradición señala la existencia al inicio de la república de un *praetor maximus*, cuya función era la de insertar el clavo en el templo de Júpiter, con finalidad de determinar los años. El *nomen* “*Praetor*” designa un puesto militar. El adjetivo “*maximus*” denota la existencia de otros *praetores* (si fuesen solo dos, se le llamaría *maior*).

De este modo, estos tres funcionarios habrían constituido la estructura suprema de la conducción republicana luego de la caída de la monarquía, modificando más tarde la denominación de los primeros por el nombre de cónsules por su capacidad para consultar al pueblo y al senado.

En cuanto a la elección de los magistrados, de una primera época en que eran designados por el *rex*, tuvo que pasarse a una segunda etapa en la que el predecesor designaba a su sucesor (principio de cooptación) y los magistrados superiores a los inferiores. Posteriormente, siendo los magistrados jefes militares, tuvo que afirmarse la costumbre de subordinar su designación a la presencia del pueblo en armas, en la organización centuriada<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup>Cfr. TORRENT, A., *Derecho Público Romano y Fuentes ob.cit*, 141.

<sup>84</sup>Otros funcionarios auxiliares habían sido el *duoviri perduellionis*, el *praefectus urbis*, y el *tribunus celerum*. (Cfr. CAPOGROSSI L, *ob.cit* p, 24)

<sup>85</sup>Así Bruto en su condición de *Magíster Populi*, habría convocado al pueblo en armas luego de la muerte de Lucrecia, episodio que según las fuentes habría dado origen al nacimiento de la república. *Vid*, LIVIO, *ob.cit*, p. 80.

<sup>86</sup>Cfr. VALDITARRA G, *Studi di Diritto Pubblico Romano*, Giappichelli, Torino, 1999, p.16.

<sup>87</sup>GROSSO, G, *Lezioni di storia del Diritto romano*, Torino, 1965, p. 188.

Como ha señalado DE FRANCISCI<sup>88</sup> es el cónsul quien crea al cónsul, como es el cónsul quien suscita y dirige la actividad del senado y de los *comitia*. Este sistema de cooptación permitió mantener el poder político en manos patricias durante dos siglos y decayó en la medida que la presión plebeya y la fuerza creciente de las asambleas fue conduciendo a un régimen electoral más democrático en que el magistrado presidente ha perdido casi todos sus derechos de proposición, pudiendo elegir el pueblo libremente (*omnes potestates, imperia, curationes ab universo populo romano proficisci convenit*)<sup>89</sup>.

La elección se concluía con la *renuntiatio* (proclamación) del candidato por parte del magistrado presidente, y el nuevo electo prestaba juramento de fidelidad a las leyes, una vez asumido el cargo. Por la alta posición ocupada dentro del Estado, no había poder constitucional para revocar al magistrado durante su función. Los pocos episodios en que un magistrado fue revocado durante su mandato, fueron vistos como una conculcación al sistema constitucional.

No había distorsiones en el ejercicio del mando en cuanto las elecciones se hacían un tiempo antes del inicio del año del cargo hasta el punto que los magistrados elegidos antes de asumir el poder eran llamados *designati* y ya podían empezar a actos preparatorios de su futura gestión<sup>90</sup>. De todos modos, la fecha de entrada al cargo, por ejemplo, de los cónsules que daban su nombre al año eponimia, varió y a finales del siglo III a.n.e entraban el 15 de marzo ya a mediados del siglo II fue el 1ro de enero. Las magistraturas decaen automáticamente al pasar el año para el que fueron elegidos y no se requiere una *abdicatio* de sus funciones como pensó un sector de la doctrina<sup>91</sup>.

Ya se ha hablado anteriormente de cómo el magistrado *creat* su sucesor. Así, a la asamblea no le queda otra alternativa que aprobar o rechazar, mediante el voto, el nombre del magistrado propuesto.

La convocatoria de los comicios electorales tenía que ser hecha por el cónsul, no por un pretor. Más adelante se eliminó este poder de iniciativa cuando cualquier ciudadano podía libremente postularse para la elección a una magistratura (*petere magistratum*) proponiendo su nombre (*profesio nominis*) al magistrado convocante que no podía rechazar esta propuesta. Solo podía

---

<sup>88</sup>FRANCISCI, Pietro, *ob.cit.*, p. 127.

<sup>89</sup>Cfr. CICERÓN, *De Legibus*, 3, 13, 2, *ob.cit.*, p. 139.

<sup>90</sup>GROSSO, *Lezioni di storia del Diritto romano*, *ob.cit.*, p. 188

<sup>91</sup>Cfr. TORRENT, A., *Derecho Público Romano y Fuentes*, *ob.cit.*, p. 83.

comprobar los requisitos de idoneidad y estaba obligado a proponerlo ante la asamblea. Esto significa que aunque formalmente el magistrado era quien proponía los candidatos, el poder electivo se ha transferido a la asamblea que ejercitaba un auténtico derecho de elección entre los candidatos presentados<sup>92</sup>.

Es que en un principio el pueblo podía solamente aceptar o rechazar a los candidatos recomendados discrecionalmente por el magistrado precedente, posteriormente cuando los ciudadanos adquirieron libertad para postularse a las magistraturas (*ius honorum*), los magistrados en carga, tuvieron que aceptar imperativamente las propuestas realizadas por el *populus* como ente soberano

Y es que el *populus* como mandante entregaba el mandato al mandatario (magistrado), el cual le debía obediencia al soberano (pueblo), contando exclusivamente con la *auctoritas* como poder delegado y revocable<sup>93</sup>. Ahora bien, las fuentes históricas no refieren nada acerca del procedimiento de extinción del mandato político a través de la institución de la revocación. Entonces, ¿esto significaba que el *populus* romano no contó con este recurso? Por supuesto que sí lo detentaba. Del estudio del libro cuarenta y siete del Digesto Justiniano derivamos que se empleó el expediente de recurrir al proceso de la *provocatio ad populum* para la *revocatio* de los magistrados.

Dicho pasaje de la obra de Justiniano pauta que la acción popular es aquella que ampara el derecho propio del pueblo. Por ello, frente a una decisión de gobierno injusta, los ciudadanos que se vieran afectados podían recurrir al procedimiento de la *provocatio ad populum*, convocando a los comicios, los cuales estaban facultados para vetar la decisión. En caso de que fuese grave, el *populus* estaba facultado para revocar al magistrado<sup>94</sup>.

Es válido recordar que es posible que la idea de apelación popular deba relacionarse en sus orígenes con la posibilidad, por parte del tribuno, de vetar algunas decisiones de un magistrado normalmente patricio que supusiese la condena a pena de muerte de un plebeyo. La *intercessio* tribunicia encajaría en el sistema si la cuestión se remitiera a la superior voluntad del pueblo

---

<sup>92</sup>MOMMSEN, Teodoro, *Compendio del Derecho Público Romano*, Editorial. Impulso, Buenos Aires, 1942, p. 351.

<sup>93</sup>MONTES LÓPEZ, Militza, “Elementos comunes en municipios mexicanos y el municipio romano, coincidencias que identifican una vocación democrática. El caso cuquío”, en *Estudios en Homenaje a Mercedes Gayosso y Navarrete*, Editorial Universidad Veracruzana, México, 2009, p. 542.

<sup>94</sup>Está documentado, entre otras, una revocación que fue la del tribuno Octavio en el 132 a. n.e. por su colega Tiberio Graco, uno de los motivos entre otros que llevaron al asesinato de Graco por la oligarquía conservadora. Pero pocos años antes en el 136 a.n.e se le había realizado un procedimiento de revocación al procónsul Emilio Lépido. A partir del año 132 a.n.e la revocación se convirtió en un mecanismo ejercitable en cualquier momento. Cfr. TORRENT, A., *Derecho Público Romano y Fuentes ob.cit*, p. 152 y ss.

reunido en asamblea. En el ejercicio de sus funciones, los magistrados podían imponer entre otros, condenas a muerte los magistrados competentes en materia de homicidio *quaestores parricidi* y de alta traición *duoviri per rduellionis*, los magistrados *cum imperio* cónsules, dictadores y pretores y los propios tribunos de la plebe. Quizás en los primeros tiempos, las apelaciones se produjesen sobre todo en el ámbito de las actuaciones con trasfondo político, consideradas como delictivas por el magistrado y sancionadas con pena capital. Con posterioridad se admite que se pueda apelar ante el pueblo-además de los delitos sancionados con pena capital- aquellos actos ilícitos delictivos sancionados con penas corporales graves, tales como el apaleamiento y la flagelación. Finalmente se reconoce a los comicios tribados su competencia para conocer las apelaciones frente a actuaciones sancionadas con penas pecuniarias- consistentes en multas superiores a 3 020 ases-, así como cualquier otro acto lesivo a los intereses de la comunidad política ciudadana. La decisión final del *populus* en todos los casos era inapelable y podía conducir a la revocación del magistrado<sup>95</sup>.

### **1.3.2. La participación política del ciudadano en la organización municipal romano-latina.**

Tal y como se acotó *supra*<sup>96</sup>, la *respublica* romana constituyó, *per se*, una superación política de la democracia griega, pues la estructura de esta última quedó limitada a la *polis* mientras que la concepción de la república romana trascendió la idea de los estados-ciudad helénicos en permanente discordia entre sí. Al propio tiempo, conoció la institución del municipio, como réplica de la institucionalidad republicana hacia lo local. Por tanto, no puede hablarse de los principios fundacionales del republicanismo romano, sin mencionar la participación ciudadana a nivel municipal.

Las polis griegas como Atenas, Esparta y tantas otras, son hijas del modelo occidental de Revolución Urbana, como también lo fue Roma, con la particularidad en este último caso de la presencia de los etruscos. Todas esas ciudades-estado tenían constituciones similares, capaces de reconocer que la ciudadanía era lo primario para sus ciudadanos. Igualmente, se aprecia que por razones atribuidas al desarrollo natural de sus procesos históricos, todas comienzan como una agrupación de federaciones previas. Todas siguen un sistema monárquico, pasan luego a

---

<sup>95</sup>FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, ob.cit, pp. 229 y ss.

<sup>96</sup>*Vid supra*, p .1

cierto tipo de aristocracia-que de riva más tarde en timocracia- y terminan en democracia. También se evidencia que las *polis* se rigen en su momento de pleno desarrollo por órganos de gobiernos muy parecidos, entre los cuales se destacan las asambleas populares o comicios, que son los bastiones para expresar la voluntad del pueblo soberano. *Ad empero*, ni Atenas ni ninguna de las ciudades griegas, crecieron territorialmente. Pero Roma sí añadió nuevos territorios a su espacio territorial original.

El municipio romano permitió llevar la República al interior de cada pueblo, lo cual devino vía para lograr la supervivencia del ideal republicano. Con su creación, la participación ciudadana se vislumbra desde el nivel local y se puede encontrar a Roma en cada ciudad conquistada. En su diseño, la estructura municipal contempla instituciones políticas, que una vez desempeñadas, facilitaron la existencia de mecanismos de participación.

Se coincide con GÓMEZ DE LA SERNA para quien el Derecho Romano fue adquiriendo un carácter cada vez más general, carácter que había de dar al pueblo romano una dominación más permanente que la transitoria de sus conquistas colosales. Este carácter de universalidad se debió principalmente al cuidado que tuvieron los romanos de ir asimilando su legislación con la de los pueblos con quienes se relacionaban. A saber, se aceptaban de las leyes extrañas todo lo que podía contribuir a la perfección de las propias, mitigando los principios exclusivos y rigurosos de su primitivo Derecho y de sus formas simbólicas y rituales, y sustituyendo a lo que no tenía ya otra razón de ser que las circunstancias históricas de aquel gran pueblo<sup>97</sup>.

Para DE MIGUEL<sup>98</sup> la palabra municipio proviene de las voces latinas *munus*; *-eris, n.* (empleo, carga, servicio) y el verbo *capere* (tomar, coger, hacerse cargo). Con ello se puede afirmar que del sustantivo *municeps*; *-cipis m. y f.* (vecino, natural de un municipio, paisano) se deriva el *municipium*; *-ii n.* (ciudad que se gobernaba por sus leyes y costumbres y gozaba del fuero de la ciudadanía romana). Esto significa, etimológicamente hablando, aquella ciudad, lugar o aldea que tiene, respecto de un ente superior-Roma en este caso-, una obligación o carga. Tal obligación puede ser o no de tipo monetario.

Se les da, por tanto, la denominación de municipios a aquellas ciudades que, anexionadas a Roma, pierden su independencia política, aunque conservan una cierta autonomía en su

---

<sup>97</sup>Cfr. GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro, *Prolegómenos del Derecho*, Librería de Sánchez, Madrid, 1873, p.117

<sup>98</sup>DE MIGUEL, Raimundo, *Diccionario Latino-Español. Etimológico*. Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1946.

administración territorial y su Derecho. Fue una práctica tradicional de Roma respetar el Derecho consuetudinario de los territorios conquistados. Los miembros de los municipios, municipales, a los que se aplica originariamente el Derecho Privado romano y se le somete a una serie de cargas y obligaciones fiscales, acaban siendo ciudadanos romanos con plenos derechos políticos, entre ellos, la posibilidad de votar en asambleas por la aprobación de las leyes y la elección de los magistrados concernientes al espacio municipal, o incluso intervenir en la elección de funcionarios de la ciudad de Roma, así como ser consultados antes del proceso de aprobación de leyes para la urbe central romana<sup>99</sup>.

Durante la República, la fundación de municipios se restringe al territorio itálico. La guerra social promovida por los aliados itálicos frente a Roma en reivindicación de la plenitud de derechos, tiene lugar a principios del siglo I a.n.e, años 91 a 89 a.n.e y finaliza con el reconocimiento de una plena ciudadanía a los miembros de todas las comunidades itálicas aliadas a Roma. El territorio estatal comprende ya toda Italia<sup>100</sup>.

Como se señaló anteriormente, en Roma coexistieron distintas denominaciones para nombrar a los pueblos conquistados, lo cual influyó en que se dieran a unísono varias formas de administración, de acuerdo con la autonomía existente en cada una de ellas. Acorde con ello, resultaría válido entender por qué el funcionamiento de los municipios, desde el punto de vista organizativo-funcional, pudo recaer en los comicios. ¿Qué motiva que se analice de este modo? Al estudiar la historia de Roma, se puede ver que desde sus inicios, la manera que encontraron sus habitantes para poder llevar a cabo la vida en sociedad fue a través de las asambleas ciudadanas<sup>101</sup>, convertidas con el transcurso del tiempo en un mecanismo para el acceso al ejercicio del poder público. Aunque los términos municipio y comicios no constituyen sinónimos, se pueden encontrar similitudes entre ambos en relación con las facultades existentes. Tanto en la urbe romana, como en los municipios latinos, las asambleas populares se convirtieron en la principal estructura de poder ciudadano.

---

<sup>99</sup>FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Derecho Público Romano. Recepción, Jurisdicción y Arbitraje*, 9na edición, Thomson, Civitas, Madrid, 2005, pp. 129-130.

<sup>100</sup>Provincia es el nombre que reciben los territorios anexionados extra itálicos, y en el Principado es ya la unidad básica de administración territorial.

<sup>101</sup>Se le denominó de este modo a los comicios, tanto a los celebrados por las curias y centurias como a los *concilium plebis*, en los cuales se reunía el pueblo para deliberar y decidir sobre cuestiones que influían en el desarrollo de la sociedad. Estas asambleas eran una vía del pueblo para cuidar más de los intereses de orden público, que de los de Derecho Privado. Para mayor información al respecto *vid*, ROMERO HITCHMAN, Viviana, "Municipio romano y mecanismos de participación popular. Aportes al constitucionalismo latinoamericano actual de Venezuela y Ecuador", *Tesis de Diploma*, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, 2011, p. 15

FERNÁNDEZ DE BUJÁN<sup>102</sup> confirma esta afirmación al establecer que el municipio descansa sobre tres órganos: magistratura, consejo ciudadano y asamblea popular, que se presentan de manera variada, en tanto abarcan desde el reconocimiento de una amplia autonomía hasta una administración central por parte de Roma. En tal sentido, considera que las asambleas ciudadanas constituyen el centro de la vida política municipal.

La concepción de la participación ciudadana en las provincias de la parte occidental se llega a conocer realmente mediante leyes otorgadas a comunidades urbanas situadas en Italia en el siglo I a.n.e, a la que hay que unir la larga serie de leyes hispánicas a partir de las leyes otorgadas a municipios hispánicos de la Bética: *leges* Salpensana y Malacitana e Irnitana descubierta en 1981 gracias a la cual se puede hoy conocer la estructura y funcionamiento del régimen municipal romano. Antes de eso el conocimiento de lo que fue el municipio romano era muy escaso.

Fue Álvaro D'ORS quien realizó la limpieza de los bronce y Armando TORRENT realiza su primera publicación en el año 1986. A ellos se les debe que se pueda conocer hoy el funcionamiento municipal romano<sup>103</sup>.

El municipio romano instauró en el decir de LOBRANO, el elemento constitutivo-celular de un sistema federativo intrínseco<sup>104</sup>. Este sistema federal que va a encontrar su raíz en los antes nombrados *foedera* y que resume en esta palabra su concepto base y fundamental; federación como sistema de pactos entre núcleos ciudadanos *a priori* soberanos.

---

<sup>102</sup>Cfr. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Derecho Público Romano. Recepción, Jurisdicción y Arbitraje*, ob.cit, p. 130.

<sup>103</sup>TORRENT, Armando, "La democracia en la República Romana", en *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Laguna*, ob.cit, pp. 185-194. *Lex Irnitana* es el nombre dado a una serie de piezas de bronce grabadas con ordenanzas romanas. Fueron halladas en 1981 en El Saucejo, lugar próximo a Sevilla (España), desenterrándose seis, cinco completas y otra fragmentada, de las diez tablas de bronce que componían la "*Lex municipii Flavii Irnitani*" (las III, V, VII, VIII, IX, X). Su texto traducido, fue dado a conocer por Álvaro D'ORS. Ésta es la ley municipal romana más completa de las conocidas hasta ahora.

<sup>104</sup>LOBRANO, Giovanni, *Città, Municipi, Cabildos*, ob.cit, p. 7 "Le urbes-civitates, diventate Municipi, sono gli elementi costitutivi-cellule di un sistema federativo intrínseco..." *Vid* además, LOBRANO, "La théorie de la *res publica* selon l'Empereur Justinien (*Digesta Iustiniani* 1.2-4)" [relazione al Colloque «Personne et *res publica*» Montréal, les 27 et 28 avril 2007, organizzato dalla Association «Méditerranées»] in *Diritto@Storia*, 8/2009; quindi, con integrazioni e tradotto in lingua portoghese "A teoria da república (fundada sobre a 'sociedade' e não sobre a 'pessoa jurídica') no *Corpus Juris Civilis* de Justiniano (*Digesto* 1.2-4)", in *Seqüência: estudos jurídicos e políticos* (Florianópolis: Editora da UFSC) Vol. 29, No 59, 2009, 13-41.



Concluye POEHLS que lo antedicho nos conduce a afirmar con Salvador Bauzá, que *era Roma gobernando otras ciudades y era Roma respetando las autonomías de las ciudades que iba conquistando*<sup>105</sup>.

### 1.3.3 Principios informantes del republicanismo democrático romano

Hasta el momento, hemos analizado el diseño funcional de la *Respublica* romana a fin de sistematizar los principios aportados por el republicanismo romano a la participación ciudadana en el ejercicio del poder. Como se ha señalado desde las ciencias jurídicas-especialmente en los estudios de Derecho Público Romano-, no se encuentran sistematizadas, con un carácter integral y uniforme, las bases del republicanismo democrático romano y su impronta para la unidad de principios del sistema de Derecho continental desde una visión *iuspublicística*.

La importancia del conocimiento de los principios que extraídos del Derecho Romano siguen siendo como la propia historia en que se generaron y tienen el propio rango de esta, constituye un imperativo para cualquier estudioso del romanismo. Ello obliga a ser, parafraseando a CICERÓN, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, y mensajeros de la antigüedad<sup>106</sup>.

Entonces, sobre la base de los fundamentos históricos del *iuspublicismo* romano y del estudio detallado de sus fuentes originarias de conocimiento, veamos cuáles pueden considerarse, los principios informantes del Iusrepublicanismo romano<sup>107</sup>:

1. La *Respublica* es la organización política del *populus* romano.
2. La *potestas* (soberanía) del *populus* es la base de la *Respublica*.
  - 2.1 La *potestas* reside en el pueblo, es indelegable y se ejerce a través de instituciones de participación, desde el nivel municipal y hasta el nivel central de ejercicio del poder.
    - 2.1.1 La *potestas* es indivisible, por lo que el poder no se puede dividir.

---

<sup>105</sup>BAUZÁ, Salvador, *Autonomía Municipal*, Disertación realizada en la Universidad Católica de la Plata. Municipalidad de La Plata. 1972, p.65. Enmarcado en el Curso de Municipalismo dictado en dicha oportunidad, citado por POEHLS, Luis Martín, "Municipio; orígenes latinos, evolución y actualidad en la Provincia de Buenos Aires" en *Memorias de XIX Encuentro Nacional de profesores de Derecho Romano*, La Rioja, Argentina, 2009, p. 8.

<sup>106</sup>CICERÓN, De República, en NAVARRO Y CALVO, Francisco, (Traductor), *ob.cit.*, p. 140.

<sup>107</sup>GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, "Principales aportes del modelo clásico de Derecho Público Republicano Romano para la unidad de principios del republicanismo democrático", en *Revista española de Republicanismo "Sin Permiso"* disponible en [www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/11romano.pdf](http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/11romano.pdf), pp. 5-7.

2.1.2 Ley pública como máxima expresión de la *potestas* republicana.

3. Existencia del poder negativo directo contra actos lesivos a la *potestas* del *populus*.

4. Dada la complejidad de la ejecución de las decisiones políticas, para el ejercicio efectivo del gobierno deben elegirse funcionarios específicos denominados magistrados.

4.1 Los cargos políticos o magistraturas deben ser ejercidos por un cierto período de tiempo, son revocables y deben ser ireelegibles de forma inmediata.

En efecto, el *populus romanus* no era una abstracción inasible, sino el resultado de la concreta y específica sumatoria de los ciudadanos organizados tanto a nivel de la ciudad de Roma como de los municipios<sup>108</sup>. La soberanía, concretada mediante los mecanismos de participación ciudadana, constituía la base de la *Respublica* y era absolutamente indelegable de la misma manera que hoy es indelegable el ejercicio del sufragio. Respecto a la indelegabilidad, constituye una consecuencia lógica del origen miliciano de los primeros comicios, donde los soldados se pronunciaban con las armas en la mano. En esos casos, sólo los ciudadanos-soldados romanos presentes podían manifestar su libertad sufragando a través de sus aclamaciones. Era impensable y hasta materialmente imposible que alguien delegara en otro su capacidad de hacer ruido, o que pudiera calibrarse como doble el fragor que otro produjera. El principio de la “libertad popular” implicaba al decir de CATALANO<sup>109</sup> la intervención inmediata de los ciudadanos en el ejercicio del poder popular soberano a través de instituciones que se concretan en dos procesos fundamentales: discusión-veto (*intercessio*) - aprobación-abrogación de las leyes y elección-revocación de los magistrados.

Nótese que CATALANO habla de intervención inmediata. Ahora bien, algunas interrogantes se imponen al respecto en un orden clasificatorio: ¿Toda participación directa es a la vez inmediata? Y en consecuencia, ¿todas las instituciones romanas de democracia directa pueden ser consideradas instituciones de participación inmediata de cara a la tesis del republicanismo democrático? Y por último, ¿cabe hablar de participación indirecta en el republicanismo romano?

Con apego al *étimo* de los términos, se advierte que lo directo presupone una acción que se encamina o dirige a determinados fines, mientras que lo inmediato implica que esa actividad

---

<sup>108</sup>RINALDI, Norberto Darío, “La resurrección del Derecho Público Romano”, en *ob.cit.*, p.231.

<sup>109</sup>CATALANO, Pierángelo, “Choque de sistemas jurídicos en la perspectiva latinoamericanista”, en *Memorias del XV Congreso latinoamericano de Derecho Romano*, Morelia 2006 p.31. Según refiere el autor para el Libertador Simón Bolívar el principio de la libertad popular nace en Roma y supone la intervención inmediata en el ejercicio del poder.

produzca efectos próximos en el tiempo, sin mediaciones impeditivas de su eficacia y de carácter vinculante de lo que decida el soberano.

Toda participación política por antonomasia es directa e n tanto se encamina a que los ciudadanos tomen parte por sí mismos en los procesos decisivos. El carácter directo de la participación es un presupuesto de la cualidad de lo inmediato, por lo que no cabe hablar de participación indirecta en un modelo político como el romano, que por ser indelegable la *potestas* no conoció la institución de la representación.

La teoría clásica de la representación política<sup>110</sup>, tiene como principales presupuestos la prohibición del mandato imperativo, la negación de una relación de derechos subjetivos entre los representantes y los representados, la trascendencia de la elección y el derecho al sufragio, la tripartición de poderes y el control horizontal entre los poderes.

En el Derecho romano, solo se conoció posteriormente, en la época clásica, con el desarrollo de las relaciones sociales, pero limitado al ámbito privado. A medida que se desarrollan las relaciones, la necesidad de poder hacerse representar por terceros en los actos jurídicos viene a ser más indispensable. Solo mucho más tarde, en la época clásica, es cuando el Derecho romano se eleva hasta la concepción de esas formas que satisfacen a esta necesidad. La razón de ello es que desde los tiempos más antiguos, ese derecho poseía dos formas propias para realizar el objeto de la representación jurídica, formas que pasan al derecho nuevo.

La primera consistía en el empleo de personas sometidas al poder de otro, y estaba basada en el principio de que todo lo que esas personas adquieren recae en el sustentador del poder. Esta forma tenía, sin embargo, el defecto de no poder hacerse extensiva a la representación en justicia.

Pero una segunda forma-que tuvo otros destinos- vino a llenar ese vacío. Un mandatario concluía el negocio a su propio nombre y después transfería al demandante los efectos de su acto. Cuando en la época antigua se quería hacer representar en justicia, no había otro recurso que transferir fiduciariamente al mandatario la relación o el objeto litigioso. En tal sentido,

---

<sup>110</sup>Vid. DUGUIT, León, *Manual de Derecho Constitucional*, pp. 122 y 123 cuando analiza las consecuencias de considerar la representación política como una “situación objetiva jurídica de hecho” Citado por GUZMÁN HERNÁNDEZ, T. Yan, “Representación en política, instituciones de democracia directa y revocatoria de mandato en Venezuela – Una manera de interpretar el modelo normativo-constitucional venezolano de participación política”, *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, La Habana, 2008, p. 35-38.

SAVIGNY<sup>111</sup> alude a dos momentos en los que la representación alcanzó distintas dimensiones. Además, admite como IHERING, que el aumento de las transacciones sociales trajo consigo la ampliación de la órbita de la representación en el Derecho romano.

Efectivamente, la representación permite la intervención de los actos libres en las relaciones de derecho concernientes a los impúberes, los enajenados y los prodigos, lo cual sería imposible sin ello. Así, la representación no halla más que dos aplicaciones insignificantes en el derecho de familia y respecto al derecho de sucesión, que no tiene por objeto regular las dos posiciones de los bienes entre vivos, sino su transmisión de una generación a otra.

En materia de obligaciones, la representación se aplica a las transacciones mismas, es decir, a las relaciones de persona a persona, pero no a la reparación necesaria que lleva consigo la violación del derecho. En los tiempos muy antiguos encontramos el principio riguroso de que ninguno podía ser representado más que por las personas que están bajo su dependencia, y solo para adquirir, nunca para disminuir sus bienes.

Mas un principio tan estrecho y riguroso no podía mantenerse cuando la civilización había aumentado las transacciones sociales, y fue admitiéndose poco a poco la mediación, si bien limitada a ciertos casos. Comenzó la reforma respecto a las adquisiciones de la posesión y a los medios de adquirir la propiedad fundada en aquella, tales como la tradición y la ocupación. Después se admitió la representación para las enajenaciones resultantes de la tradición y para las adquisiciones del mismo género, permitiéndose en todos los casos hacerse representar ya por los hijos o los esclavos, ya por personas libres. De este modo, en lo referente a las traslaciones de la propiedad, no se excluyó la representación libre sino para las antiguas formas del derecho civil primitivo, la mancipación y la *iure cessio*.

El poder para los romanos era indivisible no sólo en el Derecho Público, sino también en el Derecho Privado. Con relación a este último, por ejemplo, la *manus* (autoridad del esposo sobre la esposa) y la *patria potestas* (poder de la *pater* familias sobre los hijos y demás descendientes legítimos *alieni iuris*), no admitían más que una voluntad determinante, la del sujeto que detentaba esos poderes. Ese concepto de indivisibilidad en el Derecho Privado tiene su consecuente reflejo en el Derecho Público.

La ley pública debe ser entendida como resultado de la voluntad mayoritaria del pueblo en la creación del Derecho Republicano. Sentencia FERNÁNDEZ ESTRADA<sup>112</sup> que el ciudadano

---

<sup>111</sup>SAVIGNY, M. F. C., *Sistema de Derecho romano actual*, F. Góngora y Compañía, Madrid, 1879, pp.207-210.

romano no era oprimido ni por el orden político en que vivían, ni por el Derecho que regulaba su vida, porque ese orden político era justamente el que él se había dado soberanamente, y el Derecho era absolutamente creado por el ciudadano. A ello se refería Juan Jacobo ROUSSEAU, en Contrato Social. II, 12, como “costumbres”, “hábitos” u “opinión”, al referirse a una categoría de leyes “...que no se graba ni sobre mármol ni sobre bronce, sino en los corazones de los ciudadanos, que es la verdadera constitución del Estado; que toma todos los días nuevas fuerzas; que, en tanto otras leyes envejecen o se apagan, ésta las reanima o las suple [...] elemento desconocido para nuestros políticos, pero de la que depende el éxito de todas las demás [leyes políticas, civiles y criminales] y de la que se ocupa en secreto el Gran Legislador, mientras parece limitarse a reglamentos particulares, que no son sino la contra de la bóveda, en la cual las costumbres, más lentas en nacer, forman, al fin, la inquebrantable clave<sup>113</sup>”. La libertas consiste en la sumisión voluntaria a la ley votada en común, de donde se deriva que la *lex publica* es uno de los vínculos más fuertes, o el de mayor cohesión entre los ciudadanos romanos.

El papel que los tribunos tenían reservado en el sistema constitucional republicano, no era otro que el de proteger primero a los plebeyos y luego a todos los ciudadanos, de los abusos que pudieran cometer los magistrados como mandatarios del pueblo. Conforme a la opinión de ROUSSEAU, esa institución servía en Roma para proteger al soberano, es decir al pueblo, de quienes ejercen el gobierno. Obviamente la garantía constitucional no podía estar a cargo de los funcionarios ordinarios, porque es precisamente de los abusos de esos funcionarios que hay que proteger al ciudadano común. Por tanto, si le fueran suprimidas al *populus* sus instituciones de participación como la aprobación y abrogación de la ley, la *intercessio*, la elección de los magistrados y la revocación les queda como último recurso del derecho de resistencia como manifestación del poder negativo directo y de la soberanía popular<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup>FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, “El tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo *iuspublicístico*”, *ob.cit.*, p. 22

<sup>113</sup>Cfr. ROUSSEAU, Jean-Jacques, *ob.cit.*, p. 54.

<sup>114</sup>Durante la existencia de la *respublica* romana se produjeron una serie de secesiones, protagonizadas por el plebeyado en búsqueda de reformas y concesiones políticas, económicas y sociales. Al igual que el tribunado, el origen de la *secessio plebis* debe buscarse en la fuerza pujante de una clase y sector social que lucha por encontrar espacio para sus demandas e intereses en el aparato de poder político de la civitas, el cual como ya analizamos fue hasta cierto momento, instrumento de poder exclusivo del patriciado. Por lo tanto, junto a la actividad de los tribunos se erige entonces la secesión como mecanismo o instrumento a través del cual el plebeyado puede hacer influencia en la vida política de la ciudad. De esta serie de secesiones (cuya cantidad total no está definida) se señala como la más relevante, debido a su impacto y consecuencias, la ocurrida en 494 a.n.e., lo sucedido durante esa secesión fue totalmente sutil e innovador.

En coincidencia con FERNÁNDEZ BULTÉ<sup>115</sup> se asiente en que para los romanos particularmente, el poder soberano de l *populus*, la *potestas*-que era indelegable e intransferible-, se ejercía directamente a través de los Comicios, tanto Curiados, como Tribales, y después de SERVIO TULIO, los Centuriados. Sin embargo, está claro que hay muchísimas acciones que no puede hacer todo el *populus* reunido en comicios, que requieren diligencia y acción personal, es decir, personas encargadas de determinadas misiones, que podríamos llamar, “*de gobierno*”. Para ello la *iuspublicística* echó mano al mandato el cual es un contrato consensual nacido en Roma, por el cual una persona llamada mandante, que dispone de total lucidez y capacidad, ordena a otra llamada mandatario, que haga a su nombre tal o cual gestión, cumpla tal o cual orden o mandato. Por supuesto, el mandante no enajena su personalidad ni su voluntad, sino que cede algo de su autoridad para que el mandatario haga determinadas diligencias a nombre suyo. Y por supuesto, el mandante vigila el cumplimiento de l mandato, lo controla y se reserva el derecho de revocar el mandato en cualquier momento.

Pese a la miopía con que los historiadores liberales decimonónicos interpretaron al mundo romano, en la vieja república romana jamás se practicó la representación. Los romanos no lo hubieran admitido. No hubieran cedido jamás su *potestas*, ni hubieran enajenado su intervención en la *respublica*, la cosa de todos. Cuando designaban magistrados, los consideraban simples mandatarios, nunca representantes. Las pruebas de ello son abrumadoras. Nunca dejaron las manos sueltas a los magistrados; el Tribuno con su *jus vetus* y su *sacer* era una fuerza de contención, un poder negativo como ha subrayado CATALANO.

Además siempre se reservaron la *secesión o resistencia* como última alternativa de su poder, indelegable e indivisible. Los romanos eran lo suficientemente soberbios como para admitir que ellos no podían dirigir los asuntos o la cosa pública, todos en general y cada uno en particular.

Finiquitando, concluye al respecto FERNÁNDEZ ESTRADA<sup>116</sup> que fue nuevamente J.J. ROUSSEAU quien penetró con mirada más profunda en el pensamiento del *populus* romano al respecto. El genbrino afirma que en el funcionamiento de la república romana había que distinguir siempre entre la *potestas*-poder soberano exclusivo de l *populus*- y la misión de l

---

<sup>115</sup> Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Separata de Derecho Público Romano*, ob.cit, pp. 25-30.

<sup>116</sup> FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, “El tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo *iuspublicístico*”, ob.cit, p. 29.

gobierno. Para ejecutar la voluntad ya legislada por el pueblo, a esos magistrados se les otorgaba la ya aludida cuota de *auctoritas*, es decir, una encomienda política específica.

De ello se desprende algo que ROUSSEAU explica con su spicacia y no siempre ha sido debidamente entendido: que el hombre romano era soberano y súbdito al mismo tiempo. Soberano por que mantenía siempre su poder como parte de la comunidad política. Y súbdito porque debía en cada momento someterse al gobierno, es decir, a las decisiones de las magistraturas. Como afirma ROUSSEAU, entre esos dos valores no había contradicción. Cuando el ciudadano obedecía a su gobierno, no enajenaba su condición de soberano, sino que la realizaba en un plano más alto y concreto. Al obedecer al gobierno estaba, de hecho, obedeciendo a aquellos que él mismo había elegido y obedeciéndolos en aquello que él mismo había dispuesto como soberano.

De ahí emerge una conclusión no siempre calada en toda su hondura: la forma de gobierno carece de importancia. No importa que sea una monarquía o un gobierno colegiado; no importa incluso que sea elegido mediante el sorteo, puesto que el gobierno no puede hacer sino aquello que le está encomendado, y no otra cosa, incapaz de separarse de la voluntad popular.

El sistema romano se inspira en el deseo de evitar que las magistraturas se perpetuasen en manos de quien las desempeñaban. No solo está prohibida la acumulación de distintas magistraturas, sino también que un mismo ciudadano ejerciese igual cargo o funciones diferentes durante varios años consecutivos. Opina ARANGIO-RUIZ<sup>117</sup> que para evitar la perpetuación en el poder se prohibió que un ciudadano fuera reelecto en una magistratura, se vedó que detentara magistraturas distintas sin dejar pasar un tiempo con la anterior. Tal reelección, primero fue reglamentada severamente y luego suprimida. (Ver Anexo número 4)

#### **I.4 La recepción de principios del Ius republicano romano en los albores del pensamiento y el constitucionalismo moderno: republicanismo democrático versus republicanismo liberal.**

Con la caída del imperio romano de occidente, y la consecuente irrupción de los bárbaros en la cuenca del mediterráneo, se quiebra la estructura política romana, que en lo que concierne a la participación del ciudadano en los comicios legislativos y electorales en el período Imperial,

---

<sup>117</sup>ARANGIO-RUIZ, Vicente, *Historia del Derecho Romano*, ob.cit, p. 120.

se había mantenido en el ámbito de los municipios<sup>118</sup>. Con la desaparición de la antigua civilidad romana, los ciudadanos que se sentían desprotegidos buscaban a los “fuertes” con los cuales constituían pactos (el débil ofrecía fidelidad y obediencia a cambio de protección)<sup>119</sup>.

Es así que a la caída del esclavismo le sigue el lento proceso de formación del sistema feudal, el cual trastoca la esencia misma de la participación política del ciudadano cediendo el paso a una nueva génesis: la representación política estamental. El centro de la acción política era el monarca o el Consejo Real, que junto a los representantes de cada uno de los estamentos (aristocracia feudal, burgos, el clero) conformaron las primeras asambleas representativas que registra la historia. El *homo politicus*<sup>120</sup>, el ciudadano de los modelos anteriores, se convierte en un súbdito absorbido por un cuerpo social que divide a los individuos estatutariamente y tiene como base no la voluntad individual, sino la voluntad colectiva del grupo<sup>121</sup>. Con relación a la teoría de la representación de la voluntad, esta se forma a partir de la teoría de origen canónica de la *personae fidei at repraesentatae*. Para dar paso a esta teoría, se precisa oscurecer la noción romana de pueblo y el sistema jurídico fundado en esa noción, de modo que el papel del pueblo sea cumplido por la asamblea de “sus representantes”<sup>122</sup>.

La aparición en la Europa Occidental aún medieval de los primeros estados nacionales y su ulterior conversión en estados burgueses, trajo aparejado el nacimiento de un nuevo orden económico. Con ello, la participación es reconocida por primera vez como derecho político. Entre las abanderadas, aparecía la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el

---

<sup>118</sup>Después de la caída de la República el municipio sobrevivió durante la época imperial. Este supuso la presencia de criterios más flexibles entre el *Imperium* y la vida social y cultural que al interior del mismo se desarrollaba, pues contribuyó a que sus habitantes pudieran tener el control de los asuntos locales, lo que denota cierta autonomía administrativa, pero sin dejar de mantener una conexión política con el gobierno central a través de instituciones como fueron los magistrados. Vid. DE LA GARZA, Francisco Sergio, *El municipio, historia, naturaleza y gobierno*, Editorial Jus, México, 1947, p. 40.

<sup>119</sup>LO COCO, Javier, “Los comicios romanos”, *ob.cit.*, p. 9

<sup>120</sup>Con el feudalismo se produce el eclipse en Occidente del ideal del ciudadano activo, cuya existencia misma se afirma en y a través de la acción política. La antítesis del *homo politicus* es el *homo credens* de la fe cristiana, el ciudadano para quien el juicio activo es esencial es desplazado por el fiel creyente. Cfr. HELD, *ob. cit.*, p. 53.

<sup>121</sup>Cfr. FAYT, Carlos, S., “Representación Política” en , *Diccionario e l lectoral*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Primera edición, CAPEL, Costa Rica, 1989, p. 600.

<sup>122</sup>Cfr. LOBRANO, Giovanni, *Res publica res populi*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 166 y ss. Desde el 1294 los *writs of summons* por los que se convocaban a los representantes de los parlamentos en Inglaterra, exigen que los diputados tengan “full and sufficient power”. Un bill de 1571 permitía la elección para integrar la Cámara de los Comunes de candidatos no residentes en la circunscripción, lleva la conclusión esbozada por Edward Coke y confirmada por Blackstone de que los diputados representan a todo el reino, independientemente del distrito en donde hayan sido elegidos.



Ciudadano, a la cual le darían continuidad otros magnos textos<sup>123</sup>. El orden constitucional liberal del siglo XVIII privilegió los valores de la libertad de elección como estocada al sistema absolutista, y en consecuencia, el principio de la representación y la separación de poderes. Esto provocó que se desdiera a la democracia y con ella que diera educada la participación de los ciudadanos a la elección de los representantes de la Nación.

No obstante discurrir la toma de decisiones políticas en los albores del constitucionalismo moderno con un carácter eminentemente representativo, algunos de sus magnos textos exhiben expresiones paradigmáticas de intervención del pueblo en el ejercicio del poder. Esto lo evidencia el reconocimiento de la participación ciudadana en torno a los ordenamientos constitucionales que fraguaron a lo largo del siglo XVIII y XIX instituciones como la aprobación popular de la ley, el veto, y la iniciativa popular. Dichas instituciones se originan en los primeros procesos constituyentes en Francia, donde se le dan contornos normativos a los dos primeros institutos participativos que conoce el Derecho Público de la modernidad: el referendo legislativo para la aprobación de las leyes y la iniciativa legislativa popular<sup>124</sup>.

Por otra parte, con la Constitución de la Confederación Suiza en 1848<sup>125</sup> renace el veto popular (*intercessio*), como el derecho del pueblo “a impedir que entre en vigor una ley poco

---

<sup>123</sup>Si bien el reconocimiento del derecho a la participación política se generalizó a partir de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia, no se puede dejar de mencionar el reconocimiento que hiciera la Constitución de los Estados Unidos de América, aprobada en la Convención de Filadelfia en 1787, de la participación electoral en la elección de los representantes. Así por ejemplo la sección 3 del Preámbulo y la sección 1 del artículo II. Por su parte el artículo 3 de la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reza: El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella, así mismo el artículo 6 dispone: La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente, o por medio de sus representantes, a su formación. La ley debe ser idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos, *cfr.* YAÑEZ GARCÍA Y CARRERAS CUEVAS, *Selección de Lecturas y documentos sobre la Historia General del Estado y el Derecho*, S/E, La Habana, 1991, pp. 181 y 267.

<sup>124</sup>Condorcet en pleno fragor de la Revolución francesa publica el opúsculo “Sur la nécessité de faire ratifier la constitution par les citoyens” declarando la necesidad de la ratificación popular de los textos constitucionales. Asimismo en 1793 se elabora el proyecto de constitución en el cual en su título VIII se consagra la iniciativa popular y el referendo legislativo.

<sup>125</sup>Ya Rousseau en la obra *Proyecto de Constitución para Córcega* refería a Suiza por la correspondencia de la forma de gobierno con las características particulares de ese país o por las cualidades morales de sus habitantes, *vid.* JEAN-JAQUES ROUSSEAU, *Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el gobierno de Polonia y su proyecto de reforma*, Tecnos, Madrid, 1988, pp. 10 y 18. En otras obras este autor alude a Suiza como ejemplo de algunas de sus instituciones o para justificar sus consideraciones políticas

popular”, lo cual es muy común en los cantones suizos St. Gallen, Basel Land y Luzern desde mediados de siglo XIX<sup>126</sup>.

Sin lugar a dudas, los orígenes de la polémica propuesta por el par democracia-representación y la viabilidad de un modelo de democracia directa o de un Estado representativo, halla sus principales exponentes en el pensamiento evolucionario francés de hombres como MONTESQUIEU y ROUSSEAU<sup>127</sup>. Pero antes de ellos, un autor como MAQUIAVELO comenzó a vincular a la democracia como cualidad de una República. En su libro más famoso *El Príncipe*, MAQUIAVELO habla de una nueva tipología de las formas de gobierno realmente sencilla, pues únicamente distingue las monarquías de las repúblicas. A primera vista, parecería que desechó a la democracia, pero no es así, porque en el género república incluye a las especies aristocracia y democracia. Lo que sucede es que lo relevante para este autor es la distinción entre el gobierno de una persona (monarquía) y el gobierno de una asamblea (república). Luego, las asambleas pueden ser pocos (aristocracia) o de muchos (democracia). Por lógica de deducción —cosa que es relevante para este estudio— no toda república es democrática; también las hay aristocráticas. En la época en que MAQUIAVELO vivió, Italia no era un Estado unificado. Por el contrario, allí existían principados y repúblicas independientes. Un ejemplo de república con predominio aristocrático era Venecia; casos de repúblicas democráticas eran Lucca y Ragusa.

---

<sup>126</sup>OSWALD SIGG, *Las instituciones políticas de Suiza*, p. 8, citado por G UZMÁN HERÁNDEZ, T.Yan, “Representación en política, instituciones de democracia directa y revocatoria de mandato en Venezuela – Una manera de interpretar el modelo normativo-constitucional venezolano de participación política”, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana”, *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, La Habana, 2008, p. 119.

<sup>127</sup>Antes de Rousseau, sería Maquiavelo en el Renacimiento quien, volviéndose hacia Las Décadas de Tito Livio, buscaría una *ratio* oculta en el Derecho Público Romano que explicara tanto las virtudes cívicas de aquel pueblo cuanto el funcionamiento admirable de su Estado. Denotando un entusiasmo proverbial por la República Romana de la cual admiraba “la excelencia de sus leyes” Maquiavelo exaltaba la “lealtad y honradez en la realización de sus funciones públicas”. En el capítulo segundo de sus Discursos sobre la primera Década de Tito Livio reconoce la existencia de la monarquía como primera forma de gobierno en Roma explicando a partir del capítulo tercero el perfeccionamiento del gobierno republicano colegiado a partir del surgimiento del Tribunal de la Plebe. Si, al decir de Luis Navarro, “la Patria de Maquiavelo es Roma”, es porque de sus instituciones republicanas surgieron leyes y reglamentos en los que el *iusfilósofo* florentino apreciaba una “pública utilidad” que sería considerada paradigmática en la ciencia política posterior. Sin embargo, Maquiavelo no rebasó una incipiente interpretación liberal-institucionalista del Derecho Romano y de su historia, empeñado en demostrar la necesidad de la unificación italiana apuntando hacia el modelo institucional romano de la Antigüedad. *Vid*, NAVARRO, L., *Prólogo a las Obras Políticas de Maquiavelo*, La Habana.1971, p.43.

GIOVANNI LOBRANO<sup>128</sup>, profesor de Derecho Romano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Sassari en Italia, distingue que, a *posteriori*, ante los ojos de pensadores como MONTESQUIEU y ROUSSEAU encontramos dos concepciones o modelos, absolutamente opuestos entre sí: uno, que podríamos llamar simplemente “*sistema anglosajón*” (“... ‘leviathan’ *della scienza* ‘giuridica’ *anglosassone* “fantasma parlamentare centralista”), y otro, que llamaremos “*sistema romano*” (“... ‘reppublica’ *de I di ritto romano* ‘concreta municipale federativa’”).

Como se aprecia, las bases de tal diferenciación son las expresiones culturales típicas de Occidente. Por una parte, la tradición anglosajona de los bosques del norte de Europa, protagonista de la historia entre la Edad Media y Moderna, cuya forma de organización es representativa, en torno a un centro que es el palacio del monarca (parlamentaria) y que para garantizar la libertad de los súbditos encuentra la necesidad de dividir el poder preexistente y distribuirlo de manera descendente.

Por otro lado, está la tradición romana republicana, de las *civitas* (o *πόλις*) en torno a las playas del Mediterráneo, propia de la Antigüedad, con una existencia física concreta (la *urbs*: con sus murallas... instituciones y ciudadanos), que organizada de manera societaria en *populus* elige (soberano) a sus gobernantes (magistrados).

No obstante, se destaca que los funcionarios de la ciudad están al servicio de la *civitas* –ante la cual son responsables– y para garantizar la libertad y, sobre todo, la igualdad, el sistema cuenta con el *tribunado*, principal ejecutor del poder negativo<sup>129</sup>.

Se concuerda plenamente con RINALDI<sup>130</sup> para quien el hecho de que cuando los estudiosos, los filósofos y los pensadores del siglo XVII empezaron a entrever que el régimen monárquico absolutista entraba en crisis, comenzaron a proponer alternativas para el futuro. Existía en aquellos tiempos el régimen monárquico de la Gran Bretaña, que aparecía como poco absolutista y relativamente moderado. Precisamente de allí nace la línea de pensadores que van a generar una corriente filosófica política conocida como “liberalismo”. Es una teoría que

---

<sup>128</sup>Cfr. LOBRANO, G., *Problemi Attuali di Diritto Attraverso il Diritto (Pubblico) Romano. Della crisi dello “Stato-fantasma” alla risorgenza dello “Stato municipale” (Riflessioni in corso di sistematizzazione con alcune note, per memoria, di fonti e di dottrina)*. En *Theologica & Historica*. Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Número XI. Edizioni della Torre. 2002, pp. 263-281.

<sup>129</sup>Respecto a esta última del tribunado para la garantía de la libertad, *vid.*, SPÓSITO CONTRERAS, Emilio, “El Derecho Público Romano y el Constitucionalismo venezolano”, ponencia presentada en el *XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, 2004, p. 2.

<sup>130</sup>RINALDI, Norberto Darío, *Lecciones Ampliadas de Derecho Romano*, *ob.cit.*, pp. 311-315.

nace orgánicamente en LOCKE y que sigue en MONTESQUIEU, que no era británico pero los admiraba. El expositor más lúcido de esta línea de pensamiento fue el barón de MONTESQUIEU, nacido en el año 1689 y fallecido en el año 1755, 34 años antes de que se produjera la Revolución francesa. MONTESQUIEU vivió algún tiempo en Inglaterra analizando las obras de LOCKE-que había muerto en 1704- y le impresionó mucho la fuerte defensa de las libertades individuales que el inglés transmite en sus obras.

MONTESQUIEU afirmaba que los países grandes requerían un gobierno autoritario, monárquico y a ún despótico. Para los países medianos podía haber un gobierno de una monarquía moderada o liberal y, en cambio, en los países pequeños, podía haber una República. Para su propio país, Francia, decía que tenía que existir una monarquía limitada, pues lo consideraba territorialmente mediano. Mientras una polis sea pequeña, puede poseer un sistema republicano. Pero si la nación es mediana, tiene que haber una monarquía limitada o moderada.

MONTESQUIEU propuso en el *Espíritu de las Leyes*, la existencia de tres poderes independientes. Además, propone no solo que esos tres poderes tengan entre sí un equilibrio capaz de impedir que uno sea más importante que el otro, sino también un sistema que impida que dos poderes caigan en la misma mano. Es MONTESQUIEU quien lanza la teoría del equilibrio y el mutuo control de los poderes que todavía son hoy parte de gran cantidad de constituciones del orbe. También trata de impedir que el pueblo gobierne por sí mismo, sosteniendo que si el pueblo lo logra, habrá un grave peligro para las libertades individuales<sup>131</sup>. En el pensamiento del liberalismo, la libertad individual es más importante que la libertad general, o lo que es lo mismo a decir, la libertad de la comunidad.

Este principio propuesto por MONTESQUIEU de separación de equilibrio de poderes, tuvo mucha aceptación entre los filósofos y políticos del fin del siglo XVIII. El primer gobierno de la Revolución francesa y su Constitución de 1791 aceptó este sistema<sup>132</sup> y la Constitución

---

<sup>131</sup>Cfr. MONTESQUIEU, Carlos. L., *El Espíritu de las Leyes*, Madrid, 1906, p. 145

<sup>132</sup>La Constitución francesa de 1791, la primera constitución escrita de la historia francesa, fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente y aceptada por Luis XVI el 3 de septiembre de 1791. Contenía la reforma del Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional. La elaboración de las leyes correspondía a una Asamblea Legislativa, era la que tenía más poder. Votaba las leyes, los impuestos y declaraba la guerra. El poder ejecutivo quedaba en manos de la monarquía, el rey tiene el poder de nombrar y destituir a los ministros. El poder judicial se otorgaba a unos tribunales independientes. El sistema de elección de los diputados de la Asamblea Legislativa era el siguiente: se clasificaba a los varones franceses ( las mujeres quedaron excluidas) en "activos" (los que pagaban un determinado nivel de impuestos directos, tuviesen más de 25 años y supiesen leer y escribir) y "pasivos" (quienes, por no tener propiedades o negocios, no pagasen impuestos o

republicana de los Estados Unidos de América, tomó casi “al pie de la letra” las ideas del francés. Es por eso que el modelo republicano que surge de las ideas de MONTESQUIEU, es el de la Constitución Norteamericana, basado en una república representativa aristocrática, un modelo que los padres de la Constitución de 1787 habían querido “republicano”. Pero nunca democrático, usando la terminología de James MADISON, uno de los padres fundadores del nuevo país, y presidente de Estados Unidos entre 1809 y 1817, quien escribió al finalizar la revolución norteamericana que “las democracias siempre han ofrecido el espectáculo de la turbulencia y de la discordia, se han mostrado siempre enemigas de cualquier forma de garantía en favor de las personas o de las cosas<sup>133</sup>”.

El pensamiento político de MADISON sobre la contraposición democracia-gobierno representativo, expresado en términos de contraposición democracia-república, es de obvia inspiración Montesquiana. A parece en el mismo año teóricamente planteado en KANT<sup>134</sup>, cuando afirma que los requisitos esenciales para que haya una república son las instituciones de la representación y de la separación del poder ejecutivo del poder legislativo. La institución de la representación no es para KANT simplemente una técnica mediante la cual se puede resolver de manera más práctica el problema de la participación del pueblo en el poder (problema arduo en proporción directa a las dimensiones del pueblo mismo). Sino la única forma pensable de participación del pueblo en el gobierno, en cuanto única forma pensable en que pueda traducirse en actividad de gobierno del soberano. Únicamente con el instituto de la representación, es posible traducir el principio absoluto de la voluntad general en la realidad práctica del gobierno. La república no puede ser democrática<sup>135</sup>.

---

fuesen analfabetos). Sólo los ciudadanos "activos" elegían a los electores de su departamento. Dichos electores eran quienes escogían a los diputados provinciales para la asamblea. A este tipo de elección se le llama censitaria (sólo pueden votar los más ricos) e indirecta, puesto que los cargos importantes no son votados directamente por la población, sino a través de sus representantes. La administración municipal quedó organizada por la ley del 14 de diciembre de 1789. Los ciudadanos en activo de cada comuna elegían por dos años al Consejo general de la comuna, formado por notables, y el Cuerpo municipal. Este comprendía a los funcionarios municipales, el alcalde y el procurador de la comuna, que provistos de substitutes en las ciudades importantes tenían a su cargo la tarea de defender los intereses de la comunidad. Los municipios poseían poderes amplios: los asientos y la percepción del impuesto, el mantenimiento del orden, con el derecho de requerir a la guardia nacional y proclamar la ley marcial; por último, la jurisdicción de la policía menor. Elegidos por el sufragio directo, los municipios fueron más democráticos en comparación con la centralización monárquica. La intensidad de la vida municipal fue una de las características de la Francia revolucionaria. Para mayor información, *vid.* SOBOUL, Albert, *La Revolución francesa*, Editorial Tecnos, Madrid, 1966, pp.15-20.

<sup>133</sup>MADISON, James. *El Federalista*, traducción italiana de B. M. Tedeschini Lalli. Pisa 1955. Citado por LOBRANO, Giovanni, *Modelo Romano y constitucionalismo modernos*, en *ob. cit.* p.49.

<sup>134</sup>KANT, Immanuel, *La paz perpetua*, Editorial Espasa-Calpe S.A, Madrid, 1964, pp. 91-133.

<sup>135</sup>*Vid.* LOBRANO, Giovanni, *Modelo Romano y constitucionalismo modernos*, *ob. cit.* pp.49 y 50.

En síntesis, el modelo de MONTESQUIEU de república aristocrática lo adopta la constitución norteamericana y es el que se impone en casi todos los países seguidores del sistema de la constitución norteamericana. La conclusión que se puede obtener después de haber descrito muy brevemente la posición de MONTESQUIEU y su consiguiente república representativa aristocrática, es que ese modelo constitucional está muy alejado del modelo constitucional romano. El sistema propuesto por MONTESQUIEU no encuentra sus raíces en el sistema de la democracia griega, ni tampoco en el sistema de la *respublica*.

*Contrario sensu*, ROUSSEAU propone aplicar lo que para su tiempo era una actualización del bastante desconocido sistema político romano. Concretamente en el capítulo IV del Contrato Social, ROUSSEAU describe un sistema de república basado en la *respublica* de los romanos. ROUSSEAU no habla de división del poder, ni de equilibrio de poderes, ni de representantes. La característica del sistema republicano romano es que el pueblo no delegaba nunca la soberanía en representantes. Además, los romanos no tenían conocimiento del concepto de la representación política, que surge posteriormente. Los romanos se hubieran extrañado mucho si alguien hubiera hablado de eso, pues no podrían entender lo que significaba la representación política. El pensamiento de un romano de los tiempos del pleno funcionamiento de la *respublica* sería más o menos así; “si el pueblo es el soberano, el pueblo sigue siendo soberano siempre, no delega nunca en otros la facultad de legislar, ni de tomar decisiones políticas”. Por eso Gayo decía que la *lex* era lo que el pueblo mandaba y establecía. Y ciertamente, durante la república, el pueblo “mandaba y establecía” sobre la base de los comicios.

ROUSSEAU tenía un concepto de soberanía muy diferente. Pensaba que era indivisible y que toda fue cedida a la comunidad-a la sociedad- cuando esta se formó. Y cuando cada hombre se integró a la sociedad, a ésta le cedió todo. A partir de ahí, no hay voluntades individuales sino colectivas.

El Estado, que para esta teoría en la práctica equivale a la mayoría, es legalmente omnipotente. ROUSSEAU no decía que las libertades individuales debían quedar destruidas. Él afirmaba que la genuina libertad es la obediencia a la voluntad colectiva. Retrocediendo en los tiempos, nos recuerda RINALDI que Sócrates, aunque sostenía no ser culpable, bebió la cicuta por que obedeció a la sociedad que así lo dispuso. La voluntad de la comunidad resultaba superior a la voluntad individual.

La teoría política de la “República democrática” de ROUSSEAU fue muy importante en la segunda etapa de la Revolución francesa. Como ya se expuso, en la primera había triunfado la Teoría de MONTESQUIEU<sup>136</sup>.

En el libro IV del Contrato social, Rousseau ha esbozado un modelo constitucional inspirándose en las instituciones del pueblo romano, de finido en el *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, como «modelo de todos los pueblos libres». Éste es el modelo constitucional del cual se apropiaron los jacobinos aportando algunas adaptaciones, es decir, el modelo constitucional de la «Romanidad resucitada».

La reconstrucción de la memoria histórica del republicanismo democrático se debe basar en una nueva lectura del Contrato social, particularmente del libro IV, así como de la Constitución francesa de 1793<sup>137</sup> sobre la base de los siguientes principios que se aportan:

1. La República es una e indivisible. El territorio se divide en departamentos, distritos y municipios (artículos del 1 al 3 del Acta Constitucional de 24 de junio de 1793).
2. La soberanía pertenece al pueblo, es decir, a los ciudadanos reunidos en comicios; ésta no puede ser representada. El poder se encuentra en manos del pueblo, que es el único que puede decidir sus asuntos por suyo propios, sin verse sometido a otro pueblo ni a ningún Estado. Con tino expresó Rousseau: “Pero el cuerpo político o el soberano, como que reciben su ser de la santidad del contrato, jamás pueden obligarse, ni aún con respecto a otro, a cosa alguna que derogue este primitivo acto, como sería enajenar alguna porción de sí mismo, o someterse a otro soberano. Violar el acto en virtud del cual existe, sería anonadarse, y la nada no produce

---

<sup>136</sup>Cfr. RINALDI, Norberto Darío, *Lecciones Ampliadas de Derecho Romano*, ob.cit, pp. 316-318

<sup>137</sup>La Constitución de 1793, votada el 24 de junio, y después de una discusión rápida, establecía los rasgos esenciales de un régimen republicano democrático. La elección inmediata del pueblo aseguraba la supremacía del legislativo sobre el ejecutivo y de los representantes sobre los administradores. La Asamblea legislativa era elegida por sufragio universal directo, en escrutinio uninominal, con mayoría absoluta por un año. El Consejo ejecutivo de 24 miembros era elegido por la Asamblea legislativa entre los 73 candidatos de signados por los departamentos por sufragio universal. De este modo los ministros quedaban subordinados a la representación nacional. El ejercicio de la soberanía nacional quedó ampliado por la institución del referéndum, que figura ya en el proyecto Condorcet. La Constitución sería ratificada por el pueblo, lo mismo que las leyes en ciertas condiciones muy precisas. Sometida a la ratificación popular, la Constitución de 1793, que sería para los republicanos de la primera mitad del siglo XIX el símbolo de la democracia política, fue aprobada por más de 1.800.000 votos contra aproximadamente 17.000. Más de 100.000 votantes no aceptaron la Constitución más que con enmiendas de tendencia moderada. Los resultados del plebiscito fueron proclamados el 10 de agosto de 1793, día del aniversario de la caída de la monarquía, en la fiesta de la Unidad e Indivisibilidad de la República. Pero la aplicación de la Constitución, cuyo texto, encerrado en el *arca santa*, fue depositado en la sala de las reuniones de la Convención, se aplazó hasta que se lograra la paz. Cfr. SOBOUL, Albert, ob.cit, p. 25.

ningún efecto<sup>138</sup>». (artículo 25 de la Acta Constitucional de 24 de junio de 1793: artículo 25: “La soberanía reside en el pueblo; es una, indivisible, imprescriptible e inalienable”)

3. Como esta soberanía, este poder, pertenece al pueblo y solo a él, pues no puede enajenarse: “no siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, nunca se puede enajenar, y que el soberano que es un ente colectivo, solo puede estar representado por sí mismo<sup>139</sup>”. En consecuencia, sería completamente ilegítima cualquier decisión o acto que se tomara o ejecutara y que fuera ajeno o contrario a la voluntad popular. (artículos 25 al 29 del Acta Constitucional de 24 de junio de 1793: “artículo 26. Ninguna porción del pueblo puede ejercer el poder que corresponde a todo él; pero cada sección del soberano, reunida en asamblea, debe tener el derecho a expresar su voluntad con entera libertad; artículo 27. Que todo individuo que usurpe la soberanía sea al instante ejecutado por los hombres libres; artículo 28. Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras; artículo 29. Cada ciudadano tiene un derecho igual a concurrir a la formación de la ley y a la designación de sus mandatarios y de sus agentes”.)

4. Las «instituciones políticas», se organizan sobre la base de un dualismo entre «pueblo» (que tiene el «poder legislativo»: ver libro. IV cap. IV sobre los «comicios romanos») y «comisarios» (es decir, los magistrados, cuyo poder deriva del pueblo y que al pueblo están subordinados). No se pueden elegir representantes, porque se estaría cediendo algo que solo el pueblo puede detentar: “no puede ser representada [la soberanía] por la misma razón de ser inalienable, consiste esencialmente en que la voluntad no se representa, es una o es la otra<sup>140</sup>”; solo deben designarse mandatarios políticos, personas que son elegidas directamente por el pueblo, que le rinden cuenta y que, en caso de que se alejen de los presupuestos del mandato, puedan ser revocados en cualquier momento del período de ejercicio de la función pública. (artículos 30 al 32 del Acta Constitucional de 24 de junio de 1793: “artículo 30. Las funciones públicas son esencialmente temporales; no pueden ser consideradas como distinciones ni como recompensas, sino como deberes; artículo 31. Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes nunca deben quedar impunes. Nadie tiene derecho considerarse más inviolable que los demás ciudadanos; artículo 32. El derecho a presentar peticiones a los

---

<sup>138</sup>ROUSSEAU, Jean-Jacques, *El contrato social*, ob.cit, p. 17.

<sup>139</sup>*Idem*, p. 25.

<sup>140</sup>ROUSSEAU, Jean-Jacques, *El contrato social* ob.cit, pp. 110 y ss.



depositarios de la autoridad pública no puede ser prohibido, suspendido ni limitado en ningún caso”).)

5. Contra el «abuso de gobierno» existe un derecho de resistencia colectiva cuyo reconocimiento se inspira en la historia de las relaciones de los decenviros con los comicios (lib. III; cap. X y XVDI; *cfr.* Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes) (artículos 33 al 35 del Acta Constitucional de 24 de junio de 1793: “artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre; artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno sólo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido; artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”).)

Después del «golpe» del Termidor (26 de julio de 1794), la historia jurídica de Europa continental se ha caracterizado cada vez más por la utilización del Derecho Privado romano, así como por el rechazo del Derecho Público Republicano Romano. No es posible comprender las implicaciones dogmáticas y políticas de la utilización de principios y conceptos del Derecho Público Romano hecha por ROUSSEAU y luego por los jacobinos- si no se considera críticamente la doctrina del Derecho Público propia de los Estados burgueses de ideología liberal, que se desarrolló en contraste con tal utilización. Esta doctrina ha tomado camino, como se sabe, de la distinción entre "libertad de los antiguos" y "libertad de los modernos" delineada por CONSTANT en el famoso discurso de 1819.

Es notable la influencia ejercida por CONSTANT en la historiografía. Podemos tomar dos ejemplos relacionados con los estudios sobre la antigüedad romana. Existe una influencia directa sobre FUSTEL DE COULANGES y su "ciudad antigua"; también se da una influencia indirecta (mediata a través de Hegel) sobre MOMMSEN y su "Staatsrecht". CONSTANT influye de manera diferente en ambas posiciones asumidas por la historiografía burguesa del siglo XIX ante las instituciones públicas romanas: la del rechazo, unida a la condenación de las teorías rousseauianas y jacobinas que se inspiraban en aquellas instituciones (ejemplo: precisamente FUSTEL DE COULANGES), y la de recuperación, en una interpretación efectuada con base en categorías liberales (ejemplo: MOMMSEN) <sup>141</sup>.

---

<sup>141</sup>CATALANO, Pierángelo, *Derecho Romano Público y Evoluciones*, Grupo di Ricerca Sulla Diffusione del Diritto Romano, Italia, 1984, pp. 48 y 49.

En consonancia con FERNÁNDEZ ESTRADA<sup>142</sup> se ratifica que una de las acciones del liberalismo fue negar la esencia popular del Derecho Romano y la república como forma de organización política. La democracia estaba supuesta y se vetó el republicanismo antiguo, como regímenes o sistemas carentes de libertad, en los cuales el Estado absorbía al ciudadano y no había posibilidad de salvar esos sistemas para la modernidad. Los liberales del siglo XIX lo ven como un conjunto de reglas que norman las relaciones entre el Estado y los súbditos. Tal es así, que según explica FERNÁNDEZ ESTRADA, desde finales del siglo XVIII hasta el XIX surgen tres ideólogos del liberalismo burgués, dos franceses, el ya varias veces mencionado BENJAMÍN CONSTANT (1767-1830), FUSTEL DE COULANGES (1830-1889) y el gran maestro alemán, TEODORO MOMMSEN, (1817-1903), quienes captaron la realidad política romana utilizando el equivocado prisma del liberalismo.

Sus prejuicios de época estaban determinados por una creciente ideología económica liberal de gran elaboración y aceptación en aquel mundo nuevo, las cuales desembocaban obligadamente en una concepción que no comprendía la vida social de la antigüedad y la tildaba de opresiva, comparándolas con las libertades individualistas de su modernidad. En este sentido, BENJAMÍN CONSTANT en su discurso pronunciado en el Ateneo de París (1819) referido a la “Libertad de los antiguos y la libertad de los modernos”, deja claro que aquella era imposible de establecer en la modernidad, máxime si se basan en instituciones que en Roma enajenaron, a su entender, las libertades individuales.

Por su parte, TEODORO MOMMSEN, en el prólogo de su *Compendio del Derecho Público Romano* (1893), expone con claridad que se ocupará en la obra del “derecho del Estado”. Y más tarde, en el libro dedicado a las Magistraturas, hace una extensa explicación de la representación como institución político-jurídica mediante la cual un funcionario público en Roma representaba, supuestamente, la voluntad popular. Estas interpretaciones de MOMMSEN, como veremos, están hechas desde el punto de vista del liberalismo burgués, seguidor del modelo constitucional de Montesquieu y traspolan a Roma la noción de un estado organizado como en la sociedad liberal burguesa, sobre bases ajenas a las ideas y prácticas del romanismo, y herederas de las monarquías feudales europeas. Además, convierten a la

---

<sup>142</sup>FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, *De Roma a América Latina: El tribuno del pueblo frente a la crisis de la República*, ob.cit, pp. 23 y ss.

democracia romana en una organización política, que funciona opuesta a su esencia, es decir, sobre la base de la representación, que ni entendieron, ni practicaron jamás los romanos.

Asimismo, Fustel de COULANGES, en su admirada obra *La Ciudad Antigua*, en el capítulo XVIII titulado “Omnipotencia del Estado; los antiguos no han conocido la libertad individual” dice: “El ciudadano quedaba sumiso en todas las cosas y sin ninguna reserva, a la Ciudad: le pertenecía todo entero (...) Los antiguos no conocían, pues, la libertad de la vida privada, ni la libertad de la educación, ni la libertad religiosa. La persona humana apenas suponía nada ante la autoridad santa y casi divina que se llamaba la Patria o el Estado<sup>143</sup>”.

Pero como ya se ha expuesto, quienes se dedican al estudio del Derecho Romano han de demostrar el dominio de los principios e instituciones que lo informaron desde los primeros tiempos de Roma hasta la muerte del emperador Justiniano.

Sentencia FERNÁNDEZ DE BUJÁN<sup>144</sup> que la vigencia en la práctica del Derecho Privado romano hasta la entrada en vigor en el año 1900 del código civil alemán, su consideración general como modelo abstracto de sistema jurídico y su influencia directa en el Derecho europeo a través del Derecho común, así como la pandectística y las codificaciones a causa del valor intrínseco de las soluciones jurídicas creadas por Roma, supuso el estudio y reconocimiento de aquél, con carácter obligatorio en la mayoría de las universidades europeas hasta nuestros días. Pero supuso, en contraposición, una relegación del estudio del Derecho Público Romano. Sin embargo, la justificación del estudio de este último, se fundamenta en la unidad lógica del ordenamiento jurídico y en la convicción de que no cabe explicar la norma jurídica al margen de las distintas circunstancias políticas, económicas, sociales o religiosas que operan en esta comunidad.

Ideas básicas provenientes de la República romana han servido como modelo a la Revolución francesa. Es la misma idea de República (la *respublica romana*), la libertad y la ley pública como eje del sistema político, la ley como expresión de la voluntad general producto de la aprobación popular y las asambleas populares.

En la revolución francesa que tanto influyó en las revoluciones independentistas americanas, se aludió constantemente a *Respublica*, a *libertas*, a los modelos clásicos, a Roma, a lo

---

<sup>143</sup>DE COULANGES, Fustel, *La Ciudad Antigua*, EMECE Editores, S.A. Buenos Aires, 1945, p. 232.

<sup>144</sup>FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, *ob.cit.*, pp. 34-36

romano, a la austeridad, con esa tendencia de las revoluciones modernas, en palabras de Octavio Paz<sup>145</sup>, de pensar en la imitación de las virtudes antiguas.

La palabra república durante la Revolución francesa era un vocablo de sabor antiguo entusiásticamente de gusto por los nuevos diputados. MARX diría, en su libro sobre el 18 brumario, que la instauración revolucionaria de la sociedad burguesa fue hecha con trajes romanos y frases romanas<sup>146</sup>.

Siguiendo a FERNÁNDEZ DE BUJÁN se puede convenir en que tradicionalmente se ha considerado que el Derecho Romano constituye la base del Derecho Civil codificado en los países de Europa occidental, debido a que comenzó a identificarse el Derecho Civil con el Privado relegando a un segundo plano el Derecho Público, el cual sí fue contenido del *Ius Civilis* en Roma<sup>147</sup>. Sin embargo, conceptos fundamentales del constitucionalismo romano también han influido en la configuración del Derecho Público europeo y del estado moderno.

En 1862 SERRIGNY, profesor de Derecho Administrativo de Dijon, publica en *Droit Public Administratif Romain en institutions politiques, administratives, économiques et sociales*, en el que afirma que “El origen principal de todas nuestras instituciones sobre el Derecho Público, administrativo, económico y social es el Derecho Romano. Por eso no entendemos qué motiva

---

<sup>145</sup> Citado por FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, ob.cit, pp. 34-36

<sup>146</sup> *Ídem*

<sup>147</sup> Antes de Mommsen, y a Savigny había tratado de elimitar, y no precisamente de distinguir, el Derecho Público, al relacionarlo con el Derecho Privado romano. SAVIGNY, Friedrich Carl., *Sistema del Derecho Romano Actual*, versión castellana, por Jacinto Mesía y Manuel Poley, t. I, Madrid, 1878, pp.17 y ss. Recordemos que para los romanos “Es derecho civil, como derecho propio que es de la misma ciudad, el que dimana de las leyes, los plebiscitos, los senadoconsultos, los decretos de los príncipes y la autoridad de los prudentes...”. El contenido del derecho civil romano incluía una serie de facultades tanto de Derecho Público como de Derecho Privado. (D.1, 1,7) y (D.1, 5,17), cfr. VALIÑO, Emilio, ob.cit, p.3. Aunque no constituye objetivo de esta investigación es válido aclarar que las consecuencias de la exclusión del Derecho Público Romano se hicieron sentir también desde un punto de vista académico. Estudiando los programas correspondientes a la materia Derecho Romano de la Cátedra de Derecho Romano en la Real y Literaria Universidad de la Habana se encuentra que los textos que se utilizaban eran los ya citados de Heineccio y Gómez de la Serna. En la obra *Prolegómenos del Derecho* del último de los autores aludidos se declara explícitamente que “La definición que del derecho civil adoptó el emperador Justiniano por sí sola da a conocer que no es este sentido el que en que hoy lo consideramos. Sin embargo la respetable autoridad de las leyes romanas y el ser las instituciones la obra doctrinal que forma la base del estudio de nuestros letrados, exige que nos detengamos algo en esta materia, derecho civil, dice Justiniano es el que cada pueblo forma para sí (*quod Quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium est civitatis vocatur que jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis*, l. tit.II, Lib. I de las Instituciones), y tiene esta denominación porque es el propio, el exclusivo de cada uno. Bajo este nombre, pues comprende las leyes que en nuestra división constituyen el Derecho político, el criminal, el administrativo, el canónico, y los procedimientos. Nosotros hoy entendemos por civil el que comprende las relaciones mutuas de los individuos considerándolos aisladamente y con independencia de la hipótesis de una garantía pública”, GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro, *Prolegómenos del Derecho*, ob.cit, pp. 110 y 111. De igual manera puede verse, MARTÍNEZ QUINTANA, Léster, *El proceso de difusión del Derecho Civil Romano en Cuba durante los siglos XVIII y XIX*, ob.cit, p. 8.

a que en nuestras aulas se enseñe el depósito, el mandato o la compraventa y, sin embargo, se teme hablar sobre los magistrados, los referéndums y las consultas populares.

Sin ser un romanista, sino un jurista que observa desde fuera, formulo la siguiente interrogante: ¿hasta cuándo se ocultará el legado íntegro del Derecho Romano?<sup>148</sup> En definitiva parece poder afirmarse que la historia del poder político y de la noción moderna del Estado y de su Derecho Público no puede concebirse sin el precedente romano. El Derecho Romano, como se advirtió, es un Derecho de juristas. Pero también constituye un Derecho de leyes, de legisladores, conforme a la concepción de la República romana, que fue la fórmula política en la cual se logró, en mayor medida, plasmar la idea democrática.

Una nueva contribución a favor del Derecho Público Romano, y del republicanismo democrático, sería la proposición decimonónica de MARX y ENGELS a favor del modelo. Para HELD<sup>149</sup> el marxismo rompió de forma decisiva con los términos de referencia de las tradiciones liberal y democrática liberal. Inspirados en el diseño político de la Comuna de París de 1871, se construye la tesis de la estructura piramidal de la democracia directa<sup>150</sup>. Según MARX, las comunidades más pequeñas administrarían sus propios asuntos, elegirían a sus delegados para unidades administrativas mayores, verbigracia distritos y ciudades, y estas a su vez elegirían candidatos para áreas superiores de la administración: la delegación nacional.

A saber, todos los delegados podrían ser revocados, estarían limitados por las instrucciones de sus electores y organizados en una pirámide de comités elegidos directamente, por lo que la voluntad general del pueblo prevalecería sobre la representación. MARX en “la guerra civil en Francia”<sup>151</sup> ve a la comuna como una república democrática, como la antítesis del imperio<sup>152</sup>.

---

<sup>148</sup> Cfr. SERRIGNY, D, *Droit Public et Administratif Romain*, Tome Premier Aug. Durand, Libraire Éditeur, París 1862, p. 1 y 2.

<sup>149</sup> HELD, *ob. cit.*, p. 133.

<sup>150</sup> *Ídem*.

<sup>151</sup> C. MARX y F. ENGELS, *Obras escogidas*, tomo II. Editorial Progreso, Moscú, 1973, p. 188.

<sup>152</sup> Marx (como jurista romanista, discípulo de Savigny, como helenista y luego como economista, estudioso de Adam Smith y David Ricardo), entre muchos otros, y finalmente, en su compromiso político inicial, como admirador de la democracia revolucionaria de la I República francesa de 1793), tiene una clara ascendencia republicana, que podemos localizar en cuatro puntos fundamentales: 1) su concepción de la libertad como un derecho constitutivo inalienable; 2) su concepción fideicomisaria de la autoridad, y del poder político, en tanto le impone un contenido de comisión o gestión que se encarga a alguien en caso y tiempo determinados y controlado siempre por el fideicomitente, mandatario. *Vid.* DOMÉNECH, Antoni, “Marx, el filósofo y el economista en la tradición política republicana”, ponencia presentada en *Seminario Internacional Republicanism: Memoria, Teoría y Praxis*, La Habana, 2012, p.6.

MARX y ENGELS fundamentaron su teoría sobre el origen y desarrollo del Estado. Cambiaron el centro de la reflexión histórico-jurídica, que destacaba el “armonioso” conjunto de instituciones liberales con un referente no pocas veces crítico de las instituciones romanas antiguas, hacia el problema de las clases sociales y las formulaciones económicas de la Humanidad, destacando el papel de las masas en la conformación de los ordenamientos político-jurídicos. A diferencia de MOMMSEN-quien en su “Staatsrecht” excluyó “liberalmente” la acción del Tribunalado y de los sacerdotes-, la interpretación democrática marxista sumió como principio la unidad de poder, prestando una atención preferente a la *populus*<sup>153</sup>.

ENGELS, en el *Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado*, para indagar en la naturaleza de la gens y del estado romanos, se refiere continuamente a la obra de MOMMSEN, NEIBURH, COULANGES y otros destacados romanistas. Retomando la *Römisches Geschichte* (Historia de Roma) de Neiburh, cuya primera edición data de 1811, ENGELS explica la función política del Senado acudiendo al esquema de la relación *senatus-populus-comitia*, para exponer el carácter de clase de la legislación, indicando cómo las familias patricias pretendían el derecho exclusivo de entrar en el Senado y ocupar todos los demás oficios públicos.

Con la obra de MARX y ENGELS, se produce una recuperación de los estudios romanísticos, esta vez, desde una pauta *iusromanista* marxista<sup>154</sup>. A dicha obra le daría continuidad LENIN, para quien todos los elegidos eran susceptibles de ser revocados sin importar el nivel o relevancia de su cargo. En tal sentido, todos los electores gozaban del derecho de revocación, pudiendo ejercitarlo por sí mismo en cualquier momento<sup>155</sup>.

Finiquitando se puede convenir en que el consenso universal sobre la deseabilidad de la democracia no va acompañado de otro consenso, de semejante alcance, sobre cuál sea la suerte de democracia que conviene y más aún el tipo de República que se desea. Así, resulta un

---

<sup>153</sup>En el Prólogo a la Crítica de la Economía Política, Marx niega que el Derecho tenga una historia propia, indicando que su evolución es táligada orgánicamente a la evolución de la sociedad civil, es decir, de las relaciones de producción económicas. MARX, K: *Prólogo a la Crítica de la Economía Política*. Progreso. La Habana. 1976. p.18.

<sup>154</sup>ENGELS, F, *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, Editorial Progreso. Moscú. 1976, pp. 125-128.

<sup>155</sup>Vid, LENIN, V. I., *Proyecto de decreto sobre el derecho de revocación*, en LENIN, V. I., *Obras escogidas en doce tomos, Tomo V II*, Editorial Progreso, Moscú, 1977, p. 422. Además, *vid*, F raga A costa, Marcos A , “Fundamentos para el perfeccionamiento del régimen jurídico de la revocación del mandato en Cuba como mecanismo de control popular”, *Tesis presentada en opción al grado de Máster en Derecho Constitucional y Administrativo*, La Habana, 2013, p. 21.

imperativo para los estudios académicos de este siglo, el intento por develar en qué medida el republicanismo contiene algunas soluciones a las aporías políticas de la modernidad y cómo es capaz de acomodarse a algunas de las mutaciones que la nueva civilización nos depara hoy en día. Por lo tanto, está legitimado el hecho de que la teoría democrática republicana de hoy se esfuerce por adquirir más dignidad teórica con la profundización del corpus clásico heredado de la *Respublica* romana.

## CONCLUSIONES PARCIALES:

1. La recepción del iusrepublicanismo romano es un fenómeno de carácter histórico jurídico que ha implicado un proceso gradual y complejo de asimilación de principios, categorías o instituciones del Derecho Público Republicano Romano a las realidades locales en cada época.
2. El Derecho Público Republicano Romano, como ordenador de la organización política de la *Respublica*, emanaba de la intervención inmediata del *populus* en el proceso de creación de la ley (*lex publica*).
3. Uno de los más grandes aportes del republicanismo romano se halla en las instituciones de ejercicio positivo y negativo del principio de la soberanía popular: en las asambleas de ciudadanos, en la elección-revocación de las magistraturas, en la rendición de cuentas, en la *provocatio ad populum*, en la facultad tribunicia de *intercessio*, en el derecho de resistencia y en la *abrogatio* de la ley.
4. El modelo de *Respublica* se replicó en el municipio romano lo cual permitió llevar la República al interior de cada pueblo, constituyendo sin duda una vía para lograr la supervivencia del ideal republicano. Tanto en la urbe romana como en los municipios latinos, los comicios se convirtieron en la principal estructura del poder ciudadano.
5. Después de la caída del esclavismo, los principios e instituciones del republicanismo romano no fueron excepcionados hasta la primera República Francesa en 1792 y la constitución jacobina de 1793.



**CAPÍTULO II. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL CIUDADANO  
COMO ESENCIA DE LA RECEPCIÓN DE  
EL IUSREPUBLICANISMO ROMANO EN CUBA, DENTRO DE  
EL CONTEXTO LATINOAMERICANO. PROYECCIÓN EN POS DE SU  
PERFECCIONAMIENTO.**

## **CAPÍTULO I I: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL CIUDADANO COMO ESENCIA DE LA RECEPCIÓN DEL IUSREPUBLICANISMO ROMANO EN CUBA, DENTRO DEL CONTEXTO LATINOAMERICANO. PROYECCIÓN EN POS DE SU PERFECCIONAMIENTO.**

### **II.1 La recepción de principios del Derecho Público Republicano Romano en el constitucionalismo latinoamericano. Especial referencia a la participación ciudadana como epicentro de las bases del iusrepublicanismo romano.**

El modelo constitucional republicano romano no tuvo presencia en Europa después del «golpe» del Termidor (26 de julio de 1794) y de la frustrada Constitución jacobina de 1793<sup>156</sup>. Pero su influencia se impuso con gran fuerza sobre algunos proyectos y, más limitadamente, en varias realizaciones constitucionales durante las luchas por la independencia de la América Española. Y sus bases *iuspublicísticas* influyeron también en las ideas constitucionales de los revolucionarios hispanoamericanos.

La repercusión del modelo *iuspublicístico* romano en Latinoamérica tuvo una gran significación. Como ejemplo simbólico, basta hacer referencia al juramento de BOLÍVAR en un lugar tan emblemático para el modelo latino como es el Monte Sacro. No obstante a ello, esta influencia tiene sus peculiaridades y el profesor FERNÁNDEZ ESTRADA explica así este hecho: "El modelo de democrático romano llegó a América distorsionado por las interpretaciones liberales burguesas (...) simplemente criticado por estas o, desde un punto de vista rousseauniano, a través de las experiencias jacobinas de la revolución francesa. Es por esto que aún hombres seguidores firmes del constitucionalismo romano, como BOLÍVAR, puedan a la vez admirar la tripartición de poderes y la representación anglosajona<sup>157</sup>". En los próceres latinoamericanos, y específicamente cubanos, como se expresa en el texto citado, confluye lo que podríamos denominar una comunión, un eclecticismo en sus ideas: las liberales-especialmente las de la Ilustración norteamericana- y las romanistas, particularmente las de ROUSSEAU. Esta comunión responde a que la Ilustración constituyó el fundamento teórico de las ideas filosóficas, políticas y sociales en Cuba y Latinoamérica a lo largo del siglo XIX. Por

---

<sup>156</sup>Cfr. CATALANO, Pierángelo, *Derecho Romano Público y Revoluciones*, ob.cit, p. 51

<sup>157</sup>FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio "El tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo *iuspublicístico*", ob.cit, p. 30.

un lado, defienden la idea de crear instituciones muy propias de la participación ciudadana, como nervio de la *Respublica*. Y además, abogan por la representación política<sup>158</sup>.

Las primeras figuras latinoamericanas que bebieron del caudal romano entre los siglos XVIII y XIX fueron, sin dudas, Francisco de MIRANDA y Simón BOLÍVAR. Sus proyectos constitucionales son considerados las primeras muestras del romanismo constitucional en América<sup>159</sup>.

Para BOHÓRQUEZ<sup>160</sup> de acuerdo a las referencias dadas por el mismo MIRANDA, éste llegó a formular cuatro esbozos de planes de gobierno (1790, 1798, 1801 y 1808), de los cuales sólo tres se ha podido rescatar. Sin embargo, por esas mismas referencias ha sido posible determinar que hay gran similitud entre los dos primeros y los dos últimos. De tal forma, para los propósitos de esta tesis, se considera que MIRANDA formuló sólo dos proyectos fundamentales, el de 1790 y el de 1801<sup>161</sup>.

Comparando ambos proyectos salta a la vista una sensible evolución entre las ideas sostenidas por MIRANDA en el primer plan y aquellas sustentadas en 1801 y dadas a conocer luego a los

---

<sup>158</sup>Es necesario aclarar que la polémica contraposición teórica entre el modelo anglosajón y el modelo romano latino constituyó un fenómeno europeo. Dicha discusión, llegó de a oídas a Latinoamérica. De ahí el carácter electivo de la filosofía y el pensamiento de hombres como Miranda, Bolívar, Varela y Martí. Por eso es que toman lo mejor de cada modelo. “Tomemos lo bueno donde quiera que lo hallemos”, diría el padre Varela. Cfr. Miranda, Olivia, *Ecos de la Revolución Francesa en Cuba*, Editora Política, La Habana, 1989, p.32.

<sup>159</sup>Este epígrafe responde al objetivo de determinar las expresiones paradigmáticas de la recepción de principios republicanos romanos en América Latina con un carácter generalizador. Las menciones a Cuba tributan sólo al cardinal propósito de brindar las nociones generales acerca de la recepción del *iuspublicismo* romano en América Latina. Mas el análisis de los orígenes del republicanismo en el pensamiento y el constitucionalismo cubano merecerá acápites aparte. De igual forma el estudio se circunscribió al constitucionalismo bolivariano por ser éste quien muestra una línea de continuidad con la dimensión funcional de la *Respublica* romana, lo cual no desdeña la existencia de proyectos y experiencias que apostaron por el rescate de instituciones de la Roma republicana, *verbigracia*: Proyecto de Constitución para las Provincias del Río de la Plata (1811); el Reglamento de Gobierno de la República de Paraguay (1813 - 1814) que regulaba la magistratura paritariamente colegial de los cónsules (el consulado fue luego sustituido, por voto del Congreso, por la dictadura, temporal y luego perpetua, del teólogo y abogado José Gaspar Rodríguez de Francia, que aseguró la independencia política y económica de la República hasta el restablecimiento, en 1840, del consulado); así como el Proyecto de Constitución de Manuel Lorenzo Vidaurte en Perú de 21 de junio de 1833.

<sup>160</sup>BOHÓRQUEZ, Carmen, *Modelos Constitucionales y realidad americana*, Politeia v.30 No.38 Caracas junio. 2007. pp. 2-5.

<sup>161</sup>A excepción de estos dos proyectos, se encuentran algunas instrucciones generales para establecer un gobierno provisional en América en su *Proclama a los Pueblos del Continente Colombiano (alias Hispano-América)* (1801) y en su *Proclama a los Pueblos Habitantes del Continente América-Colombiano* (1806). Asimismo, Miranda formula algunos de sus principios políticos fundamentales en el artículo publicado en 1795 en Francia, «*Opinion du général Miranda sur la situation actuelle de la France et les remèdes convenables à ses maux*», al igual que en cartas dirigidas al presidente norteamericano John Adams en 1798 y al ministro inglés Castlereagh en 1808. Otras observaciones políticas aparecen diseminadas en el resto de su numerosa correspondencia y en sus diarios de viaje. Vid. *Archivos del General Miranda* (en adelante *AGM*), Editorial Lex, La Habana, 1950, T. XVI, pp. 70-71 (*Arch. Or.*: Negociaciones, T. XVI, fº 57).

Cabildos americanos en 1808. Aun cuando la terminología escogida para nombrar las diversas instancias y cargos políticos sea similar en todos los planes, la estructura organizacional y las relaciones entre el pueblo y el gobierno son, por el contrario, diferentes. Se podría incluso decir que, en relación con la organización del poder, es posible establecer claramente dos períodos en el pensamiento político de MIRANDA. En el primero, de terminado por su gran admiración por el sistema constitucional inglés<sup>162</sup>, de fiende la idea de una monarquía parlamentaria para la América meridional. En el segundo, se hace completamente republicano y defensor de la participación política<sup>163</sup>.

La distinción entre estos dos períodos es muy importante, pues haber mantenido una terminología similar en ambos planes, ha llevado a algunos a pensar que MIRANDA fue monarquista toda su vida. Desde su primer plan de gobierno, formulado en 1790, va a llamar Inca al detentor supremo del poder ejecutivo. Además, designa como Cuestores, Censores y Ediles, entre otros, a los que actúan como ministros o secretarios de Estado, y cataloga de Curacas a los funcionarios encargados del gobierno provincial. De igual manera, en ambos planes hablará de «Imperio americano» o de «ciudadanos del imperio», pero el sentido de todas estas expresiones variará según se trate de ese primer plan o del formulado en 1808. En todo caso, cabe destacar que incluso cuando propone una monarquía, enrola un sistema mixto en el cual figuran ya principios participativos republicanos.

En efecto, en 1790, MIRANDA propone para gobernar la América independiente, la creación de una monarquía hereditaria en la cual el soberano será llamado Inca o Emperador. El sistema de gobierno de ese vasto imperio que se extendería desde la ribera sur del Mississippi hasta Cabo de Hornos, es concebido según el sistema inglés, más la incorporación de algunos elementos tomados de las instituciones romanas. El sistema legislativo estaría compuesto de dos

---

<sup>162</sup>La admiración de Miranda por el modelo constitucional inglés es bien conocida. Ya en 1783, durante su viaje por los Estados Unidos, las referencias a las excelencias del modelo inglés aparecen a cada instante en las páginas de su diario de viajes. Luego de haber asistido a las asambleas legislativas de las diversas ciudades norteamericanas visitadas, así como a las sesiones de los tribunales de justicia —donde contempla por primera vez la aplicación de los principios formulados en los textos constitucionales ingleses— su admiración aumenta. Y esto no sólo porque constata las excelencias de lo que él considera apenas «un débil suplemento» del modelo original, sino también por contraste con el sistema legislativo español. Admiración que se irá atenuando en la medida en que multiplique sus experiencias de viaje y, sobre todo, en la medida en que se descubra a sí mismo no siendo más que un peón en los manejos políticos de Inglaterra. Cfr. *AGM*, T. XVI, pp. 70-71 (*Arch. Or.: Negociaciones*, T. XVI, f° 57).

<sup>163</sup>No existe un documento único que reúna las ideas políticas de Miranda, en un tema tan rico y abarcador como el republicanismo. Más bien, sus criterios están dispersos por cartas, proclamas, planes de gobierno y otros documentos entre los que destacan: MIRANDA, Francisco, *P recursor de las independencias de la América Latina*, Editora de Ciencias Sociales, 2003, pp. 96, 166 y 291.

cámaras: la de los senadores o Caciques, elegidos de por vida por el Inca entre aquellos que hayan ejercido un alto cargo en el gobierno, y una cámara de diputados, elegida por los ciudadanos en comicios directos por un período de cinco años y sin ninguna indemnización parlamentaria. Se rescataba así el carácter electivo, renovable y *ad honorem* del ejercicio de las magistraturas.

Tocaba a los ciudadanos elegir también dos Censores, encargados de vigilar la conducta de los senadores y de las costumbres en general. Las finanzas son puestas bajo la responsabilidad de dos Cuestores designados por la cámara de Diputados, en tanto que la realización de los trabajos públicos está a cargo de dos ediles escogidos por la cámara de Senadores. Todos estos cargos tienen una duración de cinco años y al final del mandato, la gestión de los funcionarios es juzgada por las dos cámaras. Si bien los jueces son elegidos por el Inca, sus cargos son inamovibles y bien remunerados a fin de asegurar su independencia de criterio.

En este primer plan no se contempla la existencia de Cabildos o de Asambleas Populares. Pero en compensación, se establece un procedimiento para eventuales reformas de la Constitución y para el establecimiento de leyes, en el cual la responsabilidad es igualmente compartida por todas las instancias de gobierno.

Aún cuando en este primer plan se habla de una monarquía hereditaria, está claro que MIRANDA trata de encontrar un equilibrio entre monarquía y participación, al repartir la responsabilidad del gobierno entre los funcionarios elegidos por el Inca y los escogidos por el pueblo.

El segundo postulado consiste en la afirmación de que sólo una «sabia división de poderes puede dar estabilidad a un gobierno». A este efecto, Miranda agrega dos condiciones esenciales para mantener la independencia absoluta de poderes. Primero, que provengan de una sola fuente, y segundo, que se vigilen constantemente los unos a los otros: «El Pueblo no sería soberano, si uno de los poderes constituidos que le representan, no emanara inmediatamente de él; y no habría independencia, si uno de ellos fuera el creador del otro<sup>164</sup>»

Los planes de gobierno presentados por MIRANDA al Gabinete inglés en 1801 —Proyecto de Gobierno Provisional y Proyecto de Gobierno Federal— mantienen esta tesis de un poder ejecutivo fuerte, es decir, restringido a muy pocas personas, aunque en ellos la autoridad máxima reside en el Congreso. Los Incas mismos son elegidos por ese cuerpo legislativo y

---

<sup>164</sup>Cfr. AGM, T. XVI, pp. 154-159 (Arch. Or.: Neg., T. III, f° 90-92).

aunque sus personas sean «sagradas e inviolables durante el tiempo de su magistratura» el mandato es fijado en 5 años<sup>165</sup>. Pueden, sin embargo, ser llevados después a juicio ante la Corte Suprema Nacional. Estos planes de 1801 son considerados como la formulación definitiva del pensamiento constitucional de Francisco de MIRANDA. Son los mismos métodos que llevará consigo de regreso a Caracas en diciembre de 1810, y los mismos que presentará al siguiente año a la comisión encargada de preparar un proyecto de Constitución para la nueva República de Venezuela<sup>166</sup>.

Ambos planes-el de Gobierno Provisorio y el de Gobierno Federal-son complementarios entre sí. Evidentemente, el primero constituye la base sobre la cual se explica el segundo. Entretanto, el plan de gobierno provisional sólo da instrucciones generales para asegurar la conducción de los asuntos públicos. Esto se debe a su carácter transitorio y destinado a llenar un vacío de poder entre el régimen colonial y el establecimiento del gobierno independiente.

Así, luego de declarar primeramente que «Toda autoridad emanada del gobierno español quedaba abolida *ipso facto*», se pasa al establecimiento de las condiciones mínimas necesarias para constituir los comicios, para definir la composición y funciones de los nuevos Cabildos, así como la de las Asambleas Provinciales. De tal forma, estas últimas serán las encargadas del gobierno general de la provincia hasta la constitución del gobierno federal.

A grandes rasgos, estas mismas ideas están contenidas en el Proyecto de Gobierno Federal, al cual se van a agregar otras precisiones. En este último proyecto, la estructura de gobierno es concebida de manera piramidal y es competencia de cada instancia designar los miembros de la que le sigue en jerarquía, hasta llegar a la designación de la autoridad ejecutiva suprema. Compete a los Cabildos, a nivel local, escoger los miembros de las Asambleas Provinciales y a éstas elegir los representantes que van a constituir el Cuerpo Legislativo o Dieta Imperial. A

---

<sup>165</sup>Original en francés (AGM, T. XVI, p. 156; Arch. Or.: Neg., T. III, f° 93). En diversas traducciones al español de estos Planes de Gobierno el tiempo de mandato de los Incas aparece erróneamente elevado a diez años.

<sup>166</sup>Las desavenencias entre los criollos de Caracas y Miranda impidieron que éste hiciera prevalecer sus ideas constitucionales en el momento de redactar la Carta Magna de la Primera República de Venezuela. Posteriormente, en las sesiones del Congreso, Miranda no quiso aparentemente participar en las discusiones del texto presentado por la Comisión encargada de elaborarla, y en el momento de la firma del texto definitivo, hizo constar su desacuerdo, pues, a su entender, la Constitución aprobada no se ajustaba «con la población, usos y costumbres de estos países, de que puede resultar que en lugar de reunirnos en una masa general o cuerpo social, nos divida y separe en perjuicio de nuestra libertad civil y de nuestra independencia»: los Criollos de Caracas habían preferido una federación de provincias similar a la de Estados Unidos, en lugar de la centralización propuesta por Miranda. Cfr. Sesión del Congreso del 21 de diciembre de 1811, en *Congreso Constituyente de Venezuela, 1811-1812*, Ediciones conmemorativas del Natalicio del Libertador Simón Bolívar, Italgráfica, Caracas, 1983, T. II, p. 216.

su vez, es la Dieta la que va a escoger dos ciudadanos para ejercer el poder ejecutivo: « (Su) título será Incas, nombre venerable en el país», escribe Miranda a propósito de estos dos ciudadanos supremos. En compensación, los jueces encargados de presidir los diferentes tribunales de provincia —es decir, el poder judicial— son elegidos directamente por los ciudadanos en los comicios de las diferentes circunscripciones. La participación política del ciudadano se da en este caso y en el de los Cabildos. Para el resto de los cargos, la elección es siempre indirecta, por lo cual prima el instituto de la representación.

BOLÍVAR, continuador ferviente de MIRANDA, será la cúspide del pensamiento romanista en los padres fundadores de Latinoamérica, pero a la vez conjuga esta postura con elementos del liberalismo. Para SPÓSITO CONTRERAS esa conjugación en BOLÍVAR se manifiesta en su Discurso de Agradecimiento (1819). Dice BOLÍVAR: “...os recomiendo [...] el estudio de la Constitución británica, que es la que parece destinada a operar el mayor bien posible a los pueblos que la adoptan; pero por perfecta que sea, estoy muy lejos de proponeros su imitación servil...”, y aunque sin duda, él mismo la estudió y la tuvo en cuenta al momento de confeccionar la estructura constitucional de Venezuela o Bolivia, finalmente, respondiendo a la máxima “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”, optó por tomar de Roma “...sus censores y sus tribunales domésticos...”, en la idea de formar un pueblo no sólo libre y fuerte, sino sobre todo virtuoso: “...moral y luces son nuestras primeras necesidades<sup>167</sup>”.

Para CATALANO<sup>168</sup>, la actitud de BOLÍVAR de frente a la “Constitución Romana” es perfectamente coherente con su visión del derecho como “base de la legislación universal” (Método que se debe seguir en la educación (...), memorial editado en la *Opinión Nacional* del 24 de julio, 1883).

El libertador aportó importantes ideas sobre el orden político, las cuales buscaban la integración americana así como mecanismos de participación ciudadanas más adecuados. Seguidor del sistema republicano romano, aspiró a desarrollar un modelo integrador y suficiente por el cual, como en la *respublica* romana, todos sus ciudadanos se encontraran vinculados al Estado y a la función pública.

---

<sup>167</sup>SPÓSITO CONTRERAS, Emilio, “El Derecho Público Romano y el Constitucionalismo venezolano”, *ob.cit.*, pp.1 y 2. Véase además en Legislación Venezolana Computarizada: [www.lex-comp.com](http://www.lex-comp.com), p. 25.

<sup>168</sup>CATALANO, Pierángelo, *Derecho Romano Público y Revoluciones*, *ob.cit.*, p. 52.

El ideario político bolivariano se desarrolla sobre la base de los siguientes aspectos fundamentales: república como forma de Estado, participación ciudadana, Derecho y Constitución, soberanía, independencia, libertad, división de poderes, establecimiento de un poder moral y un poder electoral. Desde el Discurso de Angostura, fundamentó la necesidad del carácter renovable del mandato otorgado a los dirigentes de la nación.

Al hacer referencia a la situación en la que vivían los pueblos americanos, Bolívar demostró la urgencia para que se realizara adecuadamente su función. También dictaminó acerca del proyecto de constitución para Venezuela y enfatizó algunos principios, en los cuales patentizaba que para la plena libertad del hombre, se necesitan conocimientos y valores a lograr mediante la educación popular.

Igualmente, propugnaba el centralismo en la República, aunque defendía la necesidad de un poder local fuerte. En cuanto a la legalidad, dijo que las leyes deben ser propias para los pueblos que las hacen y la constitución debe ser intérprete de la voluntad de cada pueblo.

En este caso particular, BOLÍVAR reafirmaba su fidelidad al modelo antiguo transmitido por ROUSSEAU. El libertador había hablado de una "cuarta potestad", explicando cómo él había "sentido la audacia de inventar un Poder Moral, sacado del fondo de la oscura antigüedad, y de aquellas olvidadas Leyes que mantuvieron algún tiempo, la virtud entre Griegos y Romanos", bien consciente de que había podido ser considerado un "cándido delirio", pero afirmando con decisión: "no es imposible".

Podemos decir que encontramos aquí un impulso similar a aquel con el cual la institución de un poder de censura había sido demandada por algunos jacobinos franceses.

En su Proyecto de Constitución para Bolivia, rompe con la división tripartita del poder ante la falta de equilibrio y propone la creación de un cuarto poder, el electoral. Es concebido de forma tal que en cada provincia existe un cuerpo designado por el sufragio popular de cada 100 ciudadanos un elector, renovable cada 4 años. Entre sus funciones principales aparecen la de calificar a sus ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, elegir y proponer a las cámaras respectivas los miembros que deben componerlas o llenar las vacantes y sugerir al poder ejecutivo candidatos para las prefecturas de los departamentos, para el gobierno de las provincias.

Según BOLÍVAR "Ningún objeto es más importante para un ciudadano que la elección de sus legisladores, magistrados, jueces y pastores. Los colegios electorales de cada provincia



representan las necesidades y los intereses de ellas y sirven para quejarse de las infracciones de las leyes y de los abusos de los magistrados. De este modo se ha puesto nuevo peso a la balanza contra el ejecutivo, y el gobierno, ha adquirido más garantías, más popularidad, y nuevos títulos para que sobresalga entre los más democráticos<sup>169</sup>.

Establece además otra variante a la tripartición que es el poder moral formando parte del legislativo a través de las figuras de los tribunos, los senadores y fundamentalmente los censores. Estos debían ejercer una potestad política y moral que tiene alguna semejanza con el areópago en Atenas y de los censores en Roma. Serán ellos los fiscales contra el gobierno para velar si la Constitución y los derechos políticos del ciudadano eran observados.

Compuesto de dos cámaras, una estaría en cargada de vigilar la moral pública y la otra de dirigir la educación de los niños, con poderes mitad morales, mitad judiciales. La cámara de los moral debía tener una autoridad independiente y absoluta, con una vasta jurisdicción que va desde el individuo y la familia hasta la propia entidad moral del Estado. La considera el juez del gobierno de la república. Sus decisiones son siempre teóricas sin que pueda extenderse hasta coartar la libertad absoluta de los ciudadanos. La otra cámara debía velar por la educación física y moral de los niños, jurisdicción ejercida en el hogar y en la escuela.

El legislativo estaba formado por tres cámaras: de tribunos, de senadores y censores, ocupándose cada uno de una esfera y con contrapesos recíprocos como influencia del constitucionalismo americano. El ejecutivo se aparta del modelo latino formado por un presidente vitalicio y un vicepresidente hereditario. Ante las dificultades apreciadas en el funcionamiento de un jefe de estado electivo, destaca la necesidad de la permanencia de una figura en el poder a los efectos de poder dirigir la lucha por la independencia e instrumentar el diseño político. El segundo es hereditario para que se apoye a la cámara anterior y sea formado para ello previamente, de forma que sus miembros serían preparados con tiempo para esta actividad<sup>170</sup>.

---

<sup>169</sup> *Ídem.*

<sup>170</sup> Considerando la Constitución de Bolivia de 1826, aparece a primera vista que al modelo tripartito se le agregan profundas modificaciones. Según el artículo 8 "El poder supremo se divide para su ejercicio en cuatro secciones: Electoral, Legislativa, Ejecutiva y Judicial"; y según el artículo 19. "El Poder Electoral lo ejercen inmediatamente los ciudadanos en ejercicio, nombrando por cada ciento un elector ("el proyecto de Bolívar preveía "por cada diez"). Los artículos 22 y 25 fijan las atribuciones y regulan el funcionamiento del "Cuerpo Electoral" compuesto por los "electores" nombrados por el pueblo. Según el artículo 26 "El Poder Legislativo emana inmediatamente de los cuerpos electorales nombrados por el pueblo; su ejercicio reside en tres Cámaras: la de Tribunos; 2a. de Senadores; 3a. de Censores". Y bien, los "censores" tienen, en realidad, aunque sea de manera más moderada, las competencias de aquel "Poder Moral" que Simón Bolívar había propuesto en el Proyecto de Constitución para la

Si bien siguiendo a FERNÁNDEZ DE BUJÁN<sup>171</sup> la codificación constitucional se puso en marcha en los países Iberoamericanos antes que la codificación del Derecho Privado, la ruptura del pacto colonial significó para Latinoamérica el inicio de un largo y turbulento período histórico.

A saber, la independencia había borrado la estructura política y legal impuesta por España y sostenida por la presencia rectora del monarca a través de sus representantes en América. Éste proceso debía surgir de la misma dinámica del proceso independentista, a partir de lo cual, contaría con la legitimidad necesaria para estar un orden jurídico y político acorde a las expectativas de la sociedad. Pero el Estado Nacional, resultado político e institucional de la Revolución y la independencia, y la adopción de la República como forma de gobierno<sup>172</sup>, no significó una ruptura con la sociedad anterior en lo social y en lo económico<sup>173</sup>. La sociedad colonial esencialmente agraria y rural, siguió siendo predominante y subsistió en la sociedad republicana.

Las primeras constituciones latinoamericanas, más que textos normativos, constituyeron el manifiesto y la proclamación de la aspiración hacia la independencia. De cierta manera y bajo una nueva forma, se concibieron como una nueva y confirmatoria de claración de independencia, que con acentuado idealismo relegaron a un segundo plano la realidad social imperante. Como atinadamente expresara FERNÁNDEZ BULTÉ: “El Estado Nacional surgió en América Latina antes de que hubieran madurado las incipientes nacionalidades o se hubiesen integrado o diferenciado las nuevas estructuras sociales de la nación burguesa<sup>174</sup>”.

La débil burguesía puso en evidencia que si bien el modelo tuvo una notable influencia norteamericana y francesa, la normatividad jurídica se alejó de la realidad política. El

---

República de Venezuela, presentado al Congreso de Angostura y que, considerado por algunos diputados como una inquisición moral no menos horrible de la religiosa y de todas maneras impracticable en los tiempos presentes, no fue aprobado, decretándose que fuese publicado como "Apéndice" de la Constitución ("para que se verifique su establecimiento en circunstancias más favorables", según las palabras del Decreto del 15 de agosto de 1819). Vid. Legislación Venezolana Computarizada: [www.lex-comp.com](http://www.lex-comp.com), p. 16.

<sup>171</sup>FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, ob.cit., p.384.

<sup>172</sup>El modelo republicano, aunque ampliamente mayoritario no fue unánime. Hubo un interregno monárquico en México con el Imperio de Iturbide y existió después el Imperio de Maximiliano, fruto de la intervención militar francesa. Hubo también inmediatamente después de la Independencia y hasta finales del siglo XIX un sistema monárquico imperial en Brasil, que sólo finalizó como con la instauración de la República en 1889.

<sup>173</sup>Cfr. GUERRA VILABOY, Sergio, *El dilema de la independencia*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000. p. 15.

<sup>174</sup>En este sentido la debilidad de esas fuerzas burguesas condicionó ténues tendencias democráticas y una verdadera incapacidad para subvertir las relaciones de producción precapitalistas, súmesele a ello la subsistencia del latifundismo, incluso la pervivencia de relaciones esclavistas o semiesclavistas que lastraron el desarrollo económico ulterior. Vid. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Historia General del Estado y el Derecho II*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2001, p.211.

predominio de la ejecutiva fundado en el caudillismo, en el militarismo y en la influencia gubernamental clientelar de los antiguos líderes de las contiendas bélicas, fracturó el sistema constitucional burgués de independencia y equilibrio de los poderes. Lo que BOLÍVAR quiso lograr en 1826 con el Proyecto de Constitución para Bolivia, que él mismo en una carta a Santander definiese como la estabilidad unida a la libertad y a la conservación de los principios republicanos<sup>175</sup>, no se logró. El ejercicio patológico del poder derivó también en subdesarrollo económico, pobreza, marginación, analfabetismo, ignorancia. Pese a las ineludibles consecuencias del cambio, los derechos de participación ciudadanos, como dimensión jurídica de la nación cívica naciente, gozarían también del atributo de la exclusión de las mayorías sociales.

Como consecuencia de todo lo expuesto *supra*, la inestabilidad constitucional, la inexistencia de un respeto a la Constitución y de realidades de poder que actuaban al margen y hasta en contra de dicha normativa, tipificaron el proceso político latinoamericano del siglo XX. Golpes de Estado, dictaduras militares, neocolonialismo, globalización, fueron el contenido constante que sumado a las no resueltas problemáticas decimonónicas permearon la evolución del siglo. Estos hechos se tradujeron en frecuentes modificaciones constitucionales o en la duración indefinida de la vigencia formal y la conculcación constante de los textos. Las referidas variaciones constitucionales que tuvieron lugar en la centuria, limitadas por la rigidez que caracteriza a los textos formales de la región, abrieron un diapasón nacional reformista incapaz de valorar en su real dimensión la participación ciudadana y de replantearse una revisión realmente profunda de las bases sustentadoras de la Constitución del Estado<sup>176</sup>.

El modelo de la democracia representativa irradiaó al constitucionalismo del siglo XX latinoamericano. El modelo del elitismo competitivo tendió a afianzar en el área un concepto muy restrictivo de la participación, concibiéndola como un medio para escoger a los encargados de adoptar las decisiones. Los contenidos esenciales de la democracia se circunscribieron a la defensa del liberalismo y del sistema republicano representativo y oligárquico. Los derechos de autonomía como derechos políticos ejercidos de manera

<sup>175</sup>Discurso publicado en el Correo del Orinoco, números 19, 20, 21 y 22 del 20 de febrero al 13 de marzo de 1819. La reproducción fue realizada por Nicomedes Lora en la imprenta de B. Espinosa, 1820.

<sup>176</sup>Villabella Armengol refiere que son más de 250 constituciones entre todas las naciones en menos de 200 años, lo que equivale a decir que desde los primeros movimientos independentistas ha habido una nueva constitución cada año al menos en un país. Al respecto, véase, VILLABELLA ARMENGOL, Carlos M., *Selección de constituciones iberoamericanas*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000.

colectiva frente al Estado, en la búsqueda de la satisfacción de intereses plurales como son los derechos de reunión, manifestación, huelga entre otros, minimizaron la efectividad de los derechos de participación al quedar reducida ésta última a la elección de las élites gobernantes. En palabras DE ESCOBAR FORNOS<sup>177</sup> la mayoría de los textos constitucionales decimonónicos y del siglo XX en América Latina consagraron una estricta democracia representativa al extremo de disponer que el pueblo no gobernaría ni de liberaría, sino fuese por medio de sus representantes<sup>178</sup>. Exaltó GROSS ESPIELL<sup>179</sup> que los Estados americanos siempre concordaron en la aceptación del sistema democrático representativo a ultranza como fórmula política común.

Pese a lo aludido, la Constitución cubana de 1940 pautó el principio de soberanía popular y su máxima concreción en el derecho de los ciudadanos de participar en los referendos, promover iniciativas legislativas en el proceso de formación de la ley y la posibilidad de la revocatoria de mandato a nivel local como expresión de principios republicanos. No obstante haber quedado como el texto político frustrado de varias generaciones que naufragó dentro de la corrupción y la crisis general de la democracia burguesa cubana<sup>180</sup>, una renovada expresión de la participación ciudadana tendría como asidero la Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976.

Al constitucionalismo cubano de la segunda mitad del siglo XX, le darían continuidad los magnos textos de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Dichos diseños han tendido a la constitucionalización de diversos mecanismos de participación política en función del ejercicio de la soberanía popular, así como al desarrollo legislativo de determinadas reglas de procedimiento que pr oponden a un mayor protagonismo de l e ciudadano de cara a los principios del republicanismo democrático<sup>181</sup>.

---

<sup>177</sup>ESCOBAR FORNOS, Iván., “El Sistema Representativo y la Democracia Semidirecta”, en CONCHA CANTÚ, Hugo A., *Sistema r epresentativo y de mocracia s emidirecta* (Memoria del V II C ongreso I beroamericano de Derecho Constitucional), UNAM, México, 2002, pp. 152-191.

<sup>178</sup> Baste sólo citar las constituciones políticas de Bolivia de 1826 a 1995, o las constituciones quiteñas desde 1812 y hasta la de 1978 con su posterior reforma en 1996; asimismo la guatemalteca de 1877 y la chilena de 1833 entre otras muchas. Cfr. *Constituciones H ispanoamericanas*, Biblioteca V irtual C ervantes d isponible en [www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/mayo de 2014](http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/mayo de 2014).

<sup>179</sup>GROSS ESPIELL, Héctor: “La D eclaración am éricana d e l os d erechos y d eberes d el h ombre. R áices conceptuales en la historia y el Derecho constitucional”, en *Estudios sobre Derechos Humanos, II*. Civitas-IIDH. Madrid, 1988, p. 292.

<sup>180</sup>Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Historia del Estado y el Derecho en Cuba*, ob. cit., p. 313.

<sup>181</sup>Aunque el estudio de los referidos modelos políticos no constituye objeto de la presente investigación puede consultarse al respecto: GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, “Bases jurídicas para el empoderamiento político en los

Entonces, ahora, la investigación se dirige a demostrar que el republicanismo cubano, desde sus orígenes, se apropia del carácter republicano legado por el modelo participativo romano.

## **II.2 Los orígenes del republicanismo en el pensamiento democrático y en el constitucionalismo cubano anterior a la Constitución de 1976.**

La ciencia del Derecho se enriquece y fundamenta con los componentes doctrinales y metodológicos que legaron los romanos, en una clara evolución de sus instituciones hacia los tiempos modernos. Cuba ha transmitido el Derecho Romano mediante la docencia y lo ha recepcionado en la legislación. El estudio de la recepción del Derecho Público Republicano Romano en Latinoamérica y particularmente en Cuba, no obstante su trascendencia, adolece de un escaso tratamiento doctrinario. El Derecho Romano es parte indisoluble de la tradición jurídica cubana y su defensa no es sino una forma de defender la nacionalidad cubana, en acercamiento a la de los pueblos de América Latina y de otras latitudes, con respecto a los cuales constituye idioma común<sup>182</sup>.

Si se desea desentrañar los orígenes del pensamiento y el constitucionalismo republicano y democrático en Cuba, se debe tomar como referentes-siguiendo a LOYOLA<sup>183</sup>- el notable antecedente de la revolución inglesa, la revolución de independencia de las Trece colonias norteamericanas, y por encima de todas, la gran revolución francesa.

Nuevas expresiones invadieron, en una sola generación, el arsenal comunicativo de los más disímiles sujetos sociales: libertad, igualdad, democracia, república, liberalismo, contrato social, derecho ciudadano, constitución, poder ejecutivo, pueblo, soberanía nacional, por solo citar algunos conceptos inimaginables en su difusión un siglo atrás en la historia.

---

actuales diseños constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador”, en *Estudios sobre nuevo constitucionalismo latinoamericano*, Editorial Trilce, Valencia 2012, p. 269-299 y GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, “Empoderamiento, democracia directa y nuevo constitucionalismo en América Latina”, en *Revista Temas Democracia y Sociedad*, abril-junio de 2012, Ediciones Caribe, La Habana, Cuba, 2012, pp. 30-38.

<sup>182</sup> Vid. GONZÁLEZ QUEVEDO Joanna y PELEGRÍN TABOADA, Ricardo, “Peculiaridades del Código Civil Cubano. Una aproximación casuística al elemento romano” en *Memorias del III Seminario en el Caribe Derecho Romano y Latinidad, Identidad e Integración Latinoamericana y Caribeña*, La Habana, 2005, pp. 1-2.

<sup>183</sup> Cfr. LOYOLA, Oscar, “Una época, una isla, un patriota, un sacerdote”, en *Dos siglos de pensamiento de liberación cubano*. Eduardo Torres-Cuevas (Coordinador). Imagen contemporánea. La Habana, 2003, pp. 17 y 18.

Coincidiendo con algunos autores, entre los que se destacan FERNÁNDEZ BULTÉ y LIZÓN GONZÁLEZ<sup>184</sup>, puede afirmarse que la primigenia asimilación del pensamiento moderno, de una manera creadora y no a crítica, transcurre en Cuba entre 1773 -cuando se inaugura el Seminario San Carlos y San Ambrosio-, y en 1818, en que aparece la primera obra filosófica notable que pretende superar el escolasticismo europeo: las Lecciones de Filosofía, del presbítero Félix VARELA Y MORALES. Desde luego que el tránsito del reformismo al independentismo, y con ello, la asimilación de las ideas democráticas provenientes del viejo continente, tiene lugar en un contexto diferente al resto de la América Latina, ya que cuando se inician los procesos independentistas iberoamericanos los hacendados criollos en Cuba permanecen todavía aferrados a posiciones esclavistas y reformistas. Como es conocido, la “fiel Isla de Cuba” ni siquiera se incorporó al proceso juntista iberoamericano, en el marco de la dominación francesa en España y la abdicación de Carlos IV, coyuntura favorable para la Revolución burguesa en la península y para el desenvolvimiento de las ideas independentistas y liberales en Hispanoamérica.

En la medida en que la esclavitud fue convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo industrial del país, y sobre todo, cuando la dirección política fue pasando a manos de clases y sectores no vinculados al régimen esclavista, las tendencias más avanzadas de pensamiento en los planos político y social se fueron abriendo paso y el liberalismo fue cediendo lugar a un democratismo revolucionario cuyos antecedentes pueden encontrarse en la ideología revolucionaria francesa, especialmente de corte Rousseauiano. Se trata sin dudas de un proceso de paulatina radicalización del pensamiento cubano en que van marcando hitos figuras como VARELA, CÉSPEDES, AGRAMONTE, y MARTÍ.

Pero con anterioridad a dicho proceso, se concuerda con Olivia MIRANDA<sup>185</sup> en que el ideario iluminista permeó el pensamiento político en Cuba a lo largo del siglo XIX, asimilados con muy diversos grados de radicalismo por las figuras más destacadas de la época. Por tanto, la primera mitad del siglo se caracterizó por el auge creciente de las ideas liberales y representativas en los sectores ilustrados-gran parte compuestos por esclavistas-que tomaron

---

<sup>184</sup>Vid. LIZÓN GONZÁLEZ, José Luis, *Orígenes del pensamiento democrático cubano. El aporte del ideario republicano de José Martí*, en [www.fgr.cu/Biblioteca](http://www.fgr.cu/Biblioteca) Jurídica, pp.1-3 y FERNÁNDEZ BULTÉ, *Historia del Estado y el Derecho en Cuba*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005, pp. 32 y ss.

<sup>185</sup>MIRANDA, Olivia, *Ecos de la Revolución Francesa en Cuba*, ob.cit, pp.121-122.

de a aquellas todo lo que no tocara los pilares económicos y religiosos de los hacendados blancos.

De esta primera etapa data el Proyecto autonómico del presbítero JOSÉ AGUSTÍN CABALLERO de 1811, en el cual se plasma el ideal de representación y división de poderes, conjugado con la necesidad de que toda obra legislativa debe provenir de la participación del pueblo<sup>186</sup>.

Vista la figura de VARELA en el ámbito latinoamericano, el sabio sacerdote se presenta como uno de los pensadores más significativos y lúcidos de todo el siglo XIX continental, tanto por su rigor conceptual analítico como por su honda y original visión de los problemas teóricos y políticos que enfrentó. Su actividad filosófica, cabe recordar, se desarrolló en un período de la historia de América Latina de grandes e importantes acontecimientos políticos e ideológicos como lo fueron sin dudas las convulsiones sociales e independentistas y la ulterior formación de las nacientes repúblicas. El período de la evolución de la filosofía en Latinoamérica, que cubre desde la última década del siglo dieciocho hasta el primer tercio del diecinueve, fue predominantemente iluminista con una clara presencia concomitante de la ilustración y del movimiento de la enciclopedia a ella unida.

Fue un momento en el continente de predominio de las temáticas de tipo político y social, a la vez que sobre todo en la tercera década del XIX en los colegios y universidades se acogieron las teorías de la ideología francesa. Que predominara la influencia francesa no tiene nada de excepcional. Durante el siglo XVIII europeo, Francia fue sustituyendo a Inglaterra en las preferencias filosóficas y ese fenómeno fue también particularmente relevante en España y Portugal, las metrópolis de las colonias americanas.

Siguiendo a Isabel MONAL<sup>187</sup>, se advierte que VARELA se mostró diáfananamente iluminista siguiendo la tradición francesa y hasta su evidente preferencia por LOCKE se correspondía con el propio favoritismo de que gozaba el filósofo empirista inglés en la revolución francesa. VARELA, como el resto de América latina, siguió al iluminismo también en sus derroteros políticos sociales.

En el primer número de “El Observador Habanero”, que sale a la luz el 15 de junio de 1820, ya VARELA subraya que la soberanía radica en el pueblo, que puede elegir a sus

---

<sup>186</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Historia del Estado y el Derecho en Cuba*, ob.cit, pp. 72 y ss, y PICHARDO, Hortensia, *Documentos para la Historia de Cuba*, t.I, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1965, p. 211.

<sup>187</sup>MONAL, Isabel, “Félix Varela: el clásico de Nuestra América”, en *Dos siglos de pensamiento de liberación cubano*, ob.cit, pp. 28-30.

representantes, tanto en el poder legislativo como en el judicial. Para el ilustre sacerdote, jamás podrá ser buena ni llenar su objeto, la constitución que no prefija la concurrencia de los ciudadanos a ser elegidos y a elegir a las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

VARELA expresaba la necesidad de equilibrar los poderes, conseguir la confianza de los gobernados y constituir un sólido poder representativo<sup>188</sup>. En “El Americano Libre”, de 1824, VARELA sostenía: “Unión es lo que necesitamos: unión es la primera columna de la sociedad: unión constituye la fuerza ( ... )<sup>189</sup>”. En el segundo número de “El Observador Habanero” Varela denota su admiración por la obra codificadora y legislativa francesa, que él considera una continuación de la romana: “Todos los males que Napoleón y la Revolución han hecho a la Francia no son capaces de neutralizar los dos grandes bienes que ha obtenido esta Nación. La formación de los códigos es la obra mayor que vieron los siglos desde la destrucción del imperio romano ( ... ) Tomemos lo bueno donde quiera que lo hallemos<sup>190</sup>”.

La propuesta de Varela acerca de la implementación de libertades políticas en Cuba, se expresó en este período a través de su *Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-político de las Provincias de Ultramar*, presentado a Cortes por la diputación cubana con el fin de implementar en la Isla el modelo gaditano de descentralización. A imagen y semejanza del constitucionalismo ibérico y de las propuestas criollas que le precedieron, careció de carta de derechos, y fue reflejo fiel de las necesidades específicas de participación política y de autorregulación en materia administrativa, presentes en los grupos hegemónicos de la sociedad cubana en su momento. Para el Preámbulo que lo fundamentaba había escrito VARELA: “Las leyes desgraciadamente se humedecen, debilitan y aun se borran atravesando el inmenso océano, y a ellas se sustituye la voluntad del hombre, tanto más temible cuanto más se complace en los primeros ensayos de su poder arbitrario, o en su antigua y consolidada impunidad<sup>191</sup>”.

Si la tradición indiana enc cuanto a la aplicación de la ley, se había fundado sobre la consuetudinaria fórmula de acatar y no cumplir, justificada en buena medida por la falta de correspondencia entre el lugar de redacción de la norma y el ámbito de su vigencia, los

---

<sup>188</sup>LIZÓN González, *ob.cit.*

<sup>189</sup>MIRANDA, Olivia, *ob.cit.*, p. 25.

<sup>190</sup>MIRANDA, Olivia, *ob.cit.*, p. 32.

<sup>191</sup>VARELA, Félix, “Preámbulo de la Instrucción para el gobierno de Ultramar”, en Félix Varela, *Obras*, t. II, La Habana, Imagen Contemporánea, 2001, p. 90



presupuestos de descentralización propuestos en el Proyecto intentarían suprimir esta práctica en la Isla, por una mayor participación de los individuos ciudadanos en la gestión local. Además, los procedimientos para la elección de las autoridades locales y provinciales propuestos en el mismo, dejaban resquicios para que los criollos cubanos, hasta entonces marginados de los asuntos políticos dentro de la colonia, accedieran a sus estructuras locales del poder.

Así se expresaban las ideas autonómicas del maestro habanero a la sombra del constitucionalismo gaditano.

Sin embargo, al margen de esta posición política, continuarían inmutables en su pensamiento posterior los presupuestos defendidos por él para el mantenimiento de las libertades: derecho al sufragio, carácter electivo y renovable de las autoridades, derecho de queja, y supremacía normativa de la Constitución.

En este sentido, como diseño para un gobierno autonómico, significó una propuesta muy avanzada a fin de lograr un mecanismo de descentralización que funcionase sobre una base institucional más eficiente que las estructuras autoritarias heredadas del absolutismo, a las que se propuso suplantarse. Para Medardo VITIER<sup>192</sup>, precisamente sería su elección como diputado a Cortes en el año 1821, la oportunidad para pretender convertir sus ideas constitucionales acerca de la libertad, en propuestas normativas.

La traición fernandina contribuyó a radicalizar sus ideas, y al encontrarse entre el grupo de diputados que votaron la incapacidad del monarca para gobernar –posición que le valió una condena a muerte, una fuga precipitada, y un destierro de por vida– daría prueba de su apego a las concepciones democráticas del liberalismo ibérico en el que había cifrado sus esperanzas de refundación. Este criterio a favor de la monarquía obedecía en VARELA a móviles políticos más profundos relacionados con sus convicciones internas, pues siempre había preferido la cooperación entre clases a su enfrentamiento, tendencia que lo acompañaría por siempre en su anhelo por salvar, a toda costa, la existencia estable del cuerpo social en la Isla.

Al defender la opción de la monarquía parlamentaria, el maestro cubano albergaba la esperanza de una definitiva refundación del Imperio español por el logro del ansiado equilibrio

---

<sup>192</sup>“El título del Proyecto, según lo transcribe el doctor Chacón y Calo dice así: Proyecto de Instrucción para el gobierno económico y político de las provincias de Ultramar. Lo encontró Chacón en el Archivo General de Indias (...) está fechado en Madrid a 16 de febrero de 1823 y suscrito por Pablo Santafé, Félix Varela, Leonardo Santos Suárez, Josué Meléndez, Manuel Vizmanos, Ramón Luis Escobedo y José María Quiñones. VITIER, Medardo, *Las ideas en Cuba. La filosofía en Cuba*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1970, p. 59.

entre fuerzas políticas enemigas por naturaleza. Además, en la función que el texto doceañista le había asignado al monarca dentro del nuevo diseño constitucional, había visto en su momento el presbítero cubano un útil instrumento de control dentro de aquel modelo político tan apegado a la tradición española “... *concediendo al rey la sanción de las leyes y el veto, lejos de haberse tomado una medida contraria a la libertad nacional, debe decirse que se le ha puesto un firme apoyo, pues sirve de contrapeso al poder del cuerpo representativo, concilia los intereses nacionales, y establece un equilibrio en todas las funciones del cuerpo social...*”<sup>193</sup>.

En cuanto al proyecto constitucional, todavía es reformista. Pero muy avanzado, liberal y burgués, el cual se mueve dentro del pensamiento del movimiento revolucionario y progresista francés. Éste marca la cúspide del pensamiento nacional en las seis primeras décadas de siglo XIX, a distancia no medible de sus compañeros de viaje, quienes ni siquiera pudieron acercársele en la comprensión de que en la emancipación del pensamiento estaba la soberanía de la patria oprimida.

Entonces, habría que esperar a JOSÉ MARTÍ para que el orgullo sentido de VARELA-en su condición de revolucionario americano-, se entendiese como latinoamericano y alcanzara una estatura teórica superior.

Tal y como se ha apreciado, las ideas liberales fueron también el basamento inicial del nuevo período independentista en la historia de Cuba. El período constitucional separatista, que se inició en abril de 1869, marcó no sólo la ruptura con el Derecho Constitucional español, sino también el comienzo del auge del ideario democrático que maduraría más adelante con José Martí proyectándose sobre los fundamentos republicanos que propondría. Para RAMÓN INFUESTA<sup>194</sup> su eje cardinal se hallaba en el rescate de la riqueza y la reivindicación del poder político.

En este breve período, la base popular del gobierno de CÉSPEDES mantuvo en orden su jurisdicción, con la adhesión de los cubanos patriotas y la expresión de sentimientos universales, y se amplió considerablemente con la Declaración de Independencia del 68 y el

---

<sup>193</sup>FERNÁNDEZ VICIEDO, Yuri, “Félix Varela y Morales: un acercamiento al fundador del constitucionalismo cubano”, en *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, octubre 2011, [www.eumed.net/rev/cccss/14/](http://www.eumed.net/rev/cccss/14/), pp. 3 y 4.

<sup>194</sup>INFUESTA Y BAGÉS, Ramón, “La Constitución de Guáimaro”, en *Guáimaro, A laborada en la historia constitucional cubana*, compilación de Andy Matilla Correa y Carlos Villabellá Armengol, (Edición conmemorativa en el 140 aniversario de la Constitución de Guáimaro), Ediciones Universidad de Camagüey, Cuba, Tomado de: Ramón Infiesta: *Historia Constitucional de Cuba*, pp. 220-239, Editorial Cultural, La Habana, 1951.

decreto abolicionista del 27 de diciembre, documentos signados por los principios democráticos y liberales – representativos que inspiraban a sus redactores. Decía el Decreto: “La Revolución de Cuba, al proclamar la independencia de la Patria, ha proclamado con ella todas sus libertades (...) Cuba libre es incompatible con Cuba esclavista”. Y más adelante señalaba: “Pero sólo al país cumple esa realización como medida general cuando el pleno uso de aquellos derechos pueda por medio del libre sufragio acordar la mejor manera de llevarla a cabo, con verdadero provecho, así para los antiguos como para los nuevos ciudadanos<sup>195</sup>”. Este Decreto tuvo su réplica en el dictado por la Asamblea de Representantes del Centro, que prescribía, “teniendo en consideración los principios de la eterna justicia, en nombre de la libertad y del pueblo que representa”, la abolición de la esclavitud.

La primera resolución aprobada en la Asamblea de Guáimaro el 10 de abril de 1869 enuncia el principio democrático que debía sustentar el constitucionalismo cubano. Decía: “Que los representantes reunidos en este lugar para establecer un gobierno general, democrático, y en virtud de las circunstancias que atravesamos, se consideran autorizados para asumir la representación de toda la Isla, acordar la guerra conducente al indicado objeto con la reserva de que sus acuerdos serán sometidos para su ratificación o enmienda a los representantes de los diversos pueblos pronunciados y de que más tarde cuando sea posible que el país se encuentre legal y completamente representado, esta ley sea en uso de su soberanía la constitución que haya entonces de regir<sup>196</sup>”.

Como es evidente, el instituto de la representación, se considera el medio único e idóneo para el tránsito a la República democrática. En los acuerdos de la Asamblea de Representantes del 69 se señala también: “Que en virtud de no poder establecerse en las actuales circunstancias una representación enteramente legal del país, vengán a la Cámara en nombre de Las Villas los miembros de la Junta Revolucionaria de Villa Clara que se hallen en Guáimaro, y en nombre de Occidente los que sean elegidos por los cubanos de aquel Estado que se encuentre pronunciado<sup>197</sup>”.

Es notable también la adhesión de la Constitución de Guáimaro al principio de la representación, aunque evidentemente no se trata de la representación montesquiana, en la cual el ciudadano se desliga de sus derechos políticos y los entrega, enajenados, al

---

<sup>195</sup>GUERRA, R, *Historia de Cuba*, La Habana, 1963 .p.213, citado por LIZÓN GONZÁLEZ, José Luis, *ob.cit.*

<sup>196</sup>*Ídem*, p. 215.

<sup>197</sup>*Ídem*, p. 216.

representante. Más bien se asemeja a una representación que se aproxima más al mandato imperativo propio del modelo constitucional latino defendido por ROUSSEAU. Véase cómo se cuida, tanto en el texto constitucional como en las resoluciones que se adoptan el día 10, de que los efectos de representación puedan ser subsanados una vez que la guerra se haya afianzado o concluido. Y en todo caso, se hace evidente la preocupación porque los representantes dependan y se deban al cuerpo electoral<sup>198</sup>.

La constitución de Guáimaro confirió el fuerte poder legislativo a una sola Cámara, “creada por el pueblo”, como el órgano más genuinamente popular. La Ley Electoral votada por la Cámara de Representantes proclamó el principio de elecciones directas. “La Ley Fundamental de Guáimaro parece haber sido redactada bajo la influencia del fuerte espíritu democrático de la constitución francesa de 1793, que según Olivia MIRANDA, inspiró a AGRAMONTE y a los asambleístas. Incluso CÉSPEDES cambió su investidura de Capitán General por la de Presidente de la República, definiendo así la tendencia civilista y el carácter republicano del Gobierno. La Constitución de Guáimaro revelaba el apego de los revolucionarios cubanos a la legalidad y al constitucionalismo progresista. De hecho con esa Constitución surgía la República de Cuba<sup>199</sup>”.

La constitución de Baraguá, pese a su breve articulado, su provisionalidad y corta duración (74 días), estableció un gobierno colegiado y recogió las aspiraciones democráticas, en los marcos del concepto representativo que refrendaba. En el artículo tercero quedaba facultado para hacer la paz bajo las bases de la independencia, y en el siguiente establecía que no se podría hacer la paz con el Gobierno español bajo otras bases si no el conocimiento y consentimiento del pueblo.

Quedaba así reconocida la voluntad popular como fuente jurídico-constitucional para la toma de decisiones inherentes a la soberanía del propio pueblo. En ese sentido, el artículo 1 declaraba que “La Revolución se regirá por un gobierno provisional compuesto de cuatro individuos”. En el artículo 2 se establecía que ese gobierno provisional nombraría un General en Jefe que dirigiría las operaciones militares. En el artículo 3 se confirmaba que ese gobierno provisional estaba facultado para hacer la paz bajo bases de independencia. Y como si esa anterior afirmación fuera poco, en el artículo 4 reafirmaba que “No podrá hacer la paz con el

---

<sup>198</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Historia del Estado y el Derecho en Cuba, ob.cit.*, p. 93.

<sup>199</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Introducción a la Constitución Cubana*. Prólogo a una edición griega de la Constitución cubana (Artículo inédito), La Habana 2003. p.2.

gobierno español bajo otras bases sin el conocimiento y consentimiento del pueblo”. En el artículo 5 dejaba establecido que el gobierno pondría en vigor las leyes de la República que fueran compatibles con aquella difícil situación y en el artículo 6 y último declaraba la independencia del Poder Judicial y afirmaba que residiría en Consejos de Guerra. Ese cuerpo legal, con sólo 6 artículos, es más una proclama política que un texto jurídico. Pero lo importante es que en él se materializa la continuidad político-jurídica del proceso revolucionario y la república en Cuba<sup>200</sup>.

Lo más significativo del pensamiento *iuspublicístico* cubano de la segunda mitad del siglo XIX es el tránsito del liberalismo al democratismo revolucionario. Es imposible soslayar en este proceso la figura del más destacado pensador latinoamericano de la época: JOSÉ MARTÍ. Sus ideas republicanas, en un momento crucial para la formación de la nación cubana como lo fue la lucha por la independencia en la última década del siglo, adquieren un profundo carácter democrático y antiimperialista.

JOSÉ MARTÍ, principal exponente del democratismo revolucionario, se graduó en Zaragoza el 30 de junio de 1874 como Licenciado en Derecho, de fendiendo la tesis titulada “Párrafo inicial del Libro I, Título II, de la Instituta de Justiniano. Del Derecho Natural, de Gentes y Civil”. Cuatro meses más tarde se licenciaba en Filosofía y Letras, diplomándose con el tema “La oratoria política y forense entre los romanos: CICERÓN como su más alta expresión. Los discursos examinados con arreglo a sus obras de retórica<sup>201</sup>”.

Sin embargo, MARTÍ no fue un teórico, a pesar de sus indudables aportes al pensamiento democrático y republicano posterior. Pero, como bien aclara el investigador PEDRO PABLO RODRÍGUEZ, si bien JOSÉ MARTÍ no fue un teórico, es incuestionable que su pensamiento político parte de determinados presupuestos<sup>202</sup>.

Tal cual acota Ibrahim HIDALGO<sup>203</sup> es posible referirnos actualmente a la validez de las ideas de JOSÉ MARTÍ acerca del ordenamiento republicano de las naciones. No por que él se propusiera elaborar un modelo o patrón teórico al cual debía ajustarse la realidad cubana y latinoamericana de su época, sino porque plasó en múltiples obras escritas —artículos,

---

<sup>200</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Introducción a la Constitución Cubana*, ob.cit, pp.2 y 3.

<sup>201</sup>Cfr. PÉREZ GORRÍN, J. A. *Martí y el Derecho*, La Habana, 1953, pp. 28-29, citado por LIZÓN GONZÁLEZ, José Luis, ob.cit.

<sup>202</sup>RODRÍGUEZ, Pedro Pablo, *La idea de liberación nacional en José Martí*. Anuario de Estudios Martianos, No.4.CNC.La Habana, 1972, p.175.

<sup>203</sup>HIDALGO, Ibrahim, “Democracia y participación popular en la República martiana”, en *Revista Temas* No.32, enero-marzo de 2003, pp. 110-117.

crónicas, discursos, documentos programáticos, cartas— su concepción acerca de la etapa inmediatamente posterior al logro de la independencia de su país natal del dominio colonialista español. Para MARTÍ era necesario elaborar un proyecto alcanzable, enraizado en el ideal y las tradiciones republicanas del pueblo.

MARTÍ se propuso que la mayoría de la población conociera y compartiera la nueva concepción revolucionaria, pues: “Un pueblo, antes de ser llamado a guerra, tiene que saber tras de qué va, y a dónde va, y qué le ha de venir después<sup>204</sup>”. En fin, se generalizara el convencimiento de la capacidad de los cubanos para el gobierno propio, sin tutelas hispanas o estadounidenses.

Siguiendo esta línea de pensamiento de HIDALGO, erraría asimismo quien negase que el ideal de república concebido y divulgado por MARTÍ fuera una de las principales motivaciones que sustentaron el apoyo mayoritario de las emigraciones cubanas y puertorriqueñas al llamado a una nueva etapa de confrontación bélica.

Los aspectos que definen la concepción martiana de la República nueva deben ser considerados integralmente, como una unidad, pues constituyen un sistema de transformaciones que traería a parejados no solo una forma de gobierno opuesto al de la colonia, sino un orden social diferente al impuesto por el poder hispano. Paralelamente, como base esencial, se democratizaría toda la vida política, social y cultural del país, haciendo prevalecer la plena igualdad de derechos. Para que estos cambios fueran realizables, era indispensable el establecimiento de mecanismos de participación de los ciudadanos, parte activa esencial de todo el proceso de transformaciones iniciales desde el período de preparación de la contienda<sup>205</sup>.

Bien sabía MARTÍ que república y democracia no eran términos equivalentes. Sus experiencias en España —durante el breve período republicano de 1873 a 1874—, y en México, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos le permitieron conocer a fondo las

---

<sup>204</sup>MARTÍ, José, «Carta a J. A. Lucena» (Nueva York, 9 de octubre de 1885), *Obras completas (OC)*, t. 1, Editorial Nacional de Cuba, La Habana.

<sup>205</sup>Los aspectos fundamentales de la república martiana han sido abordados por diferentes autores, entre los que destacaremos a Pedro Pablo RODRÍGUEZ, «La idea de la liberación nacional en José Martí», *Anuario Martiano*, No. 4, Biblioteca Nacional José Martí, La Habana, 1972, y «Prólogo» a José Martí, *El Partido Revolucionario Cubano y la guerra*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978; Eduardo TORRES CUEVAS, «El proyecto inconcluso de José Martí», en Eduardo Torres Cuevas *et al.*, *El alma visible de Cuba. José Martí y el Partido Revolucionario Cubano*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1984; Ramón DE ARMAS, «José Martí: su república de mayoría popular», *Revista de Ciencias Sociales*, n. 1-2, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, enero-junio de 1990. *Vid.* HIDALGO, Ibrahim, *ob.cit.*

contradicciones existentes en aquellas repúblicas y la vacuidad de este concepto cuando tras él se ocultaba el dominio de las oligarquías, carentes de la intención de incorporar a las grandes masas al disfrute de los beneficios y a la búsqueda de soluciones mediante una verdadera representación en el gobierno, y su participación en proyectos favorables a la nación, no como simples ejecutores de otros, que les eran ajenos<sup>206</sup>. Para evitar este riesgo, era necesario “procurar desde la raíz salvar a Cuba de los peligros de la autoridad personal y de las disensiones en que, por la falta de la intervención popular y de los hábitos democráticos en su organización, cayeron las primeras repúblicas americanas<sup>207</sup>”.

El fundamento de la vida republicana es el derecho igual para todos, y cuya base la constituye el cumplimiento del deber, no la mayor o menor cantidad de riqueza material.

Es por ello que PITA SIMÓN<sup>208</sup> apunta que su papel de conductor del pueblo cubano, dentro del referente occidental de la modernidad, requirió de la construcción de un proyecto de república y de ciudadano, de la idealización de un proceder público y privado. Además, demandó de una fundamentada filosofía política, y con esta, de un pensamiento filosófico-jurídico.

---

<sup>206</sup>Independientemente de la certeza o no de tales influencias, la constatación de las ideas republicanas españolas contrastadas con las aspiraciones de Cuba permiten a Martí, según Pedro Pablo Rodríguez, hacer la primera crítica al liberalismo político en la obra anteriormente citada, sin que esto signifique que en 1873 Martí abandone los puntos de coincidencia con aquél. A partir de la conocimiento de la relación entre republicanismo y colonialismo, que lo sitúa en una postura que cuestiona el ideal liberal, Martí llega al reconocimiento de que ambas Repúblicas, española y cubana, pueden coexistir, lo que significa ante todo el derecho del pueblo cubano a darse su propia constitución (... “reconozca-la República Española-puesto que el derecho, y la necesidad, y las Repúblicas, y la alteza de las ideas republicanas lo reconocen, la independencia de Cuba. En las Repúblicas de Nuestra América –ha apuntado Roig de Leuchsenring-podrá Martí estudiar sobre el terreno los obstáculos que enfrentaba el desenvolvimiento y progreso de las Repúblicas de origen hispano, y en sus años de estancia en los Estados Unidos conocería el peligro del expansionismo norteamericano para aquéllas. La inicial estadía larga de Martí en Nueva York, en 1880-dice Fernández Retamar-le permiten constatar la realidad norteamericana y entrar en contacto con las ideas que impresionaban en esa década a los liberales del planeta. Esta permanencia observadora y crítica de Martí constituye una etapa importante para comprender la superación del liberalismo en la estancia de los años 90, cuando ha madurado su conocimiento de la sociedad norteamericana. En los Estados Unidos- dice Martí en Patria, el 23 de marzo de 1894-en vez de apretarse las causas de la Unión se aflojan, en vez de resolverse los problemas de la humanidad se reproducen, en vez de amalgamarse en la política nacional las localidades, la dividen y enconan; en vez de robustecerse la democracia y salvarse del odio y miseria de las monarquías, se corrompe y aminora la democracia, y renacen, amenazantes, el odio y la miseria. Al respecto *Vid* entre otros, FERNÁNDEZ RETAMAR, R., *Cuadernos del CEM*, No. 7 La Habana, 1984.p.121.*Cfr.* en el mismo texto: Introducción a Martí y Desatar a América y desuncir al hombre, pp.103-136; MARTÍ, J., “Impresiones de América”1880.O.C.T.19-pp.103-126; ROIG DE LEUCHSENRING, E., *La Guerra Cubana de los Treinta Años.Estudios sobre La Nación Cubana*, en *Acuerdos del Séptimo Congreso Nacional de Historia*.p.371.

<sup>207</sup>MARTÍ, José, «Carta al presidente del club “José María Heredia”» (Nueva York, 25 de mayo de 1892), *OC*, t. 1, p. 458. *Vid*, también «Pueblos nuevos» (*Patria*, 14 de mayo de 1892), *OC*, t. 28, p. 303.

<sup>208</sup>PITA SIMÓN, Vladimir, “Las categorías iusfilosóficas de justicia, libertad, igualdad y solidaridad en el discurso político jurídico de José Martí”, *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2014, p. 1.

Así, en la base constitutiva de la República nueva, se halla el respeto al individuo. Su derecho de hombres es lo que buscan los cubanos en su independencia, la cual se ha de buscar con alma en tera de hombre. La defensa del derecho de ser humano a una vida digna en lo económico, es inconcebible sin su plena participación en la vida política del país, sin la posibilidad real de expresar sus opiniones en cuanto atañe a la toma de decisiones, la fiscalización y el control de la aplicación de estas, y a su actuación al respecto. No se trata solo de la movilización de los ciudadanos durante la fase de cumplimiento de proyectos ya concebidos, sino el acceso a los espacios de discusión de estos, a fin de contribuir con sus experiencias e ideas a su elaboración<sup>209</sup>.

En las Bases del Partido Revolucionario Cubano (en lo adelante PRC), aprobadas en enero de 1892, MARTÍ expone como aspiración esencial la fundación, “con método republicano”, de una nación capaz de conseguir la dicha de sus hijos y cumplir los deberes continentales, de una República que significara la constitución de “un pueblo nuevo y de sincera democracia, para el logro de la Patria cordial y sagaz<sup>210</sup>”.

La conjunción de los conceptos de Patria, pueblo y democracia en el ideario republicano de MARTÍ, es esencial para comprender la originalidad de su concepción del partido político. En Patria escribe, en 1892, que el Partido Revolucionario Cubano “no es, como los partidos políticos suelen ser, mera agrupación más o menos numerosa de hombres que aspiran al triunfo de determinado modo de gobierno, sino reunión espontánea, y de más naturaleza, de los que aspiran, de brazo de la muerte, a levantar con el cariño y la justicia un pueblo<sup>211</sup>”. También en Patria, en el artículo “El Partido”, MARTÍ señala: “Los Partidos políticos que han de durar, los partidos que arrancan de la conciencia pública; los partidos que vienen a ser el molde visible del alma de un pueblo, y su brazo y su voz; los partidos que no tienen por objeto el beneficio de un hombre interesado, o de un grupo de hombres, - no se han de organizar con la prisa indigna y artificiosa del interés personal, sino cómo se organiza el PRC, con el desahogo y la espontaneidad de la opinión libre<sup>212</sup>”. Puede constatarse como MARTÍ atribuye la permanencia histórica de un Partido a su identificación con los intereses populares más genuinos, el valor que le otorga en tal sentido a la opinión pública como

---

<sup>209</sup>Cfr. HERNÁNDEZ, Rafael y DILLA, Haroldo, “Cultura política y participación popular en Cuba”, *Cuadernos de Nuestra América*, No. 15, La Habana, julio-diciembre de 1990, pp. 111.

<sup>210</sup>MARTÍ, José, *OC*, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963, T.I, p.139.

<sup>211</sup>MARTÍ, José, *ob.cit.* T. II p. 32

<sup>212</sup>MARTÍ, José, *ob.cit.* T.II. p.35



expresión de la conciencia política del pueblo. También se apreciaba una concepción no individualista del Partido, y se expresaba una noción sobre la democracia interna que debía primar en los Partidos políticos.

Al acatar los documentos rectores del PRC, los clubes debían adoptar el método democrático de elección de las secretarías de los Cuerpos de Consejo —instancia intermedia entre las asociaciones de base y la máxima dirigencia—, del Delegado y del Tesorero. Se mantenía la tradición de las elecciones —iniciada desde la Guerra de los Diez Años— de realizar votaciones anuales, pero se introdujeron prácticas totalmente desconocidas hasta entonces: el deber del Delegado de rendir cuentas anualmente de su trabajo y del empleo dado a los fondos recaudados; el derecho de cada Cuerpo de Consejo de proponer a los demás la deposición del dirigente electo (lo que podría lograrse con el voto unánime a favor de dicha moción), y el derecho de cualquier Cuerpo de Consejo de proponer reformas a las *Bases* y los *Estatutos*, que el Delegado debía comunicar a los demás organismos intermedios y, de acordarse el cambio, quedaba obligado a acatar. Estos procedimientos democráticos no habían sido aplicados en aquella época, ni con anterioridad, por ningún organismo cubano.

No obstante la claridad expositiva de los *Estatutos*, fue preocupación de MARTÍ aclarar aún más su contenido, e insistir ante los clubes sobre los derechos de estos y de los Cuerpos de Consejo para fiscalizar la actuación de los funcionarios electos. En una de las comunicaciones elaboradas con esta finalidad, expone que la creación de estos últimos como instancia intermedia del Partido respondía a la idea democrática de someter al ejecutivo a la revisión continua de sus actos por muchos ojos a la vez, pues la actuación del Delegado no debía prescindir del examen y vigilancia a que le sería fácil escapar en el trato con las Asociaciones aisladas. Gracias a la estructura creada, estas pueden ejercer su fiscalización.

De este modo se ratificaba el criterio de que la revolución era del pueblo y para el pueblo, y que para ella se convocaba, incluso, a quienes pudieran haber errado en sus apreciaciones iniciales, si eran capaces de unir sus esfuerzos sinceros al propósito independentista.

Se trataba de sumar voluntades, no de restarlas, pues se requería del apoyo mayoritario, alcanzable en la medida en que se respetara consecuentemente el espíritu y las prácticas democráticas, y se incentivara la participación popular, necesaria no solo para potenciar el entusiasmo patriótico y la formación ciudadana en los aspectos políticos y señalados, sino también para la formación y transmisión de nuevos valores. Con ello se lograría el cambio de

percepción de determinadas ideas prevalecientes en la sociedad, como la discriminación y la represión a la libertad de pensamiento. Que la República ha de tener por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, lo que para él constituía no solo un derecho sino un deber: “El primer deber de un hombre es pensar por sí propio<sup>213</sup>”.

El pueblo cubano formado por el colonialismo debía conquistar no solo la independencia política entendida esta como el derecho al gobierno propio y al establecimiento de la república democrática, sino también la independencia de las mentes. Un país será más libre próspero y seguro en su soberanía en la medida en que cada uno de sus hijos piense y sienta con alma de nación. El elemento esencial en la concepción martiana es que el pueblo no es un ente abstracto e inasible, sino un conglomerado de personas cada una digna de respeto.

Con tales principios se construiría la república justa democrática “con todos y para el bien de todos<sup>214</sup>”. No es casual que el discurso de MARTÍ conocido por su frase final se halla al comienzo de la etapa de fundación del Partido Revolucionario Cubano, organizador de la guerra necesaria para alcanzar la independencia patria. En estas pocas palabras se resume lo esencial del programa de la nueva ordenación política concebida por el Maestro. Con todos los integrantes de la nación debía alcanzarse la patria independiente. Solo quedarían excluidos quienes se excluyeran por soberbia o por apego obediente al amo extranjero.

La obra de unidad exigía el esfuerzo máximo, pues habrían de juntarse cubanos y españoles, negros y blancos, hombres y mujeres, obreros y propietarios, civiles y militares, los de la Isla y los de las emigraciones. Se hallaban en juego tanto la independencia del país como la nacionalidad cubana; la libertad política como la cultura autóctona; el peligro de continuar siendo colonia de España, como el de convertirse en colonia de los Estados Unidos. Y ante peligros de tal magnitud, no había la ensoñación de lograr la unanimidad en cada propuesta, sino la unión en los objetivos inaplazables: el logro de la independencia nacional, la soberanía popular y la justicia social.

El esfuerzo común se haría con todos los que compartieran estos fines. Cuba debía salvarse de los peligros de la autoridad personal y de las disensiones en que cayeron las primeras repúblicas americanas, por la falta de intervención popular y de hábitos democráticos en su

---

<sup>213</sup>MARTÍ, José, “Los cubanos de afuera y los cubanos de adentro” (*Patria*, 4 de junio de 1892), *OC*, t. 1, p. 480.

<sup>214</sup>MARTÍ, José, “Con todos y para el bien de todos”, *ob.cit.*

organización.

El bien de todos no es una frase ocasional en el discurso martiano. Constituye un objetivo programático. El bien no alude solo al bienestar material, sino a demás a las condiciones favorables para la plena realización espiritual del individuo y la colectividad. Pero es obvio que si n los recursos que garantizan la subsistencia es difícil alcanzar la plenitud del ser humano. Como apunta Medardo VITIER<sup>215</sup>, el bien supone bienes, o, de otro modo, queda infecundo en la contemplación. En la proposición martiana, lo material está conciliado con lo moral, pues su logro no se proyecta hacia fines egoístas, sino para la satisfacción de todos. Y esta expresión no alude a la colectividad abstracta, sino a la suma de los individuos.

Al expresar los objetivos a alcanzar en la república, MARTÍ habla -agrega VITIER- sobre el bien de cada uno, no a la referencia vaga de lo colectivo. La revolución habría de propiciar que cada ciudadano alcanzara una vida digna, no mediante un ilusorio igualitarismo económico nivelador, sino por el trabajo y el esfuerzo de cada cual. La revolución habría de lograr que el bien fuese de todos, no de un grupo de favorecidos que justificaría su encumbramiento por supuestos servicios a la sociedad. En realidad, estos constituirían verdaderos portaestandartes del más feroz individualismo, porque se practicaría a nombre del colectivismo.

El núcleo central del discurso martiano se resume en las siguientes palabras: “yo quiero que la Ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre (...) o la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás; la pasión, en fin, por el decoro del hombre, -o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Para verdades trabajamos, y no para sueños<sup>216</sup>”.

Evidentemente, el vínculo político participativo que suponía el concepto romano de ciudadanía, implícito en el más amplio concepto de nación romana- “*Roma communis nostra Patria est*”. (Modestino, Digesto, 50,1.33) - aparece en el pensamiento martiano. MARTÍ pretendía, en resumen, una transformación de la sociedad cubana para lograr una verdadera República, en la que la participación del ciudadano fuera decisiva en las decisiones estatales,

---

<sup>215</sup>VITIER, Medardo, “*Doctrina social. III*”, Valoraciones, Universidad Central de Las Villas, Departamento de Relaciones Culturales, 1960, t. I, pp. 424 y 425, respectivamente; el otro fragmento es de “*Doctrina social. I*”, *ob.cit.*, p. 420.

<sup>216</sup>MARTÍ, José, “Discurso en Tampa”, *O. C.*, t. 4, p. 270.

concernientes a todo el pueblo.

Como acotara VALDES LOBAN<sup>217</sup>, la polémica contraposición entre el modelo anglosajón y el romano-latino no fue del conocimiento del apóstol. Y por tanto, no fue objeto de su estudio ni de su sistematización teórica, doctrinal o práctica. Pero eso no niega que MARTÍ, en algún momento como hombre de leyes y de acción revolucionaria por la fundación de una república, se pusiera en contacto y profundizara en temas de la teoría del Derecho Público, que le sirvieron de formación como jurista. El eje cardinal para el logro de la república democrática era el principio de la soberanía popular.

Para FERNÁNDEZ BULTÉ<sup>218</sup>, sería demasiado arriesgado afirmar que MARTÍ abandona el modelo *iuspublicístico* montesquiano y se acerca al roussoniano. Pero resulta claro que se aleja casi absolutamente del pensamiento liberal burgués y asume una praxis de compromiso con la independencia nacional. En ella, está inmersa la aspiración de una perspectiva profundamente popular, americana, indígena incluso, que se rebelaba contra los moldes europeizantes y también contra las tendencias de mimetismo con respecto al gran vecino del norte.

En resumen el pensamiento republicano del apóstol se asienta en los siguientes principios<sup>219</sup>:

- a) La República se estructura bajo el principio irrestricto de la libertad plena del hombre como expresión de la soberanía popular.
- b) La República se basa en la más amplia participación ciudadana en los asuntos del gobierno.
- c) La República se asienta en la unidad de poder y ejercicio del mismo en cumplimiento de los más altos fines públicos y no de capas, sectores o clases sociales.
- d) La República debería surgir como resultado lógico del desarrollo del país, no pudiendo convertirse en una copia o mera traspolación de formas o modelos foráneos, ajenos o inviables en la realidad concreta del siglo XIX.

En el Manifiesto de Montecristi, firmado por MARTÍ y GÓMEZ el 25 de marzo de 1895, se plasmó el programa revolucionario del Partido, se afirmó la línea separatista y se fijaron las bases republicanas de lo que sería el constitucionalismo posterior de Jimaguayú y La Yaya.

---

<sup>217</sup>VALDÉS LOBÁN, Eurípides, “El constitucionalismo latino y la república martiana, artículo publicado en las *Memorias del XVIII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, pp. 250-253.

<sup>218</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Estudios sobre Historia del Derecho en Cuba*, ob.cit, p. 16.

<sup>219</sup>VALDÉS LOBÁN, Eurípides, ob.cit.

En el documento se reiteran los conceptos democráticos de pueblo y de República, y aunque no trazaba un esquema de gobierno, insistía en hallar “formas viables”, “de sí propia nacidas”, “que le aseguren en la unidad y vigor indispensable a una guerra celta, e l entusiasmo de los cubanos, la confianza de los españoles y la amistad del mundo”<sup>220</sup>. El mismo espíritu democrático del documento, permite inferir la omisión en cuanto a una específica forma de organización gubernamental. El Manifiesto traza pautas generales y fundamentales de la República democrática. Pero en obediencia al criterio democrático, evidenciaba el reconocimiento de que el acuerdo de una forma de gobierno era una función de la mayoría, máxime al existir diversos criterios en torno a las relaciones entre el poder civil y el poder militar. MARTÍ y GÓMEZ conocían perfectamente esta problemática, y prefirieron diferir esta cuestión para un momento posterior y más oportuno. No obstante, hacían referencia a principios democráticos y a la repulsa a la tiranía como postulados a seguir por la nueva organización política de la República de Cuba en Armas.

Pero JOSÉ MARTÍ, cerebro y alma de la guerra de 1895, murió apenas comenzaba la guerra. Pudo pensarse que al morir él moriría su pensamiento. Pero no fue así. La labor de MARTÍ había sido tan intensa, su prédica constante acerca de la necesidad de crear una república democrática había cavado tan hondo en las entrañas del pueblo, que aquellos de quienes pudo temerse que no estuvieran de acuerdo con él, fueron los primeros en mover los resortes necesarios para poner en práctica sus ideas.

En la Constitución de Jimaguayú se trató de evitar los errores que se habían cometido en la de Guáimaro. En la asamblea elegida al efecto, había hombres de 1868 que recordaban los inconvenientes de haber puesto la dirección de aquella guerra en manos de una cámara de representantes. Pero también había hombres nuevos, quienes pretendían demostrar que la guerra no era obra exclusiva de uno o varios caudillos, sino de todo el pueblo.

Estos posibles inconvenientes se solucionaron en la constitución de Jimaguayú, separando el mando civil del militar y depositando el poder civil en un consejo de gobierno que ejercería al propio tiempo funciones ejecutivas y legislativas. El consejo de gobierno no tendría intervención en las operaciones militares que estarían en manos del general en jefe<sup>221</sup>.

---

<sup>220</sup>MARTÍ, José. O.C., *ob. cit.* T.IV. p.93

<sup>221</sup>*Cfr.* PICHARDO, Hortensia, *ob.cit.*, tomo I, p 496.

La Constitución de Jimaguayú, en su Cláusula de Reforma, establecía la duración provisional de la misma hasta el término de dos años. Pasado este tiempo, sin que se hubiera obtenido la independencia, debía reunirse nuevamente la Asamblea de Representantes para aprobar la continuidad de esa Constitución o la aprobación de otra nueva<sup>222</sup>.

Asimismo se significaba que dicha Asamblea de Representantes se convocaría antes del aludido término de dos años, ante el supuesto caso de que se alcanzara un Tratado de Paz con España. Pero únicamente, sobre la base de la independencia absoluta de Cuba.

En cumplimiento del artículo 24 de la Constitución de Jimaguayú, el Consejo de Gobierno, en sesión del 25 de octubre de 1896, convocó a la redacción de una ley electoral a la cual se ajustaría la elección de los representantes para la llamada Asamblea de Representantes. Es decir, a una virtual asamblea constituyente que modificaría la constitución vigente o redactaría una nueva, dado que iban a transcurrir los dos años de su vigencia y aún no se había conseguido la independencia.

La Asamblea de Representantes fue electa, y en función constituyente, aprobó y promulgó la nueva Constitución de La Yaya, el 29 de octubre. Esta nueva Constitución, preparada con más tiempo y que disponía de la experiencia jurídica y política de las anteriores, sin lugar a dudas, mucho más completa en el orden jurídico-constitucional.

Ante todo, su articulado duplica al de la constitución de Jimaguayú, puesto que dispone de 48 artículos. Es, además, la primera constitución mambisa que dispone de lo que se conoce en la doctrina constitucional como parte dogmática, es decir, un conjunto de preceptos o artículos en que se recogen los derechos fundamentales de los ciudadanos entre los cuales se declara explícitamente el sufragio universal en su artículo décimo<sup>223</sup>.

La Guerra de Independencia, que había sangrado a Cuba durante casi medio siglo, estaba francamente decidida por el triunfo inminente de las tropas libertadoras cubanas. Pero en aras de evitar esa victoria, se interpuso el imperialismo norteamericano.

La guerra, convertida por la intervención norteamericana en Guerra Hispano-Norteamericana-Cubana, concluyó con la suscripción del Tratado de Paz, firmado en París sólo entre Estados Unidos y España. En dicho Tratado, en el que es necesario repetir que fueron excluidos los cubanos, se dispuso la renuncia por parte de España de todo derecho de poder o soberanía y

---

<sup>222</sup>Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Introducción a la Constitución Cubana*, ob.cit, pp. 3 y 4.

<sup>223</sup>PICHARDO, Hortensia, ob.cit, Tomo I, p. 502.

propiedad sobre Cuba. El artículo primero declaraba que “España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba<sup>224</sup>”. Sin embargo, la letra del Tratado no cedía Cuba a Estados Unidos, sino que establecía una suerte de protectorado de ese país sobre el nuestro, con evidente sentido de provisionalidad y dejando implícito que se preveía la constitución de un futuro gobierno cubano independiente.

De ese modo, comenzó la primera intervención norteamericana en Cuba, durante la cual se aprobó la Constitución de 1901 y a partir de ella y de la Enmienda Platt, los Estados Unidos iniciaron la primera forma de dominio neocolonial en el estadio imperialista del capitalismo.

Esa Enmienda Platt era un triste documento en que quedaba plasmada la condición dependiente, semicolonial, de Cuba con respecto a Estados Unidos. Algunos de los preceptos de aquel documento que se convirtió en Apendice de la Constitución de 1901 eran verdaderamente denigrantes para la soberanía popular y la dignidad del pueblo cubano.<sup>225</sup> A tal punto que LAZCANO Y MAZÓN<sup>226</sup> afirma que si bien los Estados Unidos reconocen la continuación de la soberanía definitiva de la República de Cuba, consiente en que durante el período que Estados Unidos ocupe el territorio, puede ejercer jurisdicción y señorías completas.

En concordancia con BULTÉ<sup>227</sup>, en el plano *iuspublicístico* la Constitución se apegó al modelo defendido por MONTESQUIEU, es decir, el modelo anglosajón, fundado en la representación y la repartición de poderes. Es claro que su modelo antagónico, el roussoniano, no tenía influencia significativa en aquellos contextos.

Sin embargo, es necesario consignar que no obstante esa adhesión al modelo de MONTESQUIEU, la Constitución declara que la soberanía pertenece al pueblo, del cual dimanar los poderes públicos. Asimismo, se asume la elección directa de todos los cargos, salvo los de Presidente, Vicepresidente y los Senadores, los cuales se eligen en votación de segundo grado. Sin embargo, esa es la única facultad atribuida al pueblo para la intervención en el ejercicio

---

<sup>224</sup>La Orden Militar No.100 de 14 de abril de 1902 publica copia fiel de la Constitución de la República de Cuba, adoptada el 21 de febrero de 1901 y su apéndice de 12 de junio de 1901, tal como le fue presentada al Gobernador militar por la Convención Constituyente. Gaceta de la Habana de 14 de abril de 1902, *Vid*, en BORGES, Milo A., *Compilación Ordenada y completa de la legislación cubana de 1899 a 1950*, segunda edición, Vol. I, Editorial Lex, La Habana, Cuba, 1952, p. 96.

<sup>225</sup>*Vid*. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Introducción a la Constitución Cubana*, (Artículo inédito), p. 7.

<sup>226</sup>LAZCANO Y MAZÓN, Andrés M., *Las Constituciones de Cuba*, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952, p. 1039.

<sup>227</sup>*Vid*. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Inspiración, contenido y significado de la Constitución de 1901*. Conferencia en la Sala Fray Bartolomé de las Casas, (Artículo inédito) pp. 16 y 17.

del poder, ya que dicho texto constitucional sólo reconoce la iniciativa estatal en la formación de las leyes en su artículo 61, pautando que la iniciativa legislativa se ejercerá por cada uno de los Cuerpos Colegisladores indistintamente.

El segundo elemento de influencia era el imitismo del que no podían escapar algunos constituyentes. Es evidente que en algunos estaría presente la continuación de las tradiciones constitucionales mambisas. Pero predominaron aquellos que creían encontrar la perfección constitucional en el modelo hamiltoniano de los Estados Unidos.

No es demasiado difícil encontrar las huellas directas de la constitución norteamericana en la de 1901. Incluso, a la hora de diseñar el Ejecutivo, se abandonaron las experiencias de Jimaguayú y La Yaya y se fue al sistema presidencialista unipersonal. Este ubicaba a un presidente con amplísimos poderes, que no se integra en un gabinete ministerial, sino que tiene en los Secretarios- nombre que se otorga a esos ministros-, como una suerte de cuerpo asesor, al cual no tiene que reunir como tal cuerpo orgánico.

El modelo implantado por la Constitución de 1901 no diseñó suficientes vías de participación que implicaran la posibilidad real de la ciudadanía de tomar parte en persona en los procesos formales de toma de decisiones. La Constitución cubana de 1940 vendría a ser, por tanto, elemento mitigador de las insuficiencias y contradicciones del sistema representativo, que invariablemente desembocó en condiciones de no identificación de los representantes con los representados, no sólo en Cuba sino en el resto de Latinoamérica<sup>228</sup>.

Parafraseando a AGUIAR DE LUQUE<sup>229</sup>, se asiente *mutatis mutandi*, que la Constitución Cubana de 1940 estableció por primera vez en América Latina vías alternativas, republicanas y no oligárquicas de participación del ciudadano en procesos colectivos. Estas vías tenían un ámbito muy heterogéneo. Sin renunciar a la democracia directa ni a la utilización de institutos representativos legados por el constitucionalismo precedente, reducen *de facto* el monopolio de la vida política ostentado por la clase política profesionalizada<sup>230</sup>. Tal es así que el texto reconoce los siguientes principios y mecanismos:

---

<sup>228</sup>La Constitución fue publicada en Gaceta Oficial de 8 de julio de 1940. Vid, en BORGES, Milo A, *Compilación Ordenada y completa de la legislación cubana de 1899 a 1950, ob.cit*, p 4203.

<sup>229</sup>AGUIAR DE LUQUE, *Democracia directa y Estado constitucional*, EDERSA, Madrid, 1977, p. 70.

<sup>230</sup>Max Weber y Joseph Schumpeter fueron los primeros exponentes de la teoría de la democracia, a quienes les seguiría en la década del 50 del siglo XX el cientista norteamericano Robert Dahl. Todos compartían una concepción de la vida política en la que había poco margen para la participación democrática. Sus obras tienden a afirmar un concepto muy restrictivo de la democracia concibiendo ésta como un medio para escoger a los encargados de adoptar las decisiones y para limitar sus excesos. Para Weber el electorado era en general



- ✓ Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.(artículo 1)
- ✓ La soberanía reside en el pueblo y de éste dimanar todos los poderes públicos.(artículo 2)
- ✓ La soberanía popular se expresa a través de los siguientes procedimientos:
  - Referendo nacional: origen estatal y carácter decisivo de sus resultados: (artículo 98)
  - Referendo municipal: origen estatal y carácter decisivo: artículo (219 d)
  - Iniciativa legislativa popular: Se le confería la facultad a diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores. Origen popular pero mediada por la valoración de los cuerpos colegisladores. Artículo (135 f).
  - Iniciativa popular normativa a nivel municipal. Se concedía el derecho de iniciativa a un tanto por ciento de los ciudadanos del municipio, para proponer acuerdos al Ayuntamiento. Si éstos rechazaren la iniciativa o no resolvieren sobre ella, deberán someterla a la consulta popular mediante referendo para que la ciudadanía decida sobre la pertinencia del proyecto. Origen popular carácter decisivo.
  - Revocación del mandato político contra los gobernantes locales convocado por un tanto por ciento de los electores del Municipio, en la forma que la Ley determine. Origen popular y carácter decisivo<sup>231</sup>.

Fue, en síntesis, una Constitución republicana- democrática, aún burguesa, pero avanzada, progresista, la más avanzada de América en esos momentos y continuadora de la historia constitucional cubana. Como bien señalara HERNÁNDEZ CORUJO” ( ...) el Derecho Constitucional de cada país, es pues, la historia de las transformaciones, de instituciones políticas a través de la historia misma”<sup>232</sup>

Sin embargo, fue evidentemente por minorizada y paradójicamente dejó la regulación de muchas de sus preceptivas a posteriores leyes complementarias que nunca llegaron a

---

incapaz de discriminar entre políticas y únicamente capaz de hacer algún tipo de elección entre posibles líderes. Por lo tanto describe la democracia como un terreno de prueba para los líderes potenciales. La democracia es como el mercado un mecanismo institucional para eliminar a los más débiles y para establecer a los más competentes en la lucha competitiva por los votos y el poder. Para mayor información, *vid*, WEBER, Max, *Economía y Sociedad*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1971. Tomo I, p. 70.

<sup>231</sup> El articulado fue tomado de BORGES, Milo A, *ob.cit*.

<sup>232</sup> HERNÁNDEZ CORUJO, Enrique, “Las transformaciones del Derecho Constitucional Cubano desde el 12 de agosto de 1933”, en *Revista Cubana de Derecho*, Sección Doctrinal, Imprenta de F Verdugo, Habana, p. 276.

promulgarse, lo que hizo de ella una Constitución frustrada, llena de expectativas y esperanzas incumplidas<sup>233</sup>.

En el Programa del Moncada, se había establecido la restauración de la Constitución de 1940 como uno de los objetivos inmediatos de la revolución triunfante. Y se comprobó cómo en el mes de febrero de 1959, el poder revolucionario aprobó un nuevo texto constitucional, denominado Ley Fundamental.

La etapa democrática revolucionaria, antiimperialista y agraria de la Revolución da lugar a la nueva Constitución. Desde el punto de vista de la participación del ciudadano en el gobierno de la República-objetivo central de este estudio-, se mantuvo el principio de soberanía popular concretado en instituciones tales como el referendo nacional con origen estatal y carácter decisivo (artículo 98); la iniciativa legislativa popular (artículo 122 inciso e) e introdujo el referendo municipal con origen popular y carácter decisivo en materia de segregación del territorio en dicho nivel (artículo 188).

### **II.3 La recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el actual diseño de la participación política del ciudadano en la República de Cuba. La participación ciudadana como base epistémica fundamental.**

Desde la fase introductoria de esta investigación se dejó sentado que las pretensiones del presente análisis no iban en caminadas a proponer la aplicabilidad mimética de principios e instituciones de participación romanas en un contexto de relaciones políticas, económicas y sociales distantes de aquella formación esclavista.

La esencia del presente estudio se encuentra en la valoración de la recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el actual diseño de la participación política del ciudadano en la República de Cuba. Este proceso de recepción se evaluó desde el punto de vista funcional del modelo participativo cubano, o sea, desde las instituciones y mecanismos de participación del ciudadano.<sup>234</sup>

---

<sup>233</sup>FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Historia del Estado y el Derecho en Cuba*, ob.cit, p.298.

<sup>234</sup>Los límites de la presente investigación, como quedó declarado en su introducción, se encuentran en el análisis de la participación política del ciudadano en el diseño político-jurídico cubano actual desde una mirada romanista. Sería objeto de otra investigación el estudio del modelo republicano desde el punto de vista estructural, *verbigratia*: de los aparatos e instituciones del poder del Estado que hacen de nuestra forma de gobierno, una República.

El estudio se abocó, entonces, a un análisis del republicanismo del diseño político-jurídico de la participación del ciudadano en Cuba. Se buscaron los elementos de base, de principios, de fundamentos republicanos que engarzan con la participación ciudadana en la formación de la ley y en el proceso de elección-revocación de los mandatarios. Para ello, hubo que cuestionarse por qué la participación política es republicana, qué no es republicano en el diseño cubano y dónde se deben perfeccionar las instituciones para ser coherentes con los principios del republicanismo democrático legados por la historia constitucional cubana, y principalmente, el pensamiento político y jurídico de José MARTÍ.

Entonces, sobre la base del diseño político-jurídico de la participación ciudadana y amparándose en las normativas, y a constitucionales u ordinarias, realícese un análisis casuístico de aquellos principios del iusrepublicanismo romano que se han recepcionado en la República de Cuba:

a) La República es la organización política de un pueblo.

Existe una justa, total e insoslayable sinonimia entre Revolución y República. Es imposible hablar de pueblo cubano si en su concepto ex acto no su byace el rasgo sustancial de revolucionario. La idea de nación cubana carece igualmente de sentido sin el vital complemento revolucionario que fue la lucha por una República democrática, cuyas bases se asentaron en la más amplia participación ciudadana en todos los niveles de ejercicio del poder. Esta perenne aspiración de las gestas por la independencia de Cuba, responde al principio romanista de que la República es la organización política de un pueblo organizado en los diferentes espacios de la estructura estatal.

Tal ha sido la ponderación de la participación ciudadana, como base epistémica del modelo patrio, que recuerda CUTIÉ MUSTELIER<sup>235</sup> cómo desde la Ley Fundamental de 1959 se declaró punible todo acto por el cual se limitase al ciudadano de participar en la vida política de la nación. Por ello el estudio del diseño de la participación ciudadana en el Estado cubano y su potencial para promoverla, y la recepción del referente del republicanismo democrático romano para la cultura política cubana, se convierten en la vocación del análisis.<sup>236</sup>

---

<sup>235</sup>CUTIÉ MUSTELIER, Danelia, “El sistema de las garantías de los derechos humanos en Cuba”, *Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2000, p. 73

<sup>236</sup>Cfr. GUANCHE, Julio César, “La participación en el Estado Cubano”, en *Revista Temas* no 70, abril-junio de 2012, Ediciones Caribe, La Habana, Cuba, pp. 69 y ss, y HERNÁNDEZ MAS, Orestes, “El Constitucionalismo

En el proceso de debate y consulta popular para la aprobación del texto constitucional de 1976<sup>237</sup> una de las discusiones giró en torno al nombre de la República. Entre los varios nombres propuestos, el más repetido y que tuvo más partidarios fue el de República Socialista de Cuba. Estas proposiciones no fueron aceptadas por las siguientes razones: “1) porque el nombre de la República de Cuba tiene sus raíces en la tradición progresista y patriótica de nuestro pueblo y no es incongruente con nuestro actual sistema social; 2) porque el artículo 1 definiría, conforme a la teoría marxista-leninista, el tipo —socialista— y la forma —República— de nuestro Estado; 3) porque añadir al nombre el calificativo de socialista, que ya consta al determinarse el tipo de Estado, sería redundante e implicaría trámites y

---

Revolucionario Cubano y su abandono en la República Neocolonial”, en *Revista Cubana de Derecho* / Año 4 – Enero-Junio, 1975 – No.9, p. 121.

<sup>237</sup> El sentido participativo en el Estado cubano, adquirió su nivel más alto durante la discusión de la Constitución de 1976. El proyecto constitucional fue debatido por el pueblo reunido en sus diferentes organizaciones y en cada centro de trabajo. Participaron en las aludidas discusiones 6, 216,981 ciudadanos, que propusieron un total de 12,883 enmiendas al proyecto originalmente presentado; sugirieron 2,343 adiciones al mismo, las cuales fueron apoyadas por 91, 861 votos, amén de otros 64,020 votos que se otorgaron a otras propuestas. Refiere ZALDÍVAR ABAD que “para un análisis cronológico e integral de los acontecimientos, decisiones, e instrumentos políticos y jurídicos que condicionaron la elaboración y ratificación de la Constitución de la República de Cuba en 1976 y sus características deben tenerse presentes: *Revista Cubana de Derecho*, No.9, 10 y 11, años 4 y 5; GARCINI GUERRA, Héctor, “La Constitución del Estado Socialista Cubano”, *Revista Cubana de Derecho*, No. 12, Unión Nacional de Juristas de Cuba, 1976; ÁLVAREZ TABÍO, Fernando, *Comentarios a la Constitución Socialista*, 1988, capítulo VII, pp. 144 y ss; RAPA ÁLVAREZ, Vicente, “Acerca de la Constitución de 1976”, *Revista Jurídica*, No. 6, Ministerio de Justicia de Cuba, 1985; HERNÁNDEZ MÁS, Orestes, Discursos, Artículos y Documentos sobre Derecho Constitucional, 1982; VEGA, VEGA, Juan, *Derecho Constitucional Revolucionario en Cuba*, 1988, capítulo VII, pp. 144 y ss; VILLABELLA ARMENGOL, Carlos M., *La Constitución cubana de 1976 y el sistema de Derecho. Breves consideraciones*, 1997; DEL RÍO HERNÁNDEZ, Mirtha A., *Tesis Doctoral*; PRIETO Valdés, Martha, “Reflexiones en torno al carácter normativo de la Constitución y “La Reforma de la Constitución Cubana de 1976” en PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette y PRIETO VALDÉS, Martha (comps), *Temas de Derecho Constitucional Cubano*, 2006. Vid. ZALDÍVAR ABAD, Martha Loyda, “Poder y Proceso Constituyente: hacia la legitimidad democrática de la Constitución”, *Tesis presentada en opción al grado científico de doctora en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2011, p.69. De nuestra parte, se añade que desde las Ciencias Sociales en general son importantes obras de análisis de este proceso los libros de Jesús GARCÍA BRIGOS, *Gobernabilidad y democracias: Los órganos del poder popular en Cuba. Reflexiones para un análisis a veinte años de su constitución*. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1988; THALÍA FUNG, *En torno a las Regularidades y Particularidades de la Revolución Socialista en Cuba*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1982; OLGA FERNÁNDEZ, *Formación y Desarrollo del Estado Socialista en Cuba*, la misma editorial, año 1988. Importante para el estudio de los procesos participativos en los mecanismos estatales cubanos, está la obra de HAROLDO DILLA, Gerardo González y Ana Teresa VICENTELLI, *Participación Popular y desarrollo en los municipios cubanos*, publicada en la Habana, en 1993 en el Centro de Estudios sobre América. De más reciente publicación están los trabajos “Notas sobre el sistema político cubano” de JUAN VALDÉZ y “Notas sobre la participación política en Cuba”, en PÉREZ GARCÍA, Arnaldo J. (compilador), *Participación social en Cuba*, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), Ciudad de La Habana, 2004. “La reforma de la Constitución Socialista de 1976” de HUGO AZCUY. “Cuba: ¿Cuál es la democracia deseable?” de HAROLDO DILLA, y “El sistema electoral cubano. Aportes para una crítica” de Luis SUÁREZ SALAZAR, publicados en el libro *La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos* que editó el Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1995

modificaciones en elementos ajenos a la Constitución que no parecía conveniente emprender por una cuestión puramente formal, como sería el cambio de nombre<sup>238</sup>”.

Sobre este trascendental hecho histórico, afirmó el Profesor HUGO AZCUY: “Se ha dicho que la diferencia específica del caso cubano respecto a los países socialistas del Este europeo está en que la Revolución Cubana tuvo un carácter genuino, ausente en estos países. En éstos, se dice, el orden político emergió a partir de la ocupación soviética, en relación directa con esa presencia opresora. En el caso cubano se trató de la expresión de un sentimiento nacional largamente contenido, que expresaba el interés y el ideal de la independencia, lo que da a su revolución una legitimidad propia y la presencia de una motivación sustantiva. Ese sentimiento se vincula con el grado y las características que alcanzó la dominación norteamericana en Cuba<sup>239</sup>”.

En consonancia con lo anterior, sentencian FERNÁNDEZ BULTÉ y FERNÁNDEZ ESTRADA<sup>240</sup> que la revolución victoriosa de 1959 fue la culminación de un proceso centenario, montada en un aparato ideológico y ético que también era continuación de la lucha centenaria inspirada en esa tradición profundamente humanista y martiana, y por ende, republicana.

Por ello, asienten que en toda la legislación promulgada con la Revolución, y que fue dando forma al pretendido sistema de Derecho socialista, primó no tanto una nueva raíz técnica y nuevos principios doctrinales, sino un nuevo ideario, un núcleo ético que era paradigmáticamente alternativo al egoísmo, individualismo y patrimonialismo que habían dominado el contenido del Derecho anterior.

Se trata de que las nuevas disposiciones poseían siempre un inequívoco contenido teleológico, en el que era fácil advertir un rumbo de igualdad social, justicia, dignificación del hombre y reivindicación de la soberanía popular. Entonces, brillaba con fuerza especial el Derecho Romano, que no contradecía esos valores éticos que la Revolución estaba levantando.

Subrayan que fueron esas ideas éticas y republicanas, las que alentaron con mayor o menor exageración, la obra constitucional de Guáimaro y hasta la más realista y sosegada de

---

<sup>238</sup> *Revista Cubana de Derecho* / Año 5 – Enero-Junio, 1976 – No.2, p. 64. Discurso del Miembro del Secretariado del C.C. del P.C.C y Presidente de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución, compañero Blas Roca, en la presentación del Proyecto de Resolución sobre el Anteproyecto de Constitución ante el Primer Congreso del P.C.C.

<sup>239</sup> AZCUY, H., *Cuba y los Derechos Humanos*, (Artículo inédito), La Habana 1995, p. 1.

<sup>240</sup> FERNÁNDEZ BULTÉ y FERNÁNDEZ ESTRADA, *Veinte años del código civil cubano, ¿romanista o socialista?* (Nuestro código, América Latina y el Caribe), Estratto da Roma e America. Diritto Romano Comune 24/2007 Muchi Editore, p. 99 y ss.

Jimaguayú y la Yaya, las cuales están presentes como leit *motiv* absoluto en la filosofía de la vida y de la sociedad de JOSÉ MARTÍ.

Siempre ha existido un cierto hilo conductor en la cultura cubana, entre esas ideas y ese aparato ético que se reacomoda y se completa y perfecciona, pero que nunca desaparece.

Asesta VILLABELLA ARMENGOL<sup>241</sup> que la fuente de las Constituciones de la etapa revolucionario-socialista que alcanza hasta nuestros días, alude a textos que no son de un mismo signo o características como en los casos anteriores, sino a documentos que tienen un origen similar. Así, la Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959 y la Constitución de 24 de febrero de 1976, no pueden explicar sin el hilo de continuidad histórica que las hilvana y sin el *iter* de transformaciones que las origina, el cual provoca que exista un interregno en el cual queda a la zaga la superioridad constitucional.

En consecuencia, se concuerda con ÁLVAREZ TABÍO<sup>242</sup> en que el estudio de la ley fundamental de un país no se agota con el conocimiento de su articulado. Es preciso ahondar en el proceso histórico de ese país, en los intereses, necesidades y aspiraciones de las diversas clases y sectores que lo forman, en la correlación de sus fuerzas económica, social y políticamente activas.

Como dijese FIDEL CASTRO en el año 1963 “No son las realidades las que deben adaptarse a las instituciones, sino las instituciones las que deben adaptarse a las realidades<sup>243</sup>”.

Para HERNÁNDEZ MAS, TORRES SANTRAYLL Y FABIO RAIMUNDO TORRADO<sup>244</sup> la República democrática en Cuba se gestó en el apogeo de la era en que la Revolución cubana reconstruía el perfil del socialismo bajo la influencia del URSS, en la ideología del Estado de todo el pueblo o del Estado popular (Ver Anexo 5). Es por eso que el texto de 1976 consagra, entre

---

<sup>241</sup>Cfr. VILLABELLA ARMENGOL, “Historiografía del Poder Político en Cuba: la forma de gobierno en el Constitucionalismo cubano”, *Estudios sobre Historia del Derecho en Cuba*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009, pp. 137-189.

<sup>242</sup>ÁLVAREZ TABÍO, Fernando, *Comentarios a la Constitución Socialista*, Ediciones Jurídicas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1981, p. 12.

<sup>243</sup>CASTRO, Fidel, *Fidel en la URSS*, Ediciones de la Comisión de Orientación Revolucionaria del PURSC, La Habana, 1963, p. 194.

<sup>244</sup>“Nuestra Revolución —subrayó Fidel como Jefe y guía de ella—, con su estilo, con sus características esenciales, tiene raíces muy profundas en la historia de nuestra Patria”. El examen de esas raíces, es ineludible deber revolucionario, como también él ha expresado. El cumplimiento de ese deber ha de estar encaminado hacia el objetivo de dar respuesta a una interrogante impuesta por el proceso revolucionario actual, consistente en cómo han quedado orgánicamente integrados en nuestra realidad social de hoy sus elementos martianos y marxistas-leninistas”, citado por HERNÁNDEZ MAS, Orestes, *ob.cit.*, p. 123. Vid además SANTRAYLL, “Antecedentes históricos y principios que informan el Anteproyecto de Constitución”, en *Revista Cubana de Derecho*/año 4-julio-diciembre, 1975, n.o. 10, p.43; TORRADO, “Apuntes para una aproximación histórica al Poder Popular en Cuba”, en *Revista Cubana de Derecho*/julio-diciembre, 1991, no. 3, p. 8.

otros, los principios de la forma de estado republicana, unitaria y de mocrática, organizada como un sistema de Poder Popular a nivel nacional y local, en provincias y municipios, y sobre la base de la unidad de poder.

- b) La soberanía es la base de la República, es indivisible, indelegable y se ejerce a través de instituciones de participación ciudadanas, desde el nivel municipal y hasta el nivel nacional de ejercicio del poder.

En Cuba se creó un sistema institucional de l Poder P opular – en e l c ual se i ntrodujeron creaciones auténticas no ex istentes ni en el campo socialista real ni en la tradición liberal-matizado con elementos del mandato imperativo. Estas provienen de las posiciones jacobinas más radicales de inspiración romanista: nominación directa de candidatos por el pueblo y su posterior elección directa en Asambleas Municipales; revocación de delegados y diputados; intervención ciudadana en el proceso de formación de la ley.

La C onstitución de 1976<sup>245</sup> tuvo como pr emisa l a e xistencia de un s olo p o d e r: e l p o d e r revolucionario de los trabajadores, aunque a cada órgano de poder, así como a los órganos del sistema judicial y a los administrativos correspondían funciones y tareas específicas y propias.

La entrada en vigor de la Constitución de 1976<sup>246</sup> marca un hito esencial en la historia política y jurídica contemporánea de Cuba y del resto de América Latina. Esa Constitución no sólo consagra en su p arte d ogmática l as g randes c onquistas sociales, p olíticas y eco nómicas

---

<sup>245</sup>Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976 publicada en Gaceta Oficial No.2. Edición Especial de 24 de febrero de 1976.

<sup>246</sup>La Constitución cubana, aprobada en 1976 sufrió tres modificaciones: una de menor entidad mediante la cual se cambió el nombre de la Isla de Pinos por el de Isla de la Juventud; otra reforma esencial en 1992, como resultado de los acuerdos del Cuarto Congreso del Partido, en cuyos cambios, en las condiciones del derrumbe del campo socialista, se encaminaron a lograr, en el más profundo sentido, las adecuaciones económicas que permitieran la reinserción de Cuba en un mundo capitalista hostil, sin dejación de los principios revolucionarios, en el propósito de salvar las conquistas de la Revolución y confirmando nuestra indeclinable adhesión a la opción socialista. Finalmente, en el 2002, ante las nuevas amenazas y presiones del gobierno norteamericano, el pueblo cubano realizó una de sus más enormes y organizadas movilizaciones, en el curso de la cual se recogieron más de ocho millones de firmas de los actores que pidieron u nánimemente que el sistema socialista en Cuba fuera irreversible, que jamás abríamos el camino al regreso del capitalismo y que no aceptaría Cuba ningún cambio constitucional dictado desde posiciones de fuerza o a partir de una invasión extranjera. Esa nueva Reforma Constitucional, marca la actual decisión del pueblo de Cuba de seguir su rumbo histórico, guiados por lo mejor de su tradición y por sus más consecuentes anhelos. Según PÉREZ MILIÁN, las razones principales que pueden conducir a una Reforma de la Constitución son: la necesidad de adaptar la norma constitucional a la realidad, sometida a permanente evaluación; el envejecimiento de la Ley Fundamental por el paso del tiempo, y las lagunas e insuficiencias que se aprecian en su texto a partir de las experiencias logradas durante los años de su vigencia. *Vid.*, PÉREZ MILIÁN, Félix, Motivos para una reforma, en *Revista Cubana de Derecho* / No. 7 – Julio-Septiembre, 1992, p. 3.

logradas durante los años del poder revolucionario, sino que articula, en su parte orgánica, al nuevo aparato del poder, conocido como Poder Popular. Se sigue a sí el principio iusromanista de que la soberanía reside en el pueblo, es indelegable, indivisible y se ejerce a través de instituciones de participación.

El Poder Popular tiene para PÉREZ HERNÁNDEZ<sup>247</sup>, entre otras, dos dimensiones:

1. Fundamento filosófico: Descansa en la concepción roussoniana del poder a partir del cual la voluntad no se enajena ni se delega. Este fundamento se ve en el funcionamiento a través de la unidad de poder, atribuyéndole carácter supremo a la Asamblea Nacional que representa los intereses de toda la nación. A nivel territorial las asambleas locales son los órganos superiores de poder, órganos representativos a los cuales se subordinan la administración y el resto de los órganos. Control horizontal y vertical porque el soberano es el pueblo.
2. Estructura normativa: Se regula la esencia del funcionamiento a partir de la regulación del artículo 3 constitucional, soberanía popular que combina la representación con la participación.

Para FERNÁNDEZ-RUBIO LEGRÁ Y GARCÍA CÁRDENAS<sup>248</sup>, con el establecimiento y la consolidación de los órganos del Poder Popular en Cuba que daron establecidas las vías constitucionales para garantizar la participación del pueblo en la actividad estatal.

Con los órganos del Poder Popular surgen las instituciones representativas del poder del Estado, mediante las cuales se podría darle forma institucional real, regular, más sistémica y sistemática a la participación del pueblo en la función de dirección de la sociedad que se ejerce por medio del Estado.

GARCÍA BRIGOS<sup>249</sup> apunta que uno de los aspectos fundamentales del Estado Socialista es el perfeccionamiento de las formas de representación popular, a fin de garantizar la participación de todos los ciudadanos en la administración de la sociedad. Este proceso comprendió la democratización del sistema electoral y el desarrollo de los principios democráticos de

---

<sup>247</sup>PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette, “*Aciertos y desaciertos del Poder Popular en Cuba*”, ponencia presentada en Simposio Cuba-Alemania “Economía Derecho y Sociedad en el siglo XXI”, celebrado en la Habana, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2013, (Artículo Inédito), pp. 2 y 3.

<sup>248</sup>FERNÁNDEZ-RUBIO LEGRÁ, Ángel, *El proceso de institucionalización de la Revolución Cubana*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985, pp. 57-60 y GARCÍA CÁRDENAS, Domingo, *La organización estatal en Cuba*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1981, pp. 19-23.

<sup>249</sup>GARCÍA BRIGOS, Jesús P., “Los órganos del Poder Popular: forma de organización del Estado socialista cubano”, en *Temas de Derecho Constitucional*, ob.cit, p. 141.



elección, la revocación y rendición de cuentas de los Órganos del Poder Popular conforme a principios republicanos.

En una opinión de BLAS ROCA en entrevista concedida a MARTHA HARNECKER<sup>250</sup> “llegó el momento en que podíamos pasar ya a las instituciones formales, en las cuales la participación constante y sistemática del pueblo estuviese garantizada. Por eso esta organización de los poderes populares no estaba relacionada con una coyuntura económica”.

Es que, tal cual plantea PRIETO VALDÉS<sup>251</sup>, los cambios no se le pueden achacar solo a la situación coyuntural, porque muchos de ellos son resultado de un proceso de perfeccionamiento del Estado, de las instituciones sociales y políticas de la sociedad, así como de las formas de participación popular.

Con ese sentido FIDEL había expresado en el Informe Central al Primer Congreso del Partido, que: “Hoy necesitamos una Constitución, en correspondencia con las características de nuestra sociedad, con la conciencia social, las convicciones ideológicas y las aspiraciones de nuestro pueblo. Una Constitución que refleje las leyes generales de la sociedad que construimos, las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas operadas por la Revolución y los logros históricos conquistados por nuestro pueblo. Una Constitución, en fin, que consolide la soberanía del pueblo y que nos ayude a alcanzar lo que queremos ser mañana<sup>252</sup>”.

En las actas del XI Período Ordinario de Sesiones de la III Legislatura celebrada los días 10, 11 y 12 de julio de 1992, JUAN ESCALONA REGUERA, como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, apuntó: “no me arrepiento ni siento rubor de que algunas frases contenidas en el artículo 1 hubieran estado contenidas en la Constitución de 1940. En este pequeño país se han dado siete Constituciones desde que empezó la guerra en 1868, por ello tomamos con orgullo principios de la Constitución de 1940. Porque lo que decía el artículo 1 de la Constitución de 1976 era “La República de Cuba es un Estado Socialista de Obreros y campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales”. Esa era una copia exacta del artículo 2 de la Constitución Checa y del artículo 3 de la URSS. Entonces nosotros estamos retomando nuestro lenguaje; es decir, república unitaria, democrática y soberana. Ese es nuestro lenguaje constitucional desde 1869”. A lo cual añadió el diputado ARMANDO HART

---

<sup>250</sup> HARNECKER, Marta, *Cuba. Los protagonistas*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1979, p. 430.

<sup>251</sup> PRIETO VALDÉS, Martha, “La reforma a la Constitución cubana de 1976”, en *Temas de Derecho Constitucional*, ob.cit., p. 45.

<sup>252</sup> CASTRO, Fidel, *Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba*, Ediciones del Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido. La Habana, 1976, pp. 1 y ss.

DÁVALOS “si no hay una república basada en la unidad no hay democracia y si no hay máxima participación popular no hay democracia. Por eso no podemos discutir la democracia como algo en abstracto, ajeno a nuestras realidades concretas”. (Véase fragmentos de las Actas Originales de los Archivos de la Asamblea nacional del Poder Popular (ANPP) en Anexo 6)

El sistema funcional cubano de la participación, responde a una realidad que maduró durante los primeros años del ejercicio directo de la democracia y se instaló en las conciencias ciudadanas con algo más que el contenido teórico que pueda inspirarse en las ideas más radicales del siglo XVIII. Poder del pueblo, o soberanía que reside en el pueblo, son términos sinónimos para el constituyente cubano. Pero en ambos casos, denotan esa situación a que se ha hecho referencia: el reconocimiento del principio romanista de que el pueblo no enajena nunca ese poder; el concepto de que todos los órganos del Estado derivan de los poderes que puedan tener del único, indivisible y absoluto poder del pueblo.

Empero, la clave del Poder Popular está, por supuesto, en el carácter democrático de las localidades, es decir, de las municipalidades como reproducción de la institucionalidad republicana. La democracia, como sistema de decisión del pueblo, sólo puede ser montada de abajo hacia arriba. Tiene que partir del ejercicio democrático más puro en los municipios, en las localidades y en los pueblos, es decir, en las bases del sistema estatal.

Uno de los más grandes y perspicaces políticos del siglo XIX y Apóstol de nuestra independencia, JOSÉ MARTÍ, percibió claramente el significado de los municipios, cuando dijo que eran lo más tenaz de la civilización romana en España, y lo más democrático del viejo aparato colonial español. Además, aseguró que a través de los municipios había entrado América en el ejercicio de la libertad, aludiendo sin dudas al sentido profundamente popular, activo y determinante que tuvieron, incluso, en los peores momentos del dominio colonial.<sup>253</sup>

Es entonces en el nivel municipal donde se libra la primera batalla por la democracia y donde cristalizan formas novedosas de participación, bajo la máxima romana de que no existe república sin municipios y sin instituciones de participación a ese nivel.

Es que como señala VILLABELLA ARMENGOL<sup>254</sup>, por la inmediatez entre gobernantes y gobernados que se produce a este nivel territorial, la democracia municipal tiene que rebasar la connotación de la elección-conformación de órganos y perfilarse también en el sentido

---

<sup>253</sup> Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Introducción a la Constitución Cubana*, ob.cit, p. 4

<sup>254</sup> Cfr. VILLABELLA ARMENGOL, Carlos, “Los principios teóricos del Municipio. Su apreciación en la municipalidad cubana”, en *Temas de Derecho Constitucional*, ob.cit, p. 161.

semántico prístino de l t érmino “demokratia” q ue i ndica q ue e s gobi erno e jercido por e l pueblo: no ha y democracia realmente sin Democracia municipal. Solo es en el ámbito local que se desarrolla la vida democrática de un país.

Por eso , est udiosas d el municipalismo co mo PÉREZ HERNÁNDEZ y PRIETO VALDÉS<sup>255</sup>, arguyen, desde una postura republicana y democrática, que el ejercicio del poder por el pueblo no de be c eñirse a s u participación e n l os ór ganos s uperiores d el p oder e statal por ví as representativas. N i b astan las formas u suales d e l a d emocracia d irecta que el constitucionalismo moderno asume. Por lo general, estas son prácticas electorales viciadas que distorsionan l a e xpresión de l a v oluntad pop ular y de slegitiman a los gobe rnantes. L a municipalización de las decisiones es una necesidad ineludible.

Concluyen que cuando se r eferen a la municipalización, su alcance se e xtiende más allá del simple acceso al p oder, q ue n o se d ebe r educir a l as v ías el ectorales, p orque tiene su s cimientos en l a acci ón ci udadana co nsciente, en l os p rocesos d e formulaci ón d e p olíticas públicas y e n l a toma de d ecisiones, a p artir d e l a c onсульта pop ular y d e l a e laboraci ón de agendas que contemplen las demandas populares.

Si se r ealiza un análisis d e l as i nstituciones d e p articipaci ón ci udadana en l a República d e Cuba, y sal vando l as d istancias es paciales y t emporales, p odemos af irmar q ue el d iseño político-jurídico c ubano de la p articipaci ón, desde 1976, a sume e l espíritu de l Modelo Constitucional Romano Republicano y a djetiva el mismo en su sistema político, mediante la Ley Electoral de 1992, la Ley 89 de 1999 sobre la revocabilidad de mandatos, el Reglamento de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, y los estatutos y reglamentos de las organizaciones políticas.

Al si tuarse en el m encionado ar tículo 3 d e l a Mag na C arta, p odemos a firmar q ue el republicanismo c ubano se a propia del pr incipio de s oberanía pop ular al d eclarar que e n l a República de Cuba la soberanía reside en el pueblo.

Ese espíritu de democracia como base de la República, ejercida por los ciudadanos mediante los mecanismos de control del poder público político, es retomado del republicanismo romano por l a C onstituci ón, casi dos m il a ños de spués, por s us valores incuestionables y d e d ifícil superaci ón histórica.

---

<sup>255</sup> Cfr. PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette y PRIETO VALDÉS, Martha, “La descentralización de las decisiones a favor de los municipios. Un reto y una necesidad de los pueblos”, en *Temas de Derecho Constitucional, ob.cit.*, p. 194.

Se plantea en el artículo 68 (inciso b) del texto constitucional, que las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios. Y continúa pautando en el inciso c) que los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento.

Seguidamente se reafirman esos postulados en el capítulo 10: "Sobre los órganos superiores del Poder Popular; específicamente en los artículos 84 y 85, al plantearse que los diputados tienen el deber de desarrollar su labor en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus planteamientos, su gerencias y críticas y explicarles la política del Estado". También se establece la rendición de cuenta del diputado sobre el cumplimiento de sus funciones, ante sus electores y la posibilidad de la revocación del mandato.

En el Reglamento de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, aprobado el 13 de septiembre de 1995<sup>256</sup>, se regula de forma explícita los procedimientos y mecanismos de control directos e indirectos con que cuenta el pueblo para influir sobre el ejercicio del poder público político.

En el capítulo IX se estipula la rendición de cuenta del delegado a los electores. El artículo 60 plantea que el mismo debe realizar este acto de verdadera inspiración democrática romanista por lo menos dos veces al año. Además, el mandatario debe esforzarse por convertir las reuniones en un diálogo, encaminados a proporcionar la participación real de la población en la solución de los problemas de la colectividad.

También se pauta en el artículo 61 el aprovechamiento de los despachos individuales con los electores de su circunscripción de forma semanal, recordando la actuación personal de los magistrados romanos y especialmente los ediles en cargos de la administración de los municipios.

Mientras, el Artículo 64 norma la rendición de cuenta de los delegados provinciales y los diputados nacionales a la Asamblea Municipal, como vehículo intermedio o indirecto de l

---

<sup>256</sup>Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, publicado en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y PRIETO VALDÉS, M., *Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano*, Editorial Félix Varela. La Habana 1999. Además puede verse en ACUERDO-CONSEJO DE ESTADO de 13-9-95 (GOE. No. 4 de 13-9-95, p. 13) contenido del Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y ACUERDO-CONSEJO DE ESTADO de 13-9-95 (GOE. No. 4 de 13-9-95, p. 21) que aprueba los Reglamentos Provinciales y Municipales del Poder Popular, respectivamente, que como documentos anexos forman parte integrante del presente Acuerdo. Deroga las Normas Reglamentarias de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, aprobadas ambas por la Asamblea Nacional del Poder Popular con fecha 5-8-82.

ejercicio del control por el pueblo de las gestiones y actuaciones de estos magistrados. Lo anterior no garantiza de la misma forma el vínculo directo o ligamen que genera el mandato, pareciendo una posición intermedia entre esta forma de contrato consensual bilateral y la representación, instituto más privativo de las relaciones mercantiles idólatradas por la ideología liberal.

Pudiera, sin embargo, hallar su justificación en la complejización en la toma de decisiones en comunidades más densamente pobladas y especializadas en los procesos productivos y de los servicios.

El pueblo puede acudir en última *ratio* a la revocación del mandato que ha entregado a un delegado cuando ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones o ha sido sancionado por delito de los que hacen desmerecer en el concepto público, o ha incurrido en conducta incompatible con el honor de ser representante del pueblo. Se dispone en el artículo 79 de dicho reglamento que los procedimientos para la revocación se determinan por la Ley.

La Ley No. 89 de 1999<sup>257</sup> desarrolla las acciones a realizar para la revocación del mandato de un delegado o diputado del Poder Popular, las causas y consecuencias del mismo.

El artículo 6 (inciso a) establece que los delegados municipales solo pueden ser revocados por los electores de la circunscripción en la que fueron elegidos, apreciándose la democracia directa en este caso, mientras que los provinciales y los diputados nacionales solo pueden ser revocados por las Asambleas Municipales que los propuso. El artículo 7, (inciso b), define al pueblo como facultado para iniciar el proceso de revocación en el caso de los delegados a la asamblea municipal. Por su parte, el artículo 11 estipula el carácter colegiado de la comisión de revocación.

c) Existencia del poder negativo directo contra actos lesivos a la soberanía del pueblo.

Se recoge en el artículo 3 como novedad constitucional el derecho de resistencia<sup>258</sup>, recordándose a aquella máxima romana de que cuando le fueran suprimidas al *populus* sus instituciones de participación como la aprobación y abrogación de la ley, la *intercessio*-elección de los magistrados y la revocación-, les quedaba como último recurso del derecho de resistencia como manifestación del poder negativo directo y de la soberanía popular.

---

<sup>257</sup>Ley 89 de 23 de septiembre de 1999, Ley de revocación del mandato de los elegidos a los órganos del poder popular, publicada en Gaceta Oficial No. 62 Edición Ordinaria de 23 de septiembre de 1999.

<sup>258</sup>*Vid supra*, nota al pie número 52.

Es así que la reforma constitucional de 1992 introdujo el derecho de resistencia, ejercible contra “(...) cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por ella”.

En las actas del XI Período Ordinario de Sesiones de la III Legislatura celebrada los días 10, 11 y 12 de julio de 1992, en su página 14, el diputado FIDEL CASTRO realiza un interesante exposición de motivos fundamentando la inclusión del derecho de resistencia en el texto constitucional, en tal sentido afirma: “Sabido es –dice Fidel– que en Inglaterra en el siglo XVII fueron destronados dos reyes, Carlos I y Jacobo II por actos de despotismo. Estos hechos coincidieron con el nacimiento de la filosofía política liberal, esencia ideológica de una nueva clase social que pugnaba entonces por romper las cadenas del feudalismo. Frente a las tiranías de derecho divino, esa filosofía opuso el principio del contrato social y el consentimiento de los gobernados, y sirvió de fundamento a la revolución inglesa de 1688, y a las revoluciones americana y francesa de 1775 y 1789. Estos grandes acontecimientos revolucionarios abrieron el proceso de liberación de las colonias españolas en América, cuyo último eslabón fue Cuba. En esta filosofía se alimentó nuestro pensamiento político y constitucional que fue desarrollándose desde la primera constitución de Guáimaro hasta la de 1940, influida esta última y a pesar de las corrientes socialistas del mundo actual” ( Véase Fragmentos de las Actas Originales de los Archivos de la ANPP en Anexo 6)

Y recalca FIDEL que sólo al pueblo pertenece la soberanía: una, plena y permanentemente. Permanece siempre en potencia, latente bajo toda constitución derivada de ella.

Comienza FIDEL por plantear el derecho de resistencia en los términos consagrados en el artículo 40 de la Constitución de 1940. Este derecho dice FIDEL “es como un bote salvavidas, que solo se lanza al mar cuando la nave ha sido torpeada por enemigos emboscados en su ruta. Traicionada la constitución de la república y arrebatadas al pueblo todas sus prerrogativas, sólo le quedaba ese derecho que ninguna fuerza le puede quitar, el derecho de resistencia a la opresión, a la injusticia que viene desde tiempos de los romanos”. En el terreno de la política ese derecho corresponde a la colectividad; pertenece al pueblo como único titular de la soberanía: es inalienable, indivisible e imprescriptible.

- d) Dada la complejidad de la ejecución de las decisiones políticas, para el ejercicio efectivo del gobierno de ben elegirse funcionarios específicos de nominados magistrados, cuyos cargos son electivos, responsables, revocables y *ad honorem*.

En el artículo 68 de l mismo texto se definen los y a citados principios de organización y funcionamiento del Estado, planteándose que todos los órganos representativos de poder son electivos, renovables, responsables y revocables, tal cual eran las magistraturas romanas.

El principio de renovación periódica implica que el mandato de los integrantes de los órganos representativos de poder estatal será por un tiempo determinado.

De conformidad con el principio de elegibilidad, los integrantes de estos órganos serán elegidos directamente por todos los ciudadanos o en asambleas representativas de la voluntad de éstos.

El principio de la responsabilidad hace referencia a la obligación que contraen los órganos representativos del poder estatal de rendir cuenta ante sus electores y ante sus órganos superiores del uso que hicieren de sus facultades y de las actividades que desarrollaran dentro de un período previamente fijado.

El principio de revocabilidad, alude a que a los integrantes de estos órganos, podrá revocárseles su mandato en cualquier momento, por los mismos que los eligieron.

El artículo 71 de la Constitución define el carácter libre, directo y secreto de las votaciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y la duración de la legislatura por cinco años. En Roma se había instaurado la elección "libre" y directa de las magistraturas durante la República, pero se hacía públicamente y no en secreto, pues así lo posibilitaban las condiciones políticas y demográficas de la época.

En el aludido artículo 82, del mismo texto, se plantea que la condición de Diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos y que los mismos continúan vinculados para todos los efectos a sus centros laborales, tal como era concebido el *cursus honorum* romano.

Acotaba FERNÁNDEZ BULTÉ<sup>259</sup> que esto es importante no perderlo de vista por que de ello depende un juego de valores y significados en cuanto a los deberes de los elegidos y la vocación para ello, que no tienen nada que ver con los predominantes en el mundo actual, en que se habla incluso, con gran desenfado, de la "clase política". De hecho, para nadie es un secreto, hacer política en el mundo de hoy, es "hacer carrera".

---

<sup>259</sup> *Ídem*

Sin embargo, en los contextos éticos que se derivan de una raigal revolución como la que sacudiera al país, la política es cuestión de todos, es cosa de todos, muy cerca de aquel valor romano de *Respublica*. Por demás, ocupar el poder como se asumió originalmente-a costa de los mayores sacrificios y del empeño de la vida-, no podía ser entendido como un juego de fortuna, sino como deber que se asume a plena responsabilidad.

Por supuesto que la comprensión de ese particular exige analizar las bases funcionales de los órganos estatales cubanos, aunque no sea el objetivo esencial de este estudio. Esto no se trata, ni remotamente, de una simple declaración retórica. Por el contrario, cuando se regulan las facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), se establece claramente, en el Artículo 82 del texto constitucional, que la condición de Diputado de esa Asamblea no entraña privilegios personales ni beneficios económicos, y que durante el tiempo de su desempeño efectivo en esas funciones, los diputados perciben el mismo salario o sueldo de su centro de trabajo y mantienen el vínculo con éste, a todos los efectos.

Pero de inmediato, de modo explícito y rotundo, el Artículo 84 de la misma Constitución deja claro que esos diputados no disponen de una representación a la manera usual, sino de un simple mandato. Dice el aludido artículo “Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus planteamientos, su gerencias y críticas, y explicarles la política del Estado. Asimismo rendirán cuenta del cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en la ley”. El artículo siguiente, el 85 dispone entonces algo que es decisivo en la diferencia entre la representación y el mandato: “A los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular les puede ser revocado su mandato en cualquier momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en la ley”.

En este sentido, ahora es fácil advertir que en ese discurso del diseño se habla reiteradamente de “órganos representativos”, cuando por su naturaleza y control son, por el contrario, funcionarios y órganos sometidos a un mandato popular bastante riguroso, aunque no siempre ese mandato funcione del modo deseado.



#### **II.4 Principales líneas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico en la actual República de Cuba.**

Esta investigación tiene como objetivo argumentar cómo una adecuada construcción teórica de la recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en Cuba, puede contribuir al perfeccionamiento jurídico de la participación política del ciudadano, como esencia del diseño político-jurídico nacional. Para ello, lógicamente, se analizaron las normas jurídicas que están vigentes en materia de participación.

Sin embargo, no se pueden ignorar las pausas que trazó el Sexto Congreso del PCC y las políticas de actualización del modelo socialista cubano a probadas por este, si se tiene en cuenta que uno de los retos fundamentales a enfrentar en los próximos años será la actualización del texto constitucional. En dicho proceso deberán considerarse los principios del iusrepublicanismo romano, provenientes de lo más avanzado y universal de la teoría democrática, cuyos orígenes se remontan al Derecho Público Republicano Romano.

Es por ello que no resulta disonante fundamentar, desde los orígenes y los principios romanistas que ha recepcionado el actual diseño de la participación política del ciudadano, las principales líneas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional.

Como consecuencia de lo anterior, se imponen varias interrogantes: ¿cuáles son las principales líneas políticas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional, de acuerdo a la actualización del proyecto socialista?, ¿cómo se aprecia la presencia o no de los principios del iusrepublicanismo romano en las líneas políticas definidas a partir del Sexto Congreso, de cara a la ineludible actualización de la Constitución y otras disposiciones normativas referentes al derecho de participación?, ¿Qué deficiencias están presentes en la concepción ordenadora de la participación política del ciudadano, que resultan incongruentes con las bases republicanas y democráticas sobre las cuales se asienta, en el diseño político-jurídico nacional?

Esta última interrogante es vital para que no fracase el proceso de cambios. No basta sólo tener en cuenta los fundamentos romanistas presentes en las líneas que han de guiar el perfeccionamiento, sino que también la fundamentación, desde una visión iusrepublicana, ha de proponer modificaciones en la concepción ordenadora de la participación política, para contribuir al perfeccionamiento de la democracia en la República de Cuba.

Estas interrogantes y presupuestos guiarán la fundamentación de las principales líneas que deben conducir al perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional, y que a continuación se analizarán:

- a) Fortalecimiento de la institucionalidad democrática y responsabilidad de los mandatarios en el ejercicio del poder a través del control popular de su gestión.

Entre las principales líneas políticas que trazó el Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el marco del perfeccionamiento, está el fortalecimiento de la institucionalidad. “Por esta razón, la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo incluirá un Subgrupo Jurídico compuesto por especialistas de alta calificación, el cual coordinará con los organismos correspondientes, en estricto apego a la institucionalidad, las modificaciones requeridas en el plano legal para acompañar la actualización del Modelo Económico y Social, simplificando y armonizando el contenido de cientos de resoluciones ministeriales, acuerdos del Gobierno, decretos-leyes y leyes y consecuentemente proponer, en su debido momento, la introducción de los ajustes pertinentes en la propia Constitución de la República”<sup>260</sup>.

Dándose continuidad a lo anterior, la introducción a los objetivos de trabajo aprobados por la Primera Conferencia Nacional del PCC, aprobó como uno de sus objetivos la necesidad de incentivar la participación real y efectiva de la población en la toma de decisiones, así como fortalecer el control popular sobre los órganos competentes<sup>261</sup>.

Para el cabal cumplimiento de las líneas anteriores se requiere que los principios que sustenten el proceso, exhiban un carácter democrático y participativo. Así lo dejó sentada la Resolución sobre el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular el Sistema Electoral y la División Político Administrativa<sup>262</sup>.

---

<sup>260</sup>Informe Central al VI Congreso del PCC. Fuente: Partido Comunista de Cuba. Sitio oficial. [en línea] Disponible en: [http://www.pcc.cu/congresos\\_asamblea/cong6.php/mayo de 2014](http://www.pcc.cu/congresos_asamblea/cong6.php/mayo%20de%202014), p. 21

<sup>261</sup>Objetivo No. 46. Incentivar la participación real y efectiva de la población en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos que estimulen la iniciativa y rindan frutos concretos para el desarrollo local, en aras de mejorar la calidad de vida. Objetivo No. 53. Prevenir, combatir y sancionar con rigor toda manifestación de corrupción, indisciplina, hecho inhumano o ilegal. Fortalecer el control popular, el papel de los órganos competentes y el enfrentamiento de todos ante cualquier manifestación de impunidad. Objetivos de Trabajo del Partido Comunista de Cuba aprobados por la Primera Conferencia Nacional, La Habana, 29 de enero de 2012, p.6.

<sup>262</sup>Disponible en <http://www.cubadebate.cu/especiales/2011/04/18/resolucion-sobre-el-perfeccionamiento-de-los-organos-del-poder-popular-el-sistema-electoral-y-la-division-politico-administrativa/>

Evidentemente, esta proyección está basada sobre fundamentos republicanos y romanistas, que colocan a la soberanía popular y la participación ciudadana como centro del proceso.

Siguiendo a CATALANO<sup>263</sup>, el principio de la soberanía popular en una República democrática como fue la romana implicaba la intervención inmediata de los ciudadanos en el ejercicio del poder popular soberano a través de la institucionalidad democrática. La misma se concretaba en instituciones fundamentales: discusión pública y consulta para la aprobación-abrogación de las leyes y elección-rendición de cuentas-revocación de los mandatarios.

Desde una posición eminentemente crítica en pos del perfeccionamiento de la democracia en Cuba, y sin que constituya una discordancia con la tesis que se defiende de que ciertamente en Cuba existe una República democrática fundada en principios romanistas, cabría preguntarse detenidamente: ¿todas las instituciones de participación, en el diseño político-jurídico cubano actual, pueden ser consideradas instituciones de participación inmediata de cara a la tesis del republicanismo democrático romano?, ¿qué no es republicano al estilo romano en nuestro diseño participativo y dónde debemos perfeccionar nuestras instituciones para ser coherentes con los principios del republicanismo democrático que nos legó nuestra historia constitucional?

Recuérdese que con apego al *étimo* de los términos, se advierte que lo directo presupone una acción que se encamina o dirige a determinados fines, mientras que lo inmediato implica que esa actividad produzca efectos próximos en el tiempo, sin mediaciones impeditivas de su eficacia y del carácter vinculante de lo que decida el soberano, mandante. Toda participación política por antonomasia es directa en tanto se encamina a que los ciudadanos tomen parte por sí mismos en los procesos decisorios, el carácter directo de la participación es un presupuesto de la cualidad de lo inmediato<sup>264</sup>.

De conformidad con los requisitos expuestos y sobre la base de la clasificación de los mecanismos de participación y de la tipología de los institutos participativos en Roma, podemos concluir que para hablar de una institucionalidad democrática de base romanista hay que tener en cuenta que:

---

<sup>263</sup>CATALANO, Pierángelo, *Derecho Romano y América Latina*, ob.cit, p. 55.

<sup>264</sup>GONZÁLEZ QUEVEDO, Joanna, “Empoderamiento, republicanismo democrático y nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en Revista Temas no 70, abril-junio de 2012, Ediciones Caribe, La Habana, Cuba, p. 30 y ss. Además, *vid supra*, p. 47.

Primero: El procedimiento de realización de las instituciones debe provenir “desde abajo” o sea cuando es la propia ciudadanía quien promueve el proceso participativo, o cuando activándola un magistrado o mandatario la decisión del pueblo de aceptarla o no es vinculante (dígase *ad referendum*), *verbigratia*: discusión pública y consulta para la aprobación-abrogación de las leyes y no nominación-elección-rendición de cuentas-revocación de los mandatarios.

Segundo: Aquellas cuya aceptación no está mediada por valoraciones de los órganos estatales o existe una mínima valoración, *verbigratia*: discusión pública y consulta para la aprobación-abrogación de las leyes y no nominación-elección-rendición de cuentas-revocación de los mandatarios.

Tercero: Aquellas que se pueden activar tanto a nivel central de la ciudad de Roma como al interior de cada municipio.

Procédase, pues, a un estudio detallado de las instituciones de participación y véase cuáles con un origen popular exhiben efectos inmediatos y vinculantes en la concepción ordenadora de la participación política del ciudadano en Cuba.

La Constitución cubana, en su artículo 131, regula la participación política de este modo: “Todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular”. Sin embargo, no declara de una manera clara y precisa cuáles serán esas formas de intervenir.

DEL RÍO HERNÁNDEZ apunta que “En este artículo si bien se prevé el derecho a participar en la dirección del Estado, su alcance es limitado, si tenemos en cuenta que reduce la participación a la elección de los representantes, es decir, al derecho al sufragio, si no referirse a otras relaciones jurídico políticas como el control de los representantes y la toma de decisiones públicas. El propio hecho de que se regule dentro del capítulo sobre Sistema Electoral, está reduciendo el derecho de participación a esta esfera, que como hemos dicho en otra oportunidad, es una de las relaciones jurídicas de carácter político en la que debe intervenir el ciudadano, pero no la única<sup>265</sup>”.

---

<sup>265</sup>DEL RÍO HERNÁNDEZ, M. A., “La participación popular en el proceso de toma de decisiones públicas en el ámbito local comunitario en Cuba. Su régimen jurídico”, *Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias Jurídicas*, Facultad de Derecho, Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas, Santa Clara, 2002, p. 85

Similar criterio defiende JUAN RIAL<sup>266</sup> cuando sostiene que existen mecanismos de participación política que vienen desde el modelo romano latino “[...] su objetivo no es la elección de los miembros de los órganos democrático-representativos (legislativo o ejecutivo) sino involucrar al conjunto de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones<sup>267</sup>”.

Dichos institutos participativos, constituyen, entonces, mecanismos de participación política mediante el ejercicio del voto directo y universal y de otros procedimientos legítimos, que involucran a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, fuera ya del reducido marco de la tradicional elección de los miembros de los órganos representativos, como paradigmático de la mal acuñada “Democracia representativa”.

Se asiste, por tanto, a una mala sistemática en el magno texto, pues de su redacción se deriva la consagración de otras formas de participación inmediata de la ciudadanía, más allá de la elección de sus representantes, las cuales no se hallan sistematizadas ni declaradas de forma unívoca en el texto constitucional. Entre ellas, se defiende la participación en elecciones periódicas y nominación de candidatos y en referendos populares, las consultas, la rendición de cuentas, la revocación y la iniciativa legislativa popular.

La Constitución reformada en 1992 y la ley Electoral promulgada a su tenor, establecen dos mecanismos distintos de nominación de candidatos para integrar la estructura estatal: a) los candidatos a delegados de circunscripción son nominados de modo directo a través de propuestas de los electores. Una vez electos integran las Asambleas Municipales del Poder Popular (en lo adelante AMPP). b) los candidatos a los niveles medio y superior (provincias y nación) son nominados de modo indirecto, por las AMPP.

Resulta válido recordar que en Roma la nominación de los candidatos podía provenir de los ciudadanos y de otro ente del aparato estatal, dígase un magistrado o mandatario. Lo que sí era facultad exclusiva del *populus* era la elección y revocación de todos los cargos de elección popular. Esto era factible no sólo en la ciudad de Roma, sino a nivel de los municipios, en los cuales podían ser nominados y elegidos como mandatarios de la curia municipal magistrados con imperio en el nivel central de la ciudad romana.

---

<sup>266</sup>RIAL, Juan, *Instituciones de democracia directa*, en Concha Cantú, Hugo A., *Sistema representativo y democracia semidirecta* (Memoria del VI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional), UNAM, México, 2002, p. 3.

<sup>267</sup>*Ídem*

Incluso, en los inicios de la época imperial, el propio emperador podía ser elegido como primer magistrado. Los magistrados podían ser revocados a iniciativa de los ciudadanos, e incluso en estos espacios municipales se podían someter a consulta proyectos de leyes para la civitas romana. En este último aspecto, nos alejamos del modelo romano-latino en sede de participación popular.

Es que aquí también el ordenamiento desaprovecha las consecuencias del voto directo y se aleja de la inmediatez que debe caracterizar a la participación republicana. Los delegados a las Asambleas Provinciales y los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, son electos directamente por la ciudadanía y rinden cuenta ante ella. Pero serán revocados por las asambleas que los nominaron, no por los electores, lo que resulta consistente con un punto antes argumentado: son agentes de los órganos estatales superiores.

Contradicción, incluso, en cuanto la evolución legislativa del país, ya que desde el XII Período Ordinario de Sesiones de Tercera Legislatura de 29 de octubre de 1992, el presidente de la ANPP, ESCALONA, acotaba: “En ocasión de la aprobación de la Ley electoral 72 se prevé que en una futura Ley de Organización y funcionamiento del Poder Popular en que hablemos del proceso de revocación, tendremos que establecer las normas que fijen la revocación y la rendición de cuentas de los Diputados y Delegados a las Asambleas Nacional y Provinciales, a partir del hecho nuevo de que ya no los elige en votación una asamblea municipal sino que vota directamente la población”. (Véase Fragmentos de las Actas Originales de los Archivos de la ANPP en Anexo 6)

La Ley No. 89 establece que pueden ser revocados, de conformidad con lo establecido: a) delegados a las Asambleas Municipales; b) delegados a las Asambleas Provinciales; c) diputados a la Asamblea Nacional; d) Presidentes y Vicepresidentes de las Asambleas Municipales; e) Presidentes y Vicepresidentes de las Asambleas Provinciales; f) Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional; y g) miembros del Consejo de Estado. (artículo. 3). Al igual que en el modelo romano la revocación podía ser propuesta tanto por un magistrado como por la propia ciudadanía.

La revocación de los cargos en Cuba procede de este modo: a) para presidentes y/o vicepresidentes de las Asambleas Municipales: el Presidente de la Asamblea Provincial (en lo adelante APP) o un delegado a la propia Asamblea Municipal, b) para presidentes y/o vicepresidentes de la APP o del Municipio Especial Isla de la Juventud: el Consejo de Estado

o un delegado a la propia Asamblea, c) para el presidente, del vicepresidente o el Secretario de la ANPP: el Consejo de Estado o un diputado, y d) para un miembro del Consejo de Estado: el Consejo de Estado o un diputado.

Parece una contradicción que la ley no establezca expresamente el derecho de revocación sobre los cargos de presidente y vicepresidentes del Consejo de Estado, electos por la ANPP, cuando la Constitución regula que «los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento». (artículo. 68 c).

Ciertamente, podría considerarse que queda incluida la posibilidad de su revocación en cuanto «miembros del Consejo de Estado». Pero el diseño institucional considera como «presidente de la República» al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y es práctica usual establecer expresamente el derecho de revocación sobre la primera magistratura del país.

De lo anteriormente expuesto se colige que la propia ciudadanía debe estar facultada para promover procesos de revocación contra todos los cargos de elección popular en las diferentes estructuras del nivel estatal. En una futura reforma constitucional, la revocación debe quedar abierta con un carácter inmediato, sin excepción, a todos los cargos públicos electos, pudiendo ser propuesta por un porcentaje de ciudadanos, si endo consecuentes con las bases republicanas del diseño y eliminar lo que parece un defecto de la regulación. Se trataría de ser coherente con la regulación legal del propio diseño.

Las asambleas de rendición de cuentas, también deberían constituir espacios para pronunciar demandas de impacto nacional y para participar de la formulación de líneas programáticas sobre el Gobierno de la nación. Así sean, por ejemplo, las decisiones sobre los programas de gobierno local, provincial y nacional, los cuales no resultan de finidos a través del proceso electoral.

Para GUZMÁN HERNÁNDEZ<sup>268</sup>, la rendición de cuentas es un derecho ciudadano y un deber de los representantes del poder político. En este último caso, encuentra fundamento en el principio de responsabilidad que debe informar a los gobernantes producto de su acción política. La lógica jurídico-democrática indica que a partir de este principio, cada órgano rendirá cuenta en dependencia de la línea de legitimidad (directa o derivada) que los una al pueblo.

---

<sup>268</sup>GUZMÁN HERNÁNDEZ, T. Yan, “Representación en política, instituciones de democracia directa y revocatoria de mandato en Venezuela – Una manera de interpretar el modelo normativo-constitucional venezolano de participación política”, *ob.cit*, pp. 127 y 128.

La rendición de cuentas es la institución de participación inmediata mediante la cual los miembros de los órganos democrático-representativos, públicamente, dan a conocer al electorado de su gestión política a fin de que éste lo evalúe y pueda, a través de otras instituciones, direccionar el mandato representativo y actualizar el interés público. Lo anterior se hará sin perder de vista los límites lógicos.

Las asambleas de rendición de cuentas deben funcionar como una potencial asamblea de ciudadanos al estilo de los comicios romanos, en los cuales se nominaban, elegían y revocaban a los mandatarios y se aprobaban las normas del ámbito municipal. Si se circunscribe la rendición de cuentas como un mero «dar a conocer» la gestión política de los representantes sin más efectos que los que se puedan derivar de esto-, sería reñido inscribirla en el marco del tipo de instituciones que se están analizando. Pero si se concibe en su naturaleza dinámica, a partir de la definición anterior, podría defenderse su calidad de institución republicana inmediata.

La rendición de cuentas sería un momento importante en la lógica sistémica de la participación inmediata, al permitir el control directo del accionar político de los representantes por los representados. Además, contribuiría a que el participante, a partir de que conozca la gestión de los representantes, logre practicar el resto de las instituciones mencionadas con criterios de oportunidad, efectividad y racionalidad.

Si se analiza el referendo vemos que de acuerdo al Diccionario de Derecho Romano<sup>269</sup> el término proviene de la expresión latina *ad referéndum*, que hace alusión a la práctica de referir determinadas cuestiones gubernamentales al pueblo. El vocablo referéndum procede del verbo *refero* (fero-“llevar”; re-“de nuevo”) que significa volver a llevar, en este caso al pueblo, la soberanía que legítimamente posee. Los ciudadanos son los soberanos y su voluntad política se patentiza por medio de mandatarios políticos, pero determinados temas han de someterse directamente al pronunciamiento popular, a referéndum: deben volver al único depositario de la soberanía.

Tal cual se ha podido apreciar, en el Derecho Romano todas las decisiones políticas se sometían a consultas populares. Y el *populus* romano, reunido en comicios, decidía *ad*

---

<sup>269</sup>Vid. VÁZQUEZ, Humberto, *Diccionario de Derecho Romano, palabras, locuciones y aforismos latinos*, Editorial Zavalia S.A, Buenos Aires, 1998, p. 70. Asimismo Vid. GIRÓN GONZÁLEZ, Claudia M., “Tendencias normativas del referendo en cinco países latinoamericanos y retos normativos de su regulación en Cuba”, *Trabajo de Diploma*, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, 2014, p. 10



*referéndum* las normas que se sometieran a su consideración por parte de los magistrados, para quienes sería vinculante lo que decidiera el *populus*.

De ahí nace la idea de que toda consulta popular debe realizarse bajo la forma de un referendo. En tal sentido, en opinión de GARCÍA LAGUARDIA<sup>270</sup>, el referendo es una manifestación de la democracia constitucional, en la que el pueblo organizado participa en el proceso de poder mediante la ampliación del sufragio y el libre acceso a los cargos públicos.

Mediante el referendo, a iniciativa de un órgano democrático representativo o de la propia ciudadanía, se somete al cuerpo electoral a la aprobación o el rechazo de decisiones políticas. CARL SCHMITT, en su obra *Teoría de la Constitución*<sup>271</sup>, precisa que no todos los casos de votación popular (iniciativa popular, plebiscito, etcétera) deben ser considerados como referéndum, sino que debe reservarse para el supuesto en que un acuerdo de la representación popular, sea sometido a consulta de los ciudadanos.<sup>272</sup>

Con apego al criterio de DANIEL ZOVATTO<sup>273</sup> que desarrolla a partir de los criterios de SANTAMARÍA PASTOR y BISCARETTI DI RUFFIA, se considera a la consulta popular como el género, o sea, como mega concepto que engloba al referéndum tal cual sucedía en el modelo *iuspublicístico* romano. Como plantean estos autores, el referéndum implica la participación del pueblo en el proceso legislativo, a través de la consulta directa.

De la lectura del artículo 166<sup>274</sup> de la Ley Electoral de 1992, podría deducirse que el ordenamiento jurídico cubano es conteste con la doctrina a la que asimila al referendo como

---

<sup>270</sup>GARCÍA LAGUARDIA, Jorge M., "Referendo", en *Diccionario electoral*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Primera edición, CAPEL, Costa Rica, 1989., p. 561.

<sup>271</sup>SCHMITT, Carl., *Teoría de la Constitución*, Alianza Editorial, 1992, p. 302.

<sup>272</sup>El referendo ha sido una institución con una preeminencia mayoritaria dentro de los modelos constitucionales. La Constitución de Weimar estableció un procedimiento de referendarios. El referendo constitucional cuando tiene por objeto la aprobación de un texto constitucional, el legislativo para la aprobación de las leyes, el de arbitraje cuando con motivo de la aprobación de una reforma constitucional o de una ley surgen discrepancias entre los órganos del Estado y por lo tanto debe remitirse al pueblo la aprobación o el rechazo de la propuesta, por su parte el revocatorio se estableció para la revocación del presidente y el local para las materias cuyo ámbito de competencia se reduce a dicho nivel estatal. *cfr.* Aguiar de Lique, *ob. cit.*, p. 94 -95. Paradigmática ha resultado la positivación constitucional y legal del referendo en el modelo helvético, el cual desde la Constitución de la Confederación suiza de 1878 concede a los ciudadanos la facultad de poner en marcha la aprobación popular de cualquier decisión legislativa, y cuyo resultado encierra un efecto obligatorio para las cámaras legislativas las cuales no se pueden sustraer de la voluntad popular. Para Duguit el referendo aprobatorio suizo por sus efectos, puede equipararse al derecho de veto existente en algunas constituciones de los Estados Unidos. Al respecto, véase, DUGUIT., L., *Tratado de Derecho Constitucional*, París, 1923

<sup>273</sup>ZOVATTO, "La práctica general de las instituciones de democracia directa en América latina. Un balance comparado: 1978-2000", en CONCHA CANTÚ, Hugo A., *ob. cit.*, p.4.

<sup>274</sup>"Para llevar a efecto el referendo se emplean boletas en las que se expresa clara y concretamente, la cuestión que se consulta al cuerpo electoral (...)"

especie de consulta popular. Sin embargo, de la interpretación del texto de la Carta Magna<sup>275</sup> y del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1996<sup>276</sup>, es deducible la *ratio legis* de reconocer al referendo y a la consulta popular como instituciones diferentes. Por ello, el empleo del término “consulta”, previsto en el artículo 166 de la Ley Electoral de 1992, se hace en su acepción puramente semántica, ya que en el referendo se busca el pronunciamiento popular a través de una consulta a la ciudadanía.

En el ordenamiento jurídico cubano, no existe una clara delimitación entre la consulta popular y el referendo como mecanismos de participación popular. Puede considerarse que la diferencia radica en el carácter vinculante y en la capacidad de autogobierno de la ciudadanía por medio de su intervención activa en la esfera pública. La decisión adoptada vía referéndum es obligatoria. Su puesta en práctica equipara la influencia del pueblo a la de los órganos representativos en la fase de toma de decisiones.

Por su parte, lo decidido en consulta popular-según el tenor literal del artículo 75 (b) del texto constitucional- es únicamente para ver el estado de opinión de los ciudadanos. Lo planteado por el pueblo no tiene fuerza vinculante, es una sugerencia que puede o no influir en la toma de decisión.

Como plantea JULIO CÉSAR GUANCHE: “(...) consulta popular, mecanismo muy empleado en la práctica política cubana. Esta es un tipo de participación consultiva indirecta en la que representantes toman las decisiones finales sobre las materias sometidas a deliberación. (...) Este tipo de participación consultiva indirecta estructura una relación de poder asimétrico entre la ciudadanía y las instancias máximas de decisión, en la cual la base aporta opiniones y propuestas y el nivel superior se reserva su decisión, ejecución, control y evaluación<sup>277</sup>”.

Cónsonamente con lo antes dicho, apunta DEL RÍO HERNÁNDEZ<sup>278</sup> que en aras de perfeccionar la participación popular en la toma de decisiones locales, pudieran incluirse en el

---

<sup>275</sup> Artículo 75 de la Constitución de 1976: “Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: b) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente en atención a la índole de la legislación de que se trate; (...). u) disponer la convocatoria de referendos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la propia Asamblea considere procedente (...)”. (resaltado propio)

<sup>276</sup> Artículos 4 b) y x), 51), 68a) y 72 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1996 publicado en Gaceta Oficial No.48 Ordinaria de 27 de diciembre de 1996.

<sup>277</sup> GUANCHE, Julio César, *Estado, participación y representación políticas en Cuba: Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992*, ob.cit, p.60.

<sup>278</sup> DEL RÍO HERNÁNDEZ, M. A.: “La participación popular en el proceso de toma de decisiones públicas en el ámbito local comunitario en Cuba. Su régimen jurídico”, ob.cit, pp. 137 y 138.

ordenamiento jurídico las *consultas populares* y las *audiencias públicas*, como vías importantes para la participación en todas las fases del proceso decisorio. Y se regularía cómo, cuándo y en qué casos serían necesarias, con el objetivo de estimular su ejercicio como vía democrática.

Sobre la necesidad de la consulta y discusión popular en el proceso de creación legislativa, acota CARRILLO GARCÍA que se requiere que sea "popular", o sea, que en ella puedan participar todos los ciudadanos y que sea "pública", interviniendo en su discusión las instituciones estatales y esa discusión debe ser reflejada en los medios de información<sup>279</sup>. Siguiendo la línea anterior, apunta MÉNDEZ LÓPEZ que dichos requerimientos están relacionados con el principio democrático en su dimensión más amplia, que debe dar lugar en una meditada, discutida, publicitada y ampliamente consultada elaboración de la ley<sup>280</sup>.

Aunque hasta el momento estas no están previstas en normas jurídicas, han sido utilizadas con frecuencia como paso previo a la promulgación de diversas leyes o a la adopción de determinadas decisiones de carácter nacional, (recuérdese las diversas formas de consulta popular y audiencias públicas a través de los parlamentos obreros, de bases en las universidades, et cétera., realizados en los años noventa para la discusión de proyectos legislativos y otros asuntos de interés general, así como la vasta experiencia de consulta directa a las masas en concentraciones populares y a través de los Comités de Defensa de la Revolución en la década del sesenta). El reconocimiento jurídico de estos mecanismos participativos implicaría otorgar legitimidad y fundamento legal a formas democráticas de participación que de hecho se practican y que cuentan con un fuerte respaldo político, pero un escaso respaldo legal, y que son obviamente de inspiración romanista.

Por tanto, se debe definir constitucionalmente el carácter vinculante o no de la consulta. Si bien la consulta popular es promovida desde el propio aparato de poder-tal como ocurría en el Derecho Público Republicano Romano-, lo que la diferencia de aquel es que no queda claro el carácter vinculante de la consulta, desaprovechándose así una importante vía de intervención inmediata de la ciudadanía en el proceso de formación de la ley. Incluso, emitiendo sus opiniones desde el nivel municipal de ejercicio del poder.

---

<sup>279</sup>Cfr. CARRILLO GARCÍA, Yoel, "El proceso legislativo interno en Cuba. Un modelo para su análisis", *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2008, p. 104.

<sup>280</sup>Cfr. MÉNDEZ LÓPEZ, Josefina, "La creación de las leyes en Cuba", *Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 1999, p. 114.

Ahora bien, ciñéndose a lo que es el referendo hoy en Cuba, se debe tener presente que la Asamblea Nacional del Poder Popular puede reformar la Constitución cubana, total o parcialmente, mediante acuerdo adoptado por no menos de dos terceras partes del número total de sus integrantes. Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la ANPP o de su Consejo de Estado, o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por referendo popular. (artículo. 137).

Si los referendos solo pueden ser convocados por la ANPP, estos abarcarán materias de índole nacional, lo cual no potencia su posibilidad de constituirse en mecanismos de democracia inmediata en los ámbitos de provincias, municipios, consejos populares y circunscripciones, para la toma ciudadana de decisiones a tal escala. Es este entonces otro punto de inflexión en el cual nos alejamos del modelo *iusromanista*.

De igual manera, la propia ciudadanía debiese detentar la facultad de proponer la realización de un referendo a nivel nacional. Según la regulación de esa garantía, la ANPP es el único sujeto legitimado para activar el referendo, lo cual reporta un problema: la Constitución transfiere la soberanía desde el pueblo hacia la Asamblea, en cuanto *representante* del primero. Se considera a la Asamblea como el constituyente (1992 artículo. 3), cuando debe serlo la ciudadanía. De esta manera, la Constitución no se entiende como un mandato vinculante del soberano hacia los poderes públicos que solo puede modificar el mandante, el pueblo. Por tanto, se colige que la voluntad constituyente, expresada mediante el mecanismo del referendo, solo puede ser recuperada por la comunidad ciudadana nacional cuando se estime como necesario por la ANPP, puesto que resulta además el único sujeto legitimado para activarlo.

La transferencia de soberanía puede evitarse con la legitimación de otros sujetos — por ejemplo, un número cualificado de ciudadanos — capaces de activar el referendo constitucional; con la elevación de los requisitos que debe cumplir la ANPP para reformar por sí misma la Constitución; con el establecimiento como obligatorios de la consulta previa y/o de la ratificación por referendo de actos normativos que afecten sentidos y significados cuya necesidad de protección se desprenda del texto constitucional.

Respecto a la iniciativa legislativa popular podemos afirmar categóricamente que no nació en el Derecho Romano, si no es de creación francesa, si endo uno de los aportes del sistema romano-francés al Derecho Público. Se trata de una modalidad prevista en el artículo 6 de la

Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Francia revolucionaria de 1789, así como en la Constitución Helvética de 1876 y en la Constitución alemana de Weimar. Por medio de la misma, un determinado número de ciudadanos puede poner en marcha el procedimiento de creación legislativa o modificación constitucional mediante la presentación del consiguiente proyecto normativo, ya sea expresando los principios básicos del mismo (iniciativa simple) o mediante un texto redactado en artículos (iniciativa formulada).

Según GUZMÁN HERNÁNDEZ el procedimiento para la iniciativa popular que se regula en la Constitución de la Confederación Suiza (de 1999, reformada en el 2003), contiene determinados extremos a tener en cuenta para democratizar el instituto de participación directa, y para la iniciativa en sentido general. Los ciudadanos suizos tienen iniciativa para reformar totalmente la Constitución (cantonal), revisar la Constitución Federal y adoptar, modificar o abrogar disposiciones constitucionales y legislativas.<sup>281</sup>

Válido resulta de stacar que toda iniciativa popular de semiboca es un referéndum, configurándose lo que SCHMITT calificó como procedimiento de legislación popular en sentido propio, única forma que la iniciativa popular tenga virtualidad<sup>282</sup>.

Para convertir la iniciativa legislativa popular en instrumento de participación directa es preciso estimular su uso a través de un marco político que la promueva y con la simplificación de los requisitos que le son necesarios.

La iniciativa legislativa califica como mecanismo directo de poder desde la ciudadanía si es promovida por las OSM y por los propios ciudadanos. Para llevar esta última a vías de hecho es requisito indispensable su ejercicio por no menos de 10 mil electores. ( artículo.88). El Reglamento de la ANPP establece los requisitos para el ejercicio de este derecho.

---

<sup>281</sup> Las cuestiones más plausibles del procedimiento de esta institución, tal como se ha comentado a tenor de su regulación en la Constitución de la Confederación Suiza son: primero, el bajo porcentaje que se exige para llevar a cabo la solicitud de una iniciativa; segundo, la institución es válida para los principales actos normativos (Constitución y disposiciones legislativas) y en todo sentido: proposición, modificación y abrogación (esto último técnicamente no es posible para las constituciones); tercero – tal vez lo que más habría que resaltar- la actitud del órgano representativo frente a la solicitud, este podrá en algunos casos, proponer un contraproyecto, ampliando y confiando a la ciudadanía su nivel de valoración política, y en el supuesto de que la iniciativa popular recaiga sobre una disposición legislativa, el órgano representativo, de no acoger la iniciativa, la someterá a votación, traspasando así, la decisión final a la ciudadanía, con lo se demuestra el respeto al principio de soberanía popular y una concepción popular de la política. Cfr. T.GUZMÁN HERNÁNDEZ, Guzmán Hernández, T. Y an, “Representación en política, instituciones de democracia directa y revocatoria de mandato en Venezuela – *Una manera de interpretar el modelo normativo-constitucional venezolano de participación política*”, *ob.cit*, p.118.

<sup>282</sup> SCHMITT, citado por AGUIAR DE LUQUE, Luis, *Democracia Directa y Estado Constitucional*, Edersa, Madrid, 1977, p. 94.

Debe aportarse una fundamentación que exprese las relaciones que son objeto de regulación jurídica, sus objetivos y los presupuestos económicos, políticos y sociales que aconsejan su aprobación; las materias que se regulan y las soluciones que se proponen, con indicación de las modificaciones que se introducen en la legislación vigente; las disposiciones jurídicas que se ordenan o sistematizan y los antecedentes de la materia; las consecuencias económicas previsibles que se derivan de la aplicación de la disposición jurídica propuesta; la enumeración de las disposiciones jurídicas de igual o inferior jerarquía que se modifican, complementan o derogan; la fundamentación del rango normativo de la disposición jurídica propuesta; los resultados de las coordinaciones efectuadas con los órganos y organismos que deben cumplir o hacer cumplir las regulaciones propuestas y las condiciones y mecanismos necesarios que garanticen la aplicabilidad, la efectividad, el cumplimiento y el control de la disposición jurídica cuyo proyecto se presenta.

Si se trata de una propuesta de los ciudadanos, además de la fundamentación antes descrita, deben aportar declaración jurada ante notario, donde se acredite la identidad personal mediante los datos del carné de identidad, así como de la capacidad para ejercer el sufragio (Reglamento de la ANPP). Para convertir la iniciativa legislativa popular en instrumento de participación directa es preciso estimular su uso a través de un marco político que la promueva y con la simplificación de los requisitos que le son necesarios.

De todo lo anteriormente expuesto podemos colegir que el mayor aporte del iusrepublicanismo romano al diseño político-jurídico cubano en materia de institucionalidad democrática, se encuentra en el proceso de nominación-elección-rendición de cuentas y revocación en el nivel municipal del ejercicio del poder.

#### b) Carácter renovable de los cargos de elección popular.

Otra de las principales líneas políticas que trazó el Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el marco del perfeccionamiento, es la renovabilidad de los cargos de elección popular<sup>283</sup>. Así consagra el Informe que el reforzamiento sistemático de la

---

<sup>283</sup>“El reforzamiento sistemático de nuestra institucionalidad, será a la vez condición y garantía imprescindible para que esta política de renovación de los cuadros jamás ponga en riesgo la continuidad del socialismo en Cuba”, *vid* en, Informe Central al VI Congreso del PCC. Fuente: Partido Comunista de Cuba. Sitio oficial. [en línea] Disponible en: [http://www.pcc.cu/congresos\\_asamblea/cong6.php/mayo de 2014](http://www.pcc.cu/congresos_asamblea/cong6.php/mayo de 2014), p. 21. Asimismo véase, Objetivo No. 76. Proyectar la renovación paulatina de los cuadros en los cargos de dirección, estableciendo límites de permanencia por tiempo y edades según las funciones y complejidades de cada responsabilidad.

institucionalidad, será a la vez condición y garantía imprescindible para que esta política de renovación de los cuadros jamás ponga en riesgo la continuidad del socialismo en Cuba. Siguiendo esta misma lógica, se proyecta el objetivo de trabajo número 76 aprobado por la Primera Conferencia Nacional del PCC, limitándose a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales.

Es este el único principio del iusrepublicanismo romano que hasta la actualidad no se había reconocido en el diseño cubano. De consagrarse en una futura reforma, haría de la Constitución cubana un texto de completas bases romanistas en la concepción ordenadora de la participación y del ejercicio del poder.

Recuérdese que en el modelo iuspublicístico romano, el carácter renovable de los cargos de elección popular se erigía en un principio democrático de la *Respublica*. Hace que todos los ciudadanos puedan participar en la gestión de los asuntos públicos, pero admitir que una magistratura fuese ocupada sin límite de tiempo, conculcaba las bases republicanas y además suponía atribuir a uno de los ciudadanos una situación de privilegio.

Para precaverse contra posibles abusos de autoridad de los magistrados, la *Respublica* estableció un término fijo: un año, para el desempeño del cargo, con excepción de la dictadura que duraba un máximo de seis meses. Y la censura, que elegida cada cinco años, duraba un máximo de dieciocho meses (TITO LIVIO 2,1,1). Siguiendo a TITO LIVIO se descubre en (7, 42,2)<sup>284</sup> que el requisito de la anualidad en las magistraturas permanentes, y el principio democrático que tendió a que una misma persona no ejercitase continuamente una magistratura, llegó a plasmarse en la prohibición de la *iteratio*, sancionada por primera vez en el 342 a.n.e. Prohibiéndose así que la misma magistratura pudiese ser recubierta por la misma persona antes de diez años. Ya anteriormente se había prohibido la *iteratio* para la censura, pudiendo ser censor sólo una vez. Del principio de renovabilidad se derivaba la prohibición de acumular cargos de magistrados, en el sentido de que quien desempeñaba una magistratura, no podía desempeñar otra al mismo tiempo<sup>285</sup>.

---

Limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. Objetivos de Trabajo de la Partida Comunista de Cuba aprobados por la Primera Conferencia Nacional, La Habana, 29 de enero de 2012, p.7.

<sup>284</sup>TITO LIVIO, *Desde la fundación de Roma*, ob.cit, pp. 82-84.

<sup>285</sup>TORRENT, Derecho Público Romano y sistema de fuentes, ob.cit, pp. 141-145.

c) Descentralización en el nivel municipal del ejercicio del poder.

Del Informe al VI Congreso del PCC, y la Resolución sobre el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular y el Sistema Electoral y la División Político Administrativa, ha derivado la necesidad de avanzar hacia una paulatina descentralización de facultades, desde el Gobierno Central hacia las administraciones locales<sup>286</sup>. Apuntándose que la integralidad de un proceso de esta naturaleza, demanda variar procedimientos, términos legales y realizar otras adecuaciones en el Sistema Electoral, sobre la base de los principios esenciales que lo sustentan y demuestran su carácter de democrático y participativo, potenciando una mayor autonomía a los municipios.

Ya se ha dicho y se ha analizado, que no se concibe una república de base romanista sin municipios<sup>287</sup>. Ha de recordarse que el municipio supuso la presencia de criterios más flexibles en cuanto al equilibrio entre centralización y descentralización. La relación entre la ciudad de Roma y la vida social y cultural que a l interior del municipio se desarrollaba, contribuyó a que sus habitantes pudieran tener el control de los asuntos locales. Esto denota cierta autonomía, pero sin dejar de mantener una conexión política con la urbe romana y su política centralizadora. Recuérdese que en lo que se refiere a sus funciones, los munícipes eligen y revocan a los magistrados anuales. Además, a prueban los decretos honoríficos del Senado, a prueban y abrogan las leyes, no sólo a nivel municipal sino que, como se vio anteriormente, intervenían en procesos decisorios a nivel de la ciudad de Roma<sup>288</sup>.

Para PÉREZ y PRIETO<sup>289</sup>, la descentralización supone la distribución de los asuntos públicos en dos niveles: el central (estatal) y el local (municipal) para lo cual resulta imprescindible

---

<sup>286</sup>“La comprensión plena de estos conceptos nos permitirá avanzar con solidez y sin retrocesos en la paulatina descentralización de facultades, desde el Gobierno Central hacia las administraciones locales(…)” “El reforzamiento sistemático de nuestra institucionalidad, será a la vez condición y garantía imprescindible para que esta política de renovación de los cuadros jamás ponga en riesgo la continuidad del socialismo en Cuba”, *vid* en, Informe Central al VI Congreso del PCC. Fuente: Partido Comunista de Cuba. Sitio oficial. [en línea] Disponible en [http://www.pcc.cu/congresos\\_asamblea/cong6.php/mayo\\_de\\_2014](http://www.pcc.cu/congresos_asamblea/cong6.php/mayo_de_2014), pp. 14 y 30. Por su parte la Resolución sobre el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular y el Sistema Electoral y la División Político Administrativa establece que la integralidad de un proceso de esta naturaleza, demanda variar procedimientos, términos legales y realizar otras adecuaciones en nuestro Sistema Electoral, sobre la base de los principios esenciales que lo sustentan y demuestran su carácter democrático y participativo, disponible en <http://www.cubadebate.cu/especiales/2011/04/18/resolucion-sobre-el-perfeccionamiento-de-los-organos-del-poder-popular-el-sistema-electoral-y-la-division-politico-administrativa/>.

<sup>287</sup>*Vid supra* los análisis realizados en las páginas 42 y 118 a la 128.

<sup>288</sup>*Vid*. D’ORS, *ob.cit*, p. 148.

<sup>289</sup>*Cfr.* PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette y PRIETO VALDÉS, Martha, “La descentralización de las decisiones a favor de los municipios. Un reto y una necesidad de los pueblos”, en *Temas de Derecho Constitucional Cubano*, *ob.cit*, pp. 196.



armonizar el proceso descentralizador con la unidad de los fines estatales y su fundamento, el centralismo democrático. Es decir, ha de tenerse en cuenta que para el logro de esa armonía, las relaciones funcionales entre los órganos superiores y locales deben desarrollarse teniendo como principios que los inferiores estén bajo el control de los superiores. Y además, que estos últimos garanticen la unidad estatal a través de disposiciones de carácter general y obligatorio que, lejos de limitar, estimulen la iniciativa y responsabilidad de los órganos locales en un actuar más autónomo.

VALDÉZ PAZ<sup>290</sup> señala que esta cultura se relaciona con el interés de los sujetos y actores políticos de participar en las cuestiones públicas y colectivas, de manera más o menos comprometida, todo lo cual supone una cierta concientización, la identificación con ciertos valores colectivistas, y entender la participación como un valor de la Revolución y de la República. Pero esta concientización no ha de ser vista solamente como fundada en premisas puramente ideológicas en ciertos ideales. Presupone además, en los sujetos y actores, una praxis democrática participativa que la instaure y reproduzca.

Con similar tino defiende LEZCANO PÉREZ<sup>291</sup> que nuestro país es indivisible, los gobiernos no son independientes, pero deben tener autonomía y usarla con inteligencia y con mucha disciplina, hay que lograr mantener la armonía entre la nación y la localidad.

Continúan asistiendo PÉREZ y PRIETO<sup>292</sup> que debe ampliarse la capacidad decisoria de los municipios, no solo local cuando los asuntos sean de su competencia, sino influir también en las decisiones más generales, de carácter provincial o nacional. Para ello es imprescindible lograr una conformidad suficiente entre la centralización y la descentralización de las decisiones, tal cual se lograba en el modelo romano de República.

La descentralización significa una activa participación de los entes locales en las decisiones de los superiores, eleva el papel del pueblo como centro de poder y consolida el consenso activo, expresión de legitimidad de los gobernantes, de los mecanismos y del sistema en general.

Por lo tanto, se deberá perfeccionar la participación ciudadana-consecuencia del carácter popular de la soberanía-ampliando y fortaleciendo vías que propicien el ejercicio del poder

---

<sup>290</sup>Vid. VALDÉZ PAZ, Juan, "Notas sobre la participación política en Cuba", en PÉREZ GARCÍA, Arnaldo J. (compilador), *ob.cit.*, p. 62.

<sup>291</sup>Cfr. LEZCANO PÉREZ, Jorge, en ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PODER POPULAR. *Relatoria del Taller sobre las transformaciones ocurridas en el municipio después de la institucionalización*, Matanzas, 2009, p. 6.

<sup>292</sup>Cfr. PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette y PRIETO VALDÉS, Martha, "La descentralización de las decisiones a favor de los municipios. Un reto y una necesidad de los pueblos", *Temas de Derecho Constitucional*, *ob.cit.*, pp. 196-198.

popular efectivo. Se impone regular: cómo, dónde, por qué y para qué participar, estimulándose las iniciativas locales de participación.

Al desarrollar y perfeccionar el Poder Popular, el país está en condiciones de ofrecer al mundo una alternativa democrática más directa.

Al criterio de las autoras, se añade que, “con el perfeccionamiento del diseño político-jurídico cubano de la participación ciudadana en el siglo XXI, se estaría reconociendo el valor de la Constitución cubana, la cual consagró, por primera vez en el ámbito latinoamericano, una República democrática de evidentes fundamentos romanistas<sup>293</sup>”.

---

<sup>293</sup> La expresión entre comillas, es nuestra.

## CONCLUSIONES PARCIALES:

1. Las primigenias muestras de recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en Latinoamérica se hallan, fundamentalmente, en el pensamiento de Bolívar y Martí. Para Martí democracia y república no eran términos equivalentes. En pos del logro de la República Nueva martiana eran indispensables mecanismos de participación ciudadana.
2. En el diseño político-jurídico cubano actual de la participación, sobre bases romanistas y martianas, está establecida la institucionalidad democrática, mediante la cual el pueblo ejerce la democracia inmediata que incluye necesariamente, cuando menos, el referéndum de reforma constitucional y de aprobación de la ley; la elección y revocación de la autoridad del ciudadano que ejerce el poder público y el derecho de resistencia contra los actos lesivos a su soberanía.
3. El mayor aporte del iusrepublicanismo romano al diseño político-jurídico cubano, en materia de institucionalidad democrática, se encuentra en el proceso de nominación-elección-rendición de cuentas y revocación, en el nivel municipal del ejercicio del poder.
4. Dentro de los propios límites del diseño constitucional cubano de la participación política del ciudadano en el ejercicio del poder, constituye una necesidad la modificación en la concepción de algunas de sus bases para ser consecuentes con un modelo, que desde sus raíces, ha recepcionado fundamentos romanistas, y así contribuir al perfeccionamiento de la democracia en la actual República de Cuba.

## **CONCLUSIONES**

## CONCLUSIONES

1. El pensamiento jurídico moderno, al adentrarse en las ideas del llamado Derecho Público, no puede obviar la interpretación *jurispublicística*, de la recepción de las instituciones, ideas y legislaciones que la determinan y expresan. Dentro de las posiciones teóricas romanistas, hay que destacar aquellas que sostienen que entre los principios de un republicanismo democrático perfectible, está la participación ciudadana como esencia de una República.
2. El republicanismo es una tradición política de más de dos mil años, que en los últimos dos siglos había estado cubierta en gran medida por la historia del liberalismo. De este modo, el iusrepublicanismo romano, debe ser un instrumento que sirva para reivindicar todo aquello que no había defendido el liberalismo: el compromiso con una vida cívica activa, frente a la obsesión liberal de las inmunidades y derechos; la defensa de la participación ciudadana, frente a la incapacidad del liberalismo de imaginar la política como algo más que el pluralismo de los intereses de los grupos.
3. El iusrepublicanismo romano se asienta en los siguientes principios básicos: primero, la soberanía reside en el *populus* y se ejerce a través de instituciones de participación ciudadanas, tanto en la *civitas* romana como en los municipios; segundo, la soberanía es indivisible, por lo que el poder (*potestas*) no se puede dividir; tercero, dada la complejidad de la ejecución de las decisiones políticas aprobadas por el *populus*, para el ejercicio efectivo del gobierno deben elegirse funcionarios específicos, cuyos cargos políticos electivos deben ser ejercidos por un cierto período de mandato y ser irrelegibles en forma inmediata; cuarto, la ley pública, entendida como el producto de la creación ciudadana de todo el derecho republicano; y quinto, el derecho de resistencia como mecanismo de participación ciudadana de última *ratio*.
4. En los orígenes del constitucionalismo francés y latinoamericano se evidencia la recepción de determinados principios e instituciones del iusrepublicanismo romano. No obstante, entre ambos fenómenos históricos de recepción existen diferencias, máxime porque en el contexto latinoamericano existió una permanente actitud de reivindicación de la especificidad americana; es decir, se trata de un procedimiento de síntesis cultural donde las tradiciones americanas son puestas al mismo nivel que las tradiciones más respetables de Europa y del Derecho Público Republicano Romano.
5. El principal defensor del republicanismo democrático en el siglo XIX cubano fue José Martí. El pensamiento iusrepublicano del apóstol se asienta en los siguientes principios:

- a) La República se estructura bajo el principio irrestricto de la libertad plena del hombre como expresión de la soberanía popular.
  - b) La República se basa en la más amplia participación ciudadana en los asuntos del gobierno.
  - c) La República se asienta en la unidad de poder y ejercicio del mismo en cumplimiento de los más altos fines públicos y no de capas, sectores o clases sociales.
  - d) La República debería surgir como resultado lógico del desarrollo del país, no pudiendo convertirse en una copia o mera traspolación de formas o modelos foráneos, ajenos o inviables en la realidad concreta del siglo XIX.
6. El modelo implantado por la Constitución de 1901 no diseñó suficientes vías de participación que implicaran la posibilidad real de la ciudadanía de tomar parte en persona en los procesos formales de toma de decisiones. *Contrario sensu*, la Constitución Cubana de 1940 estableció por primera vez en América Latina vías alternativas, republicanas y no oligárquicas de participación del ciudadano en procesos colectivos de decisión de muy heterogéneo ámbito. En la misma se reconocen instituciones republicanas tales como: el referendo, la iniciativa legislativa popular, la iniciativa popular normativa a nivel municipal y la revocación del mandato político contra los gobernantes locales.
  7. La actual República democrática cubana se asienta en un Poder Popular de fundamentos romanistas que se resume en la recepción de los siguientes principios: primero, la República es la organización política de un pueblo. El poder pertenece a éste y es ejercido por él, desde el nivel nacional y hasta el nivel municipal; segundo, la participación ciudadana es el centro de la República; tercero, la soberanía es indelegable, indivisible y se ejerce a través de instituciones de participación; cuarto, los cargos políticos o magistraturas son electivos, revocables y *ad honorem*; quinto, existencia del poder negativo directo contra actos lesivos a la soberanía popular; sexto, el republicanismo cubano es el resultado lógico del desarrollo del país y de las tradiciones democráticas y republicanas patrias.
  8. Las principales líneas que deben guiar el perfeccionamiento democrático del diseño político-jurídico nacional a partir del V ICongreso del PPC, desde los orígenes y los principios romanistas que ha recepcionado el actual diseño de la participación política del ciudadano, son: primero, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; segundo, la responsabilidad de los mandatarios en el ejercicio del poder a través del control popular de su

gestión; tercero, el carácter renovable de los cargos de elección popular; y cuarto; la descentralización en el nivel municipal del ejercicio del poder.

9. La fundamentación romanista de las líneas que han de guiar el perfeccionamiento requiere, implícitamente, la proposición de modificaciones en la concepción ordenadora de la participación política. Siendo consecuentes con las bases iusrepublicanas, y con las políticas pautadas a partir del VI Congreso del PCC, resulta necesario perfeccionar lo siguiente: primero, la ciudadanía debe estar facultada para promover con un carácter inmediato, la revocación contra todos los cargos de elección popular en las diferentes estructuras del nivel estatal; segundo, debe definirse constitucionalmente el carácter vinculante o no de las consultas populares; tercero; la ciudadanía debe tener la posibilidad de proponer, por sí misma, la realización de un referendo a nivel nacional; cuarto, la Constitución de la República, ha de reconocer el carácter renovable de los cargos de elección popular así como la prohibición de ejercer dos magistraturas simultáneamente; quinto, las asambleas de rendición de cuentas deben convertirse en una potencial asamblea de ciudadanos al estilo de los comicios romanos, en los cuales se nominaban, elegían y revocaban a los mandatarios romanos y se aprobaban las normas del ámbito municipal.

## **RECOMENDACIONES**



## RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se arriba con la presente investigación, proponemos como recomendaciones las siguientes:

PRIMERA: Resultaría útil que en futuras investigaciones sobre el tema, en que se pretenda demostrar en otros diseños constitucionales la presencia del carácter republicano legado por los romanos, puedan tomarse como base los principios enunciados en esta investigación.

SEGUNDA: Que los órganos facultados para la creación normativa dentro del amplio proceso de cambios que vive el país, tengan presente para una futura reforma de la Constitución, dentro del mismo diseño de la participación política, la modificación en la concepción ordenadora de algunas de sus bases que esta investigación propone, siendo consecuentes con un modelo de evidentes fundamentos romanistas, y así contribuir al perfeccionamiento de la democracia en la República de Cuba.

TERCERA: Que a partir de esta Tesis, que estudia la recepción del iusrepublicanismo romano en Cuba, se fomenten las investigaciones romanistas en función crítica actual, teniendo como objeto el análisis de la trascendencia del Derecho Romano en América Latina desde una visión *Iuspublicista*.

## **BIBLIOGRAFÍA**

## BIBLIOGRAFIA

1. ACKERMAN, M ario, “ El c onstitucionalismo s ocial e n A mérica la tina”, *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, No. 1, julio-diciembre de 2005, edición digital.
2. AGUIAR DE LUQUE, Luis, *Democracia Directa y Estado Constitucional*, Edersa, Madrid, 1977.
3. ALBERTO FERULLO, Oscar, *La Enseñanza del Derecho Romano, Los puntos de partida del Tercer Milenio*, ponencia presentada en General Roca (Río Negro), octubre, 2005.
4. ÁLVAREZ, E milio, *Tablas sinópticas de la historia externa e interna del Derecho Romano*, Imprenta de la Escuela de Artes y Oficios, Puebla, 1885.
5. ÁLVAREZ SUAREZ, Urcisino, *Horizonte actual del Derecho Romano*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1944.
6. ÁLVAREZ, Angel. E. (coord.), *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Universidad Central de Venezuela. Instituto de Estudios Políticos, Caracas, 1996.
7. ÁLVAREZ TABÍO, F ernando, *Comentarios a l a Constitución Socialista*, E diciones Jurídicas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1981.
8. ARANGIO-RUIZ, V icente, *Historia del Derecho Romano*, t raducción d e F rancisco d e Pelsmaecker e Iváñez, 2da edición., Editorial. Reus, Madrid, 1943.
9. ARBLASTER, Anthony, *Democracia*, Alianza Editorial S.A, Madrid, 1992.
10. ARGUELLES, Luis Rodolfo, *Manual de Derecho Romano. Historia e Instituciones*. 8va edición corregida, Editorial. Astrea, Buenos Aires, 1996.
11. ARISTÓTELES, *Política*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1976.
12. ATTILIO LEVI, Mario, “La lucha política en el mundo antiguo”, Biblioteca de Política y Sociología, *Revista de Occidente*, Madrid, 1968.
13. AVERHOFF, Octavio, *Discurso Leído en la apertura del curso académico de 1916 a 1917*, Imprenta el Siglo XX, La Habana, 1916.
14. AYALA, M anuel J oseph de ., *Diccionario de Gobierno y legislación de Indias por Manuel Joseph de Ayala, revisión, notas e índice por Laudelino Moreno y Cía*, La Habana, 1900.
15. AZCUY, H, *Cuba y los Derechos Humanos*, (Artículo inédito), La Habana 1995.

16. \_\_\_\_\_, “Aspectos de la Ley de Reforma constitucional cubana de julio de 1992”, en *Análisis de la Constitución Cubana y otros ensayos*, Ed. Ruth casa editorial, Instituto cubano de investigación cultural Juan Marinello, La Habana, 2010.
17. BACHILLER Y MORALES, Antonio, *Elementos de la Filosofía o curso de Derecho Natural*, Imprenta del Tiempo, Habana, 1857.
18. BARROSO, Felipe, *Temas de Direito Publico Romano*, edición especial de Revista Jurídica, Brasil, 2010.
19. BARROW, R.H, *Los romanos*, Fondo de cultura Económica, Buenos Aires- México, 1962.
20. BARTOSEK, *La periodizzazione del Diritto Romano*, en Synteleia, Arangio Ruiz, 1974.
21. BAUZÁ, Salvador, *Autonomía Municipal*, Disertación realizada en la Universidad Católica de la Plata. Municipalidad de La Plata. 1972.
22. BERNAL, Beatriz Y LEDESMA, José de Jesús, *Historia del Derecho romano y de los derechos neoromanistas*, Editorial. Porrúa, S.A, México, 1983.
23. BERNAL DE BUJEDA, Beatriz, *Sobre la Jurisprudencia romana (sus características y tendencias, la literatura jurídica y las escuelas de Derecho)*. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 6, México, 1974.
24. BERRIEL, Leopoldo, *Disertación Leída en la Sesión Inaugural de la Academia Teórico Práctica del Derecho en el curso 1887*, Imprenta del Gobierno y Capitanía General, La Habana, 1887.
25. \_\_\_\_\_, “Influencia del cristianismo en el derecho penal de los romanos”. *Tesis para el Doctorado en Derecho Civil y Canónico*, Imprenta la Antilla, La Habana, 1868.
26. BERTI, E, *De Republica di Cicerone e il pensiero político clásico*, Padova, Italia 1963.
27. BIALOSTOSKY, Sara, “El Derecho en la identidad e integración de América Latina frente al fenómeno de la Globalización”, en *Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, Cuba, agosto de 2002.
28. BIONDO, Biondi, *Arte y Ciencia del Derecho*, Editorial Fondo de Cultura económica, México, 1995.
29. \_\_\_\_\_, *Diritto romano e marxismo*, en Jus, 4, México, 1953.
30. BOBBIO N; MATEUCCI N; PASQUINO G, *Diccionario de política*, Siglo XXI editores. México, 1994.

31. BOBBIO, Norberto, *El futuro de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
32. \_\_\_\_\_, *Liberalismo y democracia*, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
33. BOBBIO, Norberto *et.al.* (comps.), *Los límites de la democracia*, CLACSO, Buenos Aires, 1985.
34. BOHÓRQUEZ, Carmen, *Modelos Constitucionales y realidad americana*, Politeia v.30 no.38 Caracas junio. 2007
35. BOLÍVAR, Simón, *Obras completas*, Lex, La Habana, 1950.
36. BONFANTE, Pietro, *Historia del Derecho Romano*, t. I y II, traducción de Santa Cruz Tejeiro, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1994.
37. BORÓN, Atilio, *Nueva hegemonía mundial, alternativa de cambio y movimientos sociales*, CLACSO Libros, Buenos Aires, 2004.
38. \_\_\_\_\_, *Socialismo siglo XXI ¿Hay vida después del neoliberalismo?*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009.
39. BREWER-CARÍAS, Allan R., *El Poder nacional y el sistema democrático de gobierno. Instituciones políticas y constitucionales*, Tomo III y IV, Editorial Jurídica de Venezuela y Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, 1996.
40. CAMACHO EVANGELISTA, Fermín, *Introducción Histórica al Estudio del Derecho Romano*, Editorial de la Universidad de Granada, España, 1950.
41. CAPOGROSSI, L., *Lineamenti di Storia del Diritto Romano*, Giuffrè, Milano, 1989.
42. CARAMÉS FERRO, J. M., *Instituciones de Derecho Privado Romano*, t. I, Buenos Aires, 1963.
43. CARRERAS COLLADO, Julio, *Historia del Estado y del Derecho en Cuba*, La Habana, 1971.
44. CARRERAS CUEVAS, Delio, *Traducción de Fundamentos del Derecho Civil Romano*, de Novitsky, I.B. (1ra Parte), La Habana, 1980.
45. \_\_\_\_\_, *Manual de Historia General del Estado y el Derecho*. Colectivo de Autores. Tomo I parte Primera, Editorial Félix Varela, 2da edición, La Habana, 2002.

46. CARRILLO GARCÍA, Yoel, “El proceso legislativo interno en Cuba. Un modelo para su análisis”, *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2008.
47. CASCIONE, Cosimo, *Studi di Diritto Pubblico Romano*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
48. CASTÁN TOBEÑAS, *Derecho Civil Español Común y Foral*, t. I, 8ª edición, Instituto editorial Reus S.A., Madrid, 1956.
49. CASTRO, Fidel, *Fidel en la URSS*, Ediciones de la Comisión de Orientación Revolucionaria del PURSC, La Habana, 1963.
50. \_\_\_\_\_, *Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba*, Ediciones del Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido, La Habana, 1976.
51. CATALANO, Piérangelo, “Conceptos y principios del derecho público romano de Rousseau a Bolívar”, en *Costituzionalismo Latino I*, Istituto Universitario di Studi Europei – Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1991.
52. \_\_\_\_\_, “Divisione del potere popolare. Da Rousseau a Bolívar”, en *Costituzionalismo Latino II*, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1996.
53. \_\_\_\_\_, “El concepto de latino”, en *Costituzionalismo Latino I*, Istituto Universitario di Studi Europei – Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1991.
54. \_\_\_\_\_, “Modèle constitutionnel démocratique et pouvoir négatif”, en *Costituzionalismo Latino II*, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1996.
55. \_\_\_\_\_, “Un concepto olvidado “Poder Negativo”, en *Costituzionalismo Latino I*, Istituto Universitario di Studi Europei – Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1991.
56. \_\_\_\_\_, *Derecho Romano Público y revoluciones*, Grupo de Ricerca sulla diffusione del Diritto Romano, 1977.
57. \_\_\_\_\_, *Derecho Romano y América Latina*, Grupo de Ricerca sulla diffusione del Diritto Romano, Sassari, 2002.

58. \_\_\_\_\_, *Modelo institucional romano e independencia: República del Paraguay 1813-1870*, Ediciones Comunerros, Asunción, Paraguay, 1986.
59. \_\_\_\_\_, *Populus Romanus Quirites*, Università di Torino, Giappichelli Editore, Torino, 1974.
60. CERAMI Pietro e PETRUCCI, Aldo, *Lezione de Diritto Romano*, G. Giapichelli Editore-Torino, 2002.
61. CÉSPEDES Y ORELLANO, José María, *Disertación Leída en la sesión de apertura de la Academia de Derecho en la Real Universidad de la Habana*, celebrada el 7 de noviembre de 1886, Imprenta del Gobierno y Capitanía General, La Habana, 1886.
62. CHEVRIER, G; *Remarques sur introduction et les vicissitudes de la distinction "iusprivatum" et du "iuspublicum" dans les oscuras des anciens juristes français*, en Archives de philosophie du Droit. Nueva serie, Vol. I (1952), Sirey, París.
63. CICERÓN, Marco Tulio, *Sobre la República, Sobre las leyes*, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1994.
64. \_\_\_\_\_, *Tratado de la República, Tratado de las leyes Catilinas*, Editorial Porrúa S.A, México, 1991.
65. CONCHA, José de la., *Memorias sobre el estado político, gobierno y administración de la isla de Cuba*, por el Teniente General D. José de la Concha, Establecimiento Tipográfico de D. José Trujillo, Madrid, 1853.
66. CONCHA CANTÚ, Hugo A, "Sistema representativo y democracia semidirecta" *Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*, UNAM, México, 2002.
67. COROMINAS, Joan, *Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana*, 3ª edición, Editorial Gredos, S.A., Madrid, 1973.
68. COSTA, Emilio, *Manual de Derecho Romano Público y Privado*, Abeledo Perrot S.A, Buenos Aires, 2009.
69. CRISAFULLI, Vezio, *Lezioni di Diritto Costituzionale*, Dott. Antonio Milani, Verona, 1984.
70. CROISSET, A, *Las democracias antiguas*, Ediciones siglo XX, Buenos Aires, 1994.
71. CUTIÉ MUSTELIER, Danelia, "El sistema de las garantías de los derechos humanos en Cuba", *Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2000.

72. DANA MONTAÑO, Salvador, *Principios de Derecho Público*, volumen 1, Editores la Unión Casa Morales, Santa Fe, 1920.
73. DAZA MARTÍNEZ, Jesús, *Iniciación Histórica al Derecho Romano*, 2da ed. revisada y ampliada, Alicante, 1998.
74. DE ARMAS, Ramón, “José Martí: su república de mayoría popular”, *Revista de Ciencias Sociales*, no. 1-2, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, enero-junio de 1990.
75. DE ARMAS Y SAENZ, Ramón, “Influencia de la filosofía estoica en el Derecho Romano”, *Tesis para el Doctorado en Derecho Civil y Canónico*, Imprenta y Librería Religiosa, La Habana, 1872.
76. DE COULANGES, Foustel, *La Ciudad Antigua*, EMECE Editores, S.A., Buenos Aires, 1945.
77. DE FRANCISCI, Pietro, *Síntesis Histórica del Derecho Romano*, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1930.
78. DE HINOJOSA y NAVERO, E, *Obras de Estudios de Síntesis*, t. III, Editorial Ministerio de Justicia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1974.
79. DE LA TORRE, Diego, *Programa de las materias correspondientes a las asignaturas del segundo curso de Derecho Romano*, La Habana, 1852.
80. DE LOS MOZOS, J.L, “Codificaciones Latinoamericanas, tradición jurídica y principios generales del derecho”, en *Roma e America* 1 (1996)
81. DE MARTINO, Francesco, *Storia de la Costituzione*, vol I, seconda edizione, Napoli, Casa Editrice Dott, Eugenio Jovene, 1972.
82. DE MIGUEL, Raimundo, *Diccionario Latino-Español. Etimológico*. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid. 1946.
83. DEL RÍO HERNÁNDEZ, Mirtha A, “La participación popular en el proceso de toma de decisiones públicas en el ámbito local comunitario en Cuba. Su régimen jurídico.” *Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias Jurídicas*, Facultad de Derecho, Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas, Santa Clara, 2002.
84. DÍAZ BIALET, Agustín, *La Recepción del Derecho Romano en la Argentina*, Ediciones Alveroni, Argentina, 1992.



85. \_\_\_\_\_, “El espíritu de la legislación en la concepción del derecho en Dalmacio Vélez Sarsfield”, en *Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto latinoamericano, a cura di S. SCHIPANI*, Editorial CEDAM, Padova 1991.
86. DÍAZ LEGÓN, Orestes y PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette, “Descentralización, autonomía municipal y desarrollo local en Cuba: claves para el éxito”, en *Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo*, Colegio de Abogados, República de Costa Rica, Año 12, No. 12-2012.
87. DICCIONARIO ELECTORAL, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1ra edición, CAPEL, Costa Rica, 1989.
88. DIETRICH, Hans, *Bases de la democracia participativa y del nuevo socialismo del siglo XXI*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001.
89. DIHIGO, Ernesto, *Derecho Romano*. Tomo I parte I, Editorial Félix Varela, 4ta edición, La Habana, 2006.
90. DILLA, Haroldo, "Pensando la alternativa desde la participación." *Revista Temas* No. 8, octubre-noviembre. La Habana, 1996.
91. DI PIETRO, A, y LAPIEZA ELLI, A, *Manual de Derecho Romano*, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1996.
92. DI PIETRO, Alfredo, *Derecho Privado Romano*, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1996.
93. \_\_\_\_\_, *Democracia participativa y protagonismo social*. Alcaldía del Municipio Libertador, Caracas, 2001.
94. DOMÉNECH, Anthony, *El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista*, Editorial Crítica S.L, Barcelona, 2004.
95. \_\_\_\_\_, “Marx, filósofo y economista en la tradición política republicana”, ponencia presentada en *Seminario Internacional Republicanismo: Memoria, Teoría y Praxis*, La Habana, 2012.
96. DOMINGO, Rafael, *Juristas Universales*, volumen IV, juristas del siglo XX de Kelsen a Rawls, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A, Madrid, 2004.

97. DOMINGO D E MORATÓ, Domingo Ramón, *El derecho civil español con las correspondencias del Romano*, 2da edición corregida, Imprenta y Librería Nacional, Valladolid, 1877.
98. D'ORS, Álvaro, *Elementos de Derecho Privado Romano*, 2da edición, Ediciones de la Universidad de Navarra, S.A. Editor. Gómez, S.L. Larrabide, 21, Pamplona, 1973.
99. DUGUIT, León; *Traité de droit constitutionnel*, t. I, 3ra. ed., Ancienne Librairie Fontemoin Cie., Paris, 1921.
100. DUHARTE DÍAZ, Emilio (comp.), *Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos*, tomo 1, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.
101. DUPIN, Andre Marie Jean Jacques, *Compendio histórico del derecho romano, desde Rómulo hasta nuestros días*, Habana, Imprenta fraternal de los Díaz de Castro, 1828.
102. DUQUE DE HEREDIA Y CABELLO, José Agustín, *Historia Externa del Derecho Romano*, Tipografía de los niños huérfanos, Habana, 1896.
103. \_\_\_\_\_, *Historia del Senado Romano*, Habana, Imprenta, La Moderna Poesía, 1896.
104. DUVERGER, Maurice, *Sociología Política*. Editorial Ariel SA. Madrid, 1968.
105. ELÍAS, Antonio (comp.), *Los gobiernos progresistas en debate*, CLACSO, Buenos Aires, 2006.
106. ENNECERUS, Ludwig, *Derecho Civil (parte general)*, Vol. I, Librería Bosch, Barcelona, 1934.
107. ENGELS, F., *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. Progreso. Moscú, 1976.
108. \_\_\_\_\_, “Del socialismo utópico al socialismo científico”, en Carlos MARX y Federico ENGELS \_\_\_\_\_, en *Obras Escogidas*, tomo III, Editorial Progreso, Moscú, 1980.
109. \_\_\_\_\_, “Introducción de Federico Engels a La guerra civil en Francia (1891)”, en *Obras escogidas*, tomo III, Ed. Progreso, Moscú, 1980.
110. \_\_\_\_\_, *Anti-Dühring*, Editorial Pueblo y Educación, 4ta edición, Ciudad de La Habana, 1970.
111. ESCALONA REGUERA, Juan, “En torno a la Ley de Reforma Constitucional”, en *Revista Cubana de Derecho*, No. 8, octubre-diciembre, La Habana, 1992.

112. ESCOBAR FORNOS, Iván., “El Sistema Representativo y la Democracia Semidirecta”, en CONCHA CANTÚ, Hugo A, *Sistema representativo y democracia semidirecta* (Memoria del V II Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional), UNAM, México, 2002
113. ESSER, *Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del Derecho Privado*, S/E, Barcelona, 1961.
114. ESTÉVEZ ARAUJO, José Antonio, *La constitución como proceso y la desobediencia civil*, Editorial Trotta, Madrid, 1994.
115. FAYT, Carlos, S., "Representación Política" en, *Diccionario electoral*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1ra edición, CAPEL, Costa Rica, 1989.
116. FERNÁNDEZ BARREIRO, *Annaneus, Anales de la Tradición romanística*, dedicado a José Luis Murga, Ediciones Tebar, Sevilla, 2004.
117. FERNÁNDEZ BULTÉ y FERNÁNDEZ ESTRADA, *Veinte años del código civil cubano, ¿romanista o socialista?* (Nuestro código, América Latina y el Caribe), Estratto da Roma e America. Diritto Romano Comune 24/2007 Muchi Editore.
118. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio Y PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette, *Selección de lecturas de Teoría del Estado y del Derecho*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000.
119. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio, *Historia del Estado y el Derecho en la antigüedad*, Tomos I y II. Edición Revolucionaria, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1973.
120. \_\_\_\_\_, *Historia de las ideas políticas y jurídicas. Roma*, Editorial Pueblo y Educación, C. Habana, 1989.
121. \_\_\_\_\_, *Filosofía del Derecho*, Editorial Félix Varela, La Habana, 1997.
122. \_\_\_\_\_, *Historia General del Estado y del Derecho II*, Editorial “Félix Varela”, La Habana, 2000.
123. \_\_\_\_\_, *Separata de Derecho Público Romano*, Editorial Félix Varela, C. Habana, 2001.
124. \_\_\_\_\_, *Teoría del Estado y del Derecho. Teoría del Estado*, Editorial Félix Varela, C. Habana, 2001.
125. \_\_\_\_\_, *Siete Milenios del Estado y el Derecho*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2008.

126. \_\_\_\_\_, *“El realismo político de la lucha del Tribunado romano”*. Ponencia presentada en el IX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1994.
127. \_\_\_\_\_, *“El sistema político de Roma republicana, algunos elementos polémicos”*. Ponencia presentada en el Seminario sobre el Derecho Romano y Derecho Público: historia y actualidad. Roma, 1991.
128. \_\_\_\_\_, *“La dicotomía entre el ius publicus y el ius privatus en Roma”*. Ponencia inédita presentada en el postgrado impartido en Xalapa, Veracruz, 1997.
129. \_\_\_\_\_, *Inspiración, contenido y significado de la Constitución de 1901*. Conferencia en la Sala Fray Bartolomé de las Casas, (Artículo inédito)
130. \_\_\_\_\_, *Introducción a la Constitución Cubana*, Prólogo a una edición griega de la Constitución cubana (Artículo inédito), La Habana 2003.
131. FERNÁNDEZ CAMUS, Emilio, *Disertaciones de Derecho Romano*, librería Cervantes, La Habana, 1925.
132. \_\_\_\_\_, *Curso de Derecho Romano*, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, 1938.
133. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio, *Derecho Público Romano*, décimo cuarta ed., Editorial Civitas, Madrid, 2011.
134. \_\_\_\_\_, *Derecho Público Romano. Recepción, Jurisdicción y Arbitraje*. 9na edición, Thomson, Civitas, Madrid, 2005.
135. FERNÁNDEZ DE LEÓN, Gonzalo; *Diccionario de Derecho Romano*, Editorial. SEA, Buenos Aires, 1962.
136. FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio, *“El tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo iuspublicístico”*, Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, La Habana, 2005.
137. \_\_\_\_\_, *“Reflexiones en torno al enriquecimiento constitucional cubano con elementos del tribunado Romano”*, artículo publicado en las *Memorias del XVII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, 2010.
138. \_\_\_\_\_, Julio Antonio, *“La proyección del modelo iuspublicístico latino en la contemporaneidad”*, ponencia publicada en las *Memorias*

*del XII Congreso latinoamericano de Derecho Romano*, La Habana 2002, editadas por Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México.

139. \_\_\_\_\_, “ Los pr incipios de l D erecho P úblico R omano pa ra l a formación del ciudadano”, en la *Revista Jurídica, número 10 de 2004, del MINJUS* de Cuba.
140. \_\_\_\_\_, “ El D erecho P úblico r omano c ontra l a he gemonía neoliberal”, en *Memorias del Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, de la UBA*, Argentina, 2004.
141. \_\_\_\_\_, *De Roma a América Latina: El tribuno del pueblo frente a la crisis de la República*. Centro de E studios Jurídicos y S ociales M ispet, A.C, Aguas Calientes, San Luis Potosí, 2014.
142. FERNÁNDEZ RETAMAR, R, *Cuadernos del CEM*. No. 7 La Habana, 1984.
143. FERNÁNDEZ-RUBIO LEGRÁ, Á ngel, *El proceso de institucionalización de la Revolución Cubana*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985.
144. FERRANDIS VILELLA, J osé, *Formación histórica del concepto de Derecho civil*, Estudios de D eusto, R evista de l a U niversidad de D eusto, 2da é poca, V ol. 18, fascículos 39-41, enero-diciembre de 1970.
145. FLORIS MARGADANT, Guillermo; *El Derecho privado romano*, E ditorial E sfinge, México, 1970.
146. \_\_\_\_\_ *Introducción a la Historia Universal del Derecho*, México, F acultad d e Derecho, t. I, Universidad Veracruzana, 1974.
147. FERRARA, Orestes, *Las ideas políticas de José A Saco*. Habana, Imp. Cuba y América, 1909.
148. FERRANDO BADÍA, Juan, *Democracia frente a autocracia. Los tres grandes sistemas políticos*, Editorial Tecnos S.A, Madrid, 1989.
149. FRIEDMAN, J., *Empowerment. The Politics of Alternative Development*, Blackwell Ed., Massachusetts, 1992.
150. FIX ZAMUDIO, Héctor, *La protección Jurídica y Procesal de los Derechos Humanos ante las jurisdicciones nacionales*, Editorial Civitas, Madrid, 1982.
151. FRAGA ACOSTA, M arcos A , “F undamentos p ara el p erfeccionamiento del r égimen jurídico de la revocación del mandato en Cuba como mecanismo de control popular.”,

*Tesis presentada en opción al grado de Máster en Derecho Constitucional y Administrativo*, La Habana, 2013.

152. FUNG, Thalía, *En torno a las Regularidades y Particularidades de la Revolución Socialista en Cuba*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1982.
153. GALLO, Filippo, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del Diritto*, Giapichelli Editore, 1971.
154. GARCÍA BRIGOS, Gobernabilidad y de mocracia, *Los órganos del poder popular en Cuba. Reflexiones para un análisis a v einte años de su constitución*, Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 1988.
155. \_\_\_\_\_, “Democracia, E stado y autogobierno s ocial: Los Consejos Populares e n Cuba”, en *Ágora. Revista de Ciencias sociales*, no. III, 1998.
156. \_\_\_\_\_, “Los ór ganos de l P oder P opular: f orma de organización del Estado socialista cubano”, en *Temas de Derecho Constitucional*, La Habana, Félix Varela, 2000.
157. GARCÍA CÁRDENAS, Domingo, *La organización estatal en Cuba*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1981.
158. GARCÍA COTARELO, A ., *Teoría del estado y los sistemas políticos*. Universidad Nacional de educación a distancia. Madrid, 1986.
159. GARCÍA GARRIDO, M anuel J esús, *Derecho Privado Romano*, t . I, 16 ta e dición, Ediciones Académicas S. A, Madrid, 2008.
160. GARCÍA LAGUARDIA, J orge M ., “ Referendo”, e n *Diccionario electoral*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1ra edición, CAPEL, Costa Rica, 1989.
161. GARCÍA MÁYNEZ, E duardo, *Introducción al estudio del Derecho*, 42<sup>a</sup> . e d, México, Porrúa, 1991.
162. GARCÍA PELAYO, Manuel, *Derecho constitucional comparado*, M anuales d e l a Revista de Occidente, Madrid, 1961.
163. GARCINI GUERRRA, Héctor, “La Constitución del Estado Socialista Cubano”, *Revista Cubana de Derecho*, No. 12, Unión Nacional de Juristas de Cuba, 1976.
164. GELIO, A ulo; *Noches Áticas*, Libro X VI, C ap. XIII, Ediciones. J urídicas E uropa-América, Buenos. Aires. 1959.

165. GHIRARDI, Juan C, *El Derecho Romano y el Derecho Anglosajón*, Ghirardi. Olsen, Córdoba, 1994.
166. \_\_\_\_\_, *Los casos de Marco Publio Venator*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, Ediciones Eudecor, Argentina, 2000.
167. GIBBON, Edward, *Historia de la decadencia y caída del Imperio romano*, Alba Editorial S.L, Barcelona, 2000.
168. GIRÓN GONZÁLEZ, Claudia M, “Tendencias normativas del referendo en cinco países latinoamericanos y retos normativos de su regulación en Cuba”, *Trabajo de Diploma*, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, 2014.
169. GÓMEZ DE LA SERNA, Pedro, *Prolegómenos del Derecho*, 7ma edición, corregida y aumentada. Madrid, Librería de Sánchez, 1871.
170. \_\_\_\_\_, *Curso Histórico-Exegético del derecho Romano comparado con el español*, 4ta edición. Tomo primero. Madrid, 1869.
171. GONZÁLEZ GARCÍA, René Fidel, “Ciudadanía, República y Revolución”, *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2010.
172. GONZÁLEZ LANUZA, José Antonio, *Derecho Público de Roma en las relaciones con sus colonias y demás ciudades sujetas a su dominación y con las provincias*, Tesis para el doctorado leída y sostenida en la Facultad de Derecho Civil y Canónico el 14 de septiembre de 1886, Habana, La Propaganda Literaria.
173. \_\_\_\_\_, *Discurso Inaugural de las Academias de Derecho* (curso 1902 a 1903), leído por José A. González Lanuza, Habana, Imprenta de Rambla y Bouza, 1902.
174. GOVÍN Y TORRES, “Ordenanzas municipales de la Ciudad de la Habana”, en *Revista General de Derecho y Administración*, Imprenta del Gobierno, 1886.
175. GUANCHE, Julio César, “La participación en el Estado Cubano”, en *Revista Temas* no 70, abril-junio de 2012, Ediciones Caribe, La Habana, Cuba.
176. \_\_\_\_\_, *Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992*. Premio del concurso “Estado y formas de participación y representación en América Latina y el Caribe contemporáneos” del Programa de Becas CLACSO-ASDI, 2009.

177. GUERRA VILABOY, Sergio, *El dilema de la independencia*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000
178. GUILLÉN, Andrés E., *Lecciones de Historia e Instituciones del Derecho Romano*, Ediciones la Ley, Buenos Aires, 2005.
179. GUTIÉRREZ ALVIS, Faustino, *Diccionario de Derecho Romano*, Instituto Editorial Reus S.A., Madrid, 1976.
180. GUZMÁN BRITO, A., *La codificación civil en Iberoamérica*, Santiago de Chile, 2000.
181. GUZMÁN HERNÁNDEZ, Yan ( coordinador), *Temas de Derecho para Luchadores Sociales Venezolanos*. Tomo I, Editorial Félix Varela, 2003.
182. \_\_\_\_\_, *Temas sobre la Constitución y la participación política en Bolivia*. ENPSES-MERCIE GROUP, junio de 2006.
183. \_\_\_\_\_, “Representación en política, instituciones de democracia directa y revocatoria de mandato en Venezuela – Una manera de interpretar el modelo normativo-constitucional venezolano de participación política”, *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, La Habana, 2008.
184. HARNECKER, Marta, *Cuba. Los protagonistas*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1979.
185. HEINECCIO, *Elementos de Derecho Romano*, Traducidos y anotados por José Antonio Saco, Filadelfia, Imprenta de Guillermo Stavely, 1826.
186. \_\_\_\_\_, *Elementos del Derecho Natural y de Gentes*, Librería de Razola, Madrid, 1837.
187. \_\_\_\_\_, *Tratado de las antigüedades romanas*, Imprenta de la viuda de Sota, Madrid, 1845.
188. \_\_\_\_\_, *Recitaciones del Derecho Civil, según el orden de la Instituta*, Librería de Don Vicente Salvá, París, 1847.
189. HELD, David, *Modelos de democracia*, Alianza Universidad S.A, Madrid, 1991.
190. HERNÁNDEZ CORUJO, Enrique, “ Las transformaciones del Derecho Constitucional Cubano desde el 12 de agosto de 1933”, en *Revista Cubana de Derecho*, Sección Doctrinal, Imprenta de F Verdugo, Habana.



191. HERNÁNDEZ MAS, Orestes, “El Constitucionalismo Revolucionario Cubano y su abandono en la República Neocolonial”, en *Revista Cubana de Derecho* / Año 4 – Enero-Junio, 1975 – No. 9.
192. HIDALGO, Ibrahim, *Democracia y participación popular en la República Martiana*, en *Revista Temas* no.32, enero-marzo de 2003.
193. IGLESIAS CUBRIA, “Materialismo histórico y Derecho Romano”, en *Revista de la Facultad de Derecho de México*, No. 2, 1952.
194. IGLESIAS RAMOS, Juan, *Derecho Romano. Instituciones de Derecho privado*, Editorial Ariel, Barcelona, 1958.
195. \_\_\_\_\_, *Derecho Romano II. Selección de textos latinos, con su versión castellana, para prácticas de exegesis, repasos, casos y ejemplos*, Vol. III, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943.
196. IHERING, Rudolf, *El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo*, t. I, trad. Por Enrique Príncipe y Satorres, Editorial Comares, Granada, 1998.
197. INFIESTA Y BAGÉS, Ramón, “La Constitución de Guáimaro”, en *Guáimaro, Alborada en la historia constitucional cubana*, compilación de Andry Matilla Correa y Carlos Villabella Armengol, (Edición conmemorativa en el 140 aniversario de la Constitución de Guáimaro), Ediciones Universidad de Camaguey, Cuba, Tomado de Ramón Infiesta, *Historia Constitucional de Cuba*, pp. 220-239, Editorial Cultural, La Habana, 1951.
198. JACKISCH, Carlota, *Sistemas Electorales y sus Consecuencias políticas*, CIEDLA, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, Buenos Aires, 1997.
199. JANSEN RAMÍREZ, Víctor, *La República Romana y su resonancia política en la República de Venezuela independentista*, Asociación de profesores, Universidad de Carabobo, 2000.
200. JORDÁN QUIROGA, Augusto, *Roma, Derecho e Historia*, ODEC, Bolivia, 1998.
201. KANT, Inmanuel, *La paz perpetua*, Editorial Espasa-Calpe S.A, Madrid, 1964.
202. KECHEDKIAN, S.F, *Historia de las ideas políticas*, Academia de Ciencias de la URSS. Instituto de Derecho, Editora Política, La Habana, 1964.
203. KELSEN, Hans, *Teoría general del Estado*, Editorial Nacional, México, 1979.

204. KORKOUNOW, N. M, *Cours de Théorie generale du droit*, Paris, 1914.
205. KOSCHAQUER, Pablo, *Europa y el Derecho Romano*, traducción del alemán por José Santa Cruz Teijeiro, Editorial Revista del Derecho Privado, 1955.
206. KOVALIOV, S.I., *Historia de Roma*. T.II, Editora Revolucionaria, La Habana, 1971.
207. KRUGER, Paul, *Historia, Fuentes y Literatura del Derecho Romano*, Editora Nacional, México 1967.
208. LAPIEZA ELLI, A., *Historia del Derecho Romano*, Edición Compendio de Derecho y Ciencias. Sociales, Buenos Aires, 1981.
209. LARSEN, J, *Reception of the representative Roman government*, University of California Press, 1966.
210. LEDESMA URIBE, J. J., *Las Leyes de las XII Tablas*, México, 1965.
211. LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, *Filosofía del Derecho*, 2da edición., Bosch, Barcelona, 1961.
212. LENIN, Vladimir Ilich, *Discurso de resumen de la discusión del Informe presentado por el Consejo de Comisarios del Pueblo al III Congreso de los Soviets de toda Rusia*, en LENIN, Vladimir Ilich, *La democracia socialista soviética*, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, s/f.
213. \_\_\_\_\_, *Proyecto de decreto sobre el derecho de revocación*, en LENIN, V.I., *Obras escogidas en doce tomos, Tomo VII*, Editorial Progreso, Moscú, 1977.
214. LERMINIER, Jean Louis, *Introducción General a la historia del Derecho*, Librería de A. Sierra, Barcelona, 1840.
215. LEVAGGI, A, “La recepción del sistema jurídico castellano por los sistemas indígenas en Hispanoamérica”, en *Boletín de la Academia Puertorriqueña de la historia*, vol. XIII, no. 43, San Juan de Puerto Rico 1992.
216. LEWIN, B, *Rousseau en la independencia de América Latina*, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980.
217. LEZCANO PÉREZ, Jorge, en ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PODER POPULAR. *Relatoría del Taller sobre las transformaciones ocurridas en el municipio después de la institucionalización*, Matanzas, 2009.
218. LIJPHARTArend, *Las democracias contemporáneas*, 2da edición, Ariel Ciencia Política, Barcelona, 1991.

219. LINARES, Cecilia *et. al.* (comps.), *La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano*, Centro de Investigación y desarrollo de la cultura cubana Juan Marinello, La Habana, 2004.
220. LOBRANO, Giovanni, “ Costituzionalismo Latino Juan Bautista Alberdi”, en *Costituzionalismo Latino I*, Istituto Universitario di Studi Europei – Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1991.
221. \_\_\_\_\_, “Del Defensor del Pueblo al Tribuno de la Plebe: regreso al futuro. Un primer bosquejo de interpretación histórico – sistemática. Con atención particular al enfoque bolivariano”, en *Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, editado por Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y Universidad de Pinar del Río, Morelia, 2004.
222. \_\_\_\_\_, “Del Defensor del Pueblo al Tribuno de la Plebe”, en *Catalano, P., Lobrano, G. y Schipani, S. (Comp.), Da Roma a Roma. Dal Tribuno della Plebe al Difensore del Popolo*, Quaderni IILA, Serie Diritto I, Roma, 2002.
223. \_\_\_\_\_, “Repubblica e municipi”, en *Costituzionalismo Latino II*, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1996.
224. \_\_\_\_\_, “Un progetto di riforma per la Regione Autonoma della Sardegna”, en :*Costituzionalismo Latino II*, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1996.
225. \_\_\_\_\_, *Il potere dei Tribuni della Plebe*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1983.
226. \_\_\_\_\_, *Modelo romano y constitucionalismos modernos*; Universidad Externado de Colombia, 1990.
227. \_\_\_\_\_, “Civitas e Urbs nella lezione romanistica di Giorgio La Pira”, ponencia presentada en el *Seminario Internazionale di Studi la Cattedra Strumento Sacro*, celebrado en la capital italiana, Roma, entre el 11 y 13 de noviembre de 2004.
228. \_\_\_\_\_, *Res publica res populi*, Giapichelli Editore-Torino, 1996.
229. \_\_\_\_\_, "La théorie de la *res publica* selon l'Empereur Justinien (*Digesta Justiniani* 1.2-4)" [relazione al Colloque «Personne et *res publica*» Montréal, les 27 et 28 avril 2007, organizzato dalla Association «Méditerranées»] in *Diritto@Storia*, 8/ 2009; quindi, con integrazioni e tradotto in lingua portoghese "A teoria da república (fundada sobre a 'sociedade' e não sobre a 'pessoa jurídica') no

- Corpus Juris Civilis* de Justiniano (*Digesto* 1.2-4)", in *Seqüência: estudos jurídicos e políticos* (Florianópolis: Editora da UFSC) Vol. 29, No 59, 2009.
230. LOYOLA, Oscar, "Una época, un a isla, un patriota, un s sacerdote", en *Dos siglos de pensamiento de liberación cubano*. Eduardo Torres-Cuevas ( Coordinador). Imagen contemporánea. La Habana, 2003.
  231. LOZANO CORBÍ, *Historia e Instituciones de Derecho Romano*, Mira Editores S .A, Zaragoza, 1999.
  232. LOZANO NORIEGA, Francisco, *Cuarto curso de Derecho civil. Contratos*, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, México, 1970.
  233. MACKELDEY, Ferdinand, *Elementos del Derecho Romano*, Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica, Madrid, 1844.
  234. MACPHERSON, *La democracia liberal y su época*, Alianza Editorial. Madrid, 1997.
  235. MADISON, James. *El Federalista*, traducción italiana de B.M. Tedeschini Lalli. Pisa 1955.
  236. MARTÍ, José, "Los cubanos de afuera y los cubanos de adentro" (*Patria*, 4 de junio de 1892), *Obras Completas*, t. 1
  237. \_\_\_\_\_, "Carta al presidente del club José María Heredia" (Nueva York, 25 de mayo de 1892), *Obras Completas*, t. 1.
  238. \_\_\_\_\_, " Pueblos nuevos" (*Patria*, 14 de mayo de 1892), *Obras Completas*, t. 28.
  239. MARTÍNEZ QUINTANA, Léster Amaury, "El derecho civil romano en Cuba durante los siglos XVII y XIX antes de la promulgación del Código Civil de 1889", *Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Universidad de Oriente, julio de 2007.
  240. MAQUIAVELO, Nicolás, *Obras Políticas*, Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971.
  241. MARX, Carlos, *La guerra civil en Francia*, en MARX, C. y F. ENGELS, *Obras escogidas en tres tomos*, Tomo 2, Editorial Progreso, Moscú, 1973.
  242. \_\_\_\_\_, *Prólogo a la Crítica de la Economía Política*, Editorial Progreso. La Habana. 1976.
  243. MARX, Carlos y Federico ENGELS, *Manifiesto del Partido Comunista*, en MARX, C. y F. ENGELS, *Obras escogidas en tres tomos*, Tomo 1, Editorial Progreso, Moscú, 1973.

244. MÉNDEZ LÓPEZ, Josefina, “La creación de las leyes en Cuba”, *Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 1999.
245. MIRANDA, Olivia, *Ecos de la Revolución Francesa en Cuba*, Editora Política, La Habana, 1989
246. MIRANDA, Francisco, *Precursor de las independencias de la América Latina*, Editora de Ciencias Sociales, 2003.
247. \_\_\_\_\_, *Congreso Constituyente de Venezuela, 1811-1812*, Ediciones conmemorativas del Natalicio del Libertador Simón Bolívar, Italgráfica, Caracas, 1983.
248. MOMMSEN, Teodoro, *Compendio del Derecho Público Romano*, Editorial Impulso, Buenos Aires, 1942.
249. \_\_\_\_\_, *Historia de Roma*, Editorial Joaquín Gil Editor, 3 tomos, Buenos Aires, 1953.
250. MONAL, Isabel, “Félix Varela: clásico de Nuestra América”, Eduardo Torres-Cuevas (Coordinador). *Imagen contemporánea*. La Habana, 2003.
251. MONTESQUIEU, Carlos L., *El Espíritu de las Leyes*, Madrid, 1906.
252. MURILLO RUBIERA, F, “Codificación y Sistema Jurídico Iberoamericano”, en *Fuentes ideológicas y normativas de la codificación latinoamericana*, coord. ABELARDO LEVAGGI, Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires, 1992.
253. NOGUEIRA, Alicia, *Temas de Derecho Romano*, Editorial Universidad Nacional del Comahue, Río Negro, Argentina, 2010.
254. NOHLEN, Dieter et. al. (comps.), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*. Instituto Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Instituto Federal Electoral, Fondo de Cultura Económica y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, México, 1998.
255. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, (reed.Torino, 1963)
256. ORTOLAN, *Explicación histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano*, Editorial. Hijos de Leocadio López, Madrid, 1912.
257. \_\_\_\_\_, *La clave del derecho o síntesis del Derecho Romano*, Establecimiento tipográfico a cargo de J. Moyano, Sevilla, 1845.
258. OYUELOS, Ricardo, *Digesto, principios, doctrina y jurisprudencia*, Tomo 1, Curso del Derecho español, Madrid, 1920.

259. PASTOR Y ALVIRA, *Prolegómenos del derecho, historia y elementos de Derecho Romano*, Imprenta de la Sociedad Tipográfica, Madrid, 1877.
260. PÉREZ MARTÍN, Amalia; *La iurisprudencia en el Derecho actual, Trabajo de Diploma en opción al Título de Licenciado en Derecho*, La Habana, 2009.
261. PETIT, Eugene, *Tratado Elemental de Derecho Romano*, Editorial Saturnino Calleja S. A, Madrid, 1876.
262. PICHARDO, Hortensia, *Documentos para la Historia de Cuba*, t.I, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1965.
263. PITA SIMÓN, Vladimir, “Las categorías iusfilosóficas de justicia, libertad, igualdad y solidaridad en el discurso político jurídico de José Martí”, *Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2014.
264. PLATÓN, *La República*, Editorial Tecnos S.A. Madrid, 2000.
265. PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette, “Aciertos y desaciertos del Poder Popular en Cuba”, ponencia presentada en *Simposio Cuba-Alemania “Economía Derecho y Sociedad en el siglo XXI”*, celebrado en la Habana, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2013, (Artículo Inédito)
266. PÉREZ HERNÁNDEZ, Lissette y PRIETO VALDÉS, Martha, “La descentralización de las decisiones a favor de los municipios. Un reto y una necesidad de los pueblos”, en *Temas de Derecho Constitucional Cubano*, La Habana, Félix Varela, 2000.
267. PÉREZ MILIÁN, Félix, Motivos para una reforma, en *Revista Cubana de Derecho* / No. 7 – Julio-Septiembre, 1992.
268. POEHLS, Luis Martín, “Municipio; orígenes latinos, evolución y actualidad en la Provincia de Buenos Aires” en *Memorias de XIX Encuentro Nacional de profesores de Derecho Romano*, La Rioja, Argentina, 2009.
269. POLETTI, Ronaldo, *Elementos de Direito Romano Público e Privado*, Brasilia Jurídica, 1996.
270. PRIETO VALDÉS, Martha., *Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano*. Editorial, Félix Varela. La Habana 1999.
271. \_\_\_\_\_., “La reforma a la Constitución cubana de 1976”, en *Temas de Derecho Constitucional*, La Habana, Félix Varela, 2000.

272. RADBRUCH, R. G, *Introducción a la Ciencia del Derecho*, Madrid, España, Librería General de Victoriano Suárez, 1930.
273. RIBEIRO, Darcy, *El Proceso Civilizador. Etapas de la evolución sociocultural*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1992.
274. RICOBONNO, *Profilostorico del dirittoprivato romano*, Palermo, 1976.
275. RINALDI, Norberto, *Lecciones ampliadas de Derecho Romano*, 1 ra edición, Buenos Aires, 2007.
276. RODRÍGUEZ, Pedro Pablo, *La idea de liberación nacional en José Martí*. Anuario de Estudio Martianos. No.4.CNC.La Habana, 1972.
277. \_\_\_\_\_, “Prólogo a José Martí”, *El Partido Revolucionario Cubano y la guerra*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978.
278. ROIG DE LEUNCHENRING, Emilio, *La República de Martí*. Tres Estudios Martianos. La Habana, 1983.
279. ROMERO GIRÓN, Vicente y GARCÍA MORENO, Alejo, *Colección de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos*, Establecimiento tipográfico de J. Góngora, 1885.
280. ROTONDI, Giovanni, *Leges publicae populi romani*, Universidad de Zaragoza, 1962.
281. ROUSSEAU, Juan Jacobo, *El Contrato Social*, en Obras Escogidas, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1973.
282. \_\_\_\_\_, *Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el gobierno de Polonia y su proyecto de reforma*, Tecnos, Madrid, 1988.
283. RUBÉN DE COUDER, M., *Compendio de lecciones escritas de Derecho Romano*, trad. D. Álvaro Lope Orriols, 2da edición, Madrid, 1894.
284. RUBIO CORREA, Marcial, “La participación del pueblo en la elaboración constitucional dentro de los países latinoamericanos de Sudamérica”, en *Costituzionalismo Latino II*, Consiglio Nazionale delle Ricerche Progetto Italia – América Latina, 1996.
285. SARTORI, G, *Teoría de la democracia. El debate contemporáneo. Los problemas clásicos*, Alianza Universidad, Madrid, 1997.
286. \_\_\_\_\_ *Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados*, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.

287. SAVIGNY, Friedrich Carl, *Sistema del Derecho Romano Actual*, versión castellana, por Jacinto Mesía y Manuel Poley, t. I, Madrid, 1878.
288. SCIALOJA, Vittorio, *Procedimiento Civil Romano, ejercicio y defensa de los derechos*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1970.
289. SCHIAVONE, A ldo, *Ius, la invención del Derecho en Occidente*, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 1995.
290. SCHIPANI, Sandro, *La codificazione del Diritto Romano Comune*, Giappichelli, Torino 1999.
291. \_\_\_\_\_, *La codificación del Derecho romano común*, José Félix Chamie traductor, Editorial de la Universidad Externado de Colombia, 2010.
292. \_\_\_\_\_, *América Latina e Diritto Romano*, Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Derecho Romano, La Habana, 1993.
293. SHULZ, F.I, *Principii del Diritto Romano*, Editorial. Leonardo. Casa Editrice Sansoni. Firenze, 1949.
294. SERAFINI, Felipe, *Tratado Elemental de Derecho Romano*, Editorial. Saturnino Calleja S. A, Madrid, 1876.
295. SERRIGNY, D , *Droit Public et Administratif Romain*, Tome Premier Auguste Durand, Libraire Éditeur, París 1862.
296. SIGG, Oswald, *Las instituciones políticas de Suiza*, Pro Helvetia, Fundación Suiza para la Cultura, Zurich, 1991.
297. SOBOUL, Albert, *La Revolución francesa*, Editorial Tecnos, Madrid, 1966.
298. SOHM, Rodolfo, *Instituciones de Derecho Privado Romano*, 17ª edición, traducción del alemán por W. Roces, Madrid 1928.
299. SMIT, Carl, *Teoría de la Constitución*, Alianza Editorial, 1992.
300. SOUSA SANTOS, Boaventura de, *Estado, Derecho y luchas sociales*, ILSA, Colombia, 1991.
301. \_\_\_\_\_ *Reinventar la democracia. Reinventar el Estado*, Editorial José Martí, La Habana, 2005.
302. STEGER HANS Albert; *Actas del XXII Congreso Internacional de Sociología*, Caracas, 1972, publicado en Latinoamérica, N° 6, Facultad. de Filosofía y Letras, U.N.A.M.



303. TITO LIVIO, *Desde la fundación de Roma*, Libros I-II (versión de Agustín Millares Carlo), México, UNAM, 1998.
304. TORRENT, A, *Derecho Público Romano y Sistema de Fuentes*, Zaragoza 1995.
305. \_\_\_\_\_, *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Laguna*, Vol.X (1982), “La democracia en la República Romana”
306. TORRES CUEVAS, Eduardo, y OSCAR LOYOLA, *Historia de Cuba: 1492-1898, Formación y Liberación de la Nación*, Editorial Pueblo y Educación, Habana, 2001.
307. TORRES CUEVAS, Eduardo, “El proyecto inconcluso de José Martí” en Eduardo Torres Cuevas *et al.*, *El alma visible de Cuba. José Martí y el Partido Revolucionario Cubano*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1984.
308. TOURAINE, Alain, *¿Qué es la democracia?*, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1994.
309. TONDO, Salvatore, *Profilo di Storia Costituzionale romana*, Giuffrè Editore, 1993.
310. VALDÉS LOBÁN, Eurípides, “El constitucionalismo latino y la república martiniana”, artículo publicado en las *Memorias del XVII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, 2010.
311. VALDÉZ PAZ, Juan, “Notas sobre la participación política en Cuba”, en PÉREZ GARCÍA, Arnaldo J. (compilador), *Participación social en Cuba*, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), Ciudad de La Habana, 2004.
312. VARELA, Félix, “Preámbulo de la Instrucción para el gobierno de Ultramar”, en Félix Varela, *Obras*, t. II, La Habana, Imagen Contemporánea, 2001.
313. VÁZQUEZ, Humberto, *Diccionario de Derecho Romano, palabras, locuciones y aforismos latinos*, Editorial Zavalia S.A, Buenos Aires, 1998.
314. VEGA VEGA, Juan, *Derecho constitucional revolucionario en Cuba*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1988.
315. VILABOY, Sergio, *El dilema de la independencia*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2000.
316. VILLABELLA ARMENGOL, “El municipio cubano actual. Su modelo estatal”, *Tesis doctoral*, Camagüey, Universidad de Camagüey, 1998.
317. \_\_\_\_\_, “Historiografía del Poder Político en Cuba: la forma de gobierno en el Constitucionalismo cubano”, *Estudios sobre Historia del Derecho en Cuba*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009

318. \_\_\_\_\_, Carlos, *Selección de Constituciones iberoamericanas*, Félix Varela, La Habana, 2000.
319. VITIER, Medardo, “Doctrinas social. III”, Valoraciones, Universidad Central de Las Villas, Departamento de Relaciones Culturales, 1960, t. I.
320. \_\_\_\_\_, *Las ideas en Cuba. La filosofía en Cuba*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1970.
321. VON MAYR, R., *Historia del Derecho Romano*. Traducción de Roces. Editorial Labor. Madrid, 1926.
322. WEBER, Max, *Economía y sociedad*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1971. Tomo I.
323. WILLEMS, P., *Le Droit Public Romain*, Charles Petters Editeur, París, 1880
324. YÁÑEZ, Rosa María y Carreras, Delio, *Selección de Lecturas y documentos sobre la Historia General del Estado y el Derecho*. S/E. La Habana, 1991.
325. ZALDÍVAR ABAD, Martha Loyda, “Poder y Procesos Constituyente: hacia la legitimidad democrática de la Constitución”, *Tesis presentada en opción al grado científico de doctora en Ciencias Jurídicas*, Santiago de Cuba, 2011.

## **Fuentes Romanas**

- *Cuerpo del Derecho Civil Romano*, con notas de D. Ildefonso L. García del Corral, Barcelona, 1897.
- Constitución *Deo Auctore* y Libro I del Digesto del Emperador Justiniano, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1990.
- *Digesta Iustiniani, Liber Primus*, Università La Sapienza, EDIFEIO, Roma, 1999.
- *El comentario de Gayo al Edicto Provincial*, Edición, traducción y notas de Emilio Valiño, Universidad de Valencia, 1979.
- *Instituciones de Justiniano*. Traducción al Castellano de D. Ismael Calvo y Madroño. Centro Editorial de Góngora. Madrid. 1895.
- *La ley de las XII Tablas*, Editorial Universidad Nacional de La Plata (EDULP), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Argentina, 2000.
- *Lex Irnitana* descubierta en 1981 gracias a la cual podemos hoy conocer la estructura y funcionamiento del régimen municipal romano, en TORRENT, Armando, “La democracia en

la República Romana”, en *Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Laguna*.

- *Paulo, Sentencias a su hijo*, Libro segundo, *Interpretatio*, traducción, notas e índice de Martha Irigoyen, UNAM, México, 1994.

## **Revistas**

### **Internacionales.**

1. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, t. 144, no. IV, Madrid, abril 1924.
2. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo LXXX de la segunda época no.3, España, 1980.
3. Revista Brasileira de Direito Comparado, Río de Janeiro, 1992.
4. Revista de Derecho público, no.93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2003.
5. Revista Jurídica Interdisciplinar Internacional, Anuario da Faculdade de Direito, Da Universidade da Coruña, 2006.
6. Revista Latinoamericana de Derecho Romano, Editorial Virtudes, Buenos Aires, 2006.
7. Revista *Aequitas*, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador, tercera etapa, año III, 2009.
8. Revista de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, volumen V, Buenos Aires, 2009.
9. Revista Diritto Pubblico Romano e Costituzionalismo Latinoamericano, Ediciones Río de la Plata, Buenos Aires, 2010.

### **Nacionales**

#### **Republicanismo anterior a 1959.**

1. Revista de la Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad de la Habana, V. XXIII, No. 1, Julio de 1916. Discurso de elogio de D. Leopoldo Berriel y Fernández.

#### **Republicanismo en Cuba a partir de 1959.**

1. Revista Cubana de Derecho / Año I – Enero, 1972 – No. 1.

2. Revista Cubana de Derecho / Año I – Diciembre, 1972 – No. 3.
3. Revista Cubana de Derecho / Año III – Julio-Diciembre, 1974 – No. 8.
4. Revista Cubana de Derecho / Año 4 – Enero-Junio, 1975 – No. 9.
5. Revista Cubana de Derecho / Año 4 – Julio-Diciembre, 1975 – No. 10.
6. Revista Cubana de Derecho / Año 5 – Julio-Diciembre, 1976 – No. 12.
7. Revista Cubana de Derecho / Año VI – Enero-Diciembre, 1977 – No. 13.
8. Revista Cubana de Derecho / Año IX –Enero-Diciembre, 1980 – No. 16.
9. Revista Cubana de Derecho / Año XVI – Enero-Marzo, 1987 – No. 28.
10. Revista Cubana de Derecho / Año XVI – Octubre-Diciembre, 1987 – No. 31.
11. Revista Cubana de Derecho/ Año XVIII – Abril-Junio, 1989 – No. 37.
12. Revista Cubana de Derecho / No. 1 – Enero- Marzo, 1991.
13. Revista Cubana de Derecho / No. 2 - Abril-Junio, 1991.
14. Revista Cubana de Derecho / No. 3 – Julio-Septiembre, 1991.
15. Revista Cubana de Derecho / No. 4 –Octubre-Diciembre, 1991.
16. Revista Cubana de Derecho / No. 7 – Julio-Septiembre, 1992.
17. Revista Cubana de Derecho / No. 8 – Octubre-Diciembre, 1992.
18. Revista Cubana de Derecho / No. 12 – Enero, 1997-Diciembre, 1998.

## **Fuentes Documentales**

### **Archivo de la Asamblea Nacional del Poder Popular**

1. Actas del XI Período Ordinario de Sesiones de la III Legislatura celebrada los días 10, 11 y 12 de julio de 1992.
2. Actas del XII Período Ordinario de Sesiones de Tercera Legislatura 29 de octubre de 1992.

### **Archivo Central de la Universidad de la Habana**

1. Memorias Universitarias de los siguientes años: 1900-01, 1901-02, 1902-03, 1905-06, 1907-08, 1908-09, 1910-1911, 1913-14, 1914-15, 1915-16, 1916-17, 1918-19, 1920-21, 1924-1925, 1927-1928, 1933-1934, 1936-1937, 1937-1938, 1974-1975, 1975-1976.
2. Expedientes del Archivo Universitario:

Expediente 36, 87, 178, 920 de González Lanuza, José Antonio, Decano de la Facultad de Derecho, Catedrático de Derecho Romano, 1886.

Expediente 810 de Salazar, Pascual, Catedrático de Derecho Romano, 1844.

Expediente 3688 de López, Antonio Prudencio, Catedrático de Derecho Romano, 1850.

Expediente 775 de López de Mora, Álvaro, Catedrático de Derecho Canónico, sin año.

Expediente 4260 de Rey Perna, Santiago, Auxiliar de Derecho Romano, sin año.

Expediente 897 de la Cátedra de Derecho Romano de 1870.

### **Otros Documentos**

1. Informe Central al VI Congreso del PCC. Fuente: Partido Comunista de Cuba. Sitio oficial. [en línea] Disponible en [http://www.pcc.cu/congresos\\_asamblea/cong6.php/mayo de 2014](http://www.pcc.cu/congresos_asamblea/cong6.php/mayo_de_2014)
2. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (Resolución del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba de fecha 18 de abril del 2011). (versión digital)
3. Objetivos de Trabajo del Partido Comunista de Cuba aprobados por la Primera Conferencia Nacional, La Habana, 29 de enero de 2012.(versión digital)
4. Resolución sobre el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular y el Sistema Electoral y la División Política Administrativa disponible en <http://www.cubadebate.cu/especiales/2011/04/18/resolucion-sobre-el-perfeccionamiento-de-los-organos-del-poder-popular-el-sistema-electoral-y-la-division-politico-administrativa/>.

## Fuentes normativas

### Legislación nacional

1. Constitución de Guáimaro(versión digital)
2. Constitución de Baraguá(versión digital)
3. Constitución de Jimaguayú(versión digital)
4. Constitución de la Yaya(versión digital)<sup>1</sup>
5. Constitución de 1901: La Orden Militar No.100 de 14 de abril de 1902 publica copia fiel de la Constitución de la República de Cuba, adoptada el 21 de febrero de 1901 y su apéndice de 12 de junio de 1901, tal como le fue presentada al Gobernador militar por la Convención Constituyente. Gaceta de la Habana de 14 de abril de 1902, *Vid, en BORGES, Milo A, Compilación Ordenada y completa de la legislación cubana de 1899 a 1950*, 2da edición, Vol I, Editorial Lex, La Habana, Cuba, 1952.
6. Constitución de 1940, La Constitución fue publicada en Gaceta Oficial de 8 de julio de 1940. *Vid, en BORGES, Milo A, Compilación Ordenada y completa de la legislación cubana de 1899 a 1950, ob.cit, p 4203.*
7. Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976 publicada en Gaceta Oficial No.2.Edición Especial de 24 de febrero de 1976
8. Constitución de la República de Cuba de 13 de julio de 1992 publicada en Gaceta Oficial No. 6 Extraordinaria de 13 de julio de 1992.
9. Ley 89 de 23 de septiembre de 1999, Ley de revocación del mandato de los elegidos a los órganos del poder popular, publicada en Gaceta Oficial No. 62. Edición Ordinaria de 23 de septiembre de 1999.
10. Ley Electoral No. 1305 de 7 de agosto de 1976, publicada en la Gaceta Oficial No.8 Extraordinaria de 7 de agosto de 1976.
11. Ley Electoral No. 37 de septiembre de 1982, publicada en Gaceta Oficial No. 42 Extraordinaria, de 18 de septiembre de 1982.
12. Ley No. 55 de 7 de julio de 1986 modificativa de la Ley Electoral 37, publicada en Gaceta Oficial No.5. Edición Especial de 7 de julio de 1986.
13. Ley No. 72 Ley Electoral publicada en Gaceta Oficial No. 9 Extraordinaria de 2 de noviembre de 1992.

---

<sup>1</sup> Nótese que las referencias a Gacetas Oficiales se realizan sólo a partir del Texto constitucional de 1901.

14. Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 20 de julio de 1977, publicado en Gaceta Oficial No.23 Ordinaria de 20 de julio de 1977.
15. Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 30 de agosto de 1982, publicado en Gaceta Oficial No. 39 Extraordinaria de 30 de agosto de 1982.
16. Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1996 publicado en Gaceta Oficial No.48 Ordinaria de 27 de diciembre de 1996.
17. ACUERDO-CONSEJO DE ESTADO de 13-9-95 (GOE. No. 4 de 13-9-95, p. 13) Contentivo de Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y ACUERDO-CONSEJO DE ESTADO de 13-9-95 (GOE. No. 4 de 13-9-95, p. 21) Aprueba los Reglamentos Provinciales y Municipales del Poder Popular, respectivamente, que como documentos anexos forman parte integrante del presente Acuerdo. Deroga las Normas Reglamentarias de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, aprobadas ambas por la Asamblea Nacional del Poder Popular con fecha 5-8-82.

### **Legislación foránea**

1. Constitución de los Estados Unidos, aprobada por la Convención el 17 de septiembre de 1787, véase en Hamilton, Madison y Jay, El *Federalista*, Prólogo y versión directa de Gustavo R. Velasco, Primera reimpresión, 1974.
2. Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia en YAÑEZ GARCÍA Y CARRERAS CUEVAS, *Selección de Lecturas y documentos sobre la Historia General del Estado y el Derecho*, S/E, La Habana, 1991.
3. Constitución francesa de 1791(versión digital)
4. Acta constitucional francesa de 24 de junio de 1793(versión digital)
5. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para jueces. (Presentación de Luis Velázquez Alvaray), Tribunal Supremo de Justicia, Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Caracas, 2005.
6. Constituciones Hispanoamericanas, Biblioteca Virtual Cervantes disponible en [www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/mayo de 2010](http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/mayo de 2010) [consultado en fecha 8 de febrero de 2013].

7. Discurso de A ngostura y P royecto de C onstitución pa ra Bolivia e n Legislación Venezolana C omputarizada, [www.lex-comp.com](http://www.lex-comp.com), [consultado e n fecha 8 de febrero de 2013]. A demás e l P royecto de C onstitución pa ra B olivia s e encuentra publ icado e n el Discurso publicado en el Correo del Orinoco, números 19, 20, 21 y 22 del 20 de febrero al 13 de marzo de 1819. La reproducción fue realizada por Nicomedes Lora en la imprenta de B. Espinosa, 1820.

## Internet

1. <http://www.bibliojuridica.org>. Biblioteca J urídica d e l a U niversidad N acional Autónoma de México. [consultado en fecha 8 de febrero de 2013].
2. <http://www.reddolac.org/events/event/list.archive>. Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano.[consultado en fecha 8 de febrero de 2013].
3. <http://www.monografias/Derecho público.com>. Teorías de di stinción de l D erecho público y privado. Concepciones contemporáneas. [consultado en fecha 8 de febrero de 2013].
4. <http://www.juridicas.unam.mx>. [consultado en fecha 8 de febrero de 2013].
5. GUASTINI, R iccardo, *Estudios de Teoría Constitucional*, ( Edición Digital), disponible e n: [www.forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00287-estudios-de-teoria-constitucional-riccardo-guastini.html](http://www.forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00287-estudios-de-teoria-constitucional-riccardo-guastini.html). [consultado e n fecha 15 de marzo de 2013].
6. RIAL, Juan, *Instituciones de democracia directa* en [www.demopunk.net/sp/intern/DemocraciaAmericaLatina.pdf](http://www.demopunk.net/sp/intern/DemocraciaAmericaLatina.pdf). [consultado en fecha 15 de marzo de 2013].
7. VICIANO PASTOR, Luis SALAMANCA, José Asensi SABATER, Eloísa AVELLANEDA, Elsa CARDOZO DE DA SILVA, Carlos Luis CARRILLO ARTILES, Ricardo COMBELLAS, Marcos CRIADO DE DIEGO, F. Javier DÍAZ REVORIO, Julio César FERNÁNDEZ TORO, Fernando FLORES GIMENEZ, *El Sistema Político En La Constitución Bolivariana De Venezuela*. (Edición Digital), disponible en: [www.priceminister.es/.../Viciano-Pastor-Roberto-El-Sistema-Politico-En-La-Constitucion-Bolivariana-De-Venezuela-Libro.html.2](http://www.priceminister.es/.../Viciano-Pastor-Roberto-El-Sistema-Politico-En-La-Constitucion-Bolivariana-De-Venezuela-Libro.html.2). [consultado en fecha 15 de marzo de 2013].



8. VICIANO PASTOR, Julio César TRUJILLO, Santiago ANDRADE, [Estudios Sobre La Constitución Ecuatoriana De 1998](#). (Edición Digital), disponible en [www.elrevolucionario.org/América](http://www.elrevolucionario.org/América). [consultado en fecha 15 de marzo de 2013].
9. VITULLO, Gabriel en "Participación electoral, comportamiento político y desestructuración social en Argentina", en, *Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano. Lecturas Políticas*, p.3 en [www.Clacso/Indices/index18.htm\(1 de 2\)](http://www.Clacso/Indices/index18.htm(1%20de%202)) [consultado en fecha 15 de marzo de 2013].
10. Programa Nacional de Educación Ciudadana para vivir en Democracia 2004-2006. Documento de Información Pública no.2 Corte nacional Electoral República de Bolivia, en [www.cne.org.bo](http://www.cne.org.bo). [consultado en fecha 15 de marzo de 2013].

## PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA AUTORA.

1. Autora del artículo “El poder comunal en Venezuela: Su impacto en el surgimiento de novedosos mecanismos de participación popular”, publicado en *Notas sobre el Estado, la Constitución y la participación popular en Venezuela*, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2006.
2. Autora del ensayo “Bases jurídicas, desde la participación ciudadana, para el empoderamiento político. Estudio de los actuales modelos constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador”, publicado en la *Revista Ámbito Jurídico*, N° 83 - Año XIII - DEZEMBRO/2010 - ISSN - 1518-0360.
3. Autora del ensayo “La participación político popular en el proceso de formación de la ley. Fundamentos de sede e li usromanismo”, publicado en la *Revista Ámbito Jurídico*, N° 83 - Año XIII - DEZEMBRO/2010 - ISSN - 1518-0360.
4. Autora de la Tesis de maestría titulada “Bases jurídicas, desde la participación ciudadana, para el empoderamiento político en América Latina” que obtuvo junto a otros trabajos Premio Universidad de la Habana como mejor colectivo de estudios latinoamericanos.
5. Autora del artículo “La participación popular en el proceso de formación de la ley. Fundamentos históricos de sede e li usromanismo” en *El Derecho como saber cultural. Homenaje al Dr. Delio Carreras Cuevas*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2011, ISBN 978-959-7211-11-2.
6. Autora del artículo “Bases jurídicas para el empoderamiento político en los actuales diseños constitucionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia”, que forma parte del libro *Estudios sobre nuevo constitucionalismo latinoamericano*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2012, ISBN-978-84-9004-644-9.
7. Autora del ensayo “Empoderamiento, republicanismo democrático y nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en *Revista Temas* no. 70, abril-junio de 2012, Ediciones Caribe, La Habana, Cuba, ISSN 0864-134X
8. Autora del ensayo “La recepción de principios de Derecho Público de la República romana en el republicanismo latinoamericano” disponible en las *Memorias del V Seminario en el Caribe Derecho Romano y latinidad*, <http://simposio.upr.edu.cu/memorias>, ISBN: 978-959-16-2044-6.

9. Autora del ensayo “Principales aportes del modelo clásico de Derecho Público Republicano Romano para la unidad de principios del republicanismo democrático” publicado en la *Revista española de Republicanismo “Sin Permiso”* disponible en [www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/11romano.pdf](http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/11romano.pdf), 10 de febrero de 2013, ISSN: 1886-3507.
10. Autora del ensayo “El republicanismo democrático romano. Su impronta para el diseño estructural del modelo clásico de Derecho Público Romano”, publicado en *Revista de Derechos Humanos y estudios sociales (REDHES)*, año IV, no.7, enero-junio de 2012, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México y Universidad de Sevilla, España, ISSN: 1889-8068.
11. Autora del ensayo “La participación popular en el ejercicio del poder en el constitucionalismo cubano: desde sus albores hasta y hasta la Ley Fundamental de 1959”, publicado en el libro “*Derecho, Economía y Sociedad en el siglo XXI*”, VerlagDrKovac, Hamburgo, Alemania, 2013, ISSN: 2197-604X e ISBN: 978-3-8300-7339-0.
12. Autora del ensayo “La trascendencia del republicanismo romano para la historia constitucional cubana”, publicado en *Libro Homenaje a la jurista Victoria Adato Green*, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, ISBN: 978-607-02-4795-83.
13. Autora del ensayo “Bases jurídicas para el empoderamiento político”, publicado en CUBALEX, *Revista Electrónica de Estudios Jurídicos*, No 32, enero-diciembre de 2013, Editorial Unijuris, ISSN-1028-8988

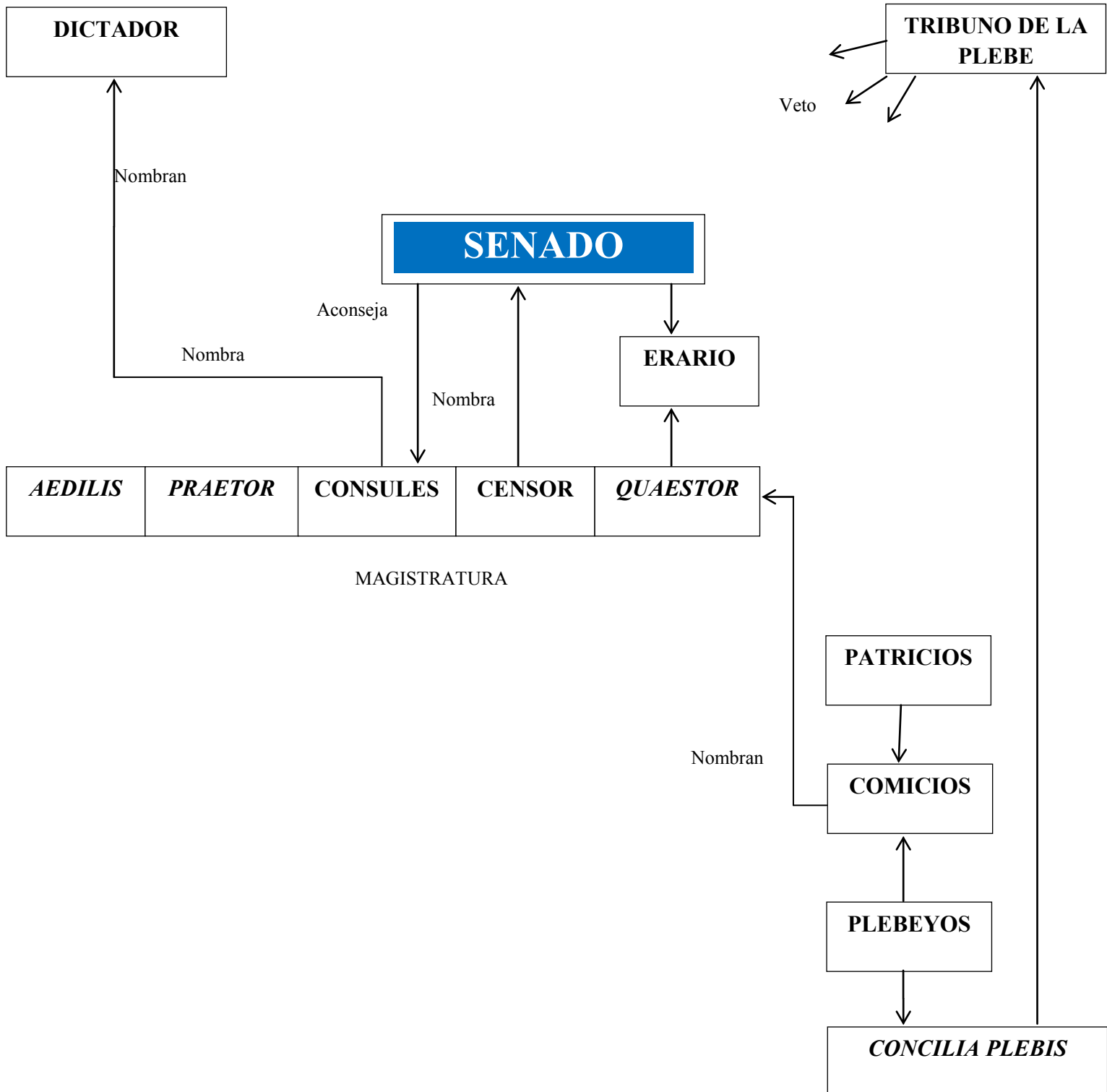
#### **Entregados para publicar:**

1. “Los orígenes del republicanismo en el pensamiento democrático cubano anterior a la Constitución Socialista de 1976. Influencia del *Iuspublicismo* romano”, para libro *Homenaje al profesor Julio Carreras*.
2. “La recepción de principios del Derecho Público Republicano Romano en el constitucionalismo latinoamericano”, para *Revista Lecturas de Derecho Romano, ediciones Edictum*, Universidad de Buenos Aires.
3. *Libro Municipio y desarrollo local*, “El municipio en el constitucionalismo liberal cubano”.

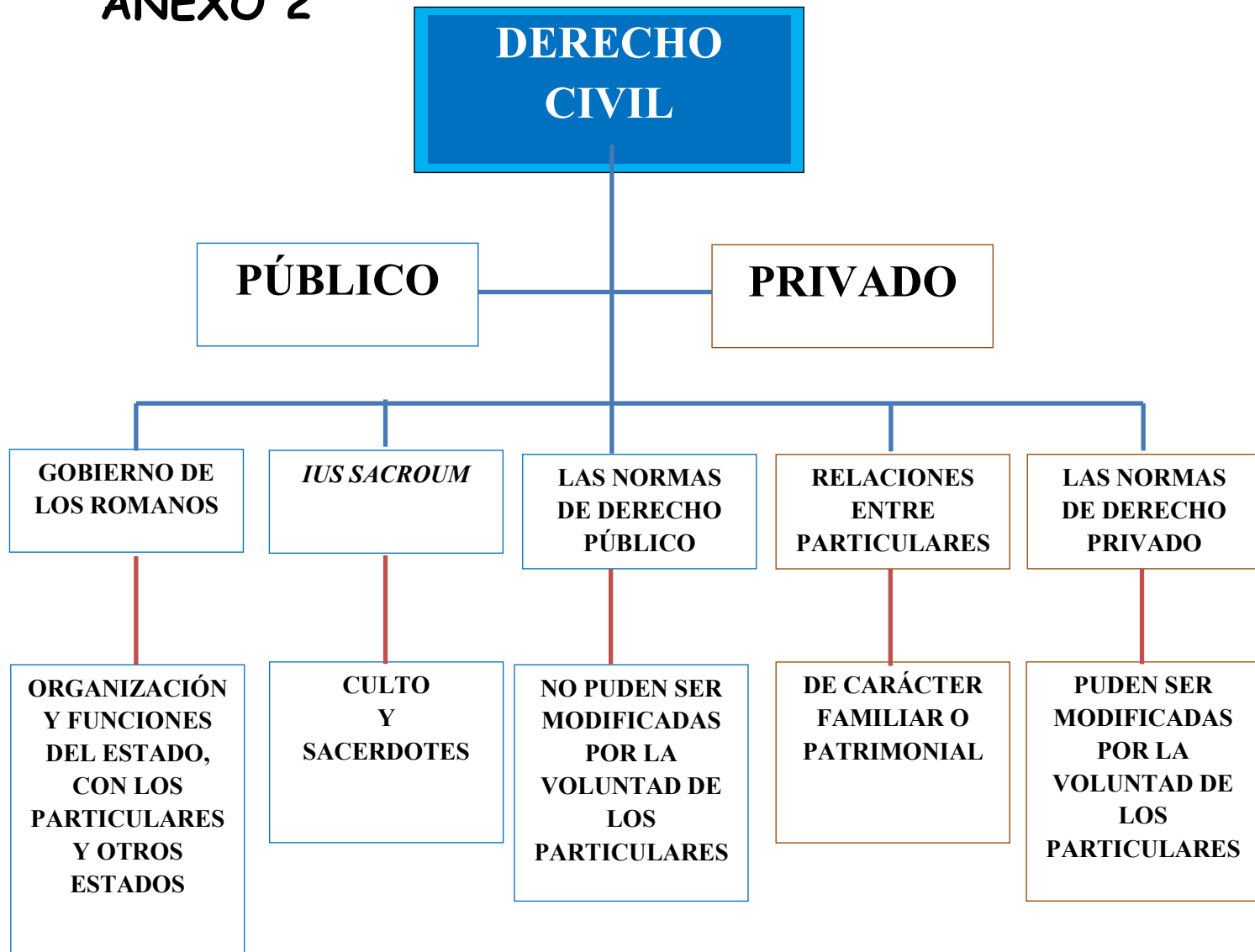
**ANEXOS**

# ANEXO 1

## LA REPÚBLICA ROMANA



## ANEXO 2



## ANEXO 3

Tal era la importancia del Derecho Público que hasta mediados de la República de ochocientas leyes *rogatae*, sólo veintiséis pertenecían al Derecho Privado y de las cerca de un millar de leyes públicas aprobadas durante toda la República, de las que tenemos noticia, apenas unas treinta contienen normas de Derecho Privado. La mayoría de las restantes normas creadas por el *populus* regulan el funcionamiento de la comunidad política, el orden constitucional, el culto religioso oficial, los procedimientos penales, el uso de las vías públicas, es decir materias que pueden encuadrarse dentro del denominado *iuspublicum*

En el siguiente anexo resumimos cada uno de los períodos en los cuales se divide la historia externa romana. Lo ponemos a su consideración por su utilidad a la hora de identificar la Historia Política, las Fuentes del Derecho y la Jurisprudencia en los diferentes momentos históricos y por sobre todas las cosas porque no existían estudios teóricos que sistematizaran las *leges* en el Derecho Romano.

Resulta válido aclarar que para iniciar la consecución de la presente sistematización resultó de mucha valía el trabajo de FERNÁNDEZ CAMUS, Emilio Andrés, *Estudios de Derecho Privado Romano*, t. I, La Habana, 1925. Este autor tomó el mismo de la obra Federico Rudorff, incorporándole modificaciones a partir de los avances en los estudios romanísticos.

**PRIMER PERÍODO**  
**Los Reyes: Años I-244 de Roma, 753-510 antes de J.C.**

AÑO		HISTORIA POLÍTICA	FUENTES DEL DERECHO	JURISPRUDENCIA
DE ROMA.	ANTES DE J.C.	Fundación de Roma.		
I	753-717			
I-37	753-717	Rómulo.		
39-82	715-672	Numa Pompilio.		
82-114	672-640	Tulio Hostilio.		
114-138	640-616	Anco Marcio.		
138-176	616-578	Tarquino Prisco.		
176-220	578-534	Servio Tulio. Organización del Ejército.		
220-244	534-510	Tarquino el Soberbio.		
244	510	Expulsión de Tarquino.	<i>Leges regiae.</i>	<i>Ius Papirianum.</i>

**SEGUNDO PERÍODO**  
**El Gobierno Consular: 245-724 de Roma, 509-30 antes de J.C.**

AÑO		HISTORIA POLÍTICA	FUENTES DEL DERECHO	JURISPRUDENCIA
DE ROMA.	ANTES DE J.C.	Bruto y Colatino, primeros Cónsules.	<i>Lex Iunia</i> tribunicia y <i>Leges Valeriae</i> .	
245	509			
246	508	Lucha de la nueva República con Tarquino.		
260	494	<i>Secessio prima plebis in montem sacroum</i> ; institución del tribunado del pueblo y de los Ediles <i>plebis</i> .		
263	491	Primeros comicios por tribus.		
268	486		<i>Lex Cassia agraria</i> .	
282	472		<i>Lex Pinaria</i> .	
283	471		<i>Lex Publilia Voleronis</i> .	
292	462		<i>Lex Terentilia</i> .	
300	454		<i>Lex Aternia Tarpeja</i> .	



302	452		<i>Lex Menenia Sextia.</i>	
302-304	452-450	Los Decemviro.	<i>Leges XII Tabularum.</i>	Apio Claudio.
305	449	<i>Secessio secunda plebis (in Aventinum).</i> Se renueva la lucha entre patricios y la plebe.	<i>Leges Valeriae Horatiae. Lex Duilia.</i>	
306	448		<i>LexTrebonia.</i>	
307	447	El pueblo elige los Cuestores.		
309	445	<i>Leges Canulejae.</i>		
311	443	Institución de los Censores.		
320	434		<i>Lex Amilia.</i>	
324	430		<i>Lex Iulia et Papiria.</i>	
337	417		<i>Lex Maecilia et Metilia.</i>	
364	390		<i>Lex Appuleja. Lex Publilia de sponsu.</i>	
387	367	Los plebeyos obtienen el Consulado. Institución del <i>Praetor urbanus</i> y de los Ediles <i>curules</i> .	<i>Leges Liciniae Sextiae. Lex Plaetoria.</i>	
397	357		<i>Lex Dulia et Maenia de unciano fanore. Lex Manilia.</i>	
402	352	Institución de los <i>Quinqueviri mensarii</i> .	<i>Lex Macia.</i>	
407	347		<i>Rogatio tribunicia de fanore.</i>	
409	345	Los plebeyos llegan a la Censura.	<i>Lex Furia de sponsu.</i>	
412	342		<i>Lex Genucia. LexVallia.</i>	
415	339		<i>Leges Publiliae.</i>	
441	313		<i>Lex Poetelia.</i>	
447-450	307-304			Apio Claudio el Ciego, Cónsul (autor de las <i>Actiones</i> que en 450 (304) publicó su escriba Gneo Flavio como " <i>Ius Civile Flavianum</i> ").
454	300		<i>Lex Valeria.</i>	
467	287	<i>Secessio tertia plebis (in Janiculum)</i>	<i>Lex Hortensia. Lex Aquilia.</i>	

488	266	Sumisión de toda Italia. Guerra de los Samnistas, Guerra contra Tarento.		
500	254			Tiberio Coruncanio, primer plebeyo Pontífice máximo.
507	247	Institución del <i>Pretor peregrinus</i> .	<i>Lex Silia</i> sobre pesos y medidas. <i>Lex Calpurnia</i> sobre la <i>Condictio</i> .	
511	243		<i>Lex Papiria</i> .	
513	241	Sicilia, primera provincia Romana. Guerras Púnicas.	<i>Lex Mamilia</i> .	
515	239			
520	234		<i>Lex Aebutia</i> .	
522	232		<i>Lex Flaminia agraria</i> .	
526	228		<i>Lex Titia</i> . <i>Lex Scantinia</i> .	
527	227	Se eleva a cuatro el número de los Pretores.	<i>Lex Claudia</i> .	
536	218			
537	217		<i>Lex Flaminiaminus solvendi</i> .	
538	216	Institución de los <i>Triunviri mensarii</i> .	<i>Lex Oppia</i> .	
539	215			
544	210	La Trientabula.	<i>Lex Cincia</i> de <i>donis</i> el <i>muneribus</i> .	
550	204			
556	198			Sexto Elio Peto llamado Canto. <i>Jus Elianum</i> .
557	197	Se eleva a seis el número de Pretores.	<i>Tres Leges Poenales</i> . <i>Lex Atinia</i> .	M. Porcio Catón, llamado Censorio.
559	195		Derogación de la <i>Lex Oppia</i> .	
561	193		<i>Lex Sempronia</i> de <i>fanore</i> .	P. Cornelio Escipión Nasica.
563	191		<i>Lex Atilia</i> .	
565	189			
567	187		<i>Lex Petillia</i> de <i>pecunia Regis Antiochi</i> .	
568	186		<i>Lex Plautia</i> .	

571	183		<i>Lex Furia testamentaria. Lex Fabia de plagiaris.</i>	
573	181		<i>Lex Orchidia. Lex Cornelia y Lex Babia de ambitu.</i>	
574	180		<i>Lex Villia.</i>	
577	177		<i>Lex Claudia.</i>	
582	172		<i>Lex Hostilia.</i>	
585	169		<i>Lex Voconia testamentaria.</i>	
587	167		<i>Lex Aemilia.</i>	
589	165		<i>Lex Mamilia.</i>	
593	161		<i>Lex Faninia.</i>	
595	159		<i>Lex Cornelia Fulvia de ambitu Lex Aelia. LexFufia</i>	
598	156			
601	153			Muerte de M. Porcio Caton Liciniano (Regula Catoniana).
605	149	Institución de la primera <i>Quaestio perpetua</i> .	<i>Lex Calpurnia (de repetundis)</i>	M. Manilus. <i>Manilii Actiones, Manitianae venelium vendorum Leges.</i>
608	146	Ruina de Cártago.	<i>Lex Mumnia.</i>	
611	143	Sedición de los Gracos	<i>Lex Didia.</i>	
615	139		<i>Lex Gabinia.</i>	
617	137		<i>Lex Cassia.</i>	
620-633	134-121		<i>Leges Semproviae.</i>	
621	133			P. Mucio Scaevola. M Junio Bruto.
622	132			P. Licinio Craso MucianoDives.
623	131		<i>Lex Papiriata bellaria. LexRupilia. Lex Pinaria tribunicia.</i>	
628	126		<i>Lex Junia.</i>	
629	125		<i>Lex Fulvia.</i>	
631	123		<i>Leges Semproniae. Lex Rubria y Baebia.</i>	
632	122		<i>Leges Liviae, Semproniae, Octaviae.</i>	

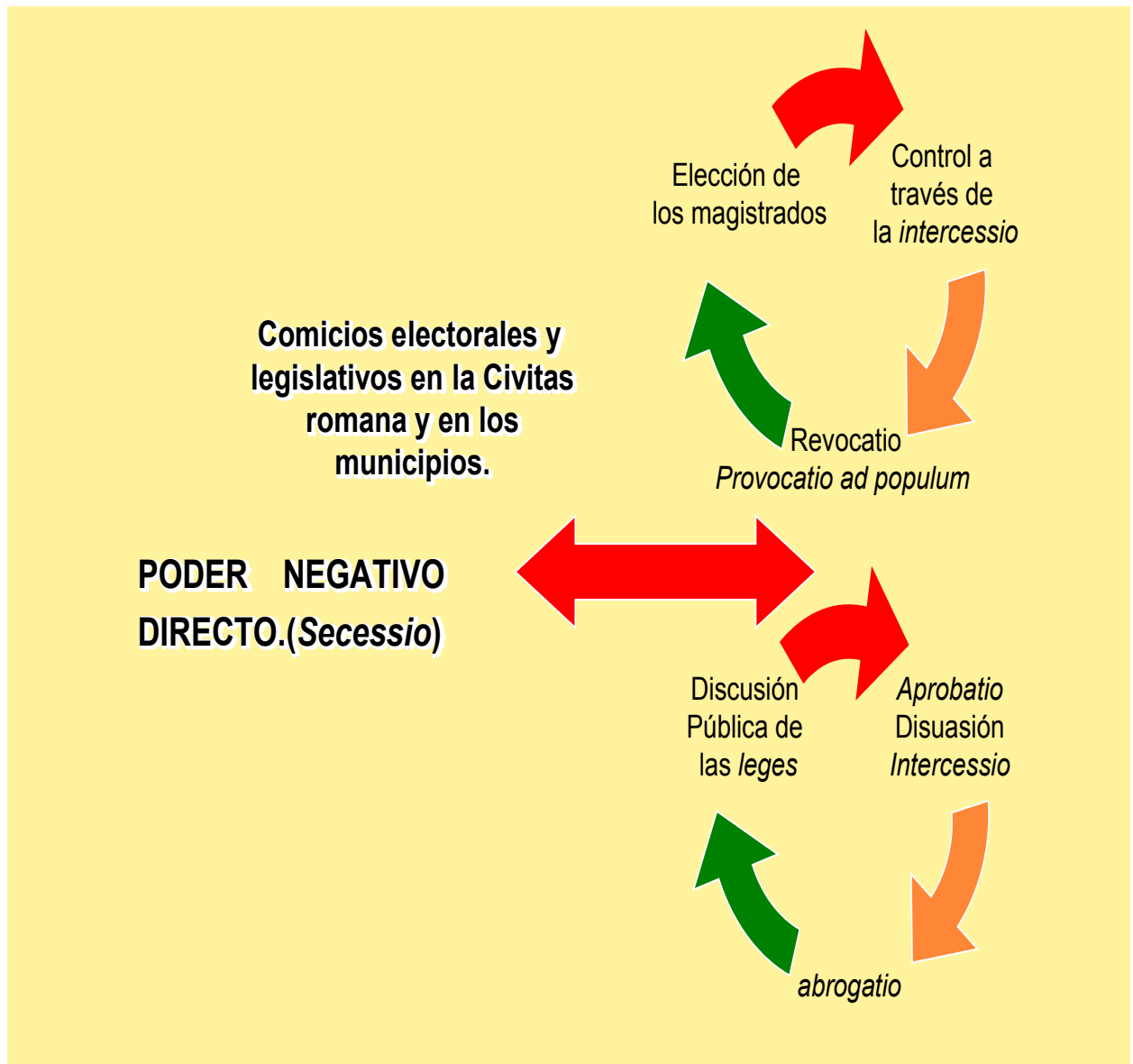
634	120		<i>Lex Octavia.</i>	
635	110		<i>Lex Thoria.</i>	
637	117			Q. Mucio Scaevola, Augur, Cónsul.
639	115		<i>Lex Aemelia</i> (M. Scauri).	
641	113		<i>Lex Peducaee de incestu.</i>	
643	111		<i>Lex Agraria.</i>	
647	107		<i>Lex Calia.</i>	
648	106		<i>Lex Servilia</i> de Q. Capion.	
649	105			P. Rutulio Rufo, como Tribuno autor de la ley Rutulia, como Pretor autor de la <i>Constitutio</i> y fórmula <i>Rutiliana</i> .
650	104		<i>Lex Domitia. Lex Marcia. Lex Servilia Glaucia</i>	
651	103		<i>Lex Licinia.</i>	
653	101		<i>Lex Appuleja de majestate minuta.</i>	
654	100		<i>Leges Appulejae.</i>	
655	99		<i>Lex Titia.</i>	
656	98		<i>Lex Caecilia Didia.</i>	
659	95		<i>Lex Licina Mucia.</i>	Q. Mucio Scaevola, hijo de Publio, Cónsul(Cautio y PraesumptioMuciana).
663	91	Las plazas del <i>Album judicum</i> se dividen entre senadores y caballeros. Guerra de los aliados.	<i>Leges Liviae. Lex Varia majestalis.</i>	
664	90	Los Latinos, etruscos y demás pueblos confederados de Italia, a excepción de los Samnitas y Lucanienses, obtiene el derecho de ciudadanía.	<i>Lex Julia. LexPlautia.</i>	
665	89		<i>Papiria. LexPompeja. Lex Plotia. Lex Cornelia et Pompeja unciaria.</i>	
666-668	88-86	Primera guerra civil. Mario y Sila.		

666	88		<i>Leges Sulpiciae. Lex Pompeja y Lex Cornelia (de sponsu).</i>	
668	86		<i>Lex Valeria.</i>	
671-674	83-80		<i>Lex Cornelia de repetundis, de sicariis el veneficiis, testamentaria, numaria, de falsis.</i>	
672	82	Silas dictador <i>perpetus</i> .	<i>Lex Valeria.</i>	
673	81		<i>Leges Corneliae (de civitate, agraria, majestatis, judiciaria, de injuris.</i>	
674-694	80-60	Dominación de Pompeyo.		
676	78		S.C. <i>Lutatianum</i> , Rogaciones de M. Lepido.	
678	76		<i>Lex Cornelia.</i>	
679	75		<i>Lex Aurelia.</i>	
681	73		<i>Lex Terentia Cassia.</i>	
682	72		<i>Lex Gellia Cornelia. Lex Antonia o fundania.</i>	
684			<i>Lex Pompeja tribunicia. Lex Aurelia judiciaria.</i>	
687	67		<i>Leges Corneliae. Lex Manilia. Lex Roscia. LexGabinia.</i>	
688	66			C. Aquilio Galo, discípulo de Q. Mucio Scaevola,pretor. (Fórmula de dolo. <i>Stipulatio Aquiliana, Pustumi Aquiliani.</i>
689	65		<i>Lex Papia.</i>	
690	64		<i>Lex Servilia agraria.</i>	

691	63	M. Tulio Cicerón, Cónsul.	<i>Lex Licinia Junia. Lex Atia. Lex Pompeja. Lex Tullia de ambitu. Lex Plautia o Plotia de vi.</i>	
693	61		<i>Lex Aufidia de Lucro.</i>	
694	60	Primer triunvirato César, Pompeyo y Craso.		
695	59		<i>Leges Juliae. Lex Vatinia. Lex Julia (Campana). Lex Julia de repelundis. Lex Fufia Caleni.</i>	
696	58		<i>Leges Clodiae.</i>	
699	55		<i>Lex Pompeja iudiciaria. Lex Pompeja de paricidis. Lex Licinia de sodaliciis. Lex Pompeja (ambitus).</i>	
702	52		<i>Lex Caecilia. Lex Pompeja de vi, de ambitu, de iure magistratum.</i>	
703	51			Servio Sulpicio Rufo, cónsul, discípulo de Balbo Lucilio y Aquilio Galo. Sus discípulos, Aulo, Ofilio y Alfreno Varo llamado Caton.
704	50		<i>Lex Scribonia (alimentaria).</i>	
705	49	Se concede la ciudadanía a la Galia cisalpina.	<i>Leges Juliae. Lex Rubria. Lex Julia de pecuniis mutuis (de modo credendi possidendi que intra Italiam).</i>	
707	47			Q. Elio Tuberón.
708	46		<i>Leges Juliae de collegiis, de majestate, de vi.</i>	

709	45	Julio César dictador <i>perpetus</i> . Se aumenta el número de los Pretores.	<i>Lex Julia municipalis</i> .	
710	44	Muerte de César. Bruto y Casio.	<i>Lex antonia. Lex coloniae Julia Genetivae</i> .	
711	43	Segundo triunvirato. Antonio, Octavio y Lepido. Muerte de Cicerón.	Derogación de la ley Antonia.	
712	42	Batalla de Filipos.		
714	40		<i>Lex Falcidia</i> .	
720	34		<i>Lex Scribonia</i> .	
723	31	Batalla de <i>Actium</i> . Octavio triunfa sobre Antonio. Octavio único señor de Roma.		C. Trebacio Testa, discípulo de Q. Cornelio Máximo. Aulo Cascelio, discípulo de Q. Mucio y de Volucio o Volcacio. <i>Judicium Cascellianum</i> .
724	30	Egipto provincia romana.		

## ANEXO 4





# ANEXO 5

## CONSTITUCIONES SOCIALISTAS.

*Constituciones Socialistas, agrupación temática de su articulado, Biblioteca de Ciencias Políticas, La Habana, 1976.*

La primera constitución de 10 de julio de 1918 es la de la RSFRS, la segunda de la URSS es de 31 de enero de 1934.

La primera constitución de la República Popular Húngara es de 31 de enero de 1946

La primera constitución de la República popular de Polonia es de 19 y 22 de febrero de 1947

En 1949 el consejo consultivo político del pueblo chino elaboró un programa común, que desempeñó el papel de constitución provisional.

La república democrática de VietNam tiene una primera constitución de fecha 8 de noviembre de 1946.

26 de noviembre de 1924 y 30 de julio de 1940 son las fechas de la primera y segunda constitución de la República popular de Mongolia.

La primera constitución de la República socialista checoslovaca es de 9 de mayo de 1948.

La República socialista de Rumanía promulgó con fecha 13 de abril de 1948 y 24 de septiembre de 1952 su primera y segunda constitución.

### La República, el Estado

Albania: Albania es una República Popular, artículo 2: La República popular de Albania es un Estado de obreros y de campesinos trabajadores.

Alemania: Alemania es una República democrática indivisible.

Bulgaria: Bulgaria es una República popular con gobierno representativo.

Checoslovaquia: La República socialista checoslovaca es un Estado Socialista basado en la firme alianza de los obreros, campesinos e intelectuales, encabezado por la clase obrera.

Hungría: Hungría es una República popular.

Polonia: La República popular de Polonia es un Estado de democracia popular.

Rumania: Rumania es una República socialista.

URSS: La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es un Estado Socialista de Obreros y Campesinos.

Corea: Nuestro Estado es la República Popular democrática de Corea.

China: La República Popular China es un Estado de democracia popular.

Mongolia: La República Popular de Mongolia es un Estado Socialista de democracia popular.

VietNam: La República Democrática de VietNam es un Estado democrático popular.

### Poder del pueblo

Albania: artículo 4: En la República Popular de Albania todo el poder pertenece a los trabajadores de las ciudades y de los campos representados por los consejos populares.  
artículo 5: todos los órganos representativos del poder del Estado son elegidos por los ciudadanos en elecciones libres, por sufragio universal, igual, directo, y por votación secreta.

Alemania: artículo 3: Toda autoridad pública emana del pueblo. Todo ciudadano tiene el derecho y el deber de colaborar en el desarrollo de su municipio, distrito, provincia, y de la RDA.

El derecho del ciudadano a participar en los asuntos del Estado está garantizado mediante: participación en referéndums y plebiscitos, ejercicio de los derechos electorales activos y pasivos; desempeño de funciones públicas en la administración y justicia.

Bulgaria: artículo 2: En la República Popular de Bulgaria todo el poder proviene del pueblo y pertenece al pueblo. El pueblo ejerce ese poder por medio de órganos representativos, elegidos libremente y por referéndum.

Checoslovaquia: artículo 2: En la República Socialista checoslovaca todo el poder pertenece al pueblo trabajador.

Hungría: artículo 2-2) En la república popular húngara todo el poder pertenece al pueblo trabajador.

Polonia: artículo 1-2) En la república popular de Polonia el poder pertenece al pueblo trabajador de las ciudades y de los campos.

Rumania: todo el poder pertenece al pueblo libre y dueño de sus destinos.

URSS: artículo 3: Todo el poder pertenece en la URSS a los trabajadores de la ciudad y del campo, representados por los soviets de diputados de los trabajadores.

Corea: artículo 2 : El poder del Estado de la República Popular de Corea pertenece al pueblo.

China: artículo 2: Todo el poder en la República Popular China pertenece al pueblo.

Mongolia: artículo 2: Todo el poder en la República Popular de Mongolia pertenece al pueblo trabajador.

VietNam: artículo 4: Todo el poder en la República Democrática de VietNam pertenece al pueblo.

### Mandato popular

Albania: artículo 5-2): En todos los órganos del poder del Estado, los representantes del pueblo son representantes ante sus electores. Los electores tienen el derecho de revocar en cualquier momento a sus representantes.

Alemania: artículo 3-6): Todos los funcionarios públicos son servidores de la colectividad y no de un partido. Su actuación es controlada por la representación popular.

Bulgaria: artículo 4: Los representantes del pueblo, en todos los órganos representativos, son responsables ante los electores. Los elegidos pueden ser revocados aún antes de la expiración de su mandato.

Checoslovaquia: artículo 2-2): El pueblo trabajador ejerce el poder estatal por medio de los cuerpos representativos elegidos por él, controlados por él, y ante él responsables.

Hungría: artículo 2-2): Los trabajadores de la ciudad y el campo ejercen el poder por medio de delegados electos y responsables ante el pueblo.

Polonia: artículo 2: Los representantes del pueblo a la Dieta y a los Consejos del Pueblo son responsables ante sus electores y pueden ser revocados por ellos.

Rumanía: artículo 25-5: Los electores tienen el derecho de revocar en cualquier momento.

URSS: artículo 142: Todo diputado tiene el deber de rendir cuenta a los electores de su labor y puede ser revocado en todo momento.

Corea: artículo 4: Los diputados a todos los órganos del poder del Estado son responsables ante sus electores por sus actividades. Los electores pueden revocar a sus diputados antes de la terminación del mandato en caso de que los diputados traicionen su confianza.

China: artículo 17: Todos los órganos públicos deben apoyarse en las masas populares, mantener un contacto estrecho y permanente con ellas.

Mongolia: artículo 6: Los ilustres diputados del pueblo son responsables y deben rendir cuenta a sus electores.

Vietnam: artículo 4-1): El pueblo ejerce el poder a través de la Asamblea Nacional y los Consejos del pueblo a todos los niveles elegidos por el pueblo y responsables ante el pueblo.

# ANEXO 6

## FRAGMENTOS DE LAS ACTAS ORIGINALES. ARCHIVO DE LA ANPP DE LA REPÚBLICA DE CUBA.

**Acta del XI Período Ordinario de Sesiones de Tercera Legislatura  
10 de julio de 1992.**

**(FRAGMENTOS DE LA PÁGINA 1 A LA 14)**

Juan Escalona Reguera Presidente, Zoila Benítez de Mendoza Vicepresidenta y Ernesto R. Suárez Méndez Secretario.

Damos inicio en la mañana de hoy al análisis del proyecto de Ley de Reforma Constitucional, en mi opinión, la más importante tarea que ha correspondido enfrentar a nuestra Asamblea Nacional desde el momento de su constitución.

El documento que tienen ante ustedes es el resultado de un largo proceso de estudios e investigaciones realizados por funcionarios y especialistas del Partido y del Estado que se inició aun antes de la fecha en que comenzaron las labores preparatorias del IV Congreso, como resultado de la continuo perfeccionamiento de la democracia socialista a que nos convocó el Programa del Partido, aprobado en su III Congreso.

La decisión de perfeccionar nuestra sociedad adquirió una fuerza adicional en el llamamiento a la rectificación de errores y tendencias negativas que formulara nuestro Comandante en Jefe en abril de 1986, llamamiento que permitió devolver a nuestro proceso la originalidad y fuerza creativa que habían constituido, desde su inicio, los más valiosos rasgos de la Revolución cubana.

Ello hizo posible a la dirección del país ganar conciencia de que en la concepción inicial de nuestros órganos de dirección estatal, existían logros inobjetables, a lado de los cuales estaban presentes una serie de problemas que venían influyendo negativamente en la eficacia de su gestión y algunas funciones que resultaron distorsionadas en la actividad diaria.

Este conocimiento previo, hizo posible en el Llamamiento al Congreso fijar la atención sobre la necesidad de "fortalecer aún más el control del pueblo sobre las actividades del

gobierno"; "contribuir a que las asambleas municipales y provinciales puedan cumplir su verdadero papel como representantes de la máxima autoridad es total a esos niveles" y enfatizar en el deber de analizar la labor de esta Asamblea Nacional, de manera que "logre, en particular, examinar los principales problemas de la país donde la perspectiva más profunda que deben propiciar las comisiones de trabajo y la experiencia individual de los diputados, en tanto que foro donde debe encontrar resonancia la gestión del gobierno y de cada organismo de la Administración".

El debate abierto, franco y sereno realizado por nuestro pueblo durante la discusión del Llamamiento, fue dirigido a cumplimentar el acuerdo del Buró Político del Comité Central de mayo de 1990, que señalaba como uno de los propósitos del mismo "la posibilidad de hallar vías para hacer aún más representativas nuestras instituciones democráticas, propiciar una mayor participación real del pueblo en ellas y conceder más autoridad a los delegados y las asambleas".

La Comisión Organizadora del IV Congreso del Partido, poco después de su constitución el 26 de mayo de 1990, decidió la creación de una Comisión para estudiar el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular, integrada por diputados y delegados, dirigentes nacionales, provinciales y municipales del Poder Popular, cuadros y funcionarios de la Administración Central del Estado y del aparato auxiliar del Comité Central del Partido.

En el mes de julio, por sugerencia del Comandante en Jefe, esta Asamblea adoptó el Acuerdo III-112 que dispuso: "Encomendar al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular la organización y ejecución del estudio y análisis acerca de la vida y el funcionamiento de los órganos municipales del Poder Popular", el cual se realizó en 35 municipios del país.

Esta Asamblea en su Acuerdo III-132 de 5 de julio de 1991, consideró que se había inaplazable la necesidad de extender el período de mandato de los órganos del Poder Popular, tomando en consideración que el tiempo con que se contaba no sería suficiente para preparar, con calidad, someter a análisis y luego implementar las decisiones que se requerían para perfeccionar los aspectos relacionados con la estructura, atribuciones y funciones de los órganos de dirección estatal y sus disidentes instancias; introducir precisiones sobre las formas diversas de gestión del Gobierno en provincias y municipios; establecer nuevas formas de elección de los diputados y otras cuestiones de interés para la vida institucional del país, cuya formulación definitiva conllevaría necesariamente a realizar modificaciones irrevocables en la Constitución, elaborar una nueva Ley Electoral y las Normas Reglamentarias del sistema de órganos del Poder Popular.

Existían disímiles criterios sobre cada aspecto, contenidos en las opiniones recibidas desde la base. Por otra parte, resultaba necesario someter a estudio las experiencias de la práctica

internacional en materia de organización y funcionamiento del Estado, y lo más importante, realizar una profunda reflexión sobre nuestras propias instituciones, tomando en consideración el contenido del ya referido Acuerdo del Buró Político de mayo de 1990 que indicaba: "Identificar y excluir inteligentemente todas aquellas prácticas inventadas por nosotros mismos, o copiadas en ocasiones de experiencias ajenas, que pueden dar lugar a formalismos, dogmatismos, divorcio de las masas, burocratismo y otros fenómenos negativos". "... hay que descubrir, para erradicar aquellas ideas y prácticas, justas en el momento en que fueron adoptadas, pero que han devenido obsoletas".

De la lectura del proyecto, los compañeros diputados han disfrutado, además, que pretendemos dar cumplimiento a estos propósitos, sin renunciar a ninguno de los principios que desde hace más de treinta años marcan el rumbo de nuestro proyecto revolucionario: "Cuba es un Estado socialista", se señala en el artículo 1; incluimos el ideario de José Martí junto a las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin como guía del Estado cubano y sus ciudadanos; mantenemos el concepto básico del internacionalismo proletario; se recoge la perspectiva de una más estrecha colaboración de Cuba en el conjunto de la América Latina y el Caribe, y no renunciamos al objetivo de construir la sociedad comunista.

Para facilitar el análisis de las modificaciones propuestas, podríamos separarlas en los siguientes grupos:

*1. Las que se proponen para cumplir las resoluciones del IV Congreso.*

Entre las mismas figuran:

- Las regulaciones sobre el voto directo y secreto para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional -Artículo 71- y a los delegados a las Asambleas Provinciales y Municipales -Artículo 135, 2do. párrafo-. Es obvio que para hacer efectiva estas formulaciones, se requerirá la elaboración de una nueva Ley Electoral en la que, como conocen nuestros diputados, ya se trabaja en una primera versión.

En el Artículo 1 se retoma la tradición constitucionalista cubana al ampliar el texto actual y referirnos al "disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar colectivo e individual y la solidaridad humana", aspectos básicos de nuestro proyecto social.

El Artículo 2, también se amplía para presentar a nuestro Estado como "República de Cuba", su idioma oficial y su capital.

En el 3, proponemos hablar de la soberanía, de la cual dimana todo el poder del Estado y no limitarnos a hablar sólo de poder. Y además, expresar el derecho de todo nuestro pueblo a "combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada" contra el que intente derribar el orden político, económico y social establecido".

## **(FRAGMENTOS DE LA PÁGINAS 42 Y SS.)**

Abierto el debate se exponen los siguientes criterios:

El diputado René Anillo Capote propone añadir el concepto de indivisible como apellido de la República de Cuba.

El presidente declara que no procede la proposición pues se presume del artículo 3 donde se habla que de la soberanía dimana todo el poder.

El presidente señala: “Por otra parte, no me arrepiento ni siento rubor de que algunas frases contenidas en el artículo 1 hubieran estado contenidas en la Constitución de 1940. En este pequeño país se han dado siete Constituciones desde que empezó la guerra en 1868, por ello tomamos con orgullo principios de la Constitución de 1940. Porque lo que decía el artículo 1 de la Constitución de 1976 era: *“La República de Cuba es un Estado Socialista de Obreros y campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales”*. Esa era una copia exacta del artículo 2 de la Constitución Checa y del artículo 3 de la URSS. Entonces nosotros estamos retomando nuestro lenguaje; es decir república unitaria, democrática y soberana. Ese es nuestro lenguaje constitucional desde 1869”.

El diputado Armando Hart Dávalos apunta al respecto que si no hay una república basada en la unidad no hay democracia y si no hay máxima participación popular no hay democracia. Por eso no podemos discutir la democracia como algo en abstracto, ajeno a nuestras realidades concretas.

El diputado Fidel Castro realiza una interesante exposición de motivos fundamentando la inclusión del derecho de resistencia en el texto constitucional, en tal sentido afirma: “Sabido es –dice Fidel– que en Inglaterra en el siglo XVII fueron destronados dos reyes, Carlos I y Jacobo II por actos de despotismo. Estos hechos coincidieron con el nacimiento de la filosofía política liberal, esencia ideológica de una nueva clase social que pugnaba entonces por romper las cadenas del feudalismo. Frente a las tiranías de derecho divino, esa filosofía opuso el principio del contrato social y el consentimiento de los gobernados, y sirvió de fundamento a la revolución inglesa de 1688, y a las revoluciones americana y francesa de 1775 y 1789. Estos grandes acontecimientos revolucionarios abrieron el proceso de liberación de las colonias españolas en América, cuyo último eslabón fue Cuba. En esta filosofía se alimentó nuestro pensamiento político y constitucional que fue desarrollándose desde la primera constitución de Guáimaro hasta la de 1940, influida esta última ya por las corrientes socialistas del mundo actual”

Y recalca Fidel que sólo al pueblo pertenece la soberanía: una, plena y permanentemente. Permanece siempre en potencia, latente bajo toda constitución derivada de ella.



Comienza Fidel por plantear el derecho de resistencia en los términos consagrados en el artículo 40 de la Constitución de 1940. Este derecho dice Fidel “es como un bot de salvavidas, que sólo se lanza al mar cuando la nave ha sido torpeada por los enemigos emboscados en su ruta. Traicionada la constitución de la república y arrebatadas al pueblo todas sus prerrogativas, sólo le quedaba ese derecho que ninguna fuerza le puede quitar, el derecho de resistencia a la opresión, a la injusticia que viene desde tiempos de los romanos. En el terreno de la política ese derecho corresponde a la colectividad; pertenece al pueblo como único titular de la soberanía: es inalienable, indivisible e imprescriptible.”

**Acta del XII Período Ordinario de Sesiones de Tercera Legislatura  
29 de octubre de 1992.**

Juan Escalona Reguera Presidente, Zoila Benítez de Mendoza Vicepresidenta y Ernesto R. Suárez Méndez Secretario

**(FRAGMENTO PÁGINA 31)**

En ocasión de la aprobación de la Ley electoral 72 el presidente Escalona señala que en una futura Ley de Organización y funcionamiento del Poder Popular en que hablemos del proceso de revocación, tendremos que establecer las normas que fijen la revocación y la rendición de cuentas de los Diputados y Delegados a las Asambleas Nacionales y Provinciales, a partir del hecho nuevo de que ya no los elige en votación una asamblea municipal sino que vota directamente la población.

## ANEXO 7

